**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**
**JUZGADO DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**
**LEY 600 DE 2000**
**FONCOLPUERTOS - CAJANAL**

| | |
|---|---|
| **CAUSA:** | 2015-00060. |
| **SINDICADOS:** | ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO Y OTROS. |
| **DELITOS:** | PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO. |
| **SUMARIO:** | 214. |
| **DECISIÓN:** | PRESCRIPCIONES, ABSOLUCIONES Y CONDENAS. |

**Sentencia N° 009.**

Bogotá, D. C. 08 de septiembre de 2022.

## ASUNTO

La etapa de debate se celebró en el presente caso contra los procesados inicialmente acusados, de los cuales algunos fallecieron, motivo por el cual la presente decisión de fondo se adopta respecto de los siguientes acriminados:

| PROCESADO |
|---|
| 1. ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO |
| 2. FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS |
| 3. ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO |
| 4. EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
| 5. ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ |
| 6. ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ |
| 7. MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ |
| 8. ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO |
| 9. ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ |
| 10. RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO |
| 11. JULIO LLANOS SARMIENTO |
| 12. MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO |
| 13. ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA |
| 14. ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN |
| 15. JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY |
| 16. LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ |
| 17. LUIS VALERIO SOLANO CASTRO |
| 18. JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO |
| 19. VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA |
| 20. JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA |
| 21. MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ |
| 22. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN |
| 23. JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA |
| 24. JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ |
| 25. ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO |

El señalamiento que se enrostra a los mismos es por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo sucesivo con peculado por apropiación agravado a título de determinadores. Así, luego de observar que no existen vicios invalidatorios que comprometan la actuación, emite el Despacho la sentencia de primer grado que en derecho corresponde.

## HECHOS

Surge la presente causa ante las advertidas irregularidades presentadas en el fundamento del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que se pactó el pago de providencias judiciales surgidas de reclamaciones de conceptos carentes de respaldo positivo como la prima sobre prima y otros emolumentos en procesos que, en parte, fueron adelantados por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en representación de los extrabajadores portuarios enunciados en el acápite anterior; situación a la que se sumó la orden dictada por la Fiscalía Tercera Delegada de la Unidad de Apoyo Para el tema de FONCOLPUERTOS, que investigaba los eventos relacionados con las actas de conciliación rubricadas a finales de 1993 dentro del sumario 164, de las que se tiene noticia de su falsedad y que beneficiaron a algunos exportuarios integrados dentro del pacto inicialmente referido, por lo que se dispuso tramitar las investigaciones conjuntamente por los acotados eventos dentro de la presente causa.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS

**1.** El señor **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** portador de la C. C. Nº 3.734.269 de Manatí (Atlántico), nacido en esa municipalidad del 03 de enero de 1953, tiene actualmente 69 años de edad; hijo de RAFAEL RODADO y DOLORES CAICEDO; de estado civil casado con la señora FANNY BARRIOS con quien tiene 3 hijos; de instrucción educación de bachillerato, actualmente pensionado de la empresa puertos de Colombia, residente en la Calle 47 B Nº 22-43, de Barranquilla.

**2.** El señor **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, ciudadano que se identifica con la C. C. Nº 7.475.376 de Barranquilla, nacido el 05 de febrero de 1952 en Mahates (Bolívar), tiene actualmente 70 años; hijo de SEFERINO HERNÁNDEZ y JUANA PÉREZ; de estado civil casado con MARIBEL MATOS y padre de 5 hijos, su grado de instrucción es de cuarto de primaria; residente en la Cra. 11 Nº 25 A-64 de Sabanalarga (Atlántico).

**3.** El señor **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, portador de la C. C. Nº 8.631.222 de Sabanalarga (Atlántico), natural de ese municipio donde nació el 24 de mayo de 1955, tiene actualmente 77 años de edad; hijo de JULIO SANTIAGO (fallecido) y ZOILA ARAUJO; estado civil casado con MÓNICA CABALLERO ECHEVERRÍA, padre de 3 hijos; grado de instrucción segundo de bachillerato; residente en la Calle 22 Nº 11-05 de Sabanalarga.

**4.** El señor **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, identificado con la C. C. Nº 3.734.789 de Puerto Colombia (Atlántico), municipalidad en la que nació el 27 de abril de 1956, actualmente cuenta con 66 años de edad; hijo de MANUEL RODRÍGUEZ y ELADIA GONZÁLEZ; estado civil, casado con MARÍA

DEL PILAR RIPOLL MOLINARES y padre de 3 hijos; grado de instrucción bachillerato; de ocupación pensionado de la empresa portuaria; residente en la Calle 3 N° 2-09 de Puerto Colombia.

**5.** El señor **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, portador de la C. C. N° 3.756.242 de Sabanalarga (Atlántico), ciudad donde nació el 27 de enero de 1948, cuente en la actualidad con 74 años de edad; hijo de RÓMULO VERDUGO y ROSA RAMONA SARMIENTO (fallecidos); de estado civil casado con la señora VERA JUDIT URUETA con quien tiene 6 hijos; grado de instrucción primaria; de ocupación pensionado de la empresa Puertos de Colombia; residente en la Calle 25 N° 8-13 de Sabanalarga, teléfono (5)878 21 88.

**6.** El ciudadano **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, identificado con la C. C. N° 3.755.420 de Sabanalarga, nacido el 29 de octubre de 1944 en la mencionada urbe, tiene en la actualidad 77 años de edad; hijo de MIGUEL PALMERA y MATILDE HERNÁNDEZ; de estado civil casado con MIRYAM BOLÍVAR y padre de 5 hijos, grado de instrucción segundo de bachillerato; de ocupación pensionado de la empresa Puertos de Colombia; residente en la Cra. 21 N° 28 A-29 de Sabanalarga.

**7.** El ciudadano **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, identificado con la C. C. N° 3.734.562 de Manatí (Atlántico), quien nació el 22 de julio de 1955 en la anotada municipalidad, cuenta actualmente con 66 años de edad; hijo de ÁNGEL ZÁRATE y BERTA MUÑOZ (fallecidos); estado civil casado con la señora TERESA DE JESÚS BROCHERO LOZANO y padre de 2 hijos; grado de instrucción bachillerato y de ocupación pensionado de la empresa portuaria; residente en la Calle 6 N° 4 A-69, de Manatí.

**8.** El señor **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, portador de la C. C. N° 9.060.735 de Cartagena (Bolívar), nacido en Calamar (Bolívar) el 22 de septiembre de 1946, cuenta a la fecha con 75 años de edad; estado civil casado con ANA LUCÍA SALAS con quien tiene 5 hijos; grado de instrucción bachillerato; residente en la Cra. 5 N° 38 B-32 de Barranquilla.

**9.** El señor **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, portador de la C. C. N° 3.734.527 de Manatí (Atlántico), nacido en ese municipio el 14 de diciembre de 1953, tiene actualmente 78 años de edad; de estado civil casado con MIRTA CASTILLO con quien tiene 4 hijos; grado de instrucción estudios universitarios en biología en la Universidad del Atlántico; pensionado de la empresa Puertos de Colombia y residente en la Calle 9 N° 9-06, de Manatí.

**10.** El señor **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**, cedulado con el número 7.437.974 de Barranquilla, nació en Baranoa (Atlántico) el 29 de noviembre de 1947, cuenta en la actualidad con 74 años de edad; hijo de JULIO LLANOS y FANNY SARMIENTO; estado civil casado con la señora NICOLAZA LASCAR DE LLANOS con quien tiene 3 hijos; grado de instrucción básica primaria; pensionado de la entidad portuaria; residente en la Cra. 19 N° 22-75, barrio La España de Baranoa.

**11.** El señor **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**, portador de la C. C. N° 8.630.912 de Sabanalarga (Atlántico), urbe en la que nació el 03 de octubre de 1954, cuenta actualmente con 67 años de edad; estado civil casado con la señora MARÍA AVILA DE PÉREZ y padre de 7 hijos; grado de instrucción

tercero de bachillerato; de ocupación pensionado de la empresa portuaria; residente en la Calle 25 Nº 22-18 de Sabanalarga, teléfono (5) 878 31 46.

**12.** El señor **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, portador de la C. C. N° 7.433.847 de Barranquilla, natural del municipio de Manatí (Atlántico) donde nació el 11 de abril de 1947, en la actualidad tiene 75 años de edad; hijo de FEDERICO MUÑOZ y AURELIA CAICEDO (fallecidos) estado civil casado con NANCY MORALES DE MUÑOZ con quien tiene 3 hijos; grado de instrucción bachillerato; pensionado de la empresa Puertos de Colombia; reside en la Calle 19 N° 4 D-20 de Barranquilla, teléfono (5) 326 83 26.

**13.** El ciudadano **ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, se identifica con la C. C. N° 1.751.787 de Remolino (Atlántico), natural de ese municipio donde nació el 18 de octubre de 1949, por lo que actualmente cuenta con 72 años de edad; hijo de IGNACIO FANDIÑO CERVANTES y NICOLAZA GARCÍA MIRANDA (fallecidos); de estado civil casado con DALMIS CHARRYS BARRAZA con quien tiene 3 hijos; grado de instrucción primaria, pensionado de la empresa portuaria y residente en la Cra. 7 G N° 34-101, barrio Las Palmas de Barranquilla, teléfono 310 706 21 31.

**14.** El señor **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**, portador de la C. C. N° 3.718.100 de Baranoa, natural de esa municipalidad donde nació el 18 de julio de 1953, por lo que en la actualidad cuenta con 69 años de edad; hijo de ARMANDO MARIANO ESCALANTE y EDILSA SANJUAN; de estado civil, casado con OSIRIS NIETO BARRAZA y padre de 4 hijos; grado de instrucción primero de bachillerato, pensionado de Puertos de Colombia; residente en la Calle 20 A N° 15 A-04 de Baranoa, teléfono (5) 878 87 76.

**15.** El señor **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, fue vinculado a la causa mediante diligencia de indagatoria, en la que informó identificarse con la C. C. Nº 8.673.746 de Barranquilla; natural del municipio de Sucre (Sucre) donde nació el 29 de julio de 1955, cuenta en la actualidad con 76 años de edad; hijo de MANUEL DEL CRISTO GÓMEZ (fallecido) y MARÍA EVA MONROY, de estado civil unión libre con la señora MAGOLA GARCÍA GARCÍA y padre de 3 hijos; grado de instrucción tercero de primaria; de ocupación pensionado de la empresa Puertos de Colombia; residente en la Calle 37 Nº 8 A-51, barrio El Campito de Barranquilla, teléfono (5) 362 50 87.

**16.** El señor **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, quien se identifica con la C. C. Nº 12.530.109 de Santa Marta, nacido en esa urbe el 04 de febrero de 1948, tiene 74 años de edad; casado con DUBIS MARÍA CABAS y padre de 3 hijos; grado de instrucción estudios de bachillerato, pensionado de la empresa puertos de Colombia, residente en la Cra. 59 B Nº 91-39, apto. 203, Altos de Riomar de Barranquilla.

**17.** El señor **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, se identifica con la C. C. Nº 3.771.128 de Tubará (Atlántico), municipio en el que nació el 28 de septiembre de 1955, quien cuenta actualmente con 76 años de edad; hijo de LUIS GUILLERO DE LAS SALAS y JUDITH FERNÁNDEZ; de estado civil casado con JUDY VÁRGAS BOLÍVAR y padre de 3 hijos; grado de instrucción estudios primarios; ocupación pensionado de la empresa portuaria y residente en la Calle 7 Nº 5-68, de Tubará.

**18.** El ciudadano **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, portador de la C. C. Nº 3.757.351 de Sabanalarga (Atlántico), nacido en esa municipalidad el 28 de enero de 1939, tiene actualmente 83 años de edad; hijo de ALFONSO SOLANO y JUANA CASTRO (fallecidos); de estado civil casado con la señora ELSA JUDITH MACHACÓN CARRILLO y padre de 6 hijos; grado de instrucción segundo de bachillerato; ocupación pensionado de la empresa portuaria y residente en la Cra. 22 A Nº 28 A-76 de Sabanalarga.

**19.** El ciudadano **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, quien se identifica con la C. C. Nº 8.667.019 de Barranquilla, nació en esa urbe el 29 de enero de 1956, cuenta actualmente con 66 años de edad; hijo de EUGENIO RUA (fallecido) y CARMEN CARRILLO; de estado civil casado con la señora CARMEN VALLE RUBIO, padre de 1 hija; grado de instrucción bachillerato, de ocupación pensionado de la empresa portuaria; reside en la Cra. 24 Nº 65 B-46 de Barranquilla, teléfono (5) 365 68 11.

**20.** El señor **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, se identifica con la C. C. Nº 17.139.559 de Bogotá, natural de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) donde nació el 20 de julio de 1941, con 81 años de edad; hijo de JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ (fallecido) y MERCEDES RIVERA; estado civil casado con la señora MERCEDES OSORIO y padre de 8 hijos; grado de instrucción tercero de primaria; de ocupación pensionado de Puertos de Colombia; reside en la Cra. 16 A N° 24-05 de Sabanalarga.

**21.** El señor **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**, se identifica con la C. C. Nº 7.443.533 de Barranquilla, urbe en la que nació el 10 de marzo de 1948, ostentando en la actualidad 74 años de edad; hijo de ANDRÉS CASTRO HERNÁNDEZ y MATILDE MIRANDA (fallecidos), de estado civil casado con DENYES ESTHER VÁRGAS, con quien tiene 3 hijos; grado de instrucción tercero de bachillerato, de ocupación pensionado de la empresa portuaria; residente en la Calle 8 Nº 10-04, Puerto Colombia, teléfono (5) 309 54 39.

**22.** El ciudadano **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, quien se identifica con la C. C. N° 3.734.524 de Manatí (Atlántico), municipio en el que nació el 27 de abril de 1954, cuenta en la actualidad con 68 años de edad; hijo de CESAR CAICEDO y LUISA ORTIZ; estado civil casado con la señora ZULLY CANTILLO MOSQUERA, padre de 3 hijos; grado de instrucción bachillerato, pensionado de Puertos de Colombia; residente en la Calle 64 N° 31-121, apto. 3A, teléfono (5) 356 95 67.

**23.** El señor **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**, quien se identifica con la C. C. Nº 1.696.694 de Barranquilla, natural de Cerro de San Antonio (Magdalena) donde nació el 07 de octubre de 1938, tiene actualmente 83 años de edad; de estado civil casado con la señora EDITH TERESA MENDEZ OLIVARES (fallecida) y padre de 4 hijos; residente en la Cra. 12 Nº 20 A-54 de Sabanalarga, teléfono (5) 878 18 44.

**24.** El señor **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, portador de la C. C. Nº 7.481.999 DE Barranquilla, natural de la esa ciudad donde nació el 01 de junio de 1952, en la actualidad tiene 74 años de edad; hijo de JOSÉ MOSQUERA y ALICIA DOMÍNGUEZ; residente en la Cra. 20 N° 51-35 de Barranquilla.

**25.** El señor **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, portador de la C. C. Nº 15.240.283 de San Andrés (Islas), natural de Puerto Colombia (Atlántico), municipio en el que nació el 31 de mayo de 1950, tiene en la actualidad 72 años de edad; hijo de ROBERTO COLLANTE y SIXTA PACHECO, grado de instrucción estudios universitarios en derecho; residente en la Calle 64 Nº 34-104, piso 2º, de Barranquilla.

## ACTUACIONES RELEVANTES

Los albores de la presente actuación se ubican en la resolución adiada el 17 de abril de 2001[1], con la cual la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública asumió el conocimiento de las diligencias preliminares **214** y se decretó el acopio de algunos medios demostrativos tendientes a establecer la identificación de quienes se hallaban comprometidos con los eventos investigados; decreto que fue ampliado con proveídos de 17 de marzo de 2004[2], cuando se dispuso la práctica de inspecciones judiciales a varios de los Estrados Judiciales Laborales de Barranquilla.

Con decisión de 26 de septiembre de 2002[3], la Fiscalía Dieciocho de la Sub Unidad de FONCOLPUERTOS avocó el conocimiento de las diligencias e instó a las entidades requeridas en pretéritas oportunidades para que aportaran las pruebas solicitadas a lo largo de la fase preliminar.

Teniendo en cuenta que la Fiscalía Tercera Delegada que investigaba los eventos relacionados con el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, adelantaba dentro de sus asuntos el sumario 164 que remitía a la emisión y pago de actas de conciliación presuntamente falsas y rubricadas a finales de 1993, en las que algunos de los beneficiarios del pacto inicialmente referido también lo eran de aquéllas, se dispuso mediante decisión de 20 de diciembre de 2004[4], indagar conjuntamente a los extrabajadores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, EMIRO TRIANA DUICA, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS[5], RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, FRANKLIN WILCHES MANOTAS, JOSÉ IGNACIO MOSQUERA

---

[1] Folios 209 a 211 del c. o. continuación 1 y folios 128 a 130 del c. o. 2 de instrucción.
[2] Folios 221 y 222 continuación 1 de instrucción.
[3] Folio 146 del c. o. 3 de instrucción.
[4] Folios 18 y 21 del c. o. 4 de instrucción.
[5] Si bien dentro de algunos documentos adosados en la instrucción y providencias emitidas en esa fase procesal se nombra al señor ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETS, el Juzgado lo mencionará a lo largo de este pronunciamiento con el nombre que se halla identificado en la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es, como ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS.

DOMÍNGUEZ, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, EMIROMEL ORTIZ ORTIZ, PEDRO ROSADO OSORIO, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, GABRIEL ANTONIO BARRAZA y LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR por los eventos relacionados con los sumarios **214** y **164**.

Con decisión adiada el 06 de marzo de 2006[6], en consideración a que se surtía investigación en contra de la señora LUZ DARY VELASCO CÓRDOBA en el Despacho Primero de la misma unidad, distinguida con el radiado 203, y que a esa Delegada se le había asignado la totalidad de las investigaciones asociadas con la mencionada ciudadana, se ordenó la remisión de copias del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, para que bajo la misma cuerda procesal se indagara la presunta responsabilidad de ésta, prosiguiéndose la investigación en lo que a los demás encausados se refiere dentro del presente asunto.

De conformidad con el material demostrativo arrimado a las diligencias, relacionado con el señor EMIROMEL ORTIZ ORTIZ, de quien se acreditó que su fallecimiento tuvo lugar el 02 de septiembre de 1996, se dispuso la declaratoria de preclusión de la investigación mediante decisión de 20 de septiembre de 2006[7]; así como en lo que atañe a los señores EMIRO ALBERTO TRIANA DUICA, FRANKLIN WILCHES MANOTAS y PEDRO NOLASCO ROSADO OSORIO respecto de quienes se procedió en el mismo sentido mediante pronunciamiento de 20 de octubre siguiente[8], habiéndose aportado por la DIJIN de la policía nacional la evidencia que daba cuenta del deceso de éstos.

Teniendo en cuenta que yacía en el expediente reproducción del registro civil de defunción del ciudadano ALFONSO NIÑO ESCORCIA, mediante resolución fechada el 16 de agosto de 2006[9], la Fiscalía Tercera Delegada de la Estructura de apoyo para el tema de FONCOLPUERTOS, dispuso la preclusión de la investigación y extinción de la acción penal en lo que a este procesado se refiere por el deceso del mismo.

En vista de que no había sido posible escuchar en diligencia injurada a algunos de los procesados, se ordenó mediante proveído de 24 de febrero de 2009[10], librar órdenes de captura respecto de los exportuarios investigados JOSÉ IGNACIO MOSQUERA, GUILLERMO PAEZ MENDOZA y el abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO para los fines indicados, así como librar oficio con destino a la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de que se aportara fotocopia de las cédulas y cartillas decadactilares de los acriminados y beneficiarios del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998. Decreto que fue cumplido de forma inmediata, reposando

---

[6] Folio 80 del c. o. 4 de instrucción.
[7] Folios 138 a 140 ídem.
[8] Folios 191 a 194 ídem.
[9] Folios 226 a 228 del c. o. 5 de instrucción, decisión en la que si bien se anuncia que fue proferida en 2006, acorde a la cronología del expediente, se tiene que su proferimiento se dio el 2007, teniendo en cuenta tanto la data en que se adujo al expediente el registro civil de defunción lo cual se dio en curso de los interrogatorios, como la fecha en que se realizaron los actos de notificación de la decisión, surtidos, en parte, el 17 de agosto de 2007.
[10] Folios 220 a 223 del c. o. 7 de instrucción.

ejemplares de las referidas órdenes de captura seguidas al mencionado proveído.

Comoquiera que los actos enfilados a la comparecencia de los señores JOSÉ IGNACIO MOSQUERA, GUILLERMO PAEZ MENDOZA y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO no rindieron los resultados positivos esperados, con providencia de 22 de enero de 2010[11] se dispuso la declaratoria de persona ausente respecto de los referidos ciudadanos, advirtiendo que las órdenes de captura otrora libradas ya habían sido canceladas; notificado este acto, con resolución de 09 de febrero de 2010[12], se decretó el cierre del ciclo probatorio y el agotamiento del traslado de que trata el precepto 393 procedimental acerca de los sujetos procesales, en curso del cual el defensor de algunos procesados propuso recurso horizontal en contra de la referida decisión, atendido mediante pronunciamiento de 01 de marzo de 2010[13], siendo despachado desfavorablemente a los intereses del recurrente.

La calificación del mérito sumarial se dio con providencia de 11 de diciembre de 2012[14], por medio de la cual se convocó a juicio criminal a los procesados ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JULIO LLANOS SARMIENTO, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, GABRIEL BARRIOS DONADO, GABRIEL ANTONIO BARRAZA, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO como presuntos determinadores del delito de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo sucesivo, sin que la circunstancia de concurrencia de reatos se le imputara a los señores ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA y JOSÉ IGNACIO MOSQUERA siendo convocados por peculado por apropiación agravado; a los señores ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN y ALFONSO EMILIO COLANTE PACHECO también se les endilgó el concurso con el delito de peculado por apropiación agravado tentado; disponiendo igualmente la declaratoria de prescripción del reato de prevaricato por acción respecto de todos los mencionados, la consecuente declaratoria de preclusión de la investigación y la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones que dispusieron el pago de los dineros y variación de la mesada pensional derivados de la suscripción del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998.

[11] Folios 143 a 145 del c. o. 8 de instrucción.
[12] Folios 152 a 155 ídem.
[13] Folios 216 a 218 ídem.
[14] Folios 286 a 300 del c. o. 8 y 1 a 135 del c. o. 9 de instrucción.

Recurrido el calificatorio por los representantes defensivos de algunos de los procesados, la Fiscalía de primer grado mediante decisión de 15 de julio de 2013[15], negó la reposición planteada y concedió el recurso de alzada, correspondiendo en segunda instancia a la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien mediante resolución de **12 de marzo de 2015**, confirmó en su integridad la providencia confutada.

La actuación fue remitida a este Estrado Judicial en 62 cuadernos, procediéndose a avocar el conocimiento de las diligencias mediante auto de trámite de 07 de octubre de 2015, en el que también se dispuso de fecha para evacuar la audiencia preparatoria; vista que fue llevada a cabo el 15 de febrero de 2016, cuando se dispuso declarar la nulidad de lo actuado en fase instructiva respecto del señor ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO, inclusive, desde los actos de notificación de la decisión que clausuraba el ciclo demostrativo en sumario, al haberse advertido transgresión a la garantía defensiva del referido acriminado, lo que mereció duplicar la actuación y devolverla a la Fiscalía instructora para que se subsanara la irregularidad advertida.

La audiencia pública fue realizada en sesiones de 01, 02 y 03 de junio de 2016, oportunidad en la que fueron escuchados en interrogatorio los señores JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA y MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ; los días 29, 30 y 31 de agosto siguientes, cuando testimoniaron los señores WILLIAM HERNÁNDEZ CARRILLO por los eventos que le constaban a partir de su paso por la gerencia del terminal marítimo y fluvial de la ciudad de Barranquilla, y los doctores SALVADOR ATUESTA BLANCO y LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en su calidad de exdirectores de FONCOLPUERTOS. La vista prosiguió el 15 de noviembre de 2016, el 14 de marzo de 2017, y 05 de junio la misma anualidad cuando fue escuchado en testimonio el doctor MAYRON VERGEL ARMENTA.

El 17 de junio de 2019, se declara la clausura del ciclo probatorio y se da paso a la exposición de los argumentos presentenciales de los sujetos procesales, dinámica que se dio a lo largo de la anunciada sesión, la llevada a cabo en la data siguiente, la evacuada el 11 y 30 de julio de 2019, oportunidad en la que se dispuso el ingreso del expediente al Despacho para la emisión de la decisión de fondo.

En lo que atañe a la vigencia de la acción penal respecto de aquellos convocados de quienes obra prueba de su fallecimiento, se aprecia que en lo que atañe al señor HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, se decretó la extinción de la acción penal y cesación de procedimiento mediante auto 004 de 10 de febrero de 2016[16]; mediante auto interlocutorio 007 adiado el 11 de julio de 2019, se dispuso lo pertinente respecto del señor LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR[17]. En similar sentido, y acorde al registro civil de defunción aportado por la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla del señor GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL, se emitió decisión 010 de 20 de agosto siguiente; y en cuanto al señor GABRIEL BARRIOS DONADO se adujo reproducción del registro civil de defunción remitido por la Notaría Novena de Barranquilla, documento que ameritó pronunciamiento 011 de 28 de

[15] Folios 244 a 256 del c. o. 9 de instrucción.
[16] Folios 1 a 4 del c. o. 2 de causa.
[17] Folio 173 del c. o. 84 de juicio.

agosto de 2019[18]. respecto al señor GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA, de quien la Registraduría Nacional del Estado Civil aportó reproducción del registro civil de defunción, se profirió auto interlocutorio 012 de 16 de septiembre de 2019, así como en lo atinente al otrora procesado GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLAREAL, de quien la Notaría Primera de Barranquilla aportó ejemplar del registro civil de defunción y se había proferido decisión previamente de cara a la situación advertida, por lo que se dispuso estar a lo resuelto en aquella providencia.

Finalmente sobre este particular y en lo que atañe a los señores ALEJANDRO MAJITH MOSQUERA MAJUL y ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS, de quienes se tuvo noticia de su deceso, el cual se encuentra acreditado, se dispuso decretar la extinción de la acción penal y la consecuente cesación de procedimiento mediante autos interlocutorios 039 de 05 y 040 de 08 de agosto de 2022, respectivamente; por lo que los señalamientos criminales efectuados a estos ciudadanos serán objeto de escrutinio únicamente con miras a disponer lo pertinente al posible restablecimiento del derecho, mismo proceder que se realizará respecto de los otros en cuyo favor se cesó el procedimiento por muerte.

Cabe aquí manifestar que sólo hasta este momento se emite el presente fallo, atendiendo el orden de turnos de los casos que están en el Despacho para este fin, en razón de la seria congestión que afecta a este Estrado, derivada de las particularidades de cada caso, incluido el que aquí se analiza, así como de la alta complejidad de los asuntos asignados al Juzgado, sumado a que a pesar de que se solicitó oportunamente en reiteradas ocasiones a la autoridad competente de la Judicatura el apoyo con medidas de descongestión que viabilizaran morigerar tal situación, no se recibió respuesta afirmativa sino hasta el segundo semestre del año 2020, cuando se contó con la medida de descongestión de asignar a este Estrado un oficial mayor para proyectar sentencias entre el 03 de agosto y el 11 de diciembre de 2020, a lo que se suma que se recibió nueva medida de descongestión de mismas características, la cual rigió entre el 15 de marzo y el 10 de diciembre de 2021, sin que estas medidas tuviesen las dimensiones y alcances que se requerían para superar por completo esa situación que aún persiste.

## LA ACUSACIÓN

El pliego de cargos formulado por la Fiscalía en contra de los extrabajadores portuarios ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑÓZ, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JULIO LLANOS SARMIENTO, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, VÍCTOR MELITÓN CASTRO

[18] Folios 79 y 80 del c. o. 84 de juicio.

MIRANDA, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, GABRIEL BARRIOS DONADO, GABRIEL ANTONIO BARRAZA, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA, JOSÉ IGNACIO MOSQUERA y el abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en las condiciones arriba identificadas en torno a los reatos imputados y las circunstancias concursales, encuentra fundamento en los reclamos judiciales y administrativos adelantados por el último en representación de los extrabajadores, cristalizados en la emisión de sentencias judiciales indebidamente motivadas y el consecuente pago de sendas sumas dinerarias en favor del profesional del derecho que en parte fueron agrupadas en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998.

Además de los pagos alcanzados en el anotado acuerdo, la Fiscalía refiere la existencia de otros pactos conciliatorios rubricados a finales de 1993, de los cuales también se beneficiaron los procesados, que acorde a las declaraciones vertidas por el señor JOSÉ MARÍA IGUARÁN en su calidad de gerente del puerto marítimo de Barranquilla para esa anualidad, se trata de documentos falseados y que contradicen la realidad de los eventos que rondaron la liquidación de la empresa portuaria, teniendo en cuenta que para 1993, cuando presuntamente se dio la suscripción de éstas, el número de actas de conciliación no ascendió a la cantidad que han sido sometidas a cobro por los abogados y exportuarios en detrimento de los recursos públicos administrados por el fondo liquidador de la empresa portuaria y la entidad encargada del pasivo pensional de la misma, detrimento que ascendió a $3.057´400.000,00, teniendo en cuenta que si bien el monto que se ordenó pagar en la resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 era superior al referido, quedaron pendientes por entregar $582´200.000,00 que hacen parte del señalamiento criminal por el reato de peculado por apropiación tentado.

Dichas reclamaciones, acorde a las pruebas aperadas al expediente, carecen de asidero fáctico y jurídico, en consideración a que para cuando se dio la desvinculación de los ciudadanos que acudieron a la firma del acta de conciliación por intermedio de apoderado judicial, la empresa en liquidación atendió cabalmente el pago de sus prestaciones sociales e, inclusive, apreciándose en algunos eventos el reconocimiento de sumas por encima de lo debido y en aquellos casos en los que se presentaron deficiencias parciales en algún rubro, los ruegos adelantados por quienes se citan a reproche criminal no se compadecen con aquellos o con renglón que cuente con amparo normativo de orden convencional o legal.

Para efectos de develar el ambiente en el que se dieron las irregulares deprecaciones y las indebidas erogaciones, la instructora pormenorizó los pagos hechos a cada uno de los reclamantes, haciendo mención de los conceptos pretendidos en las demandas, dentro de los que se destacan la reliquidación de prima de servicios o también llamada prima sobre prima, reliquidación de primas de antigüedad y de vacaciones, uniformes y calzado, tiempo descontado por huelga, salario en especie, descanso compensatorio y reamortizaciones a las que no había lugar, mismas que fueron agrupadas en el acta de conciliación 050 de 1998, así como la mención de otras acciones judiciales y administrativas adelantadas en contra de su otrora empleadora por los mismos, que dan cuenta de las protervas intenciones de quienes acudieron al reclamo de presuntas

acreencias insolutas a cargo de la empresa portuaria, detrimento que se vio reflejado tanto en los dineros entregados al abogado COLLANTE PACHECO, como en aquellos pagos que periódicamente se incrementaron en las mesadas pensionales.

En esta medida, el señalamiento efectuado respecto de cada uno de los procesados se concreta en los siguientes eventos agrupados a manera de tabla, a la cual se le otorgará una denominación a fin de que se distinga de otros compendios que se realizarán a lo largo de este proveído, como se ve:

**TABLA 1:**

| | **SINDICADO** | **TIPO DE SOLICITUD, CONCEPTO Y APODERADO** | **CUANTÍA** |
|---|---|---|---|
| **1** | ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO | Administrativa – uniformes y calzado, pagada con resolución 832 de 07 de mayo de 1996. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $8´649.937,00 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J8LC de 26 de mayo de 1996, resolución 2371 de 1996. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $25´889.313,53 |
| | | Administrativa – descanso compensatorio, Acta de Conciliación falsa 2339 de 23 de diciembre de 1993. Dra. **MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ**. | $7´257.159,00 |
| | | Judicial – retroactivo salarial, sentencia J4LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO**. | $157´982.645,18 |
| | | Judicial ejecutivo – reliquidación de salarios moratorios de sentencia anterior del J8LC, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $6´700.000,00 |
| | | Judicial – subsidio de transporte, sentencia J8LC de 17 de julio de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO RAFAEL TAPIAS SALCEDO**. | $47´600.000,00 |
| | | Judicial – horas extras, sentencia J3LC de 07 de mayo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | $49´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**303´279.054,71** |
| | | Judicial – reajuste de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resolución 2686 de 10 de agosto de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $81´600.000,00 |
| | | **TOTAL TENTADO** | $**81´600.000,00** |
| | | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**296´021.895,71** |
| **2** | FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS | Judicial – sin dato de la sentencia, resolución 792 de 1994, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $19´205.524,92 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sin datos de la sentencia, resolución 1443 de 1996, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $5´379.077,28 |
| | | Judicial – 25% de diferencia salarial, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resolución 1283 de 25 de junio de 1996, varía la mesada pensional. Dr. **RICARDO RAFAEL PRETEL PACHECO**. | $12´395.740,00 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 26 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $81´600.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**118´580.342,20** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO | Judicial – reliquidación de primas semestrales de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $66´100.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**66´100.000,00** |
| **4** | EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Judicial – 35% de recargo nocturno, sentencia J4LC de 22 de noviembre de 1995, resolución 413 de 06 d abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. | $259´458.013,40 |
| | | Judicial – prima de servicios y de antigüedad, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996, resolución 1405 de 1996. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $38´341.147,40 |
| | | Judicial – uniformes y calzado, sin datos de sentencia, resolución 1194 de 29 de junio de 1997. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $63´803.445,00 |
| | | Judicial ejecutivo – nivelación salarial reconocida en el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $583´840.833,00 |
| | | Judicial – reajuste de la mesada pensional, sentencia J8LC de 20 de febrero de 1995, resolución 114 de 20 de febrero de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´706.073,07 |
| | | Judicial – sin datos del concepto reclamado, sentencia J3LC de 26 de noviembre de 1996, resolución 276 de 20 de marzo de 1998. Dra. **DELFA AMARANTA CANTILLO**. | $26´727.957,84 |
| | | Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 25 de junio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $85´300.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**1.062´177.469,71** |
| | | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**764´378.308,91** |
| **5** | ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ | Judicial – reliquidación de prima de vacaciones, sentencia sin datos de la autoridad judicial fechada el 30 de mayo de 1994, resolución 932 de 1994. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Reajuste de la mesada pensional con resolución 028 de 18 de enero de 1997, y pago de diferencias salariales. Dr. **FRANKLIN MANZANO HERNÁNDEZ**. | $17´249.242,75<br>$3´262.168,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia del J8LC de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $76´900.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**97´411.410,75** |
| **6** | ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | Judicial ejecutivo – acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, mandamiento de pago del J4LC de 16 de marzo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $41´600.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $98´700.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**140´300.000,00** |
| **7** | CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS | Judicial – reliquidación de prima de servicios y de antigüedad, sentencia J5LC de 12 de mayo de 1995, resolución 627 de 1995. Dra. **LILIA DEL CARMEN AREVALO**. | $13´599.707,76 |
| | | Administrativa – salario en especie, resolución 1054 de 1995; con resolución 125 de 12 de enero de 1996 se reajusta mesada pensional y se pagan salarios atrasados. Dra. **MIRYAM CHARRYS BLANCO**. | $37´807.029,89<br>$31´337.535,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Judicial – indemnización moratoria, sentencia J5LC de 12 de mayo de 1995, resolución 079 de 29 de enero de 1997. **Sin datos del representante judicial**. | $1´342.095,57 |
| | | Judicial – reliquidación de prestaciones sociales y mesada pensional, sentencia J8LC de 06 de febrero de 1996, resolución 2103 de 26 de mayo de 1998. Dr. **HENRY PÉREZ SEQUEA**. | $42´806.609,00 |
| | | Judicial ejecutivo – diferencia de masadas indexadas, mandamiento de pago de 28 de octubre de 1994, resolución 2521 de 1998. **Sin datos del representante judicial**. | $33´219.535,00 |
| | | Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1980 a 1990 (prima sobre prima), sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $40´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**200´312.512,22** |
| **8** | ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ | Judicial – huelga, sentencia J2LC de 19 de marzo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $67´100.000,00 |
| | | Judicial ejecutivo – salario en especie, acta de conciliación falsa 1561 de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA**. | $10´170.000,00 |
| | | Judicial ejecutivo – salario en especie, acta de conciliación falsa 1517 de 22 de diciembre de 1993, resolución 2502 de 1998. Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $34´942.898,00 |
| | | Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1991 y 1992 (prima sobre prima), sentencia J8LC de 29 de octubre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $50´000.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**162´212.898,00** |
| **9** | MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ | Judicial – vacaciones y prima de vacaciones de 1980 a 1986, sentencia J5LC de 13 de mayo de 1993, resolución 242 de 15 de abril de 1994 y 1341 de 25 de junio de 1996 reconoce mesadas atrasadas. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $687.420,18<br>$5´494.862,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 y 1991, sentencia J8LC de 26 de noviembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $68´200.000,00 |
| | | **NOTA:** Acorde al contenido de la resolución 1512 de 15 de noviembre de 2011, emitida por el GIT, en la cual da cumplimiento a las órdenes adoptadas en sede de consulta respecto de las 2 sentencias referidas en apartes que anteceden, se estableció que el monto de lo apropiado más los incrementos aplicados a la mesada pensional asciende a: | $**165´559.423,28** |
| | | Judicial – prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $26´600.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**197´656.285,38** |
| **10** | ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO | Administrativa – uniformes y calzado, resoluciones 423 de 1996 y 832 de 07 de mayo de la misma anualidad reliquida prestaciones sociales por el mismo concepto. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $2´876.989,00<br>$15´018.158,67 |
| | | Judicial – diferencia de sueldo de 25% por ser directivo sindical para los años 1991 y 1992, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $140´300.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Judicial – recargo de 21.5% por ser estibador para los años 1989 a 1992, sentencia J8LC de 06 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $88´300.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de primas de servicios de los años 1989 a 1992, sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $104´800.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JORGE SAID NARVÁEZ**. | $42´100.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**393´395.147,67** |
| **11** | ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL | Administrativa – uniformes y calzado, resoluciones 2133, 2574 y 2668 de 1995. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $1´582.503,96 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $70´700.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**72´282.503,96** |
| **12** | ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ | Administrativa – uniformes y calzado, resolución 1262 de 20 de junio de 1996, reconoce diferencia de mesadas y salarios moratorios. Dra. **CÁNDIDA TATIS RICARDO**. | $532.764,00<br>$13´790.422,20 |
| | | Judicial – reliquidación prima de antigüedad, sentencia J6LC de 09 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $77´500.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1991 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 29 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $123´500.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**214´790.422,20** |
| **13** | ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J8LC de 06 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $170´600.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1990 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $127´900.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**298´500.000,00** |
| **14** | RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO | Judicial – reliquidación por reconocimiento de horas extra, sentencia J3LC de 05 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | $78´600.000,00 |
| | | Judicial – prima de vacaciones, sentencia J4LC de 10 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $67´800.000,00 |
| | | Judicial ejecutivo – descanso compensatorio según acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO CASTILLEJO DE SALES**. | $48´700.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**195´100.000,00** |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1990 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $100´300.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **TOTAL TENTADO** | $**100´300.000,00** |
| **15** | JULIO LLANOS SARMIENTO | Judicial – reliquidación de prima de servicios segundo semestre de 1991, sentencia J4LC de 17 de julio de 1996. Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $56´200.000,00 |
| | | Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $36´100.000,00 |
| | | Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $42´700.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 02 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $75´300.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $100´600.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**310´900.000,00** |
| **16** | MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 12 de febrero de 1996, resolución 238 de 05 de febrero de 1996. Mesadas atrasadas y salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´545.692,23<br>$33´318.261,69 |
| | | Judicial – prima de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994, resolución 330 de 19 de febrero de 1996 y 830 de 1997 (*folio 83 c. o. anexos 12*). Salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $36´268.477,76 |
| | | Judicial – nueva reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial, resolución 1909 de 1996. Salarios moratorios Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA**. | $73´991.075,41 |
| | | Judicial – Sin datos de los conceptos reclamados ni de la autoridad judicial, sentencia de 11 de octubre de 1994, resolución 830 de 10 de junio de 1997. Mesadas atrasadas y reajuste de pensión. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´235.171,03 |
| | | Judicial – retroactivo salarial, sentencia J6LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. | $195´587.022,72 |
| | | Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 29 de octubre de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $282´181.058,05 |
| | | Administrativa – reliquidación de prima de servicios, resolución 1689 de 11 de noviembre de 1997. Dra. **MIRNA ALEXI GARCÍA**. | $23´704.985,00 |
| | | **TOTAL** | $**655´831.743,89** |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $120´300.000,00 |
| | | **TOTAL TENTADO** | $**120´300.000,00** |
| **17** | LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR | Judicial – Reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J4LC sin datos de la fecha de la providencia, resolución 321 de 16 de diciembre de 1996. **Sin datos del representante judicial**. | $13´457.669,08 |
| | | Judicial – Nueva reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J2LC sin datos de la fecha de la providencia, | $20´823.292,09<br>$1´661.211,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | resolución 464 de 20 de mayo de 1994. Dr. **EFRAIN BULA PARODI**.<br>Reliquidación del mandamiento de pago de 24 de noviembre de 1992; mandamiento de pago de 18 de julio de 1994. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | |
| | | Judicial – Huelga, sentencia J8LC de 18 de enero de 1995, resolución 1071 de 1995. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $102´393.032,19 |
| | | Con fundamento en las anteriores órdenes judiciales se dispuso el reajuste de la mesada pensional y pago de las percepciones atrasadas, las cuales fueron pagadas mediante resolución 1757 de 16 de agosto de 1996. | $13´173.314,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1987 a 1991, sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $88´900.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**240´408.618,71** |
| **18** | ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | Judicial – Reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 243 de 1994**. Sin datos del representante judicial**. | $950.701,02 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 2414 de 1995. Dr. **ALFONSO GIL DE LA HOZ**. | $81´065.143,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, Sin datos de la providencia judicial, resolución 330 de 19 de febrero de 1996. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $45´863.492,95 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la fecha de la sentencia se paga mandamiento de pago mediante resolución 2399 de 1996. Dr. **EMIL ALBERTO PULGAR LEMUS**. | $7´606.205,00 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, sentencia J4LC de 26 de julio de 1995, resolución 2008 de 30 de septiembre de 1996. Dr. **RAUL ALFONSO EBRATT**. | $6´630.872,00 |
| | | Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2409 de 29 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J2LC de 12 de noviembre de 1997, resolución 2226 de 08 de junio de 1998. Dr. **ÓSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO**. | $81´456.459,04 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1989 a 1992, sentencia J4LC de 12 de junio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $103´100.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**326´672.873,01** |
| **19** | ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $32´500.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J2LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 05 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $37´000.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**69´500.000,00** |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr**. ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $53´600.000,00 |
| | | **TOTAL TENTADO** | $**53´600.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20** | LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ | Administrativa – reliquidación de prestaciones sociales, resolución 296 de 01 de diciembre de 1993. Sin datos de apoderado judicial. | $746.377,41 |
| | | Administrativa – salario en especie resolución 2339 de 1996 y acta de conciliación 050 de 21 de marzo de 1996. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $32´213.140,82 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de identificación de autoridad judicial o fecha de la sentencia; devino en reajuste pensional y pago de mesadas atrasadas. Dra. **ENA LEONOR QUINTANA**. | $6´726.372,33 |
| | | Judicial – mesadas atrasadas, sin datos de autoridad judicial, sentencia de 26 de septiembre de 1994, resolución 848 de 10 de junio de 1997. Dra. **NINA DEL CARMEN CASTRO DE LEÓN**. | $9´261.397,80 |
| | | Judicial ejecutivo – cena y descanso, acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC mandamiento de pago de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ**. | $250´800.000,00 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la autoridad judicial, mandamiento de pago de 21 de octubre de 1996, conciliado en acta 020 de 06 de mayo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´900.000,00 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1993, sentencia J8LC de 15 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $87´600.000,00 |
| | | Judicial – huelga y suspensiones, sentencia J4LC de 19 de marzo de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $63´500.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**455´747.288,36** |
| | | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**451´337.288,36** |
| **21** | JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY | Administrativa – solicitud de reconocimiento pensional sin que contara con los requisitos para ello, resolución 520 de 17 de abril de 1998, con la que también se le reconocieron mesadas atrasadas. Dr. **MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA**. | $248´968.911,00 |
| | | Administrativa – reliquidación general de prestaciones sociales, resolución 173 de 31 de enero de 1995. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $10´255.483,39 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial ni fecha de la providencia judicial, pagada con resolución 262 de 08 de febrero de 1996. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $1´234.066,17 |
| | | Administrativa – uniformes y calzado, pagado con resolución 2339 de 1996. Dra. **MIRYAM CHARRYS BLANCO**. | $22´682.378,79 |
| | | Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 06 de enero de 1996, resolución 677 de 21 de mayo de 1997. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $55´542.636,49 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 29 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $34´300.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**372´983.475,84** |
| **22** | LUIS VALERIO SOLANO CASTRO | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de la autoridad judicial o de la fecha de la sentencia, se le reconoce el pago de suma dineraria con | $165.586,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | resolución 792 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | |
| | | Judicial – solicitud de reconocimiento pensional, sin datos de fecha de la sentencia, resolución 255 de 1996 reconoce mesadas atrasadas; resolución 1990 de 30 de septiembre de 1996 concede pensión y diferencia de mesadas. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $39´105.745,92<br>$15´635.980,00 |
| | | Judicial ejecutivo – reliquidación de prima de antigüedad, acta de conciliación falsa 1630 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC de 29 de noviembre de 1996. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $13´098.885,00 |
| | | Judicial ejecutivo – movilización de nocivos, acta de conciliación falsa 1629 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 28 de noviembre de 1996. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $13´128.541,37 |
| | | Judicial ejecutivo – diferencias de mesada pensional, mandamiento de pago J2LC de 27 de noviembre de 1996, conciliado en acta 006 de 05 de junio de 1998. Dra. **RUTH DEL CARMEN DUQUE DE TORRENEGRA**. | $27´509.892,15 |
| | | **TOTAL** | $**108´644.630,64** |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 09 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $68´200.000,00 |
| | | **TOTAL TENTADO** | $**68´200.000,00** |
| **23** | JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de fecha de la providencia judicial, resolución 1136 de 23 de septiembre de 1994. Dr. **RICARDO PRETEL PACHECO**. | $25´817.393,30 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de fecha de la providencia judicial, resolución 352 de 1995. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $17´914.072,17 |
| | | Administrativa – uniformes y calzado, resolución 2133 y 2668 de 1995. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $2´558.463,49 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de autoridad judicial o fecha de la sentencia, resolución 2344 de 1996. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $973.884,60 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, mandamiento de pago J5LC de 17 de mayo de 1995. Dra. **LILIA DEL CARMEN AREVALO**. | $3´543.524,37 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $77´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**128´007.337,93** |
| **24** | VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA | Judicial – huelga, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $60´400.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**60´400.000,00** |
| **25** | JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA | Judicial – reliquidación de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 05 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $65´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**65´200.000,00** |
| **26** | MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de | $57´200.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | |
| | | Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $52´700.000,00 |
| | | Judicial – prima de servicios de 1990 a 1992 "prima sobre prima", sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $77´900.000,00 |
| | | Judicial ejecutivo – reclamo por días descontados de la liquidación, mandamiento de pago J4LC de 24 de febrero de 1998, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **DUBIS ESTHER RAMOS**. | $112´436.135,34 |
| | | **TOTAL** | $**300´236.135,34** |
| | | Judicial – despido injusto, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996. Dr. **LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $58´242.659,34 |
| | | **TOTAL TENTADO** | $**58´242.659,34** |
| **27** | GABRIEL BARRIOS DONADO | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial o fecha de la providencia judicial, resolución 248 de 1994. Dr. **RAFAEL A. CABALLERO**. | $10´614.901,46 |
| | | Judicial – huelga, sin datos de autoridad judicial o fecha de la providencia judicial, resolución 1579 de 15 de diciembre de 1994. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $68´899.841,20 |
| | | Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial o fecha de la providencia judicial, resolución 148 de 1995. **Sin datos del representante judicial**. | $161´968.782,25 |
| | | Administrativa – salario en especie uniformes y calzado, resolución 2339 de 10 de diciembre de 1996. Pago de diferencias salariales dejadas de entregar, resolución 125 de 12 de enero de 1996. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $32´123.580,42<br>$13´975.972,00 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC sin que se hiciera referencia a la fecha de ésta, resolución 214 de 1996. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $13´956.065,07 |
| | | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, sentencia J8LC de 26 de marzo de 1996, resolución 2371 de 1996. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $25´084.923,15 |
| | | Judicial ejecutivo – reliquidación de salarios moratorios, sin datos del título de recaudo, mandamiento de pago J8LC de 14 de febrero de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $2´800.000,00 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996, resolución 2070 de 30 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $43´900.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**373´324.065,55** |
| | | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**211´355.283,30** |
| **28** | GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL | Administrativa – prima sobre prima, resolución 495 de 15 de abril de 1998. Dr. **VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ**. | $34´647.469,00 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 17 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $132´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**166´847.469,00** |
| **29** | HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, del Estrado Judicial que profirió la providencia ni de la fecha de la misma, resolución 353 de 1994. Dr. **RAIMUNDO BLANCO FRANCO**. | $591.245,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial ni de la providencia, resolución 931 de 22 de agosto de 1994. Dr. **RICARDO JOSÉ TORRES MORALES**. | $9´724.141,09 |
| | | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial ni de la providencia, resolución 1136 A de 23 de octubre de 1994. Dr. **RICARDO PRETEL PACHECO**. | $14´522.420,46 |
| | | Administrativa – uniformes y calzado, resolución 1958 de 26 de septiembre de 1996, reajuste de pensión y mesadas atrasadas. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $27´997.147,37 |
| | | Judicial ejecutivo – cena y descanso, acta de conciliación falsa 1401 de 27 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J1LC de 31 de enero de 1996. Dra. **SARA MORATO MARTÍNEZ**. | $32´009.966,19 |
| | | Judicial tutela – teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento judicial por diferencias de mesadas, sin datos de autoridad judicial, providencia de 18 de septiembre de 1996, resolución 831 de 10 de junio de 1997. Dr. **LUIS MARIO CORTES RODRÍGUEZ**. | $5´016.980,35 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JORGE SAID NARVÁEZ**. | $14´100.000,00 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 17 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $45´200.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**149´161.900,71** |
| **30** | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial ni de la providencia, resolución 629 de 25 de marzo de 1995 y 316 de 1996 por salarios moratorios y agencias en derecho. Dra. **IVONNE URICOHECHEA VENGOHECHEA**. | $13´054.331,52<br>$3´256.980,67 |
| | | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 02 de febrero de 1996, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **ORLANDO SANTOS CORZO**. | $534´032.153,27 |
| | | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $45´300.000,00 |
| | | **TOTAL** | $595´643.465,46 |
| **31** | JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA | Judicial – prima sobre prima, sentencia J4LC de 07 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $98´600.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**98´600.000,00** |
| **32** | JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ | Judicial – diferencia de vacaciones de los años 1992 y 1993, sentencia J8LC de 19 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $97´000.000,00 |
| | | **TOTAL** | $**97´000.000,00** |
| **33** | ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO | Monto asociado al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, a la cual acudió en representación de los extrabajadores que se convocan a juicio en la resolución de acusación que se estudia. | $**3.057´400.000,00** |
| | | Monto relacionado con aquellos rubros que en virtud de la revocatoria de algunos actos administrativos quedaron sin ser cancelados. | $**496´900.000,00** |

Habiéndose identificado las reclamaciones efectuadas por los acriminados, la instructora realizó el análisis de los renglones que las fundamentaron, dentro de los que se encuentran la solicitud de días descontados por huelga, uniformes y calzado, prima sobre prima y prima de antigüedad, resaltando la improcedencia de dichas solicitudes en consideración a que respecto del primer concepto la empresa se hallaba facultada legalmente para descontar de la liquidación definitiva de prestaciones sociales los días no trabajados, y cualquier pretensión enfilada a que se incluyeran en la amortización final carecía por completo de respaldo normativo o fáctico; en torno de la solicitud de reconocimiento de uniformes y calzado anota la persecutora que el pago que en su momento se dio por éstos, en manera alguna constituyen factor salarial, realizando una diferenciación de lo que se percibe por el trabajador, dentro de lo que se encuentran estos beneficios que se dirigen a garantizar condiciones óptimas en el ejercicio de la labor, y lo devengado, dentro de lo que se efectúa la distinción de los factores que constituyen salario y la forma en que debían ser tasados para efectos de establecer la base de liquidación de las prestaciones sociales y la mesada pensional, afirmando que la percepción dineraria que pudiere haberse obtenido por este beneficio no cuenta con la entidad para incrementar las acreencias a cargo de la empresa.

Acerca del reclamo de prima sobre prima, adujo que atañe a la práctica acuñada por abogados y trabajadores exportuarios en la que se deprecaba la inclusión del monto entregado a título de prima de servicios de un semestre en la liquidación de la misma percepción del período siguiente, esto es, que se incluyera el monto de la prima entregada en junio para efectos de amortizar la de diciembre, pretensión que claramente se constituía en desproporcionada y progresiva, teniendo en cuenta que su incremento se aplicaría cada vez que se causara el derecho a percibir la prima semestral.

En cuanto a la prima de antigüedad anota que el pago de ésta se causaba por períodos trianuales y, en caso de que se causara de forma parcial, su pago se daría de forma proporcional con el tiempo laborado y el porcentaje que aplicara para el trienio que avanzara, acorde a las normas convencionales que establecían las reglas para su liquidación; no empece lo anterior, el actuar irregular se concretaba en que se reclamaba la aplicación de los montos pagados de forma proporcional por prima de antigüedad para reliquidar la percepción básica, así como otras percepciones indebidas para efectos de incrementar el monto a pagar por ésta, pretensiones que siendo claramente irregulares, contaron con el amparo de las autoridades judiciales ante las que se formularon las demandas en contra de la entidad portuaria, acompañando los argumentos expuestos con algunas citas de orden jurisprudencial.

Considera la instructora que el hecho de que mediante los informes glosados a la actuación por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de cara a la justeza de la liquidación de prestaciones sociales de quienes se convocan a reproche penal se hubiere establecido que en todos los casos la empresa satisfizo sus obligaciones pecuniarias, y que en aquellos eventos donde se encontraron deficiencias en nada se relacionan con los reclamos adelantados por los extrabajadores sindicados por vías administrativa y judicial, denota que ningún sustento acompañaba, en algunos casos reiteradas, las siempre irregulares pretensiones formuladas, consolidándose

el compromiso penal de quienes acudieron por intermedio de apoderados judiciales a reclamar el amparo de sus derechos ante el presunto desconocimiento de la empresa, acorde a las precisiones efectuadas en torno de los elementos constitutivos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el actuar de quienes se acusaron en la referida providencia, realizando algunas precisiones de cara a la forma de participación de los procesados, la cual se endilga a título de determinadores de la conducta de peculado por apropiación agravado.

Ante otras consideraciones expuestas, se dispone la preclusión de la investigación respecto del señor **JOSÉ LIBARDO BARRAZA RIVERA**, teniendo en cuenta que tanto la persecutora como el abogado MIGUEL ÁNGEL ANDRADE POLO advirtieron que los eventos por los que se le investigaba en la presente actuación se identificaban con los que fueron basamento del proceso penal definido con sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá del 29 de septiembre de 2009, confirmada en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá con decisión adiada el 01 de octubre de 2010 e inadmitida en sede de casación con providencia de 23 de marzo de 2011 siguiente, amparándose la garantía constitucional del *non bis in idem*.

En lo que atañe a los eventos que en su momento le fueran enrostrados a los señores **EDUARDO MORALES MOLINA** y **JOAQUÍN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ** se dispuso la preclusión de la investigación al apreciarse que en torno de estos no mediaba compromiso subjetivo, y que las resultas criminosas remitían al actuar del abogado quien desbordó las facultades extendidas por éstos y adelantó deprecaciones a las cuales no había lugar.

De otra parte, frente al señalamiento que inicialmente fue realizado por el delito de prevaricato por acción respecto de todos los sindicados, se declaró la prescripción de la conducta; absteniéndose de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados por el delito de peculado por apropiación, pasando a emitir resolución de acusación en contra de los señores ÁLVARO RODADO CAICEDO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JULIO LLANOS SARMIENTO, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, GABRIEL BARRIOS DONADO, GABRIEL ANTONIO BARRAZA, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO como determinadores del delito de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo sucesivo en las cuantías referidas para cada uno de ellos; a los señores ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA y JOSÉ IGNACIO MOSQUERA por el delito de peculado por apropiación agravado; y a los señores ARMANDO ENRIQUE MARIANO

SANJUAN y ALFONSO EMILIO COLANTE PACHECO señalándoles el concurso con el delito de peculado por apropiación agravado tentado.

No obstante lo anterior, pese a que dentro del análisis de eventos fundado en el material acopiado a lo largo de la actuación y detallado en el cuerpo de la resolución se advirtió que respecto de los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO y MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ también se configuraba la conducta de peculado por apropiación agravado en la modalidad de tentativa, la instructora no realizó ningún señalamiento por esta conducta en la parte resolutiva y presentó algunas deficiencias en cuanto a las apreciaciones dinerarias que conformaban el total de los dineros apropiados indebidamente, las cuales se precisaran cuando se entre a consignar las consideraciones de esta decisión.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el señor **GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA** se tiene que fue vinculado mediante declaratoria de persona ausente, a quien se le atribuye haber percibido diferencias de mesadas y reliquidaciones sin que hubiere lugar a ello, se aprecia que la Fiscalía omitió realizar consideraciones en torno de estos señalamientos, ya que obra prueba dentro del expediente de su deceso y de que la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso la baja del cupo numérico mediante resolución 1241 de 25 de marzo de 1999, con lo que anotó, se hallaba configurada causal objetiva de extinción de la acción penal y consecuente terminación de procedimiento en lo que a este procesado se refería, concluyendo no convocarlo a juicio criminal; sin embargo, la situación advertida nunca fue declarada formalmente dentro de la etapa de investigación y tuvo que ser atendida por este Juzgado posteriormente.

## ALEGACIONES CONCLUSIVAS EN LA VISTA PÚBLICA

Los sujetos procesales que intervinieron en la diligencia de audiencia pública presentaron los alegatos conclusivos que se sintetizan en los siguientes términos.

### LA FISCALÍA

El representante del ente persecutor en exposición de sus argumentos previos a la emisión de la sentencia, solicita la emisión de condena contra los procesados en calidad de determinadores de las conductas de peculado por apropiación agravado en las modalidades y cuantías que pasa a pormenorizar; eventos que se relacionan con el adelantamiento de variados procesos laborales y reclamaciones administrativas identificadas en el vocatorio a causa, que en algunos de los casos se acometieron ante la gestión profesional del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO concretados en la emisión del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en virtud de la cual se alcanzó el pago de la suma de $3.643´600.000,00, quedando pendiente el monto de $586´200.000,00, que hace parte de los eventos constitutivos de peculado por apropiación agravado tentado, y que en su mayoría giró en torno del concepto de prima sobre prima, reclamación de uniformes y calzado y otras erogaciones a las

que no había lugar atendiendo que, o se habían apreciado debidamente para cuando se dio la desvinculación de los extrabajadores, o se trataba de conceptos que carecían de fundamento jurídico y fáctico para atener su declaratoria, imponiéndose paralelamente sanción moratoria sin que se hubiere discutido su procedencia al interior de la causa laboral.

Como sustento de los señalamientos, recuerda el Delegado que los eventos irregulares se encuentran debidamente discriminados en el vocatorio a causa, donde se identificaron las causas laborales y las reclamaciones administrativas a partir de las que se generaron las indebidas erogaciones a cargo del fondo liquidador de la empresa portuaria, y que se sustentan en las diversas pruebas que se aportaron al expediente tanto en la etapa de investigación como en la de juicio, incluyéndose los estudios que oportunamente arrimaron la entidad que se ha hecho parte como víctima como los rendidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones, de donde es posible advertir que para cuando los extrabajadores que aquí se investigan se desvincularon de la empresa portuaria ante su inminente liquidación ésta liquidó en debida forma sus prestaciones sociales y amortizó correctamente sus cesantías y mesada pensional.

De lo anterior se desprende diáfano que cualquier pretensión que por vía administrativa o judicial que con posterioridad al retiro de la empresa se emprendiera por los extrabajadores portuarios que en esta causa se hallan vinculados, carecía de cualquier asomo de procedencia, aspecto frente al que anota que no se realizó una sola solicitud enfilada a acceder de forma injustificada a los dineros administrados por FONCOLPUERTOS, sino que estas aspiraciones se dieron de forma sistémica y reiterada en cada uno de los casos que se escrutan, cada uno fundamentado en conceptos contrarios a las prerrogativas convencionales, respecto de las cuales el señor Fiscal efectúa un análisis y distinción que demuestra la improcedencia de los factores que en las sentencias judiciales, actos administrativos y actas de conciliación se discutieron ante el decidido actuar de quienes se sindican de los eventos ilícitos.

De cara a la responsabilidad de cada uno de los procesados, estos es, la evidencia relativa a la subjetividad de las conductas, el señor Fiscal enuncia cada uno de los reclamos que de forma personal e intencionada acometieron los extrabajadores portuarios, acorde a los señalamientos que quedaron igualmente consignados en la resolución de acusación arriba estudiada; precisando en qué casos se trata de conductas consumadas y en cuales constituyen eventos tentados al no haberse alcanzado el pago de las sumas reclamadas, diferenciando los eventos que implicaron variación en la mesada pensional de quienes se beneficiaron con las desatinadas decisiones, las cuales se adelantaron con el pleno conocimiento de que las obligaciones dinerarias que le eran atribuibles a la entidad demanda quedaron debidamente cubiertas al término del vínculo laboral, emergiendo notoria la intención de defraudar las arcas públicas que se consolidó en las protuberantes condenas alcanzadas, en las que no sólo se obtuvieron sanciones extremadamente onerosas, sino que repercutió en la variación de la mesada pensional de quienes sacaron provecho de la ausencia de defensa judicial de FONCOLPUERTOS.

En cuanto a las actas de conciliación que sirvieron de título ejecutivo para algunas de las reclamaciones judiciales, firmadas a finales de 1993, acota

que estas fueron objeto de investigación judicial en la que se encuentra acreditado, a partir de los testimonios vertidos por quienes hicieron parte de la empresa portuaria en el proceso liquidatorio, que su existencia obedece a la falsedad fraguada por personas ajenas a la entidad, ya que para 1993, no se firmaron actas que alcanzaren el consecutivo que tienen las que se encuentran investigadas en este asunto, memorando que las que se rubricaron tampoco comprometían pluralidad de extrabajadores, pues las firmadas para esa anualidad se cimentaron en providencias judiciales ejecutoriadas que además contaban con la aprobación de la junta directiva de la empresa.

A lo anterior agrega que las providencias judiciales que fueron presentadas para el cobro de las sumas en ellas contenidas, no se encontraban legalmente ejecutoriadas al no haberse acometido el necesario grado jurisdiccional de consulta que les daba el estatus de ser exigibles; que la declaratoria de ilegalidad de la huelga adelantada en los diferentes terminales marítimos era de conocimiento de los trabajadores que adelantaron su cobro aprovechándose del presunto desconocimiento que sobre el particular tenían quienes integraron el fondo liquidador, personas que se sabe a partir de las sentencias condenatorias emitidas en su contra, estaban al tanto del entramado criminal que se venía gestando en el proceso de disolución de la empresa.

En lo que atañe a las repercusiones que habrán de impactar en los actos administrativos tanto respecto de quienes para ese entonces se hallaba extinta la acción penal por causal objetiva como para los procesados de quienes se reclama providencia de carácter condenatorio, solicitó se ordene dejar dichas decisiones sin efectos jurídicos y económicos, así como las actas de conciliación que hacen parte de los eventos juzgados, aun en los casos en los que ante el fallecimiento de los pensionados, sus beneficiarios siguen percibiendo la mesada indebidamente incrementada.

En lo que atañe al señor GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA, de quien si bien en etapa de investigación, y en el mismo cuerpo de la resolución de acusación fue advertido su deceso sin que en la parte resolutiva del anunciado pronunciamiento se emitiera decisión de fondo en torno a la cesación de procedimiento por la extinción de la acción penal, solicita que el Despacho se pronuncie de fondo sobre el particular, habida consideración de que consultada la base de datos de la Registraduría Nacional del Estrado Civil se aprecia que el cupo numérico del ciudadano fue dado de baja por muerte.

De los planteamientos esbozados considera se encuentran reunidos los requisitos para reiterar la solicitud con la que inició su intervención enfilada al proferimiento de decisión de carácter condenatorio en contra de los 29 extrabajadores y representante judicial de los mismos por los eventos analizados a lo largo de la actuación en las cuantías identificadas.

**LA PARTE CIVIL**

Este sujeto procesal manifestó acoger en su integridad los planteamientos expuestos por el Delegado Fiscal, en los que se analizaron tanto la identificación de la conducta penal y los eventos transgresores de la

descripción típica, como aquellas particularidades de las que se consolida el compromiso de los encausados, demostrándose la inequívoca intención de éstos en obtener provecho a partir de las irregulares solicitudes que por vía judicial y administrativa acometieron de forma personal y por intermedio de apoderados judiciales.

En sustento de las pretensiones de la víctima, realiza un breve recuento de lo que fue la liquidación de la empresa portuaria y el paso de la administración del pasivo pensional de la misma a manos del Fondo liquidador FONCOLPUERTOS, momento en el que tuvieron lugar los eventos que en esta causa se analizan, comoquiera que ante la deficiente defensa con la que contaba la entidad encargada del proceso de disolución, el gobierno se vio en la obligación de entregar los asuntos que de este proceso se derivaba al Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, con las consecuencias que se conocen en torno a la vigencia de las decisiones judiciales y actos administrativos asociados a los hechos que se investigan en esta causa, a los que se agrega la presunta celebración de conciliaciones acordando el pago de renglones que carecían de cualquier amparo de orden normativo legal o convencional, ya que se encuentra demostrado que la extinta empresa reconoció cabalmente las acreencias laborales, prestacionales y pensionales que le asistían a cada uno de los trabajadores que se hallan comprometidos en esta investigación.

Estas reiteradas solicitudes demuestran el compromiso subjetivo de los procesados, quienes por las diversas y desproporcionadas condenas que alcanzaron, deben responder por la defraudación a los dineros estatales en calidad de determinadores de la conducta de peculado por apropiación agravado con las repercusiones civiles que de esta declaratoria de desprendan y que tengan por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a la entidad que representa, tasándose adicionalmente el 6% por interés legal adicional acorde al precepto 1617 del Código Civil y al canon 21 de la Ley 600 de 2000, debiéndose dejar sin efectos jurídicos los actos administrativos emitidos con ocasión de las conductas analizadas, relacionados en detalle en el cuerpo de la resolución de acusación, y remitir copias de la decisión que así lo declare a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo.

**El abogado defensor de oficio de los procesados GABRIEL BARRIOS DONADO, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA y GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL.**

El togado comienza su exposición solicitando se declare la extinción de la acción penal en lo que remite al procesado GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL, teniendo en cuenta que se encuentra acreditado dentro del expediente su fallecimiento; en lo que atañe a los demás procesados solicita se profiera sentencia de carácter absolutorio, teniendo en cuenta que sus representados se desempeñaron a órdenes de la empresa portuaria y las reclamaciones que adelantaron se encontraban directamente relacionadas con esta actividad, lo que los facultaba para reclamar los derechos que consideraran conculcados por la empleadora, actuando de buena fe en la delegación asignada a los abogados que adelantaron las

solicitudes por vías judicial y administrativa en virtud de los contratos y poderes que los vinculaban.

Considera que las falencias presentadas en las respectivas liquidaciones de prestaciones sociales atribuible a la empresa se encuentran demostradas a partir de los fallos judiciales proferidos por las diferentes autoridades judiciales y la correlacionada suscripción del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en donde se amparó el pago de las condenas legalmente impuestas a la entidad portuaria en liquidación, generando la presunta defraudación en los dineros del Estado, en las cuantías conocidas dentro del expediente.

En cuanto al fundamento de las demandas menciona que no eran los procesados quienes se hallaban compelidos a tener un manejo detallado de las normas que gobernaban la relaciones laborales con la empresa, tanto así que resolvieron entregar mandato judicial a profesional del derecho que los asesorara en este aspecto, por lo que considera infundada la posición de la Fiscalía en torno a la responsabilidad de sus protegidos, ya que en manera alguna se les puede atribuir responsabilidad cuando sobre los reclamos que efectuaron se hallaba dualidad de posiciones frente a la procedencia de su reconocimiento y era la autoridad judicial quien debí dirimir la controversia que en demanda se le planteaba, actuar que constitucionalmente se encuentra amparado en el estado social de derecho.

En caso de que las autoridades administrativas hubieren advertido la improcedencia en el reconocimiento de los derechos pactados en las actas de conciliación que hacen parte de los eventos investigados, el camino era solicitar por vía judicial su afectación para evitar el perjuicio a los dineros públicos, situación que claramente no se dio.

En este orden de ideas, culmina su intervención reiterando su solicitud de que se profiera fallo absolutorio en favor de sus prohijados y se decrete la extinción de la acción penal en lo que atañe al señor BARRAZA VILLARREAL; dejando a criterio del Juzgado la concesión de los subrogados o sustitutos punitivos en lo que a sus representados se refiere.

**El procesado abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, quien acomete su defensa de forma personal.**

En turno del uso de la palabra, este procesado señaló el orden de sus alegaciones por algunos temas que consideró de importancia, haciendo referencia a la enunciación positiva con la que contaban las primas que fueron reclamadas en algunos de los procesos que se endilgan por la Fiscalía como irregulares; pasando al tópico del grado jurisdiccional de consulta que debía agotarse respecto de las providencias judiciales que hacen parte de los eventos investigados; hace alusión a la forma de participación que le enrostra la Fiscalía en calidad de determinador de las conductas; discute la postura del órgano persecutor en cuanto a que las primas reclamadas en algunos asuntos no hacían parte del promedio salarial.

Seguidamente realiza algunas precisiones relacionadas con la forma en que fue vinculado a la actuación que, se recuerda, inicialmente fue en calidad

de persona ausente, aspecto en torno al que se muestra descontento por la forma como los estamentos llamados a garantizar su comparecencia al proceso, ora por la efectividad y pertinencia de las órdenes adoptadas para concretarla, ora por la ejecución de las mismas que se encargara a la autoridad investigativa, ya que considera que nunca se concretaron actividades decisivas para dar con su paradero, y cuando se presentó el reporte de labores adelantadas para dar con su paradero, se advierte haber requerido información de su paradero a una sobrina que para entonces era menor de edad, lo que considera una falta de rigor de parte del cuerpo investigativo que adelantó las labores para dar con su paradero.

Derivado de esta falencia, no se realizó la intimación del contenido de la demanda de parte civil para que pudiera pronunciarse frente a las pretensiones de este extremo procesal, recalcando que cuando se dispuso la vinculación de los extrabajadores que se habían beneficiado con la conciliación 050 de 1998, y se informó esta orden a los sindicatos de trabajadores de la costa atlántica, la resolución que contenía aquella decisión en ninguna parte dispuso informarle a él el adelantamiento de la causa penal en su contra, debido a que para entonces no se encontraba vinculado formalmente, además que al no ser extrabajador, su ubicación no se podría gestionar por intermedio de los sindicatos de trabajadores.

De los planteamientos expuestos, refiere se halla demostrado que en el asunto se le han conculcado sus derechos fundamentales, en especial aquellos que se encuentran enunciados en el precepto 29 constitucional, pues en su sentir, no se garantizó el derecho a la defensa en la fase de investigación; prerrogativas que se encuentran descritas en el canon 306 de la Ley 600 del 2000, aspecto frente al que hizo algunas citas jurisprudenciales relacionadas con la garantía de la defensa dentro de actuación procesal, y precisiones en torno a las oportunidades procesales que a lo largo del decurso procesal tuvo para exponer su versión sobre los hechos y deprecar el acopio de medios demostrativos, circunstancias que en su criterio le impidieron ejercer su defensa debidamente, sin que expresamente solicitara la declaración de nulidad.

De otro lado, en torno al compromiso subjetivo que le corresponde por el adelantamiento de las causas laborales, las consecuentes erogaciones dinerarias en favor de sus representados y el presunto compromiso en la determinación de funcionarios judiciales y directivos de la empresa portuaria, anotó que no se encuentra prueba fehaciente de que él de manera personal hubiere pretendido incidir en el actuar de quienes disponían de los dineros públicos para que se dictaran fallos en algún sentido particular o se autorizara el pago de las sumas declaradas en providencias judiciales o actos administrativos, al punto que cuando se interrogó al señor SALVADOR ATUESTA BLANCO acerca de si lo conocía, este informó a la causa que no; de donde estima que se desdibuja el señalamiento de la Fiscalía en torno a la determinación. Frente a éste tópico, realiza algunas citas jurisprudenciales relativas a la existencia de relación entre la persona que ejecuta los actos peculadores y la que presuntamente lo determina.

Por otra parte, en lo atinente al grado jurisdiccional de consulta, aduce que para la época en que se dieron las sentencias en contra de la entidad portuaria en liquidación no se encontraba establecido como obligatorio dicho trámite, teniendo en cuenta que la entidad se catalogaba como de

economía mixta respecto de la cual no se hallaba implantada la obligación de someter al anunciado grado jurisdiccional las providencias judiciales que le fueran desfavorables, imposición que se dio sólo hasta 1999 cuando en sentencia de unificación se instituyó ese deber cuando la decisión no fuera recurrida.

En cuanto a los reclamos efectuados por vía judicial, anota que la convención colectiva de trabajo establecía que se entendía por salarios no sólo la remuneración fija percibida por el trabajador sino todo cuanto se percibía por éste en dinero o especie como ocasión a la labor desempeñada, dentro de lo que se señalaba expresamente lo atinente a las primas, que es lo que cimenta en parte la tesis de la Fiscalía, quien acuñó el término de prima sobre prima que nada tiene que ver con el reajuste o reliquidación de la prima de servicios pretendido en las demandas por él adelantadas, teniendo en cuenta que no se les pago a sus representados el semestre correspondiente al terminar la relación laboral, adoptando la Fiscalía para efectos de revelar la presunta ilicitud el texto de la convención colectiva de trabajo del terminal marítimo de la ciudad de Buenaventura, cuando el presente asunto se ventila respecto de procesos laborales tramitados en la costa atlántica.

De las apreciaciones expuestas, en consideración a que no es posible sustentar la responsabilidad penal que reclama la Fiscalía, solicita se profiera decisión de carácter absolutorio en su favor y, en caso de que no se acoja esta solicitud, se aplique el principio del *in dubio pro reo* ante la inexistencia de elementos que permitan arribar a la certeza acerca de su compromiso, solicitando que en caso de que se emita decisión desfavorable, esta sea acompañada de los sustitutos penales a que haya lugar, teniendo en cuenta que no cuenta con antecedentes penales y no es una persona que represente un peligro para la sociedad.

**Argumentos presentenciales del doctor LUIS RAFAEL DELUQUEZ FRAGOZO como representante de los procesados ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN.**

El togado hace referencia a que el señalamiento criminal que se realiza a sus protegidos encuentra fundamento en los informes y pericias que ha aportado a la causa tanto el CTI de la Fiscalía General de la Nación como el Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de la Protección Social en los que se establece la presunta justeza en la liquidación de las prestaciones sociales de éstos; no obstante, al revisar las normas convencionales que establecen la definición de salario y los factores que lo integran, se aprecia que los reclamos efectuados remiten a aquellos renglones que la empresa liquidó de forma deficiente.

En lo que tiene que ver con el mal llamado concepto de "prima sobre prima" el cual fue abordado en su concepción por el doctor COLLANTE PACHECO en su intervención, refiere que no se trataba de una solicitud que contrariaba las normas convencionales, ya que se trataba de reamortizaciones derivadas de la indebida tasación de las primas semestrales atribuible a la empresa portuaria, situación que dio lugar a la presentación de las demandas laborales en las que la autoridad competente acometió el escrutinio de las pretensiones y arribó a la

conclusión de que efectivamente le asistía derecho para reclamar estas reliquidaciones.

Frente al grado jurisdiccional de consulta al que presuntamente se debían someter las decisiones que resultaren desfavorables a los intereses de la parte accionada, al considerarse que ésta manejaba recursos públicos, anota que dicha precisión fue instituida sólo hasta finales de 1999, ya que previamente se encontraban algunos conceptos del mismo Tribunal Superior de Barranquilla en los que se adoptaba la posición de que las sentencias emitidas en contra de la empresa portuaria no eran susceptibles de consulta, aspecto del que se desprende la improcedencia del señalamiento criminal que pretende darle carácter punitivo a la ausencia de remisión al referido grado jurisdiccional.

En torno al fundamento que motivó el adelantamiento de las reclamaciones por los distintos extrabajadores, se aprecia que si bien en los certificados de liquidación se registró la mayoría de los factores que integraban el salario del último año trabajado, es notorio que otros no fueron tenidos en cuenta por la entidad portuaria, como por ejemplo, muelles privados, movilización de carga y otros factores que habrían variado la liquidación final de prestaciones sociales, lo que atenta contra su capacidad económica y que motivó iniciar los reclamos laborales que cimentan el llamamiento a juicio.

Frene al señalamiento efectuado como determinadores de la conducta, refiere el togado que no yace en el expediente prueba alguna que demuestre que sus porhijados ejecutaron actos enfilados a dirigir el actuar de quienes disponían de los recursos del Estado en un sentido particular, a lo que agrega que sus representados para la época en que se dieron los hechos presuntamente delictivos se desempeñaban como trabajadores portuarios y nada tenían que ver como el manejo de los recursos públicos que fueron objeto de apropiación; por lo que solicita que éstos sean absueltos de los eventos enrostrados por la Fiscalía, lo que apareja la exoneración de cualquier condena de orden civil en su contra.

**Intervención del doctor HERNÁN SÁNCHEZ BUSTILLO, en representación del procesado VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA.**

Este representante judicial realiza una síntesis de los eventos acogidos por la Fiscalía para sustentar la acusación en contra de su representado, así como de aquellos actos administrativos por medio de los cuales se dispuso la revocatoria de los efectos aparentemente contrarios a derecho, ordenando el reajuste de la mesada pensional de su cliente al valor anterior a aplicarse el acto administrativo 2070 de 20 de mayo de 1998, pasando a efectuar un recuento de los pasos procesales agotados en etapa de investigación, respecto de los cuales argumenta que el señor CASTRO MIRANDA buscó los servicios del también procesado COLLANTE PACHECO para que en su representación acometiera el reclamo de sus derechos, lejos de pretender causar un detrimento en los recursos públicos, ya que las reclamaciones que efectúe un trabajador jamás pueden ser calificadas como ilegales, comoquiera que estas aspiraciones se someten al escrutinio del Juez natural para que él, desde el conocimiento que le asiste, revisara la procedencia de las pretensiones.

Si bien la Fiscalía menciona que estos reclamos por si solos revisten irregularidad por cuanto se ha demostrado que las percepciones dinerarias a las que tenía derecho el extrabajador se apreciaron en debida forma para cuando se produjo su retiro y mediaba paz y salvo de ello, lo cierto es que se sabe de innumerables casos en los que habiéndose establecido la posible justeza de la liquidación realizada por la empresa, se han encontrado serías inconsistencias en la liquidación que han merecido condenas judiciales, por lo que reitera, el hecho de plantear un reclamo por vía judicial no puede ser tenido como generador de ilicitud, menos aún que de este actuar se desprenda la afirmación que su prohijado con los escasos conocimientos que ostenta sobre derecho, le hubiere determinado a Jueces de la República, Magistrados y Directivos de la empresa portuaria para alcanzar la erogación de los dineros que acorde a los planteamientos de la Fiscalía se dieron a partir del actuar de su representado.

El órgano persecutor no ha demostrado fehacientemente que su prohijado haya actuado de forma decidida en los hechos que se le sindican, y no media prueba de confesión dentro de las diligencias de algunos de los autores del delito de la que se desprenda que su cliente acometió conductas inequívocamente dirigidas a variar la voluntad de quienes disponían de los bienes públicos, a lo que agrega que al no contar el señor CASTRO MIRANDA con la calidad de servidor público que demanda la norma para que se le tenga como partícipe de la misma, se está ante la atipicidad de la conducta, tesis que sustenta con algunos extractos jurisprudenciales sobre el particular; siendo un deber de las autoridades judiciales cimentar sus pronunciamientos de los medios probatorios pertinentes y realizar un examen responsable de los fundamentos de hecho y de derecho que soportarán el sentido de su decisión, por lo que en el evento de que se advirtiera que no había lugar a la condena en contra de la entidad demandada, esa había de ser la conclusión jurídica a que se debía arribar.

El señalamiento de la Fiscalía desconoce el fundamento que tuvo el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla para emitir la sentencia de instancia, la cual considera totalmente legal, atendiendo que el ente persecutor fundamenta su llamado a juicio en presuntos conceptos reclamados que no hacen parte de las pretensiones de la demanda, que recuerda, fue la única que interpuso, estimando que la calificación se cimenta en falsos argumentos de cara al reclamo adelantado por su cliente, quien no solicitó el pago de los renglones mencionados por la Fiscalía en la acusación.

Teniendo en cuenta que los eventos endilgados a su cliente son presuntamente constitutivos del reato de peculado por apropiación agravado por la cuantía, y en vista de que el pago de las sumas se dio mediante cheque para el año 1998, anualidad desde la que es necesario contabilizar el término prescriptivo, el que además considera debe ser teniendo en cuenta que su cliente puedo haber hecho parte de las conductas presuntamente ilícitas en calidad de interviniente, lo que acorta el *quantum* de la pena a imponer y, de contera, el lapso prescriptivo de la acción penal, efectuando algunas precisiones en torno al instituto

procedimental, lo que le releva, a su juicio, de solicitar la absolución de su cliente.

**Exposición de los argumentos presentenciales del doctor ORLANDO OSORIO OROZCO como representante defensivo de los procesados ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**.

Inicia su intervención con la referencia de las cusas laborales que previo concepto de sus abogados acometieron sus representados, las cuales fueron agrupadas para su pago en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, lo que les mereció el señalamiento por el reato de peculado por apropiación en calidad de determinadores, sin que para ello se hubiere valorado la intención que éstos pudieren haber tenido para adelantar las causas laborales a las que se ha hecho referencia a lo largo de la actuación, así como de los actos dirigidos a que se efectivizaran los pagos que se reputan irregulares, esto es, aquellos mediante los cuales se les instó a los directivos sindicales y funcionarios judiciales para que se le cristalizara el pago efectivo de las sumas dinerarias reprochadas.

En las diligencias de indagatoria sus clientes manifestaron que se dio curso a las reclamaciones que se les imputaban teniendo como fundamento los conceptos favorables que sobre el particular le brindaron los abogados a los que se les encargaron tales asuntos; acotando, como es el caso del señor FANDIÑO GARCÍA, desconocer algunos de los pagos que presuntamente le beneficiaban, teniendo en cuenta que no conocían a los profesionales del derecho que acometieron esos reclamos ni tenían conocimiento de los pagos derivados de estos mandatos, manifestación que abría ameritado un estudio grafológico a los poderes que fueron presentados en aquellos asuntos. Exposiciones de las que igualmente se desprende que son personas carentes de conocimientos jurídicos que en nada incidieron en las reclamaciones judiciales que se hicieron valer dentro de los trámites laborales, la cual fue de entero resorte de los togados a quienes se les delegaron estos reclamos.

La interpretación de las normas convencionales no puede ser objeto de sindicación penal respecto de los extrabajadores portuarios, ya que eran los abogados los que contaban con el manejo de las mismas y en este sentido se les entregaron los poderes que, como se ha dicho, se hallaban motivados por los mismos conceptos rendidos por los profesionales del derecho; a lo que ha de agregarse que fue manifestado como evento homogéneo por los declarantes dentro de la presente causa penal, exdirectores de la empresa portuaria y gerentes del terminal de Barranquilla, desconocer a quienes el doctor OSORIO representa, de donde se puede afirmar que estos fueron persuadidos por sus representados para acometer las conductas delictivas.

En cuanto a los informes presentados por el GIT, alega que no pueden ser tenidos en cuenta como prueba imparcial a apreciarse en la decisión de fondo, atendiendo que es parte dentro del proceso y la objetividad de las conclusiones por ellos aportadas pueden inclinarse a sus intereses, acotando que a los extrabajadores se les convoca a causa penal teniendo como fundamento el criterio de esa entidad.

De las apreciaciones expuestas concluye que la investigación adolece de prueba que demuestre que sus prohijados actuaron de forma mancomunada con quienes disponían de los recursos de la Nación, pues, por el contrario, quienes accedieron a verter su dicho en audiencia coinciden en afirmar que desconocen a los trabajadores que se juzgan, así como que tampoco se demostró que fueran los éstos quienes idearon el contenido de las demandas judiciales investigadas, resaltando la ausencia de prueba de la que se desprenda indicio de responsabilidad en contra de éstos, ya que lo que se destaca es la ausencia de manejo en asuntos penales del que se pueda predicar un actuar decisivo en cabeza de los procesados, citando apartes de un fallo de este Juzgado en el que se advierte ausencia de compromiso penal en favor de un extrabajador derivado del desconocimiento de la ilicitud que acompasaba el reclamo de algunos renglones de orden laboral y pensional, aspecto que considera el deponente, se equipara al de sus poderdantes.

Finalmente, teniendo en cuenta que las fechas de las resoluciones de pago que concretaron las erogaciones que en esta causa se investigan son del año 1998, solicita se declare la prescripción de la acción penal, al haber transcurrido hasta la fecha de la ejecutoria de la resolución de acusación un lapso superior al establecido en la norma para evacuar la investigación, habida cuenta de que el peculado por apropiación es un delito de ejecución instantánea que, a voces del togado, no extiende sus efectos en el tiempo. En caso de que no se acojan los argumentos exculpatorios y se abra paso una decisión de carácter condenatorio, solicita se estudie la posibilidad de otorgar a sus mandantes los sustitutos penales a que haya lugar.

**Presentación de alegaciones conclusivas de la doctora MIRANDIZ ACUÑA CASTELAR como apoderada defensiva del señor JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA.**

En consideración a los señalamientos que se efectúan en contra de su representado por los delitos de peculado por apropiación agravado y peculado por apropiación agravado en grado de tentativa, anota que debe encontrarse probado el vínculo relacional entre la persona determinada y quien se señala como determinador, aspecto que considera, se halla huérfano de comprobación dentro de la presente investigación, así como la comprobación de que actuó con conocimiento de la presunta ilicitud en el adelantamiento de los reclamos judiciales, ya que su procurado obró de buena fe confiriendo poder para que previo estudio de viabilidad, se promovieran las acciones judiciales a que hubiere lugar para el reconocimiento de sus derechos conculcados, lo que no constituye ningún delito.

De las apreciaciones expuestas se desprende que la ausencia de elementos demostrativos de los que se derive la inequívoca responsabilidad de su prohijado, conduce a la necesidad de garantizar la máxima constitucional del *in dubio pro reo* en favor del señor PÉREZ OJEDA, el cual debe ser declarado en la providencia que ponga fin a la instancia, citando apartes de una sentencia de éste Juzgado en la que se analiza la situación de un

procesado de cara a la posibilidad de emitir decisión de carácter absolutorio.

Señala la expositora, que el hecho de atribuirle a su cliente la comisión de los delitos arriba mencionados, desconoce las calidades personales que le son inherentes, dado que se trata de una persona que cuenta con un nulo manejo del derecho y menos de la capacidad para acometer actos que dieran como resultado la apropiación de los dineros públicos, porque los actos a partir de los que se produjo el pago de las sumas dinerarias reprochadas se consolidan en la providencia judicial proferida por un Juez de la República ante los planteamientos contenidos en la demanda.

**La doctora NATIVIDAD PÉREZ COELLO presenta sus argumentos presentenciales en ejercicio de la defensa del señor MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ.**

Centra inicialmente su intervención en el hecho de que las causas en las que se emitían decisiones contrarias a los intereses de FONCOLPUERTOS, no eran susceptibles de ser sometidas a las ritualidades del grado jurisdiccional de consulta, mencionando que el contexto en el que se ha desenvuelto el tema del desfalco de la empresa portuaria en liquidación ha sido para las arcas de la Nación más oneroso aun, teniendo en cuenta los rubros que se han tenido que destinar a la deficiente defensa de la entidad encargada del pasivo social de la empresa portuaria, que el mismo detrimento propiamente dicho.

Anota que el problema se presenta desde la misma privatización de la empresa portuaria y la fuga de los recursos de ésta, actividad que se dirigió a señalar a los extrabajadores ante la consabida autorización de diversos pagos, frente a los cuales la Fiscalía en un trabajo que considera deficiente, ha perseguido a quienes no contaban con formación para fraguar un trazado criminal del talante que se ha querido hacer ver, sin que se encuentre demostrada la responsabilidad de los extrabajadores, pues de las pruebas arrimadas se aprecia que eran los directivos de la empresa designados por favores políticos quienes permitieron, ante la protuberante carencia de compromiso y conocimientos sobre el tema de éstos mismos, que se produjera el desfalco que da lugar a la investigación.

Su representado no contaba con la disposición de los dineros públicos, ni controlaba el gasto de la entidad portuaria para entonces en liquidación, por lo que no es dable señalarlos de incidir en la emisión de actos administrativos enfilados al reconocimiento de sumas dinerarias, pues demostrado se encuentra que no contaba con la disposición funcional, ni con el conocimiento de las normas necesarios para proceder en el sentido que pretende mostrar la Fiscalía, menos aún se ha evidenciado la existencia de preacuerdo con su abogado o con los funcionarios judiciales del que se desprenda que existía un plan para defraudar a la Nación, puesto que lo que se aprecia es que los exportuarios reclamaron derechos a los cuales tenían derecho, por la indebida estimación realizada por la empresa y, en caso de que se encontrara probado lo contrario, debía proponerse este hecho como excepción dentro del proceso laboral.

Precisa que de la tesis de la Fiscalía no se advierte prueba que revele la existencia de dolo en el actuar de su defendido, tanto en los delitos consumados como en aquellos que quedaron en grado imperfecto, quien es una persona sin manejo de conceptos jurídicos o intención delictiva que se desempeñó como operario en la empresa portuaria; pasando a realizar algunas precisiones en torno de la forma de participación que se le endilga a su procesado, de la incapacidad de que su cliente determinara a alguien para acceder a los beneficios pecuniarios consabidos y de los derechos a los que aspiró en la demanda judicial sometida al escrutinio de Juez de la República, cerrando con la petición de que se emita providencia de carácter absolutorio en favor de su representado.

**Argumentos finales del doctor JHONNY RAFAEL BARRIOS BARRIOS, como representante defensivo del procesado LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ.**

Anota el togado que no comparte la posición del señor Fiscal, quien solicita se profiera sentencia de carácter condenatorio en contra de su cliente, teniendo en cuenta que ese representante tiene la obligación de demostrar probatoriamente la responsabilidad de quienes se convocan a reproche criminal, en consideración a que revisadas las liquidaciones de quienes se hallan vinculados a la presente causa fueron debidamente liquidados al momento del retiro de la empresa portuaria, pagando, inclusive, más de lo debido, detallando algunos aspectos relacionados con las solicitudes acometidas por vía judicial, aspectos que en criterio del deponente carecen de objetividad, ya que acorde a los cánones procedimentales que orientan la investigación integral, la Fiscalía está en la obligación de acopiar a la actuación tanto las pruebas que puedan develar la responsabilidad de los procesados, como aquellas que le resulten favorables para que se consolide su inocencia, garantizándose con ello del debido proceso de quienes se encuentran vinculados.

En el caso específico de su poderdante, acota que no fueron decretadas las declaraciones por él solicitadas y que se dirigían a conocer la versión de Jueces y Secretarios de los Despachos Judiciales en los que se adelantaron las causas laborales que en este asunto se investigan, quienes podían aportar información relacionada con el trato que su cliente pudo haber tenido con los jueces de la ciudad de Barranquilla y demostrar que no conoció ni tuvo trato con ninguno de los funcionarios judiciales comentados, no de la referida ciudad ni de Bogotá.

Frente a los trámites judiciales memora que una vez evacuado el asunto con todas aquellas dificultades que ello representaba, pero siempre en observancia de las prerrogativas propias de procedimiento y enterando del decurso a quienes ejercían la defensa de la entidad en liquidación, alcanzándose la emisión de la sentencia que para entonces no se encontraba relacionadas con las decisiones que siendo desfavorables a la Nación, a los departamentos o a las intendencia o municipios, debían ser sometidas al grado jurisdiccional de consulta, obligación que sólo hasta 1999 fue instituido, lo que impuso remitir las decisiones emitidas con antelación para surtir el aludido trámite a Salas Laborales de diferentes Distritos Judiciales que desconocían el contexto de la liquidación de la empresa portuaria, procediendo a revocar la mayoría de las decisiones que

conocieron, omitiendo la máxima del Juez natural; aspecto que ha sido señalado insustancialmente como evento ilícito atribuible a los procesados, cuando se trata de personas que cuentan con un nulo conocimiento en asuntos laborales.

Los derechos que fueron reclamados por los extrabajadores en las causas laborales contaban con respaldo en las normas convencionales que regían las relaciones con la empresa, sin que la Fiscalía hubiere ahondado en ese tópico, demostrándose de esta forma la validez con la que contaban los reclamos que a la postre fueron atendidos favorablemente por las autoridades judiciales. En cuanto a la presunta determinación ejercida en los directivos de la empresa portuaria, anota el abogado que en las versiones vertidas por los exdirectores de FONCOLPUERTOS, los doctores SALVADOR ATUESTA BLANCO y LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ fueron enfáticos en afirmar que no conocían a los extrabajadores, quienes claramente son personas que carecen de la formación académica para acometer la determinación respecto de quienes cuentan con el maneja de las normas como son los Jueces y las anunciados directivos del fondo liquidador.

Hace referencia al informe de control financiero de legalidad practicado sobre el balance de las extintas empresas portuarias de finales de 1993, de autoría de la Contraloría General de la República, concentrado en el anexo 5, en el que se realiza un examen del estado financiero de la empresa portuaria para el momento en que se cristalizó su liquidación, en el que el doctor MAYRON VERGEL ARMENTA informa que para ese momento el pasivo de la entidad era cero, lo que en criterio del deponente se trata de una falsedad, por cuanto se encuentra demostrado que la empresa aún tenía obligaciones insolutas y, sin embargo, dicha prueba no fue tenida en cuenta para efectos de cementar el sentido de la resolución calificatoria y de allí concluir que las peticiones de los extrabajadores contaban con fundamento y que la empresa ostentaba obligaciones, exponiendo algunos de los hallazgos encontrados en el anunciado estudio que demuestran que no podía predicarse que la empresa se encontraba libre de pasivo.

De las estimaciones realizadas concluye que su protegido debe ser amparado por la presunción de inocencia que constitucionalmente lo protege, solicitando la emisión de sentencia absolutoria en su favor; de otro lado, se debe tener en cuenta el estado de salud que actualmente presenta para efectos que se estimen necesarios.

**Presentación del doctor ÓSCAR ABEL JURADO JURADO como defensor de los procesados ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, ADALBERTO VERDUGO SARMIENTO, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS y LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR.**

El togado en cita hace una referencia relativa al proceso liquidatorio de la entidad portuaria, en la que alude aspectos como la obligación que se delegó al fondo para atender el pasivo social de la acotada entidad. En torno al señalamiento que efectúa la Fiscalía, aduce que su fundamento se encuentra desprovisto de elementos que revelen la ineludible responsabilidad de sus clientes, sin que se encuentre derruida la presunción de inocencia que le compete al ente instructor y, de contera, la presencia

de dolo en cabeza de quienes se convocan a causa penal que afianzaría la solicitud de emisión de sentencia condenatoria en contra de éstos.

Acerca de la obligatoriedad del grado jurisdiccional de consulta, menciona que el Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla en varios de sus pronunciamientos estableció que la falta de remisión de las providencias judiciales para que se surtiera dicho trámite, no acompasaba compromiso de orden penal atribuible a los Jueces de la República ni a quienes acudieron a la jurisdicción Laboral para el amparo de sus derechos presuntamente conculcados, aspecto que lleva a predicar que el señalamiento que pretende hacer valer la Fiscalía en este sentido como generador de ilicitud carece de cualquier elemento valedero que le asigne respaldo.

El fondo liquidador de la empresa portuaria, entre otros propósitos, fue creado para atender el proceso liquidatorio de la empresa portuaria que acompasaba la oferta de los bienes que pasarían a integrar el patrimonio destinado a cubrir el pasivo social de la entidad y el pago de las pensiones de jubilación que estarían a cargo de los recursos del Estado, y su junta directiva se confirmaba por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Protección Social, un representante de los pensionados y un delegado de la Presidencia de la República, trayendo a colación el informe memorado por el profesional del derecho que le antecedió en el uso de la palabra, recordando que en éste se dijo caprichosamente que la empresa no contaba con pasivo para cuando se dio su liquidación, pues, por el contrario, la existencia de las diversas reclamaciones judiciales y administrativas demuestran lo que se hallaba pendiente por atender una serie de asuntos de orden laboral.

Por estas precisiones y las exposiciones realizadas por los colegas de la bancada defensiva, estima se encuentran revelados los elementos que denotan serias dudas respecto de los señalamientos efectuados por la Fiscalía y, consecuente con ello, es menester declarar el *in dubio pro reo* en favor de sus protegidos.

De otro lado, en vista de que para entonces se venía manejando la posición por este Juzgado de que en caso de que se emitiera sentencia condenatoria en contra de algún sindicado, la facultad y competencia para pronunciarse en torno a la concesión de la prisión domiciliaria residía en cabeza del Juez de Ejecución de Penas, el expositor hizo alusión a pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el que habilita al Juez natural para que en sede de sentencia analice los elementos que orientan el otorgamiento de dicho sustituto, situación que pone de presente a fin de que en caso de que se abra paso una sentencia de carácter condenatorio y que se trata de personas que en varios de los casos superan los setenta años de edad, sean beneficiados con el anotado instituto sustitutivo de la detención intramural. Culminando su intervención con la solicitud de emisión de decisión de orden absolutorio en favor de sus prohijados.

**Intervención en audiencia pública del doctor WILLINTON JOSÉ GOENAGA GRANDET, representante defensivo de los encausados ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, JULIO LLANOS SARMIENTO y MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO.**

El profesional del derecho, una vez corroborada su representación respecto de los extrabajadores procesados que se han enlistado con antelación, manifestó que actualmente éstos se encuentran cobijados por la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que ésta no se logró desvirtuar a partir de las pruebas arrimadas a la causa, ya que su desplegar se sintetizó en el otorgamiento de un poder para adelantar un reclamo legítimo, así como la alegada forma de participación que les fue endilgada en calidad de determinadores, de la cual se aparta por completo.

Las reclamaciones a las que arribaron por intermedio del doctor COLLANTES PACHECO se encontraban debidamente fundamentadas, y no es cierto que sus protegidos se hallan beneficiado con dobles pagos, ya que definitivamente tenían una inconformidad con su liquidación y de allí la legitimidad de acometer el reclamo por intermedio de abogado de aquellos renglones indebidamente apreciados por la empresa; la tesis acogida por la Fiscalía para el proferimiento de la resolución de acusación fue en parte el hecho de que las providencias judiciales fueron revocadas varios años después en sede del grado jurisdiccional de consulta teniendo en cuenta que a los procesos laborales no se aportaron los ejemplares de las Convenciones Colectivas de Trabajo en debida forma, situación que en manera alguna representa ilicitud, legalidad o ilegalidad de los derechos en estas causas reclamados y que de ello se desprenda responsabilidad penal atribuible a sus representados, máxime cuando esta obligación jurisdiccional se estableció para 1999, y las sentencias de las que presuntamente se deriva su responsabilidad fueron proferidas en 1994.

Acota que ningún análisis en torno de las liquidaciones de los procesados fue realizada por la Fiscalía, y que se ha sostenido que no contaban con el derecho a efectuar ninguna clase de reclamo a partir de conjeturas infundadas que las hace indignas de ser apreciadas, ausencia probatoria que refiere también se advierte en lo relacionado con la forma de participación en calidad de determinadores, ya que no se aprecia prueba que demuestre de forma fehaciente que sus prohijados ejercieron actos dirigidos a manipular la voluntad de quienes ostentaban la administración de los bienes públicos, acorde a las exigencias jurisprudenciales que se encuentran establecidas para estos eventos, de las cuales hace precisión.

De las precisiones expuestas, considera que se encuentran reveladas las circunstancias de las que se cristaliza la ausencia de responsabilidad de sus apadrinados, ya que en manera alguna realizaron actos de los que se pueda predicar la existencia de dolo en torno de las reclamaciones que por intermedio de abogado adelantaron o que se consoliden las prácticas de las que se pueda afirmar que hubo determinación respecto de funcionarios judiciales o directivos de la empresa portuaria, por lo que habrá de emitirse fallo absolutorio en lo que a sus representados se refiere; culminando su exposición con la solicitud de que no se llegare a abrir paso la providencia reclamada, se considere la avanzada edad de los procesaos y sus

especiales condiciones de salud para efectos de concederles los subrogados o sustitutos a que haya lugar.

**Intervención del doctor EDGARDO JOSÉ HERNÁNDEZ MONTERO, defensor oficioso del procesado JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ y de confianza del señor FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS.**

El togado afirma que al haber sido convocado el señor JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ como persona ausente, la Fiscalía dejó de recaudar algunos medios de prueba que le favorecían y que se hacen necesarios para establecer el compromiso que le atañe en los eventos investigados, notándose una deficiente actividad de parte de la agencia Fiscal en torno a los medios agotados para dar con el paradero del referido ciudadano, de donde se puede apreciar que la presunción de inocencia que le ampara, actualmente no se ha superado, agregando que la acción penal en lo que a éste se refiere, actualmente se halla prescrita, aspectos que lo llevar a afirmar que debe ser absuelto en sentencia de las sindicaciones efectuadas por la Fiscalía.

En lo que respecta a su procurado FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, menciona que las reclamaciones que se efectuaran por éste, se encontraban respaldadas por las normas convencionales vigentes para cuando se generaron los derechos pensionales, tal como lo han planteado los colegas de la defensa en las intervenciones que le antecedieron, teniendo en cuenta que las empresas privadas que hacían uso de los servicios portuarios regularmente pagaban en dólares y esos réditos se les entregaban a los trabajadores a manera de salarios en especie y otros emolumentos que hacían que la liquidación final de prestaciones sociales estuviera compuesta por renglones que en otros ámbitos no se hallaban establecidos y que en parte se han destinado para el cubrimiento del pasivo pensional de la empresa portuaria.

## CONSIDERACIONES

Visto que el presente caso se encuentra para emitir sentencia de primer grado y versa sobre la probable comisión de la conducta punible basilar de peculado por apropiación agravado en las condiciones y variantes detalladas en la acusación conformada por pronunciamiento de primer y segundo grado, de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 83 del CPP y el Acuerdo PSAA13-9987 emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el 16 de septiembre de 2013, mediante el cual se asigna el conocimiento exclusivo para adelantar procesos en temas de FONCOLPUERTOS, este Despacho está habilitado para pronunciarse de fondo sobre el particular.

Previo a analizar los medios demostrativos con miras a establecer la probable existencia de eventos constitutivos de transgresión a la normatividad penal y la posible responsabilidad de los aquí enjuiciados, el Despacho, en observancia y garantía del principio de prioridad que gobierna la emisión de la presente decisión, acometerá el estudio del planteamiento efectuado por la bancada de la defensa que ejercen los abogados HERNÁN SÁNCHEZ BUSTILLO representante defensivo del

procesado VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, el doctor ORLANDO OSORIO OROZCO como apoderado de los procesados ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY y el togado EDGARDO JOSÉ HERNÁNDEZ MONTERO (q.d.e.p.), defensor oficioso del procesado JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ y de confianza del señor FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, en torno a la presunta concurrencia de instituto de la prescripción de la acción penal que afecta el diligenciamiento en lo que a sus defendidos atañe; y también abordará esta temática de oficio respecto de los demás acusados.

Dicho examen será acometido acorde a las reglas 83, 84 y 86 del Código Penal (en adelante CP), que regulan la figura de la prescripción de la acción penal, y establecen que ésta se materializa en un tiempo igual al máximo de la sanción fijada en la Ley regente para la época de los hechos investigados, y que en las conductas punibles que sólo alcancen el grado de tentativa el lapso respectivo comenzará a correr desde la perpetración del último acto. En cuanto a la interrupción del término prescriptivo, el canon 86 represor establece que éste se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación.

Acerca de la firmeza de las providencias, el mandato 187 del CPP indica:

> "*Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente*".

En esta medida, es necesario tener en cuenta que la ejecutoria de la resolución de acusación se dio el **12 de marzo de 2015**, data desde la cual se contabilizará el término prescriptivo de cada uno de los actos sindicados acorde a la tabla que ahora se ilustrará.

Vale comentar que la Fiscalía Delegada al momento de calificar el sumario omitió de forma censurable endilgar a los sindicados ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO y MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ el concurso homogéneo sucesivo con el reato de peculado por apropiación agravado tentado, pese a haberse identificado la no consumación de uno de los eventos analizados en el calificatorio; respecto de los señores RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO y MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ no identificó que algunos de los eventos investigados no habían llegado a consumación, lo que ameritaba su degradación y la correspondiente imputación del concurso con las conductas tentadas, aun cuando obraba prueba de ello; y a los señores ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ tampoco atribuyó la modalidad concursal de las conductas peculadoras agravadas por las que se procede, falla garrafal que desde cualquier perspectiva es de entera responsabilidad de aquellos

funcionarios que atendieron el diligenciamiento en dicha etapa procesal, a quienes se deben posibles trazas de impunidad que eventualmente emerjan por la deficiencia de su labor, toda vez que es claro que las actividades objeto de causa respecto de estos procesados corresponden a una pluralidad de comportamientos supuestamente ilícitos, desplegados al parecer en distintos tiempos, con referencia a diversos conceptos y en cuantías que se alejan ostensiblemente de lo que el ente persecutor estimó como un solo hecho peculador.

Igualmente, se debe señalar que dicho defecto del pliego acusatorio resulta reprochable paralelamente a la parte civil por cuanto la misma pudo haber recurrido mediante los mecanismos impugnatorios principal horizontal y subsidiario vertical dicho acto en el momento procesal oportuno para que se adicionara a la calificación jurídica el concurso homogéneo y sucesivo de comportamientos delictivos; y, en este caso, el/la apoderado(a) de la parte afectada guardó silencio. Por ende, convalidó deleznablemente una imputación incompleta en lo que toca a este particular.

En esta medida, se hace necesario individualizar las circunstancias que dieron lugar a la presente investigación, así como identificar las probables repercusiones temporales y el impacto que tuvieron en los recursos de la Nación, acompasándose a los señalamientos en los que expresamente se estructuró el llamamiento a causa, debiéndose pormenorizar los hechos endilgados a cada uno de los extrabajadores portuarios, sopesando la evidencia que en torno a su ocurrencia milite en el paginario, las repercusiones que cada una de las circunstancias señaladas tuvo en el tiempo, el monto de lo presuntamente apropiado y su equivalencia en salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (en lo venidero SMLMV) para la anualidad en que se produjo el desembolso de las sumas apropiadas, o se intentó su erogación.

En torno de los aspectos a identificar, es necesario tener en cuenta que si bien dentro del material probatorio obra evidencia respecto de la probable extensión en el tiempo de las consecuencias económicas de las conductas investigadas, en razón de la variación que se pudo haber presentado en la mesada pensional de los extrabajadores portuarios, lo cierto es que ni la Fiscalía en el pliego acusatorio, ni la parte civil a lo largo de lo actuado aportaron una estimación precisa y documentada de lo entregado a los procesados con ocasión de los acotados incrementos, ni se realizó la taxativa formulación delictiva por las cuantías entregadas de forma periódica en la mesada pensional de los convocados, de donde se desprende que para efectos de plantar la última data en que se presentaron los eventos escrutados en aquellos casos en los que los resultados presuntamente se extendieron en el tiempo, será la de la fecha en que se tiene conocimiento de haberse efectuado algún tipo de erogación de los recursos estatales, sin que esta pudiere superar el momento de la firmeza de la resolución que declaró el cierre del ciclo probatorio, la cual se dio el **01 de marzo de 2010**, aun cuando se tenga noticia de que posteriormente se emitieron decisiones administrativas que afectaban la existencia de las resoluciones que disponían los pagos decretados judicial o administrativamente; dicha relación corresponde a la siguiente:

## TABLA 2:

| N° | TIPO DE SOLICITUD, CONCEPTOS, APODERADO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS | CUANTÍA Y SMLMV DE LA ÉPOCA DE PAGO | EFECTOS TEMPORALES | DELITO |
|---|---|---|---|---|
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | | |
| **1** | Administrativa – uniformes y calzado, pagada con resolución 832 de 07 de mayo de 1996. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $8´649.937,00 **60.86 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J8LC de 26 de mayo de 1996, resoluciones 2371 de 1996 y 1404 de 08 de mayo de 1998 (documento 47 HVP) *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. *Solicitud que repercutió en la variación de la mesada pensional (documento 28 HVP)*. **RDP 003842 de 03 de febrero de 2017**, se ordena dar cumplimiento a la sentencia de 22 de julio de 2015, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se dispone la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1015** de 07 de mayo, **1404**, **1519**, **1667** y **2070** de 08 de mayo y **369** de 06 de abril de 1998. | $25´889.313,53 **127.01 SMLMV de 1998.** | 08 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Administrativa – descanso compensatorio, Acta de Conciliación falsa 2339 de 23 de diciembre de 1993. Pagada en virtud de la resolución 243 de 19 de marzo de 1998. Dra. **MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ**. *Efectos económicos revocados con resolución 1067 de 01 de agosto de 2008 (documento 115 HVP)* | $7´257.159,00 **35.60 SMLMV de 1998.** | 19 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – retroactivo salarial, sentencia J4LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998 (Documento 43 HVP) *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)* Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO**. | $157´982.645,18 **775.08 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – reliquidación de salarios moratorios de sentencia anterior del J8LC, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $6´700.000,00 **32.87 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – subsidio de transporte, sentencia J8LC de 17 de julio de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Resolución 1519 de 08 de mayo de 1998 *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*, dispone el pago de las sumas declaradas mediante bonos de tesorería TES clase B (documento 48 HVP) Dr. **ALFONSO RAFAEL TAPIAS SALCEDO**. | $47´600.000,00 **233.53 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADOPOR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – horas extras, sentencia J3LC de 07 de mayo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | $49´200.000,00 **241.38 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$303´279.054,71** | | |
| | Judicial – reajuste de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resoluciones 1015 de 07 de mayo de 1998 y 2686 de 10 de agosto de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. *Se dispone reajuste de la mesada pensional* (documento 33 HVP); Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, | $81´600.000,00 **400.34 SMLMV de 1998.** | 10 de agosto de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | mas no se tuvo en cuenta como delito tentado.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 19 de marzo de 2004. | | | |
| | **TOTAL TENTADO** | $**81´600.000,00** | | |
| | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**296´021.895,71** | | |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | | |
| **2** | Judicial – sin dato de la sentencia, resolución 792 de 1994, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $19´205.524,92<br>**194.58 SMLMV de 1994.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – prima sobre prima, sin datos de la sentencia, resolución 1443 de 1996, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $5´379.077,28<br>**37.84 SMLMV de 1996.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – 25% de diferencia salarial, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resoluciones 1283 de 25 de junio de 1996 *(revocada con resolución 0981 de 30 de agosto de 2011)* y 1058 de 07 de mayo de 1998 *(revocada con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*, varía la mesada pensional. Dr. **RICARDO RAFAEL PRETEL PACHECO**. | $12´395.740,00<br>**60.81 SMLMV de 1998.** | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 26 de agosto de 1996, resoluciones 1020 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998 *(revocadas con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $81´600.000,00<br>**400.34 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**118´580.342,20** | | |
| **ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO** | | | | |
| **3** | Judicial – reliquidación de primas semestrales de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**.<br>Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 28 de noviembre de 2008. | $66´100.000,00<br>**324.29 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**66´100.000,00** | | |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | | |
| **4** | Judicial – 35% de recargo nocturno, sentencia J4LC de 22 de noviembre de 1995, resolución 413 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. Acto administrativo **RDP 011101 adiado el 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. | $259´458.013,40<br>**1272.93 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – prima de servicios y de antigüedad, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996, resolución 1405 de 1996. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $38´341.147,40<br>**269.77 SMLMV de 1996.** | 27 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – uniformes y calzado, sentencia J1LC de 13 de febrero de 1996, implicó reajuste pensional; pagada con resolución 1194 de 29 de junio de 1997. Dr. **RAFAEL VILLALBA HODWALKER**. *Resolución revocada mediante acto administrativo **1484 de 04 de noviembre de 2009** (documento 123 HVP)* | $63´803.445,00<br>**370.93 SMLMV de 1997.** | 29 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – nivelación salarial reconocida en el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998, **RDP 011101 del 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $583´840.833,00<br>**791.41 SMLMV de 2017.** | 17 de marzo de 2017. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Judicial – reajuste de la mesada pensional, sentencia J8LC de 02 de febrero de 1995, resolución 114 de 20 de febrero de 1998, dispone la modificación de la mesada pensional del reclamante *(documento 41 HVP)* Resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009** dispone la revocatoria directa de la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´706.073,07 **23.08 SMLMV de 1998.** | 20 de febrero de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – sin datos del concepto reclamado, sentencia J3LC de 26 de noviembre de 1996 *(documento 35 HVP)*, resolución 276 de 20 de marzo de 1998, resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009,** ordena la revocatoria parcial del acto administrativo. Dr. **JHONNY BARRIOS BARRIOS** y Dra. **DELFA AMARANTA CANTILLO**. Este reclamo contempló reajuste pensional. | $26´727.957,84 **131.13 SMLMV de 1998.** | 20 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1990 a 1992 y otras primas, sentencia J8LC de 25 de junio de 1996, resoluciones 1024 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Bogotá con decisión de 17 de septiembre de 2001 *(documento 88 HVP)*. Revocatoria aplicada en virtud de la resolución 1797 de 29 de agosto de 2003 *(documento 96 HVP)*. | $85´300.000,00 **418.49 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**1.062´177.469,71** | | |
| | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**764´378.308,91** | | |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | | | | |
| **5** | Judicial – reliquidación de prima de vacaciones y huelga, sentencia del J8LC fechada el 03 de mayo de 1994 *(documento 14 HVP)*, resolución 932 de 1994. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Reajuste de la mesada pensional con resolución 028 de 18 de enero de 1997, y pago de diferencias salariales e incremento pensional; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente las resoluciones que ordenaron el pago de las sumas impuestas en sentencia. Dr. **FRANKLIN MANZANO HERNÁNDEZ**. | $17´249.242,75 **174.76 SMLMV de 1994.** $3´262.168,00 **18.96 SMLMV de 1997.** **TOTAL 193.72 SMLMV.** | 1994 y 18 de enero de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia del J8LC de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $76´900.000,00 **377.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**97´411.410,75** | | |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | | | | |
| **6** | Judicial ejecutivo – acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, mandamiento de pago del J4LC de 16 de marzo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, ordena la revocatoria. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $41´600.000,00 **204.95 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resoluciones 1029 de 05 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998; mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, ordena la revocatoria de las decisiones administrativas. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 14 de noviembre de 2003. | $98´700.000,00 **484.23 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | $**140´300.000,00** | | |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | | |
| **7** | Judicial – huelga, sentencia J2LC de 19 de marzo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $67´100.000,00 **329.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – salario en especie, acta de conciliación falsa 1561 de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dra. **MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA**. | $10´170.000,00 **49.89 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial ejecutivo – salario en especie y prima sobre prima, **acta de conciliación falsa** 1517 de 22 de diciembre de 1993 *(documento 23 HVP)*, resolución 2502 de 1998. Establece nuevo monto de la mesada pensional *(soporte contable a folio 20 c. o. 5 anexos)* Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $34´942.898,00 **171.43 SMLMV de 1998.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación primas de servicios de 1991 y 1992 (prima sobre prima), sentencia J8LC de 29 de octubre de 1996 *(documento 22 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $50´000.000,00 **245.30 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**162´212.898,00** | | |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | | | | |
| **8** | Judicial – vacaciones y prima de vacaciones de 1980 a 1986, sentencia J5LC de 13 de mayo de 1993, resolución 242 de 15 de abril de 1994 *(documento 91 HVP)* y 1341 de 25 de junio de 1996 reconoce mesadas atrasadas y reajuste pensional *(documento 33 HVP),* **estas resoluciones se revocan en virtud del acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011** *(documento 94 HVP)*. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $687.420,18 **6.96 SMLMV de 1994.** $5´494.862,00 **38.66 SMLMV de 1996. TOTAL 45.62 SMLMV.** | 15 de abril de 1994 y 25 de junio de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 y 1991, sentencia J8LC de 26 de noviembre de 1996, revocada mediante decisión de 07 de mayo de 2004, información contenida en el memorando 659 de 28 de abril de 2011 *(documento 89 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 *(documento 92 HVP)* **revocada con acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011** *(documento 94 HVP)* y resolución 1033 de 07 de mayo de 1998 *(documento 93 HVP)* se dispone reajuste pensional. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 07 de mayo de 2004. | $68´200.000,00 **334.59 SMLMV DE 1998.** | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **NOTA:** Acorde al contenido de la **resolución 1512 de 15 de noviembre de 2011**, emitida por el GIT, en la cual da cumplimiento a las órdenes adoptadas en sede de consulta respecto de las 2 sentencias referidas en apartes que anteceden, se estableció que el monto de lo apropiado más los incrementos aplicados a la mesada pensional asciende a: | Agrupa las dos reclamaciones precedentes. $**165´559.423,28 309.11 SMLMV de 2011.** | 15 de noviembre de 2011. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, y resolución 1300 de 07 de mayo de 1998 | $26´600.000,00 **130.50 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *(documento 93 HVP)*. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | | | |
| | **TOTAL** | $**197´656.285,38** | | |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | | | | |
| **9** | Administrativa – uniformes y calzado, resoluciones 423 de 1996, que reajustaba mesada pensional *(documento 27 HVP)*, revocada con resolución **480 de 31 de marzo de 2009,** y 832 de 07 de mayo de la misma anualidad reliquida prestaciones sociales por el mismo concepto. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $2´876.989,00 **20.24 SMLMV de 1996.** $15´018.158,67 **105.66 SMLMV de 1996.** **TOTAL 126 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – diferencia de sueldo de 25% por ser directivo sindical para los años 1991 y 1992, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $140´300.000,00 **688.33 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – recargo de 21.5% por ser estibador para los años 1989 a 1992, sentencia J8LC de 16 de diciembre de 1996 *(documento 30 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $88´300.000,00 **433.21 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de primas de servicios de los años 1989 a 1992, sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $104´800.000,00 **514.16 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $42´100.000,00 **206.54 SMLMV de 2016.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**393´395.147,67** | | |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | | |
| **10** | Administrativa – uniformes y calzado, resolución 1262 de 20 de junio de 1996, reconoce diferencia de mesadas y salarios moratorios. Dra. **CÁNDIDA TATIS RICARDO**. | $532.764,00 **3.74 SMLMV.** $13´790.422,20 **97.03 SMLMV.** **TOTAL 100.77 SMLMV de 1996.** | 20 de junio de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – huelga y reliquidación prima de antigüedad, sentencia J6LC de 09 de agosto de 1996 *(documento 26 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO** y **ENA LEONOR QUINTANA GUTIÉRREZ**. Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 31 de agosto de 2004. | $77´500.000,00 **380.22 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1991 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 29 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $123´500.000,00 **605.90 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**214´790.422,20** | | |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | Judicial – reliquidación por reconocimiento de horas extra, sentencia J3LC de 05 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada mediante resolución **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | $78´600.000,00 **385.62 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – huelga y prima de vacaciones, sentencia J4LC de 10 de julio de 1996 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $67´800.000,00 **332.63 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – descanso compensatorio según acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO CASTILLEJO DE SALES**. | $48´700.000,00 **238.92 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$195´100.000,00** | | |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1990 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. **Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado**. | $100´300.000,00 **492.08 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| | **TOTAL TENTADO** | **$100´300.000,00** | | |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | | | | |
| **12** | Judicial – reliquidación de prima de servicios segundo semestre de 1991, sentencia J4LC de 17 de julio de 1996 *(documento 22 HVP)*. Pago pactado en el acta de conciliación 025 de 02 de junio de 1998 *(documento 39 HVP)*, Resolución 2226 de 12 de junio de 1998, acto administrativo **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, revoca parcialmente la primera. Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA** y **MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $56´200.000,00 **275.72 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $36´100.000,00 **177.11 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, acto administrativo **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $42´700.000,00 **209.49 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios por reajuste de retroactivo, sentencia J8LC de 02 de diciembre de 1996 *(documento 24 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $75´300.000,00 **369.43 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Pamplona con decisión de 18 de mayo de 2004. | $100´600.000,00 **493.55 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$310´900.000,00** | | |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | | |
| **13** | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 12 de febrero de 1996, resolución 238 de 05 de febrero de 1996. Mesadas atrasadas y salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´545.692,23 **39.01 SMLMV.** $33´318.261,69 **234.42 SMLMV.** **TOTAL 273.43 SMLMV de 1996.** | 05 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Judicial – prima de servicios sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994, resolución 330 de 19 de febrero de 1996 y 830 de 1997 (*folio 83 c. o. anexos 12*), acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $36´268.477,76 **255.18 SMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – nueva reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial, resolución 1909 de 1996. Salarios moratorios Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA**. | $73´991.075,41 **502.60 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – huelga y reliquidación de primas de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994 *(documento 13 HVP)*, resolución 830 de 10 de junio de 1997 (*documento 35 HVP)*, acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Mesadas atrasadas y reajuste de pensión. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´235.171,03 **9.77 SMLMV de 2011.** | 15 de noviembre de 2011. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – retroactivo salarial, sentencia J6LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. | $195´587.022,72 **959.57 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 29 de octubre de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $282´181.058,05 **1384.42 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Administrativa – reliquidación de prima de servicios, resolución 1689 de 11 de noviembre de 1997. Dra. **MIRNA ALEXI GARCIA**. | $23´704.985,00 **137.81 SMLMV de 1997.** | 11 de noviembre de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | **TOTAL** | **$655´831.743,89** | | |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 24 de octubre de 2003. | $120´300.000,00 **590.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| | **TOTAL TENTADO** | **$120´300.000,00** | | |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | | |
| **14** | Judicial – Reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 243 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | $950.701,02 **9.63 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 2414 de 1995. Dr. **ALFONSO GIL DE LA HOZ**. | $81´065.143,00 **681.59 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia del J3LC de 13 de junio de 1995 *(documento 20 HVP)*, resolución 330 de 19 de febrero de 1996. Dispone reajuste de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 29 de julio de 2003. | $45´863.492,95 **322.69 SMMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la fecha de la sentencia se solventa el mandamiento de pago mediante resolución 2399 de 1996. Dr. **EMIL ALBERTO PULGAR LEMUS**. | $7´606.205,00 **53.51 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, sentencia J4LC de 26 de julio de 1995 *(documento 25 HVP)*, resolución 2008 de 30 de septiembre de 1996. Ordena el reajuste de la mesada pensional. Dr. **RAUL ALFONSO EBRATT**. | $6´630.872,00 **46.65 SMLMV de 1996.** | 30 de septiembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2409 de 29 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J2LC de 12 de noviembre de 1997, resolución 2226 de 08 de junio de 1998. Dr. **OSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO**. | $81´456.459,04 **399.63 SMLMV de 1998.** | 08 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1989 a 1992, sentencia J4LC de 12 de junio de 1996 *(documento 62 HVP)*, ordena reajuste de la mesada pensional. Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $103´100.000,00 **505.82 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**326´672.873,01** | | |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | | | | |
| **15** | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $32´500.000,00 **159.44 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J2LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 05 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $37´000.000,00 **181.52 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | **TOTAL** | $**69´500.000,00** | | |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 24 de abril de 1996 *(documento 28 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $53´600.000,00 **262.96 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| | **TOTAL TENTADO** | $**53´600.000,00** | | |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | | |
| **16** | Administrativa – reliquidación de prestaciones sociales, resolución 296 de 01 de diciembre de 1993. Sin datos de apoderado judicial. | $746.377,41 **9.15 SMLMV de 1993.** | 01 de diciembre de 1993. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Administrativa – salario en especie resolución 2339 de 1996 y acta de conciliación 050 de 21 de marzo de 1996. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $32´213.140,82 **226.65 SMLMV de 1996.** | 21 de marzo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de identificación de autoridad judicial o fecha de la sentencia; devino en reajuste pensional y pago de mesadas atrasadas. Dra. **ENA LEONOR QUINTANA**. | $6´726.372,33 | Reclamo que carece de soporte contable dentro de los printers de pago o de ejemplar de la providencia. | ---------- |
| | Judicial – huelga, reliquidación de prestaciones sociales y pago de mesadas atrasadas, sentencia J8LC de 26 de septiembre de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 848 de 10 de junio de 1997 *(documento 19 HVP)*, modifica la mesada pensional. Dra. **NINA DEL CARMEN CASTRO DE LEÓN**. | $9´261.397,80 **53.84 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial ejecutivo – cena y descanso, acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC mandamiento de pago de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ**. | $250´800.000,00 **1230.46 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la autoridad judicial, mandamiento de pago de 21 de octubre de 1996, conciliado en acta 020 de 06 de mayo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´900.000,00 **24.04 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1993, sentencia J8LC de 15 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 06 de febrero de 2004. | $87´600.000,00 **244.69 SMLMV de 2004.** | 06 de febrero de 2004. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – huelga y suspensiones, sentencia J4LC de 19 de marzo de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $63´500.000,00 **311.54 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**455´747.288,36** | | |
| | **MONTO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN.** | $**451´337.288,36** | | |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | | |
| **17** | Administrativa – solicitud de reconocimiento pensional sin que contara con los requisitos para ello, resolución 520 de 17 de abril de 1998, con la que también se le reconocieron mesadas atrasadas, revocada de forma directa mediante resolución 1050 de 18 de agosto de 2010 *(documento 2 HVP)*. Dr. **MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA**. | $248´968.911,00 **1221.47 SMLMV de 1998.** | 17 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Administrativa – reliquidación general de prestaciones sociales, resolución 173 de 31 de enero de 1995 *(folio 165 C. O. 4 de instrucción)* sin variación de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $10´255.483,39 **86.22 SMLMV de 1995.** | 31 de enero de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial ni fecha de la providencia judicial, pagada con resolución 262 de 08 de febrero de 1996. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $1´234.066,17 **8.68 SMLMV de 1996.** | 08 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Administrativa – uniformes y calzado, pagado con resolución 2339 de 1996. Dra. **MIRYAM CHARRYS BLANCO**. | $22´682.378,79 **159.59 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 06 de enero de 1996, resolución 677 de 21 de mayo de 1997. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $55´542.636,49 **322.91 SMLMV de 1997.** | 21 de mayo de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 29 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $34´300.000,00 **168.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | **TOTAL** | $**372´983.475,84** | | |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | | |
| **18** | Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de la autoridad judicial o de la fecha de la sentencia, se le reconoce el pago de suma dineraria con resolución 792 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | $165.586,20 **1.67 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – solicitud de reconocimiento pensional, sin datos de fecha de la sentencia, resolución 255 de 1996 reconoce mesadas atrasadas; resolución 1990 de 30 de septiembre de 1996 concede pensión y diferencia de mesadas. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $39´105.745,92 **275.15 SMLMV.** $15´635.980,00 **110.01 SMLMV.** **TOTAL 385.16 SMLMV de 1996.** | 30 de septiembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – reliquidación de prima de antigüedad, **acta de conciliación falsa** 1630 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC de 29 de noviembre de 1996. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $13´098.885,00 **92.16 SMLMV de 1996.** | 29 de noviembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial ejecutivo – movilización de nocivos, **acta de conciliación falsa** 1629 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 28 de noviembre de 1996, pagada con resolución 1092 de 29 de julio de 1997. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. No | $13´128.541,37 **76.32 SMLMV de 1997.** | 29 de julio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | obra en el expediente físico evidencia del pago. | | | |
| | Judicial ejecutivo – diferencias de mesada pensional, mandamiento de pago J2LC de 27 de noviembre de 1996, conciliado en acta 006 de 05 de junio de 1998 resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **RUTH DEL CARMEN DUQUE DE TORRENEGRA**. | $27´509.892,15 **134.96 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | **TOTAL** | $**108´644.630,64** | | |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 09 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $68´200.000,00 **334.59 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| | **TOTAL TENTADO** | $**68´200.000,00** | | |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | | |
| **19** | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia del J8LC de 05 de julio de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 1136 de 23 de septiembre de 1994. Dr. **RICARDO PRETEL PACHECO** y **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $25´817.393,30 **261.57 SMLMV de 1994.** | 23 de septiembre de 1994. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de fecha de la providencia judicial, resolución 352 de 1995. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $17´914.072,17 **150.62 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Administrativa – uniformes y calzado, resolución 2133 de 09 de octubre y 2668 de 29 de diciembre de 1995. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. Actos administrativos dejados sin efectos de conformidad con la orden adoptada en resolución 1039 del 30 de septiembre de 2007 *(acorde a la información contenida en el documento 86 HVP)* | $2´558.463,49 **21.51 SMLMV de 1995.** | 29 de diciembre de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – reclasificación, mandamiento de pago J8LC, resolución 2344 de 1996 *(documento 44 HVP aporta el dato de la decisión judicial)*. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $973.884,60 **6.85 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales por indebida apreciación, sentencia J5LC de 14 de julio de 1994 *(documento 22 HVP)*, mandamiento de pago J5LC de 17 de mayo de 1995. Dra. **LILIA DEL CARMEN AREVALO**. Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 18 de diciembre de 2002. | $3´543.524,37 **29.79 SMLMV de 1995.** | 17 de mayo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 33 HVP)* condena a reajuste pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $77´200.000,00 **378.75 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**128´007.337,93** | | |
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA** | | | | |
| **20** | Judicial – huelga, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 30 de abril de 2004. | $60´400.000,00 **296.33 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**60´400.000,00** | | |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **21** | Judicial – reliquidación de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 05 de diciembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste pensional, pagada con resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 23 de abril de 2004. | $65´200.000,00 **319.88 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$65´200.000,00** | | |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | | | | |
| **22** | Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $57´200.000,00 **280.63 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $52´700.000,00 **258.55 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – prima de servicios de 1990 a 1992 "prima sobre prima", sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996 *(documento 20 HVP)* dispone el reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $77´900.000,00 **382.18 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial ejecutivo – reclamo por días descontados de la liquidación, mandamiento de pago J4LC de 24 de febrero de 1998, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **DUBIS ESTHER RAMOS**. | $112´436.135,34 **551.62 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$300´236.135,34** | | |
| | Judicial – despido injusto, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996 *(documento 16 HVP)*. Dr. **LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $58´242.659,34 **409.79 SMLMV de 1996.** | 27 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| | **TOTAL TENTADO** | **$58´242.659,34** | | |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | | | | |
| **23** | Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J3LC de 23 de noviembre de 1993, resolución 629 de 25 de marzo de 1995 y 316 de 1996 por salarios moratorios y agencias en derecho. Dra. **IVONNE URICOHECHEA VENGOHECHEA**. | $13´054.331,52 **109.76 SMLMV.** $3´256.980,67 **27.38 SMLMV.** **TOTAL 137.14 SMLMV de 1995.** | 25 de marzo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| | Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 02 de febrero de 1996, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **ORLANDO SANTOS CORZO**. | $534´032.153,27 **2620.3 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 26 de marzo de 2004. | $45´300.000,00 **222.24 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$595´643.465,46** | | |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA** | | | | |
| **24** | Judicial – prima sobre prima, sentencia J4LC de 07 de febrero de 1996 *(documento 13 HVP)* dispone reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $98´600.000,00 **483.74 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | **$98´600.000,00** | | |
| **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **25** | Judicial – diferencia de vacaciones de los años 1992 y 1993, sentencia J8LC de 19 de diciembre de 1996 *(documento 22 HVP)* ordena reajuste pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 *(documento 30 HVP)*. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $97´000.000,00 **475.89 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | **TOTAL** | $**97´000.000,00** | | |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** | | | | |
| **26** | Monto asociado al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, a la cual acudió en representación de los extrabajadores que se convocan a juicio en la resolución de acusación que se estudia. Acuerdo pagado mediante resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. | $3.057´400.000,00 **6068.36 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | Monto relacionado con aquellos rubros que en virtud de la revocatoria de algunos actos administrativos quedaron sin ser cancelados, igualmente asociados con el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998. | $496´900.000,00 **2437.86 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |

Teniendo en cuenta las conductas que conforman la probable responsabilidad de los convocados a juicio, y de regreso sobre la relevancia de las fechas y montos que cada reclamo comportó, huelga necesario recordar que la imputación de la Fiscalía remite a la presunta comisión de conductas basilares constitutivas del delito de peculado por apropiación agravado, habida consideración de que en la identificación de los hechos se advierte superado de manera global el monto dinerario requerido normativamente en cada uno de los casos revisados para que se consolide el amplificador de la conducta; no empece lo anterior, yacen dos aspectos de interés respecto de la identificación de los comportamientos delictivos y su vigencia en el tiempo frente a los derroteros procedimentales que implantan su pervivencia, los cuales deben ser tenidos en cuenta.

El primero remite a la pluralidad de eventos que, en algunos de los casos, conforman el actuar de los procesados, identificándose en las circunstancias escrutadas diversos e independientes actos e igualmente variadas consecuencias de los mismos, sin que respecto de los procesados ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ se note que en la imputación les hubiere sido señalado concurso de conductas punitivas independientes; así como de aquellos a quienes habiéndose identificado hechos tentados se les hubiere imputado el grado concursal de eventos peculadores.

El segundo aspecto a resaltar remite a la circunstancia de que si bien el monto total de lo apropiado por cada uno de los convocados supera con creces el lindero superior de los 200 SMLMV para predicarse que el agravante de la conducta asiste, como se dijo en precedencia, al examinarse las cuantías de forma independiente respecto de cada uno de los comportamientos a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se aprecia que en algunos de los casos éstas no superan el máximo contemplado para que se consolide el agravante de la conducta calificada por la instructora como peculado por apropiación agravado, al punto que su encuadramiento típico pudiere llegar a degradarse al delito simple cuando el importe de lo apropiado no supere los $500.000 o los 200 SMLMV, según la normativa a aplicar, y sea superior a los 50 SMLMV e, inclusive, llegare a tratarse de una conducta atenuada si estuviere por

debajo del último extremo mencionado, misma oscilación que puede llegar a variar en el caso de las conductas tentadas y en aquellas que se hubieren consumado en vigencia de codificaciones sustantivas pretéritas, como es el caso de los eventos ejecutados mientras regía primigeniamente el Decreto Ley 100 de 1980, en el que se estipulaba una pena para el delito base que oscilaba entre 2 y 10 años y para el agravado, en el que se incurría cuando la cuantía de lo apropiado superaba los $500.000, variaban los linderos entre los 4 y 15 años, sin que se tuviere consagrada una sanción específica para el delito atenuado como en la norma actual.

En este orden de ideas, de cara a la primera de las situaciones advertidas, de la cual desde una mirada inicial se ameritaría la variación de la calificación jurídica provisional acorde al contenido del canon 404 procedimental, al haberse considerado de manera errada la unidad de acto en aquella diversidad de hechos que conforman el acontecer fáctico respecto de los procesados a que se ha hecho referencia, se estima pertinente citar la postura que sobre el particular ha implantado la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá, plasmada dentro del asunto 11001-3104-039-2010-00575-03 mediante sentencia dictada en alzada el 31 de agosto de 2016, siendo ponente la H. M. Dra. Esperanza Najar Moreno, con fundamento en nutrido acervo jurisprudencial, y como motivación de la nulidad que decretó respecto de la mutación del cargo pábulo de juicio, se percibe que no es jurídicamente posible ni tampoco admisible utilizar el procedimiento previsto por el Legislador en el aludido precepto 404 litúrgico para introducir al encuadramiento normativo provisional el concurso de conductas delictivas, ya que con ello se viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. De hecho, dicha Colegiatura dijo:

> *"Se evidencia así, que en tanto la imputación se formuló por única conducta – para ambos procesados-, no obstante se acudió a la variación de la calificación jurídica, el juzgamiento y fallo no podía incluir otro ilícito que implica el concurso así sea homogéneo y sucesivo, con lo cual se afectó el principio de congruencia, que, en materia procesal penal, señala la jurisprudencia constitucional, "adquiere mayor relevancia debido a su íntima conexión en el ejercicio del derecho de defensa"*.

Por lo anterior, en atención a los hechos bajo examen, así como de las acotaciones ya esgrimidas por el superior funcional, este Estrado se acoge a lo resuelto por la Colegiatura frente a la posibilidad de variar la calificación jurídica provisional, que acompasaría afectar el trámite con nulidad parcial desde la intervención del Delegado Fiscal en audiencia pública para rehacer la actuación acorde al precepto procedimental 404, y, por tanto, se efectuará el examen dentro de esta providencia en lo que respecta a los procesados sobre los punibles de peculado por apropiación simple, agravado, atenuado y peculado por apropiación tentado en las mismas variables que el delito consumado, de acuerdo con los baremos establecidos en el correspondiente pliego de cargos originario, los cuales se ajustan a la realidad fáctica cuestionada y puesta de presente que configura el llamamiento a juicio.

En torno al segundo de los aspectos a estudiar, relativo a las consecuencias temporales y económicas de los eventos identificados en la resolución acusatoria y plenamente detallados en el cuadro que antecede, del que se evidencian las repercusiones de cada uno de éstos teniendo en cuenta la fecha en la que se produjo el pago, acorde a los datos obrantes en los

printers de pago y demás documentos aportados en etapa de investigación y causa, y la data hasta la cual se extendieron sus efectos, incluyendo aquellos eventos en los que el impacto pecuniario perduró en virtud del pago periódico en la mesada pensional; estimaciones a partir de las que se podrá apreciar de forma objetiva la vigencia de la acción penal en torno de cada uno de ellos.

Asimismo, en consideración a los diversos instantes en los que se produjeron las reclamaciones administrativas y judiciales, se considera indefectible precisar la normativa que gobernará el estudio de vigencia de la acción penal, con arreglo al principio de legalidad descrito en el canon 6° de la Ley 599 del 2000, exploración que se efectuará identificando los actos más distantes en el tiempo.

De este modo, el mandato original 133 del Decreto Ley 100 de 1980, variado por la Ley 43 de 1982, sin la modificación del precepto 19 de la Ley 190 de 1995, establece la sanción a aplicar en los hechos investigados en los que se desplegaron y cesaron sus efectos jurídicos y económicos antes de la entrada en vigencia de la Ley 190 de 1995, esto es, previo al día 6 de junio de 1995, implantando los límites punitivos que arriba se mencionaron, 10 años para el delito simple y 15 para la conducta agravada, particularidad que cobija 10 de los eventos en el caso bajo examen que fueron relacionados por la Fiscalía en el pliego de cargos, a saber:

**TABLA 3:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | |
| Judicial – sin dato de la sentencia, resolución 792 de 1994, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $19´205.524,92 **194.58 SMLMV de 1994.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial – Reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 243 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | $950.701,02 **9.63 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 2414 de 1995. Dr. **ALFONSO GIL DE LA HOZ**. | $81´065.143,00 **681.59 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Administrativa – reliquidación de prestaciones sociales, resolución 296 de 01 de diciembre de 1993. Sin datos de apoderado judicial. | $746.377,41 **9.15 SMLMV de 1993.** | 01 de diciembre de 1993. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Administrativa – reliquidación general de prestaciones sociales, resolución 173 de 31 de enero de 1995 *(folio 165 C. O. 4 de instrucción)* sin variación de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $10´255.483,39 **86.22 SMLMV de 1995.** | 31 de enero de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de la autoridad judicial o de la fecha de la sentencia, se le reconoce el pago de suma dineraria con resolución | $165.586,20 **1.67 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 792 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | | | |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia del J8LC de 05 de julio de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 1136 de 23 de septiembre de 1994. Dr. **RICARDO PRETEL PACHECO** y **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $25´817.393,30 **261.57 SMLMV de 1994.** | 23 de septiembre de 1994. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de fecha de la providencia judicial, resolución 352 de 1995. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $17´914.072,17 **150.62 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales por indebida apreciación, sentencia J5LC de 14 de julio de 1994 *(documento 22 HVP)*, mandamiento de pago J5LC de 17 de mayo de 1995. Dra. **LILIA DEL CARMEN AREVALO**. Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 18 de diciembre de 2002. | $3´543.524,37 **29.79 SMLMV de 1995.** | 17 de mayo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J3LC de 23 de noviembre de 1993, resolución 629 de 25 de marzo de 1995 y 316 de 1996 por salarios moratorios y agencias en derecho. Dra. **IVONNE URICOHECHEA VENGOHECHEA**. | $13´054.331,52 **109.76 SMLMV.** $3´256.980,67 **27.38 SMLMV.** **TOTAL 137.14 SMLMV de 1995.** | 25 de marzo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

El lindero superior contemplado como pena privativa de la libertad para el reato de peculado por apropiación agravado, que reviste la mayor gravedad en cuanto al impacto pecuniario y vigencia en el tiempo, como se dijo en precedencia, es de 15 años, lo que ubica dentro de esta categoría de hechos los endilgados a los ciudadanos **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** y **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** a quienes se señalan 2 eventos, uno agravado respecto de cada uno de los mencionados, únicos que superaron lo apropiado en cuantía de $500.000, luego serán éstos los que orienten el estudio respecto de la vigencia de la acción, ya que al ser los que mayor vigor revisten, en caso de advertirse la operancia del instituto procedimental en lo que a estos atañe, se entenderán afectadas las conductas de inferior naturaleza.

Para acometer el aludido estudio debe tenerse en cuenta que la resolución de acusación cobró ejecutoria el **12 de marzo de 2015**, data desde la cual se contabilizarán 15 años hacía atrás; límite superior que de conformidad con el precepto 80 del compendio procedimental de 1980, al igual que la codificación actual, contemplaba que dicho lapso se acompasa al máximo de la pena establecida para el respectivo reato, sin que fuera inferior a 5 años o superior a 20, el cual en etapa de juicio se reduce a la mitad acorde al contenido del precepto 84 de la misma obra, cómputo que ubica el interregno prescriptivo en el **11 de marzo 2000**, calenda que claramente no trasciende del 23 de septiembre de 1994, cuando se consumó el hecho relacionado con el señor RUA CARRILLO, así como el endilgado al ciudadano FANDIÑO GARCÍA, del que si bien no se halla identificada la fecha exacta en que se produjo el último evento consumativo, debe ser analizado, en aplicación del principio de favorabilidad, como si se hubiese

extendido hasta la última data en la que se hallaba en vigencia la norma procedimental, el 05 de junio de 1995, teniendo en cuenta que frente a la codificación posterior, la Ley 43 de 1982 comporta un lapso inferior para la ocurrencia de la prescripción, eventos en los que se consolida el fenómeno prescriptivo, y así se declarará en el acápite pertinente de este pronunciamiento, mucho más cuando no se observa que tales conductas hubieren mantenido efectos dilatados en el tiempo.

En torno de los demás eventos que agotaron su consumación en vigencia de la comentada normatividad, constitutivos del delito de peculado por apropiación simple, al no excederse la cuantía de $500.000, que le fueran endilgadas a los señores **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** y **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**, y respecto de los que se implanta el lapso máximo de vigencia de la acción penal en 10 años, se aprecia que al disminuirse el término al **11 de marzo de 2005**, es evidente la concurrencia de circunstancia objetiva que consolida la caducidad de la acción penal, la cual, al igual que la examinada en apartes precedentes, será declarada en la parte resolutiva de esta decisión, concretándose que la totalidad de los hechos acaecidos en vigencia del canon original 133 del Decreto Ley 100 de 1980, variado por la Ley 43 de 1982, sin la modificación del precepto 19 de la Ley 190 de 1995, fenecieron en etapa de investigación, máxime cuando como en el evento anterior no se detalla que las repercusiones económica se hubieren extendido temporalmente al futuro.

De otro lado, se destacan aquellos actos perpetrados en vigencia del artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980, modificado por el mandato 19 de la Ley 190 de 1995, que enmarca su campo de aplicación temporal entre el 06 de junio de 1995 y el 23 de julio de 2001; precepto que a su tenor consagra:

> ***"ARTÍCULO 19****. El artículo 133 del Código Penal quedará así:*
>
> ***ARTÍCULO 133****. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se la haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.*
>
> *Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes.*
>
> *Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2)".*

Los actos que se acometieron en regencia del comentado canon, algunos de ellos respecto de los cuales se extendieron sus efectos en el tiempo con posterioridad al 23 de julio de 2001, en virtud de la variación de la mesada pensional, acorde a las pruebas obrantes en el paginario, así como aquellos que se consumaron de forma inmediata al haber sido objeto de un único

desembolso, serán analizados acorde a la normativa identificada en precedencia, la cual establece sanción privativa de la libertad de entre 6 y 15 años de prisión para el delito básico, límites que se atenúan en caso de que la suma apropiada no supere los 50 SMLMV, en proporción de la ½ a las ¾ partes de la sanción, plantándola entre el mínimo de 3 años y el máximo de 11 años y 3 meses, incrementándose hasta en la ½ en el caso de superar los 200 SMLMV, escenario en el que aplica el agravante de la conducta al extremo superior de la pena, oscilando entre 6 y 22.5 años; límite que acompasándose al tenor de los cánones que gobiernan el instituto de la prescripción no podrá ser superior a 20 años en el caso del reato agravado.

Dicha preceptiva y extremos punitivos fueron conservados en el texto primigenio del mandato 397 de la Ley 599 de 2000, actual CP, la cual, como se verá, aviene más favorable que la precedente por el límite incorporado al monto de la sanción pecuniaria.

De otro lado, en lo que atañe a las conductas tentadas, acorde al artículo 22 de la norma entonces regente y 27 actual, la pena fluctuante para éstas será de no menos de la ½ del mínimo ni más de las ¾ partes del máximo establecido para el delito consumado, lo que la implanta en el interregno de la conducta simple tentada entre 3 años y el máximo de 11 años y 3 meses; para la conducta agravada tentada en 3 años y el máximo de 16 años, 10 meses y 15 días, y para la atenuada tentada desde 1 año y 6 meses, y el máximo de 8 años, 5 meses y 7 días.

Del mismo modo, teniendo en cuenta que para efectos de escrutar la vigencia de la acción penal de los actos cometidos en vigor de la tipificación penal consagrada en el citado canon 397 sustantivo de la Ley 599 del 2000, se deben tener en cuenta los mismos linderos acabados de mencionar, se efectuará el estudio en conjunto con el fin de descartar integradamente la prescripción de la acción penal en los eventos que se encuentran pendientes por analizar respecto de este tópico, teniendo en cuenta que si bien la ejecución de las conductas inició en vigencia del artículo básico 133 del Decreto Ley 100 de 1980, con la modificación introducida por el mandato 19 de la Ley 190 de 1995, sus consecuencias jurídico económicas se extendieron hasta la regencia de la Ley 599 del 2000, canon que reprodujo en su integridad el contenido del artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980, modificado por el mandato 19 de la Ley 190 de 1995, con una variación que hace a la reciente más benéfica que la anterior, al contemplar el tope de la sanción principal de multa en 50 SMLMV, límite que no se hallaba establecido en la codificación anterior.

Así las cosas, teniendo como punto de referencia la data de ejecutoria de la resolución de acusación, evento que se memora, tuvo ocurrencia el **12 de marzo de 2015**, y contabilizándose el lapso de 20 años hacía el pasado como máximo en que se consolida el fenómeno de la prescripción de la acción penal para el peculado por apropiación agravado, el cálculo se planta en el **12 de marzo de 1995**, y se instituye como el momento histórico que en retrospectiva permite identificar los eventos afectados por el aludido estatuto procedimental, siempre que sus efectos no se hubieren dilatado en el tiempo.

No empece, revisadas las épocas en que se materializaron las reclamaciones constitutivas de esta conducta, se advierte que la más

alejada en el tiempo es la sindicada al señor MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO acaecida el 05 de febrero de 1996, de donde se concluye que la totalidad de las conductas de peculado por apropiación agravado que tuvieron ocurrencia en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980 con la variación entronizada por la Ley 190 de 1995, arriba identificadas, y aquellas que se consumaron en vigencia de la Ley 599 del 2000, no se vieron afectadas por la prescripción y, en consecuencia, hacen parte de los eventos por los cuales más adelante se realizará el estudio correspondiente de cara a la probable responsabilidad penal de los convocados.

En cuanto a la vigencia de la acción penal respecto de las conductas agravadas, como quedó arriba identificado, en etapa de juicio el período prescriptivo se reduce a la mitad del intervalo inicialmente sopesado, por lo que la oportunidad para adelantar la etapa de causa será de 10 años contados a futuro desde la data de ejecutoria de la resolución de acusación, lapso que se ubica el **12 de marzo de 2025**, de donde se concluye que el instituto tampoco ha operado en esta fase procesal respecto de ninguno de los eventos que acorde a las precisiones efectuadas por el Despacho en torno a la cuantía de la apropiación se consolida la conducta de peculado por apropiación agravado.

Seguidamente se analizarán los eventos transgresores de las descripciones típicas de peculado por apropiación simple, atenuado, simple tentado, agravado tentado y atenuado tentado perpetrados en vigencia de las acotadas normas; escrutinio que se guiará por el lapso límite hacia el pasado de cada reato, teniendo en cuenta las prerrogativas procedimentales, correspondiendo la del delito simple a 15 años desde la ejecutoria del calificatorio, que se ubica en el **12 de marzo de 2000**; la del reato agravado tentado en el máximo de 16 años, 10 meses y 15 días, cálculo que se ubica en el **27 de abril de 1998**; la de los reatos atenuado y simple tentado en 11 años y 3 meses que se planta en el **12 de diciembre de 2003**; y la del delito atenuado tentado en el máximo de 8 años, 5 meses y 7 días, extremo que lo ubica en el **05 octubre de 2006**, apreciándose que ante la advertida deficiencia en la calificación que se dio frente a los hechos materia de investigación, en lo que a los procesados arriba identificados se refiere, se afectaron los que se pasan a enlistar:

**TABLA 4:**

| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
|---|---|---|---|
| Administrativa – uniformes y calzado, pagada con resolución 832 de 07 de mayo de 1996. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $8´649.937,00 **60.86 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J8LC de 26 de mayo de 1996, resoluciones 2371 de 1996 y 1404 de 08 de mayo de 1998 *(documento 47 HVP) (revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. *Solicitud que repercutió en la variación de la mesada pensional (documento 28 HVP)*. **RDP 003842 de 03 de febrero de 2017**, se ordena dar cumplimiento a la sentencia de 22 de julio de 2015, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por medio | $25´889.313,53 **127.01 SMLMV de 1998.** | 08 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| de la cual se dispone la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1015** de 07 de mayo, **1404**, **1519**, **1667** y **2070** de 08 de mayo y **369** de 06 de abril de 1998. | | | |
| Administrativa – descanso compensatorio, Acta de Conciliación falsa 2339 de 23 de diciembre de 1993. Pagada en virtud de la resolución 243 de 19 de marzo de 1998. Dra. **MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ**. *Efectos económicos revocados con resolución 1067 de 01 de agosto de 2008 (documento 115 HVP), no obra evidencia del monto de la suma pagada de más en la mesada pensional.* | $7´257.159,00 **35.60 SMLMV de 1998.** | 19 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Judicial ejecutivo – reliquidación de salarios moratorios de sentencia anterior del J8LC, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $6´700.000,00 **32.87 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | |
| Judicial – prima sobre prima**,** sin datos de la sentencia, resolución 1443 de 1996, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $5´379.077,28 **37.84 SMLMV de 1996.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Judicial – 25% de diferencia salarial, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resoluciones 1283 de 25 de junio de 1996 *(revocada con resolución 0981 de 30 de agosto de 2011)* y 1058 de 07 de mayo de 1998 *(revocada con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*, varía la mesada pensional. Dr. **RICARDO RAFAEL PRETEL PACHECO**. | $12´395.740,00 **60.81 SMLMV de 1998.** | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – salario en especie y prima sobre prima, **acta de conciliación falsa** 1517 de 22 de diciembre de 1993 *(documento 23 HVP)*, resolución 2502 de 1998. Establece nuevo monto de la mesada pensional *(soporte contable a folio 20 c. o. 5 anexos)* Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $34´942.898,00 **171.43 SMLMV de 1998.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial – reajuste de la mesada pensional, sentencia J8LC de 02 de febrero de 1995, resolución 114 de 20 de febrero de 1998, dispone la modificación de la mesada pensional del reclamante *(documento 41 HVP)* Resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009** dispone la revocatoria directa de la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´706.073,07 **23.08 SMLMV de 1998.** | 20 de febrero de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Judicial – sin datos del concepto reclamado, sentencia J3LC de 26 de noviembre de 1996 *(documento 35 HVP)*, resolución 276 de 20 de marzo de 1998, resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009,** ordena la revocatoria parcial del acto administrativo. Dr. **JHONNY BARRIOS BARRIOS** y Dra. **DELFA AMARANTA CANTILLO**. Este reclamo contempló reajuste pensional. | $26´727.957,84 **131.13 SMLMV de 1998.** | 20 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de vacaciones y huelga, sentencia del J8LC fechada el 03 de mayo de 1994 *(documento 14 HVP)*, resolución 932 de 1994. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Reajuste de la mesada pensional con resolución | $17´249.242,75 **174.76 SMLMV de 1994.** $3´262.168,00 **18.96 SMLMV de 1997.** | 1994 y 18 de enero de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 028 de 18 de enero de 1997, y pago de diferencias salariales e incremento pensional; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente las resoluciones que ordenaron el pago de las sumas impuestas en sentencia. Dr. **FRANKLIN MANZANO HERNÁNDEZ**. | **TOTAL 193.72 SMLMV.** | | |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – salario en especie, acta de conciliación falsa 1561 de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dra. **MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA**. | $10´170.000,00 **49.89 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Judicial ejecutivo – salario en especie y prima sobre prima, **acta de conciliación falsa** 1517 de 22 de diciembre de 1993 *(documento 23 HVP)*, resolución 2502 de 1998. Establece nuevo monto de la mesada pensional *(soporte contable a folio 20 c. o. 5 anexos)* Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $34´942.898,00 **171.43 SMLMV de 1998.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | | | |
| Judicial – prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, y resolución 1300 de 07 de mayo de 1998 *(documento 93 HVP)*. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $26´600.000,00 **130.50 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resoluciones 423 de 1996, que reajustaba mesada pensional *(documento 27 HVP)*, revocada con resolución **480 de 31 de marzo de 2009,** y 832 de 07 de mayo de la misma anualidad reliquida prestaciones sociales por el mismo concepto. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $2´876.989,00 **20.24 SMLMV de 1996.** $15´018.158,67 **105.66 SMLMV de 1996.** **TOTAL 126 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resolución 1262 de 20 de junio de 1996, reconoce diferencia de mesadas y salarios moratorios. Dra. **CÁNDIDA TATIS RICARDO**. | $532.764,00 **3.74 SMLMV.** $13´790.422,20 **97.03 SMLMV.** **TOTAL 100.77 SMLMV de 1996.** | 20 de junio de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | | | |
| Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $36´100.000,00 **177.11 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial – huelga y reliquidación de primas de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994 *(documento 13 HVP)*, resolución 830 de 10 de junio de 1997 (*documento 35 HVP)*, acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Mesadas atrasadas y reajuste de pensión. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´235.171,03 **30.43 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Administrativa – reliquidación de prima de servicios, resolución 1689 de 11 de noviembre de 1997. Dra. **MIRNA ALEXI GARCIA**. | $23´704.985,00 **137.81 SMLMV de 1997.** | 11 de noviembre de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la fecha de la sentencia se solventa el mandamiento de pago mediante resolución 2399 de 1996. Dr. **EMIL ALBERTO PULGAR LEMUS**. | $7´606.205,00 **53.51 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, sentencia J4LC de 26 de julio de 1995 *(documento 25 HVP)*, resolución 2008 de 30 de septiembre de 1996. Ordena el reajuste de la mesada pensional. Dr. **RAUL ALFONSO EBRATT**. | $6´630.872,00 **46.65 SMLMV de 1996.** | 30 de septiembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $32´500.000,00 **159.44 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J2LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 05 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $37´000.000,00 **181.52 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga, reliquidación de prestaciones sociales y pago de mesadas atrasadas, sentencia J8LC de 26 de septiembre de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 848 de 10 de junio de 1997 *(documento 19 HVP)*, modifica la mesada pensional. Dra. **NINA DEL CARMEN CASTRO DE LEÓN**. | $9´261.397,80 **53.84 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la autoridad judicial, mandamiento de pago de 21 de octubre de 1996, conciliado en acta 020 de 06 de mayo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´900.000,00 **24.04 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial ni fecha de la providencia judicial, pagada con resolución 262 de 08 de febrero de 1996. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $1´234.066,17 **8.68 SMLMV de 1996.** | 08 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Administrativa – uniformes y calzado, pagado con resolución 2339 de 1996. Dra. **MIRYAM CHARRYS BLANCO**. | $22´682.378,79 **159.59 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 29 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $34´300.000,00 **168.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial ejecutivo – reliquidación de prima de antigüedad, **acta de conciliación falsa** 1630 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC de 29 de noviembre de 1996. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $13´098.885,00 **92.16 SMLMV de 1996.** | 29 de noviembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| Judicial ejecutivo – movilización de nocivos, **acta de conciliación falsa** 1629 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 28 de noviembre de 1996, pagada con resolución 1092 de 29 de julio de 1997. Dr. | $13´128.541,37 **76.32 SMLMV de 1997.** | 29 de julio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. No obra en el expediente físico evidencia del pago. | | | |
| Judicial ejecutivo – diferencias de mesada pensional, mandamiento de pago J2LC de 27 de noviembre de 1996, conciliado en acta 006 de 05 de junio de 1998 resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **RUTH DEL CARMEN DUQUE DE TORRENEGRA**. | $27´509.892,15 **134.96 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resolución 2133 de 09 de octubre y 2668 de 29 de diciembre de 1995. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. Actos administrativos dejados sin efectos de conformidad con la orden adoptada en resolución 1039 del 30 de septiembre de 2007 *(acorde a la información contenida en el documento 86 HVP)* | $2´558.463,49 **21.51 SMLMV de 1995.** | 29 de diciembre de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| Judicial – reclasificación, mandamiento de pago J8LC, resolución 2344 de 1996 *(documento 44 HVP aporta el dato de la decisión judicial)*. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $973.884,60 **6.85 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | | | |
| Judicial – despido injusto, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996 *(documento 16 HVP)*. Dr. **LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $58´242.659,34 **409.79 SMLMV de 1996.** | 27 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |

Finalmente, en lo que remite al hecho endilgado por la Fiscalía al señor **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** sin datos de conceptos reclamados, de identidad de la autoridad judicial que acometió el examen de procedencia de los rubros por él deprecados a través de la doctora ENA LEONOR QUINTANA GUTIÉRREZ, del que se derivó el pago de $6´726.372,33, reclamación que al igual adolece del señalamiento del acto administrativo a partir del cual se dispuso el pago de la acotada suma dineraria, se advierte que dentro de la hoja de vida pensional obra reproducción de la demanda formulada por la anotada profesional del derecho, al parecer y presuntamente asociada a este evento, en la que se detalla presentación ante la oficina de administración judicial de Atlántico el 16 de marzo de 1996, sin ningún otro dato relacionado con este reclamo.

Las pretensiones plasmadas en ese escrito atañen a reliquidación y pago de la diferencia resultante de la prima de antigüedad por mala liquidación; reliquidación y pago de la diferencia resultante de la prima de servicios por mala liquidación; reamortización de cesantías definitivas, fijación de la mesada pensional e imposición de salarios moratorios, sin que se aprecie evidencia adicional que permita establecer la fecha de la supuesta decisión judicial que dispuso el pago de los dineros arriba mencionados o de las repercusiones que en la mesada pensional se hubieren dado.

Los aspectos particulares de este hecho, del que en principio se puede aseverar, no contaba con respaldo fáctico para su procedencia, al advertirse que dentro de los renglones valorados para efectos de pagarle

prestaciones sociales al señor DE LAS SALAS FERNÁNDEZ[19], se incluyeron los renglones de prima de antigüedad en monto de $705.852,55, y prima de antigüedad proporcional sopesada entre el 13 de noviembre de 1992 y el 20 de marzo de 1993, en cuantía de $122.358,31, reflejan una duda de mayor trascendencia relacionada con la fecha exacta en la que se concretó su pago, que remite como data máxima documentada a la de la presentación personal que se hiciera a la demanda, se recuerda, el 16 de marzo de 1996, ubicándose en la presunción de que los hechos consolidadores de la conducta reprochada se dieron en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980 con la modificación introducida por la Ley 190 de 1995, que entró en vigencia a partir del 06 de junio de 1995, luego será esta la que oriente el examen de vigencia de la acción penal en este especial evento.

Así las cosas, tratándose de una cuantía que para 1996 se equiparaba a 47.32 SMLMV, lo que la enmarca dentro de la descripción típica de peculado por apropiación atenuado, se tiene que este evento corre la misma suerte de los estudiados en precedencia y se dispone incluirlo dentro de los hechos afectados con la expiración del término con el que se contaba para adelantar la acción penal, acaeciendo la prescripción de la misma.

En vista de que respecto de los comportamientos relacionados en la **tabla 4**, y el recientemente analizado de forma independiente feneció la posibilidad de proseguir con la acción penal, la cual tuvo ocurrencia en etapa de investigación, dicha circunstancia será declarada en la parte resolutiva de esta providencia, sin que esta situación impida al Juzgado corroborar el fundamento de las deprecaciones que dieron lugar a las irregulares erogaciones con fines de adoptar decisión enfilada al restablecimiento del derecho en el aparte pertinente de esta providencia.

Siguiendo este análisis de cara a otras conductas y en lo que atañe al término prescriptivo en etapa de causa, que se ve aligerado a la mitad del máximo de la pena prevista en la norma para cada una de las modalidades punibles investigadas y que debe ser contabilizado desde el momento en que cobra ejecutoria la resolución de acusación hacia el futuro, se enmarca en el lapso para el delito agravado en 10 años, que remiten al **12 de marzo de 2025**, y para el reato de peculado por apropiación agravado tentado, al lapso prescriptivo de 8 años, 5 meses y 7 días, que se planta en el **19 de agosto de 2023**, lapsos a valorar para efectos de corroborar la vigencia de la acción penal en esta fase procesal.

Ante los hallazgos expuestos en torno de la precaria estimación circunstancial efectuada por la Fiscalía respecto de algunos de los eventos materia de investigación tomando como agravadas algunas de la conductas que no se compadecían con esa adecuación o pasando como consumadas algunas que quedaron en grado tentado y las consecuencias que a partir de este yerro se presentaron de cara a la vigencia de la oportunidad estatal para enjuiciar conductas que actualmente se hallan prescritas, situaciones de las que si bien podría entenderse el acogimiento parcial de los planteamientos efectuados por los profesionales HERNÁN

[19] Documento 7 de la hoja de vida pensional, resolución 47730 de 29 de junio de 1993, por medio de la cual se reconocen prestaciones sociales al señor DE LAS SALAS FERNÁNDEZ.

SÁNCHEZ BUSTILLO como titular de la defensa del ciudadano VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, por el doctor ORLANDO OSORIO OROZCO como representante de ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY y el argumento esbozado por el hoy occiso togado EDGARDO JOSÉ HERNÁNDEZ MONTERO (q.d.e.p.), defensor oficioso del procesado JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ y de confianza del señor FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, en las que se esgrime la ocurrencia de la anunciada situación extintiva de la acción penal partiendo de la fecha en la que se emitieron las resoluciones de pago de las sumas derivadas de los hechos sindicados, que en su sentir a la data de la resolución de acusación ya se encontraban caducas, se señala que el planteamiento no fue debidamente razonado por quienes pretendieron la referida declaratoria, en el cual era necesario detallar las fechas de las decisiones, que como se ha advertido se trató de pluralidad de eventos que merecían un examen individual, su monto e impacto temporal, renglones que claramente fueron obviados por quienes propusieron la ocurrencia del instituto procedimental.

La fecha de las decisiones administrativas sin el análisis de su impacto pecuniario y extensión en el tiempo, resulta una mera referencia de la que poco se puede llegar a concluir sin tener en cuenta cada uno de los elementos particulares de los eventos reprochados, de lo que emerge que si bien una parcialidad de las situaciones investigadas fue afectada con la prescripción, acorde a las precisiones esbozadas en precedencia sobre el particular, el fundo de las deprecaciones elevadas por los anunciados sujetos procesales no satisface los tópicos básicos de una petición de declaratoria de prescripción en la que se deben identificar y desglosar los hitos que comprueban su ocurrencia, por lo que la declaratoria de prescripción de la acción penal que se acogerá en el aparte pertinente de esta decisión, se efectuará al margen del insustancial argumento planteado por los acotados profesionales del derecho en sus alegaciones presentenciales, debiendo ser negada.

Así las cosas, pasa el Despacho a plasmar la identificación de las **63** conductas que se encuentran vigentes y respecto de las cuales se realizará el respectivo juicio de reproche en torno a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que le llegare a asistir a los convocados a causa, sin que ello obste, como se anunció, para examinar si los demás comportamientos son constitutivos de injusto típico.

**TABLA 5:**

| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – retroactivo salarial, sentencia J4LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998 (Documento 43 HVP) *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)* Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO**. | $157´982.645,18 **775.08 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – subsidio de transporte, sentencia J8LC de 17 de julio de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Resolución 1519 de 08 de mayo de 1998 | $47´600.000,00 **233.53 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADOPOR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*, dispone el pago de las sumas declaradas mediante bonos de tesorería TES clase B (documento 48 HVP) Dr. **ALFONSO RAFAEL TAPIAS SALCEDO**. | | | |
| Judicial – horas extras, sentencia J3LC de 07 de mayo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | $49´200.000,00 **241.38 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reajuste de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resoluciones 1015 de 07 de mayo de 1998 y 2686 de 10 de agosto de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. *Se dispone reajuste de la mesada pensional* (documento 33 HVP); Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 19 de marzo de 2004. | $81´600.000,00 **400.34 SMLMV de 1998.** | 10 de agosto de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | |
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 26 de agosto de 1996, resoluciones 1020 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998 *(revocadas con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $81´600.000,00 **400.34 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO** | | | |
| Judicial – reliquidación de primas semestrales de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**.<br>Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 28 de noviembre de 2008. | $66´100.000,00 **324.29 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial – 35% de recargo nocturno, sentencia J4LC de 22 de noviembre de 1995, resolución 413 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. Acto administrativo **RDP 011101 adiado el 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. | $259´458.013,40 **1272.93 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – prima de servicios y de antigüedad, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996, resolución 1405 de 1996. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $38´341.147,40 **269.77 SMLMV de 1996.** | 27 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – uniformes y calzado, sentencia J1LC de 13 de febrero de 1996, implicó reajuste pensional; pagada con resolución 1194 de 29 de junio de 1997. Dr. **RAFAEL VILLALBA HODWALKER**. *Resolución revocada mediante acto administrativo **1484 de 04 de noviembre de 2009** (documento 123 HVP)* | $63´803.445,00 **370.93 SMLMV de 1997.** | 29 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – nivelación salarial reconocida en el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998, **RDP 011101 del 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $583´840.833,00 **2864.40 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1990 a 1992 y otras primas, sentencia J8LC de 25 de junio de 1996, resoluciones 1024 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $85´300.000,00 **418.49 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sentencia revocada por el TS de Bogotá con decisión de 17 de septiembre de 2001 *(documento 88 HVP)*. Revocatoria aplicada en virtud de la resolución 1797 de 29 de agosto de 2003 *(documento 96 HVP)*. | | | |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia del J8LC de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $76´900.000,00 **377.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | | | |
| Judicial ejecutivo – acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, mandamiento de pago del J4LC de 16 de marzo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, ordena la revocatoria. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $41´600.000,00 **204.95 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resoluciones 1029 de 05 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998; mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, ordena la revocatoria de las decisiones administrativas. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 14 de noviembre de 2003. | $98´700.000,00 **484.23 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga, sentencia J2LC de 19 de marzo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $67´100.000,00 **329.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1991 y 1992 (prima sobre prima), sentencia J8LC de 29 de octubre de 1996 *(documento 22 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $50´000.000,00 **245.30 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | | | |
| Judicial – vacaciones y prima de vacaciones de 1980 a 1986, sentencia J5LC de 13 de mayo de 1993, resolución 242 de 15 de abril de 1994 *(documento 91 HVP)* y 1341 de 25 de junio de 1996 reconoce mesadas atrasadas y reajuste pensional *(documento 33 HVP),* **estas resoluciones se revocan en virtud del acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011** *(documento 94 HVP)*. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $687.420,18 **6.96 SMLMV de 1994.** $5´494.862,00 **38.66 SMLMV de 1996.** **TOTAL 45.62 SMLMV. + INCREMENTOS PENSIONALES.** ⇩ | 15 de abril de 1994 y 25 de junio de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 y 1991, sentencia J8LC de 26 de noviembre de 1996, revocada mediante decisión de 07 de mayo de 2004, información contenida en el memorando 659 de 28 de abril de 2011 *(documento 89 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 *(documento 92 HVP)* **revocada con acto administrativo 1512** | $68´200.000,00 **334.59 SMLMV DE 1998.** **+ INCREMENTOS PENSIONALES.** ⇩ | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **de 15 de noviembre de 2011** *(documento 94 HVP)* y resolución 1033 de 07 de mayo de 1998 *(documento 93 HVP)* se dispone reajuste pensional. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 07 de mayo de 2004. | | | |
| **NOTA:** Acorde al contenido de la **resolución 1512 de 15 de noviembre de 2011**, emitida por el GIT, en la cual da cumplimiento a las órdenes adoptadas en sede de consulta respecto de las 2 sentencias referidas en apartes que anteceden, se estableció que el monto de lo apropiado más los incrementos aplicados a la mesada pensional asciende a: | Agrupa las dos reclamaciones precedentes. $**165´559.423,28 309.11 SMLMV de 2011.** | 15 de noviembre de 2011. | |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | | | |
| Judicial – diferencia de sueldo de 25% por ser directivo sindical para los años 1991 y 1992, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $140´300.000,00 **688.33 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – recargo de 21.5% por ser estibador para los años 1989 a 1992, sentencia J8LC de 16 de diciembre de 1996 *(documento 30 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $88´300.000,00 **433.21 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de los años 1989 a 1992, sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $104´800.000,00 **514.16 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 10 de enero de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **JORGE SAID NARVAEZ**. | $42´100.000,00 **206.54 SMLMV de 2016.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga y reliquidación prima de antigüedad, sentencia J6LC de 09 de agosto de 1996 *(documento 26 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO** y **ENA LEONOR QUINTANA GUTIÉRREZ**. Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 31 de agosto de 2004. | $77´500.000,00 **380.22 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1991 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 29 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $123´500.000,00 **605.90 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | | | |
| Judicial – reliquidación por reconocimiento de horas extra, sentencia J3LC de 05 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada mediante resolución **RDP** | $78´600.000,00 **385.62 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **011623 del 22 de marzo de 2017**. Dr. **JUAN LÓPEZ AROCA**. | | | |
| Judicial – huelga y prima de vacaciones, sentencia J4LC de 10 de julio de 1996 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $67´800.000,00 **332.63 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – descanso compensatorio según acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO CASTILLEJO DE SALES**. | $48´700.000,00 **238.92 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1990 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. **Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado**. | $100´300.000,00 **492.08 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios segundo semestre de 1991, sentencia J4LC de 17 de julio de 1996 *(documento 22 HVP)*. Pago pactado en el acta de conciliación 025 de 02 de junio de 1998 *(documento 39 HVP)*, Resolución 2226 de 12 de junio de 1998, acto administrativo **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, revoca parcialmente la primera. Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA** y **MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $56´200.000,00 **275.72 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, acto administrativo **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $42´700.000,00 **209.49 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios por reajuste de retroactivo, sentencia J8LC de 02 de diciembre de 1996 *(documento 24 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $75´300.000,00 **369.43 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Pamplona con decisión de 18 de mayo de 2004. | $100´600.000,00 **493.55 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 12 de febrero de 1996, resolución 238 de 05 de febrero de 1996. Mesadas atrasadas y salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´545.692,23 **39.01 SMLMV.** $33´318.261,69 **234.42 SMLMV.** **TOTAL 273.43 SMLMV de 1996.** | 05 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – prima de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994, resolución 330 de 19 de febrero de 1996 y 830 de 1997 (*folio 83 c. o. anexos 12*), acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $36´268.477,76 **255.18 SMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – nueva reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial, resolución 1909 de 1996. Salarios moratorios Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA**. | $73´991.075,41 **502.60 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – retroactivo salarial, sentencia J6LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. | $195´587.022,72 **959.57 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 29 de octubre de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $282´181.058,05 **1384.42 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 24 de octubre de 2003. | $120´300.000,00 **590.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia del J3LC de 13 de junio de 1995 *(documento 20 HVP)*, resolución 330 de 19 de febrero de 1996. Dispone reajuste de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 29 de julio de 2003. | $45´863.492,95 **322.69 SMMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2409 de 29 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J2LC de 12 de noviembre de 1997, resolución 2226 de 08 de junio de 1998. Dr. **OSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO**. | $81´456.459,04 **399.63 SMLMV de 1998.** | 08 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1989 a 1992, sentencia J4LC de 12 de junio de 1996 *(documento 62 HVP)*, ordena reajuste de la mesada pensional. Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $103´100.000,00 **505.82 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 24 de abril de 1996 *(documento 28 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $53´600.000,00 **262.96 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Administrativa – salario en especie resolución 2339 de 1996 y acta de conciliación 050 de 21 de marzo de 1996. Dra. **MYRIAM CHARRYS BLANCO**. | $32´213.140,82 **226.65 SMLMV de 1996.** | 21 de marzo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – cena y descanso, acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC mandamiento de pago de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ**. | $250´800.000,00 **1230.46 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1993, sentencia J8LC de 15 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 06 de febrero de 2004. | $87´600.000,00 **427.77 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – huelga y suspensiones, sentencia J4LC de 19 de marzo de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $63´500.000,00 **311.54 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Administrativa – solicitud de reconocimiento pensional sin que contara con los requisitos para ello, resolución 520 de 17 de abril de 1998, con la que también se le reconocieron mesadas atrasadas, revocada de forma directa mediante resolución 1050 de 18 de agosto de 2010 *(documento 2 HVP)*. Dr. **MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA**. | $248´968.911,00 **1221.47 SMLMV de 1998.** | 17 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 06 de enero de 1996, resolución 677 de 21 de mayo de 1997. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $55´542.636,49 **322.91 SMLMV de 1997.** | 21 de mayo de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial – solicitud de reconocimiento pensional, sin datos de fecha de la sentencia, resolución 255 de 1996 reconoce mesadas atrasadas; resolución 1990 de 30 de septiembre de 1996 concede pensión y diferencia de mesadas. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $39´105.745,92 **275.15 SMLMV.** $15´635.980,00 **110.01 SMLMV.** **TOTAL 385.16 SMLMV de 1996.** | 30 de septiembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 09 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $68´200.000,00 **334.59 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 33 HVP)* condena a reajuste pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $77´200.000,00 **378.75 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA** | | | |
| Judicial – huelga, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 30 de abril de 2004. | $60´400.000,00 **296.33 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 05 de diciembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste pensional, pagada con resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 23 de abril de 2004. | $65´200.000,00 **319.88 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | | | |
| Judicial – descanso compensatorio, sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $57´200.000,00 **280.63 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – cena y descanso, sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $52´700.000,00 **258.55 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – prima de servicios de 1990 a 1992 "prima sobre prima", sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996 *(documento 20 HVP)* dispone el reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $77´900.000,00 **382.18 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – reclamo por días descontados de la liquidación, mandamiento de pago J4LC de 24 de febrero de 1998, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **DUBIS ESTHER RAMOS**. | $112´436.135,34 **551.62 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de antigüedad, sentencia J4LC de 02 de febrero de 1996, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **ORLANDO SANTOS CORZO**. | $534´032.153,27 **2620.3 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 26 de marzo de 2004. | $45´300.000,00 **222.24 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA** | | | |
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J4LC de 07 de febrero de 1996 *(documento 13 HVP)* dispone reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $98´600.000,00 **483.74 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ** | | | |
| Judicial – diferencia de vacaciones de los años 1992 y 1993, sentencia J8LC de 19 de diciembre de 1996 *(documento 22 HVP)* ordena reajuste pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 *(documento 30 HVP)*. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $97´000.000,00 **475.89 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** | | | |
| Monto asociado al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, a la cual acudió en representación de los extrabajadores que se convocan a juicio en la resolución de acusación que se estudia. Acuerdo pagado mediante resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. | $3.057´400.000,00 **6068.36 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Monto relacionado con aquellos rubros que en virtud de la revocatoria de algunos actos administrativos quedaron sin ser cancelados, igualmente asociados con el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998. | $496´900.000,00 **2437.86 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |

Instituido el marco circunstancial de la presente causa y previo a acometer el análisis de los derroteros reveladores de existencia de reproche y compromiso penal respecto de las conductas reconvenidas por la agencia Fiscal, como segundo asunto a evaluar en virtud del principio de prioridad, se aprecia que el encausado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en exposición de sus argumentos presentenciales formuló postura de cara a la posible transgresión de su derecho fundamental al debido proceso y la defensa en la fase de investigación, conculcando con ello sus prerrogativas en franco desconocimiento de lo normado en el canon 306 de la Ley 600

del 2000; frente a lo que pasó a identificar, con apoyo de algunas citas jurisprudenciales relacionadas con la garantía de la defensa dentro de actuación procesal, las precarias oportunidades procesales que tuvo para exponer su versión sobre los hechos y solicitar el acopio de medios suasorios, aspectos que anota, coartaron su oportunidad para ejercer debidamente su tutela, a lo que se agrega la alegada falta de posibilidad para enfrentar la demanda de constitución de parte civil. No empece, se memora que este acusado no deprecó como tal la declaración de nulidad.

Frente a la posición del procesado ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con los cánones 306, 309 y 310 instrumentales, la falta de competencia del funcionario judicial, los vicios de trámite que resquebrajan la estructura del proceso penal o de garantías que afectan las prerrogativas fundamentales y legales de los sujetos procesales, invalidan la actuación y así debe declararse, siempre que se acredite la existencia de las irregularidades sustanciales, que éstas no puedan ser corregidas de otra manera y la situación se ajuste a los principios orientadores consagrados por la Ley[20], los cuales se conocen con los nombres de taxatividad, subsidiariedad, trascendencia, convalidación, instrumentalidad de las formas, protección y postulación, y deben acatarse tanto por el sujeto procesal que aduce la transgresión de sus derechos fundamentales como por el funcionario judicial que decide aplicarla en cuanto se trata de una medida remedial y extrema para subsanar el proceso penal.

De cara al caso concreto, recuerda el Despacho que el precepto 309 instrumental establece:

> "*Solicitud. El sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores, salvo en la casación*".

En el asunto bajo examen, detalla el Juzgado que el proponente invocó el presunto menoscabo tanto a partir de la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, como por la afectación al derecho de defensa, las cuales el Despacho observa que corresponden a las causales 2 y 3 del canon 306 de la Ley 600 de 2000.

Por ello, es preciso recordar lo que el máximo Juez nacional en lo penal ha explicitado en lo que concierne al entendimiento y alcance que se debe dar a los principios que dirige este instituto saneatorio, tema sobre el cual se

---

[20] "***ARTICULO 310. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA DECLARATORIA DE LAS NULIDADES Y SU CONVALIDACIÓN.*** *1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. // 2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. // 3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. // 4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. // 5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. // Cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad si la prueba que no se practicó y se califica como fundamental puede ser recaudada en la etapa del juicio; en cambio procederá cuando aquella prueba fuese imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa o cuando se impartió confirmación a las resoluciones que negaban su práctica, a pesar de su evidente procedencia. // 6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este capítulo...*".

estima válido citar el extracto pertinente de la providencia expedida el 22 de mayo de 2008, con ponencia del H. M. Dr. Yesid Ramírez Bastidas, dentro del radicado No 29377, donde indicó:

> "… *la principialística que gobierna las nulidades en el proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, además de la referencia a la causal específica (principio de taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de convalidación), siempre que se observen las garantías fundamentales*"[21] (enfatiza este Estrado).

Del mismo modo, se considera oportuno indicar el aparte pertinente de la decisión emitida el 03 de marzo de 2010, dentro del caso 32199, siendo ponente el H. M. Dr. Yesid Ramírez Bastidas, donde esa Alta Corporación reiteró el precedente sentando en la sentencia expedida el 26 de noviembre de 2003 en el radicado 11135, en la cual pregona:

> "… *significa que no hay nulidad sin perjuicio y sin la probabilidad del correlativo beneficio para el nulidicente. Más allá del otrora carácter puramente formalista del derecho, para que exista nulidad se requiere la producción de daño a una parte o sujeto procesal. Se exige, así, de un lado, la causación de agravio con la actuación; y, del otro, la posibilidad de éxito a que pueda conducir la declaración de nulidad. Dicho de otra forma, se debe demostrar que el vicio procesal ha creado un perjuicio y que la sanción de nulidad generará una ventaja*".

Así las cosas, no ofrece duda que la jurisprudencia pertinente ha sido clara y pacífica sobre el particular, e insiste en el principio de trascendencia y la necesidad de que quien reclama desconocimiento de sus prerrogativas, demuestre la irregularidad que la genera, el alcance lesivo de la misma y el beneficio que se desprendería de su decreto.

Cabe igualmente recordar que el acusado en mención alega el concomitante desconocimiento del debido proceso y el derecho a la defensa, ante lo cual también se recuerda que de conformidad con la doctrina jurisprudencial emanada del máximo Juez Penal colombiano, no es admisible en derecho postular sobre un mismo sustento fáctico procesal la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, ya que corresponden a prerrogativas diferentes y, por ende, no puede proponerse de manera conjunta sobre un mismo evento para rogar transgresión y eventual invalidez, habida cuenta de que el debido proceso está relacionado con la aplicación de las adecuadas formas del trámite y, por tanto, su vulneración corresponde a un resquebrajamiento del diligenciamiento; en tanto que la conculcación del derecho a la defensa mira al atropello dirigido contra las otras garantías. Así, el vicio o irregularidad atentatoria contra el debido proceso ha de referirse respecto del desconocimiento de las etapas y estadios procesales, o de las solemnidades

---

[21] Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Radicado 11135.

que reclaman las diligencias; mientras que el que desconoce el derecho a la defensa se refiere a la vulneración de las garantías. De allí que al primero se le conoce como vicio de procedimiento o *in procedendo* y al segundo vicio de garantías. Razones por las cuales no es admisible invocarlos de manera conjunta.

De hecho, aviene oportuno citar en seguida el aparte jurisprudencial emanado de la citada Alta Corporación en lo penal que se estima pertinente:

> *"… resultan acertadas las glosas del Delegado en cuanto al señalamiento de las inconsistencias de orden técnico en que incurre el demandante al aducir simultáneamente la vulneración del derecho de defensa y el debido proceso señalando al mismo tiempo como causales de nulidad las previstas en el artículo 304.2.3 del Código de Procedimiento Penal, ya que aparte de desconocer que éstas también son autónomas e independientes, no resulta lógico ni jurídico que, como aquí procede el demandante, se invoquen simultáneamente bajo el mismo supuesto fáctico y lo que es peor sin ninguna argumentación que permita siquiera precariamente identificar en que se traduce el quebranto al debido proceso y a qué se contrae la lesión al derecho de defensa. (…)"*[22]

Esa línea ha sido pacíficamente reiterada en la doctrina vigente sentada por esa máxima Corporación, como se aprecia en las decisiones emitidas en los radicados 15.354 el 14 de noviembre de 2001, con ponencia del H. M. Dr. Nilson Pinilla Pinilla; 13.225 el 29 de agosto de 2002, siendo ponente el H. M. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; 18.474 el 12 de noviembre de 2003, con ponencia de la H. M. Dra. Marina Pulido de Barón; y 22.588 el 08 de septiembre de 2004, siendo ponente la última H. M. en cita; providencias de las cuales se cita en seguida el aparte pertinente contenido, por ejemplo, en la adoptada en el consecutivo 18.474, donde dicho Alto Juez Colegiado sostuvo en torno de la imposibilidad jurídica de alegar simultáneamente la conculcación del debido proceso y el derecho a la defensa con base en un mismo hecho como sustento de nulidad:

> "*Se trata de vulneraciones que afectan dos ámbitos suficientemente delimitados y delimitables. Es así como el primero, esto es, la vulneración del debido proceso, constituye un vicio de estructura (falta de competencia, pretermisión de las formas propias del juicio, etc.) y, el segundo, vale decir, el quebranto del derecho a la defensa técnica, comporta un vicio de garantía, características distintivas que imposibilitan su invocación conjunta, con fundamento en los mismos supuestos de hecho procesales y con apoyo en las mismas razones críticas*".

Finalmente, cabe precisar que el instituto de la nulidad, al que se arribaría oficiosamente de hallarse fundadas las postulaciones del señor COLLANTE PACHECO, resulta ser el remedio extremo al que se debe acudir, y, por ello, no puede anteponerse a otros mecanismos ordinarios o específicos de corrección, saneamiento, de mejor proveer o de solución de algunos temas concretos, toda vez que no cualquier falencia ni situación procesal tiene la virtualidad de dar lugar a ella, sino únicamente aquellas cuya entidad avenga acorde a los mencionados principios y, por ende, exija insoslayablemente dejar sin efectos y retrotraer la actuación.

---

[22] Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de febrero de 2000. Radicado 12059. M. P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote.

Frente al asunto bajo análisis, aprecia el Juzgado que si bien es cierto el deprecante alegó la indebida intimación de los actos procesales adoptados en etapa instructiva, inclusive, lo que corresponde a la demanda de constitución de parte civil, que a su juicio, le impidieron dar a conocer al interior del proceso su postura frente a los hechos investigados y solicitar la aducción de pruebas para efectos de controvertir la tesis acusatoria, con lo que se habrían quebrantado las garantías del debido proceso y de defensa, resulta evidente que además de que el procesado incurre en el justificado desatino de sustentar con base en un mismo evento la probable conculcación simultánea de tales prerrogativas fundamentales, lo cual, de hecho, aviene abiertamente inamisible en derecho de conformidad con los derroteros doctrinales acabos de señalar, no demuestra la alegada afectación que habría de viciar la actuación ante el irrefutable desconocimiento de sus derechos.

Si bien el señor COLANTE PACHECO pone de relieve algunos eventos de los que se desprende que para el enteramiento de algunas decisiones de la Fiscalía se dejó constancia en el plenario de visita efectuada en su lugar de residencia sin resultas positivas, cuando nunca dejó de residir en ese sitio, lo cierto es que no argumentó cómo aquella aparente falta de rigurosidad atribuible a la agencia persecutora le impidió, inclusive, hasta en la etapa de causa, cuando se sabe ha comparecido cumplidamente a los actos procesales en virtud de las citaciones que este Estrado ha remitido, oponerse a la tesis planteada en la demanda de parte civil, en el pliego acusatorio o dar a conocer su posición mediante versión libre en audiencia pública, pues resulta notorio que el acriminado ha estado al tanto del decurso ritual y, como profesional del derecho, también de las oportunidades contempladas en la norma procedimental para proponer la aducción de pruebas en juicio, luego no es de recibo para el Juzgado el planteamiento del solicitante en torno a la afectación de sus derechos fundamentales cuando en etapa de causa ha contado con las ocasiones procesales idóneas para ejercer debidamente su defensa, controvertir la tesis de la agencia persecutora o de la postuladora civil y proponer aducción de pruebas.

De lo advertido resulta claro que el sensor no ofreció desarrollo alguno a su alegación, de la que se desprenda de manera fáctica, procesal y jurídica, la forma como se materializó dicho desconocimiento, si éste es atentatorio contra los aludidos derechos fundamentales y si su ocurrencia repercute en el proceso, máxime cuando acorde al principio de convalidación, aquellas irregularidades que, en gracia de discusión, se hubieren presentado en la etapa de investigación, deben ser formuladas en el instante propicio para ello dentro del traslado de que trata el precepto 400 procedimental, de suerte que, aquellas que no fueron propuestas oportunamente por la parte interesada para su eventual corrección con el correspondiente sustento y entidad para afectar el trámite, son cobijadas por la anunciada prerrogativa convalidante, comoquiera que es aquel momento histórico en el que se deben sanear aquellos aspectos que a petición de quien la formula o de manera oficiosa ameriten adoptar las medidas necesarias dirigidas a enderezar la actuación.

Además, de cara con los principios de residualidad, subsidiariedad, convalidación y protección que gobiernan el instituto en cuestión, resulta

ahora desatinado proponer aspectos invalidantes cuando las partes pudieron intentar los medios impugnatorios ordinarios con miras a rebatir las decisiones de fondo que hubieren considerado contrarias a sus intereses, sin que hubieran obrado en tal sentido sino mostrando con ello el acuerdo con las diligencias y alcance de las mismas.

El Alto Tribunal de la Justicia Ordinaria Penal en lo tocante a la oportunidad para alegar las supuestas nulidades concretadas en fase sumarial ha dicho que[23]:

> *"En la sistemática de la ley 600 de 2000, en cuyo imperio se adelantó el presente asunto, acreditado un error en la calificación jurídica ello conduciría, en principio, a la nulidad que podía adoptarse en cualquier momento de la actuación procesal, salvo que sin desconocer el núcleo fáctico de la acusación la situación para el procesado resultara más favorable o como mínimo mantenerla en la misma condición, luego si esa fue la irregularidad que detectó el funcionario de segunda instancia de la fiscalía bien podía remediar el desacierto en tanto que de no hacerlo la solución corría por cuenta del juez.*
>
> *En relación con las nulidades la declaratoria procede en cualquier momento de la actuación procesal (art. 308, cpp de 2000), de oficio o por solicitud de parte (arts. 307 y 309), mientras que uno de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación enseña que sólo podrá decretarse cuando no existe otro medio procesal para subsanar la irregularidad.*
>
> *Así las cosas, en este caso, es claro que el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Pereira al comprobar error en la calificación jurídica estaba facultado para introducir el correctivo pertinente, como así lo hizo, sin que al cambiar la adecuación típica de la conducta investigada estuviera desbordando su competencia o afectando la prohibición de la no reforma en perjuicio, porque no se trató de adicionar delitos o circunstancias de agravación punitiva no tratadas en primera instancia, sino simplemente el cambio de adecuación típica que conservando el carácter provisional tampoco fue objeto de cuestionamiento por la defensa de los recurrentes en las oportunidades previstas por el ordenamiento jurídico.*
>
> *6. Sobre las nulidades derivadas de la etapa instructiva la Sala tiene dicho que*
>
> *en punto del traslado dispuesto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 para que los sujetos procesales preparen la audiencia, invoquen nulidades originadas en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto, y soliciten la práctica de pruebas, es claro que ese es el instante oportuno para deprecar una nulidad puntualmente hablando, lo que convierte en extemporáneo el reclamo cuando se hace con posterioridad (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de segunda instancia del 26 de enero de 2006, rad. N° 24843)".*

Esta posición ha sido sólida y reiterada, como se desprende del siguiente precedente[24]:

---

[23] Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, sentencia del 26 de noviembre de 2007, rad. 23068, M.P. YESID RAMIREZ BASTIDAS

[24] Proceso 43263 Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia. M.P. Eugenio Fernández Carlier, 29 de Julio de 2014.

*"El principio de preclusión, vale decir, denota que el proceso penal colombiano está constituido por una serie de etapas procesales con propósitos determinados y progresivos, cuyo sobrepaso implica el cierre de la anterior sin posibilidad de renovarla. Es decir, agotada una etapa los sujetos procesales no están legitimados para presentar peticiones pertenecientes a ella, por fenecimiento del término legal.*

*Así entonces, quien no alegue nulidades con origen en la instrucción en el traslado previsto para el efecto en el juzgamiento, o se abstenga de hacerlo en relación con otras causales igualmente con fuente en esa etapa procesal, no podrá hacerlo en el trámite subsiguiente salvo en el recurso de casación".*

En este orden de ideas, al no haberse planteado expresamente la solicitud de declaratoria de nulidad a partir de la ocurrencia de hechos que afecten el trámite acorde a los argumentos del procesado, y advirtiéndose por el Juzgado de manera oficiosa que no se configuró afectación a las salvaguardas procesales del señor COLLANTE PACHECO, con lo que se entiende que el rito acometido en etapa instructiva se dio en observancia de las garantías procesales, y que la disconformidad que se hubiere presentado respecto del hoy proponente fue saneada en curso de este juicio al contarse con iguales posibilidades de controversia y defensa que en la investigación, las cuales no fueron ejercidas por el señor COLLANTE PACHECO, se dispone proseguir con los tópicos propios de esta decisión de fondo.

Seguidamente, procede el Juzgado a establecer si en el asunto que se examina militan en el paginario los elementos suasorios necesarios e idóneos que a voces del canon 232 del CPP, conducen a la certeza acerca de la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, o si en su defecto es la duda la que impera, para que se abra paso respectivamente a un fallo de talante condenatorio o absolutorio.

Los cargos objeto de juzgamiento que formuló la Fiscalía a cada uno de los procesados corresponde a la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación (agravado); no obstante, se recuerda que de las precisiones efectuadas en precedencia en torno de la pluralidad de eventos y las diferentes cuantías que comprometen el peculio estatal, quedaron las imputaciones criminosas relacionadas en la **TABLA 5**, las cuales se erigen como el fundo de la presente decisión de instancia y respecto de las cuales se corroborará su probable ocurrencia a partir de las pruebas aperadas al expediente.

Fue aportado a la actuación ejemplar original del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998[25], en el que se transó el pago de sentencias y mandamientos de pago judiciales de diversos extrabajadores portuarios, actuando en calidad de representante de éstos el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, y como apoderada de la empresa portuaria en liquidación la doctora LUZ DARY VELASCO CÓRDOBA, estipulándose que los pagos en ella enlistados se efectuaría mediante Bonos de Tesorería TES clase B, en la que además se relacionan los datos de los beneficiarios con número de identificación, la nomenclatura de los Juzgado Laborales de Barranquilla en los que se adelantó cada uno de los procesos, la fecha de las sentencias

[25] Folios 1 a 41 del c. o. 1 de instrucción.

y mandamientos de pago, de los renglones a conciliar y el valor a entregar a cada uno de los extrabajadores.

Dentro de los cuadernos 1 de instrucción y parte de su continuación se agruparon los ejemplares originales de las resoluciones que daban cumplimiento a las providencias judiciales a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, de las que igualmente obran copias al carbón y que se sistematizarán en cuadro como sigue:

**TABLA 6:**

| | **BENEFICIARIO** | **SENTENCIA, RESOLUCIÓN y UBICACIÓN** | **CUANTÍA** | **CONCEPTOS** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS | Sent. de 24/01/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1016** de 07/05/1998<br>(Folios 42 a 58 c. o. 1 inst.) | $127´900.000,00 | Reliq. de la prima de servicios, prima de vacaciones proporcional, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **2** | JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA | Sent. de 07/02/1996<br>Juz. Cuarto laboral<br>Res. **1018** de 07/05/1998<br>(Folios 59 a 75 c. o. 1 inst.) | $98´600.000,00 | Reliq. de la primas de servicios del 1 y 2 semestre de 1992, prima de vacaciones proporcional, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **3** | ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO | Sent. de 05/12/1995<br>Juz. Segundo laboral<br>Res. **1019** de 07/05/1998<br>(Folios 76 a 58 c. o. 1 inst.) | $140´300.000,00 | Diferencia de sueldo 25% para los años 1991 y 1992, Reliq. de prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| | | M. de pago de 30/01/1997<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1056** de 07/05/1998<br>(Folios 181 a 183 c. o. cont. 1 de inst.) | $88´300.000,00 | Reliq. de vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, diferencia anticipo de pensión de jubilación por 21.5% de 1991 y 1992, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| | | M. de pago de 05/09/1997<br>Juz. Cuarto laboral<br>Res. **1052** de 07/05/1998<br>(Folios 184 a 187 c. o. cont. 1 de inst.) | $104´800.000,00 | Reliq. de prima de servicios, vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, diferencia anticipo de pensión de jubilación, salarios moratorios y agencias en derecho. |
| **4** | FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS | Sent. de 26/08/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1020** de 07/05/1998<br>(Folios 94 a 111 c. o. 1 inst.) | $81´600.00,00 | Reliq. de las primas de servicios de 1988 a 1990, vacaciones proporcionales, prima de vacaciones, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, diferencia anticipo de pensión de jubilación, costas y agencias en derecho. |
| | | M. de pago de 11/01/1996<br>Juz. Segundo laboral<br>Res. **1058** de 07/05/1998<br>(Folios 193 a 198 c. o. cont. 1 de inst.) | $116´100.000,00 | Diferencia de sueldo de 25%, años 1989 y 1990, reliquidación de vacaciones proporcionales, de prima de vacaciones proporcionales, de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, diferencia de anticipo de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **5** | JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONRROY | Sent. de 29/04/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1022** de 07/05/1998<br>(Folios 112 a 125 c. o. 1 inst.) | $34´300.000,00 | Reliq. de las primas de servicios, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **6** | EMIROMEL ORTIZ ORTIZ | Sent. de 20/08/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1023** de 07/05/1998<br>(Folios 126 a 143 c. o. 1 inst.) | $92´100.000,00 | Reliq. de las primas de servicios, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **7** | EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Sent. de 25/06/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1024** de 07/05/1998<br>(Folios 144 a 155 c. o. 1 inst.) | $85´300.000,00 | Reliq. de las primas de servicios de 1990 a 1992, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, prima de servicios proporcional, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **8** | GABRIEL BARRIOS DONADO | Sent. de 15/05/1996<br>Juz. Cuarto laboral<br>Res. **1026** de 07/05/1998<br>(Folios 156 a 171 c. o. 1 inst.) | $43´900.000,00 | Reliq. de las prima de servicios, vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcional, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios y agencias en derecho. |
| **9** | ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ | Sent. de 23/09/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1027** de 07/05/1998<br>(Folios 172 a 188 c. o. 1 inst.) | $76´900.000,00 | Reliq. de las prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **10** | ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO | Sent. de 20/08/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1028** de 07/05/1998<br>(Folios 189 a 206 c. o. 1 inst.) | $66´100.000,00 | Reliq. de las prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **11** | ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | Sent. de 20/08/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1029** de 07/05/1998<br>(Folios 207 a 224 c. o. 1 inst.) | $98´700.000,00 | Reliq. de primas de servicios de 1992 y 1993, vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcionales, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **12** | ALFONSO NIÑO ESCORCIA | Sent. de 17/10/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1030** de 07/05/1998<br>(Folios 225 a 240 c. o. 1 inst.) | $54´600.000,00 | Reliq. de prima de servicios, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **13** | CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS | Sent. de 16/09/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1031** de 07/05/1998<br>(Folios 241 a 246 c. o. 1 inst.) | $40´200.000,00 | Reliq. de prima de servicios, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **14** | ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ | Sent. de 19/11/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1032** de 07/05/1998<br>(Folios 1 a 3 c. o. cont 1 de inst.) | $50´000.000,00 | Reajuste de prima de servicios, prima de servicios proporcional, prima de antigüedad, reajuste de cesantías definitivas, de pensión de jubilación, salarios moratorios y agencias en derecho. |
| **15** | MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ | M. de pago de 10/12/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1033** de 07/05/1998<br>(Folios 4 a 8 c. o. cont. 1 de inst.) | $68´200.000,00 | Reajuste de prima de servicios, prima de antigüedad, reajuste de cesantías definitivas, de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **16** | EDUARDO MOLINA MORALES | M. de pago de 24/09/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1034** de 07/05/1998<br>(Folios 9 a 13 c. o. cont. 1 de inst.) | $30´800.000,00 | Reajuste de 35% años 1983 y 1984, reajuste de vacaciones proporcionales, de prima de vacaciones proporcionales, cesantías definitivas, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **17** | EMIRO TRIANA DUICA | M. de pago de 17/10/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1035** de 07/05/1998<br>(Folios 14 a 18 c. o. cont. 1 de inst.) | $55´100.000,00 | Reliq. de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **18** | FRANKLIN WILCHES MANOTAS | M. de pago de 04/06/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1039** de 07/05/1998<br>(Folios 19 a 23 c. o. cont. 1 de inst.) | $57´300.000,00 | Reliq. de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **19** | LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ | M. de pago de 09/08/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1040** de 07/05/1998<br>(Folios 24 a 27 c. o. cont. 1 de inst.) | $87´600.000,00 | Reliq. de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **20** | GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL | M. de pago de 17/02/1997<br>Juz. Octavo laboral | $132´200.000,00 | Reliq. de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Res. **1041** de 07/05/1998 (Folios 28 a 34 c. o. cont. 1 de inst.) | | cesantías definitivas, pensión de jubilación, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **21** | HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ | M. de pago de 14/02/1997 Juz. Octavo laboral Res. **1042** de 07/05/1998 (Folios 35 a 39 c. o. cont. 1 de inst.) | $45´200.000,00 | Reliq. de prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **22** | JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ | M. de pago de 31/01/1997 Juz. Octavo laboral Res. **1043** de 07/05/1998 (Folios 40 a 44 c. o. cont. 1 de inst.) | $97´000.000,00 | Reliq. de vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcionales, prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **23** | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | M. de pago de 10/12/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1044** de 07/05/1998 (Folios 45 a 51 c. o. cont. 1 de inst.) | $45´300.000,00 | Reliq. de vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcionales, prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **24** | JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA | M. de pago de 17/01/1997 Juz. Octavo laboral Res. **1045** de 07/05/1998 (Folios 52 a 56 c. o. cont. 1 de inst.) | $65´200.000,00 | Reliq. prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **25** | JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO | M. de pago de 10/12/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1046** de 07/05/1998 (Folios 57 a 61 c. o. cont. 1 de inst.) | $77´200.000,00 | Reliq. de vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcionales, prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **26** | PEDRO ROSADO OSORIO | M. de pago de 04/06/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1047** de 07/05/1998 (Folios 62 a 64 c. o. cont. 1 de inst.) | $111´200.000,00 | Reliq. prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, de prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **27** | LIBARDO JOSÉ BARRAZA RIVERA | M. de pago de 11/12/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1048** de 07/05/1998 (Folios 65 a 69 c. o. cont. 1 de inst.) | $94´900.000,00 | Reliq. prima de servicios, prima de vacaciones proporcional, de prima de antigüedad, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **28** | MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | M. de pago de 31/05/1996 Juz. Cuarto laboral Res. **1049** de 07/05/1998 (Folios 147 a 150 c. o. cont. 1 de inst.) | $77´900.000,00 | Reliq. prima de servicios, vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcional, de prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios y agencias en derecho. |
| **29** | VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA | M. de pago de 16/09/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1050** de 07/05/1998 (Folios 151 a 156 c. o. cont. 1 de inst.) | $60´400.000,00 | Reliq. prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **30** | JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO | M. de pago de 22/02/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1051** de 07/05/1998 (Folios 157 a 162 c. o. cont. 1 de inst.) | $100´600.000,00 | Reliq. prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **31** | GUILLERMO LEON PAEZ MENDOZA | M. de pago de 16/09/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1053** de 07/05/1998 (Folios 163 a 168 c. o. cont. 1 de inst.) | $65´400.000,00 | Reliq. prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **32** | ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ | M. de pago de 16/02/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1054** de 07/05/1998 (Folios 169 a 175 c. o. cont. 1 de inst.) | $123´500.000,00 | Reliq. prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |
| **33** | ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL | M. de pago de 04/06/1996 Juz. Octavo laboral Res. **1055** de 07/05/1998 (Folios 176 a 180 c. o. cont. 1 de inst.) | $70´700.000,00 | Reliq. prima de servicios, de prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios, costas y agencias en derecho. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **34** | LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR | M. de pago de 04/06/1996<br>Juz. Octavo laboral<br>Res. **1057** de 07/05/1998<br>(Folios 188 a 192 c. o. cont. 1 de inst.) | $88´900.000,00 | Reliq. prima de servicios, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios y agencias en derecho. |
| **35** | ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | M. de pago de 19/06/1996<br>Juz. Cuarto laboral<br>Res. **1059** de 07/05/1998<br>(Folios 199 a 205 c. o. cont. 1 de inst.) | $103´100.000,00 | Reliq. prima de servicios, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, reajuste de pensión, salarios moratorios y agencias en derecho. |

En cumplimiento de las órdenes probatorias adoptadas al inicio de la investigación, el 13 de abril de 2004 se efectuaron diligencias de inspección judicial en las sedes de los Juzgados Cuarto y Octavo Laborales del Circuito de Barranquilla[26], que se orientaron a ubicar los procesos a partir de los cuales se ordenaron los pagos en contra de la empresa portuaria en liquidación, que a su vez fundaron la emisión del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998.

En el cuaderno de instrucción 2 se adosó reproducción de los actos administrativos proferidos el 07 de mayo de 1998, que dieron cumplimiento a las decisiones de los referidos Juzgados Laborales, mismas que fueron enlistadas dentro de la tabla de pruebas militantes en los cuadernos 1 y continuación de investigación, junto a las que también se aportaron copias de las decisiones proferidas dentro de los correspondientes trámites judiciales.

Dentro de las inspecciones judiciales efectuadas a los Juzgados Cuarto y Octavo Laborales del Circuito de Barranquilla, de las que además de las realizadas el 13 de abril de 2004, ya mencionadas en precedencia, obra evidencia de las adelantadas los días 14, 15 y 16 de la misma mensualidad, y que fueron aperadas nuevamente en el cuaderno 3 de instrucción, reposa copia de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo de esa especialidad el 24 de abril de 1996[27], dentro del trámite adelantado por el ciudadano ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, a la que también se adjuntó reproducción del mandamiento de pago fechado el 04 de junio de la misma anualidad y de la sentencia proferida en agotamiento del grado jurisdiccional de consulta ante la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá datada el 28 de septiembre de 2001.

En diligencia de inspección llevada a efecto en la sede del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de abril de 2004, fue adosada a la actuación copia de la sentencia de consulta fechada el 31 de octubre de 2001[28], dictada dentro de la causa impulsada por el señor MIGUEL CAICEDO ORTIZ, en la que se resolvió decretar la revocatoria de la providencia consultada teniendo en cuenta que el ejemplar de la Convención Colectiva de Trabajo aportada a la causa laboral no cumplía con los requisitos para ser apreciada probatoriamente y que la *causa petendi* no se hallaba debidamente delimitada dentro del escrito demandatorio, tornándose imprecisa y ambigua, con lo que se contravino el mandato 25 del Código de Procedimiento Laboral, absolviéndose de las pretensiones a la parte demandada.

[26] Folios 227 a 300 del c. o. continuación 1 de instrucción.
[27] Folios 259 a 272 del c. o. 3 de instrucción.
[28] Folios 275 a 285 ídem.

Asimismo, se adujeron algunas piezas procesales del asunto adelantado por el señor ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla en el que se condenó mediante sentencia de 05 de diciembre de 1995[29] a la empresa portuaria en liquidación al pago de $2´186.833,72 por diferencia de sueldos de los años 1991 y 1992, con los reajustes a que hubiere lugar en diversas percepciones del reclamante. Esta decisión fue escrutada en consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de San Gil (Santander), Colegiatura que mediante providencia de 14 de octubre de 2003[30], decretó la revocatoria de la sentencia de primer grado y en su lugar absolver a la parte demandada de las pretensiones elevadas por la parte actora.

Mediante memorial adiado el 03 de febrero de 2005[31], la doctora DIANA MARCELA ROA SALAZAR en calidad de apoderada del Ministerio de la Protección Social – Grupo Interno de Trabajo Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia (GIT), aporta copia del memorando GPSPC-ASNP-072 de 02 de febrero de 2005, rubricado por la doctora MYRIAM GUTIÉRREZ PERILLA, por medio del cual se realiza informe del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998 en el que se establece su origen en los diversos procesos judiciales adelantados en los Estrados Judiciales de Barranquilla, la forma en que fueron pagados los dineros en ella declarados, los montos y factores conciliados; es de anotar que se echa de menos en ese documento la pormenorización de las erogaciones realizadas de forma continua en la mesada pensional de los beneficiarios del acta.

Reposa reproducción de la resolución 1797 de 29 de agosto de 2003[32] del GIT, con la que se da cumplimiento a la decisión de 17 de septiembre de 2001, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual también se aporta copia, relacionada con la revocatoria de la decisión proferida por el Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla en favor del ciudadano EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, la cual se encuentra acompañada de ejemplar del memorando GPSPC-SNP 702 de 26 de agosto de 2003, suscrito por RICARDO SAAVEDRA SANDOVAL Coordinador del Área Sistema Nacional de Pagos del GIT, en la que se efectúa el análisis de los pagos realizados al mencionado extrabajador en virtud de la providencia judicial revocada y se establece el monto a reintegrar a la administración, lo cual quedó tasado en $85´000.000,00; haciendo precisión en que el monto de la mesada pensional no sufrió variaciones atribuibles a esta decisión judicial.

También militan en el cuaderno 4 de instrucción memoriales poder librados por algunos de los investigados en favor del doctor ORLANDO FIDEL OSORIO ARGOTE[33], así como copia auténtica del registro civil de defunción del señor EMIROMEL ORTIZ ORTIZ, que acreditaba el fallecimiento de éste el 02 de septiembre de 1996, situación que fue objeto de declaratoria de preclusión de la investigación mediante decisión de 20 de septiembre de 2006[34].

En cumplimiento de las disposiciones probatorias libradas por la Fiscalía instructora, se allegó memorando GPSPC-ASNP 387 de 28 de septiembre de

[29] Folios 291 a 297 del c. o. 3 de instrucción.
[30] Folios 1 a 13 del c. o. 4 de instrucción.
[31] Folios 35 a 45 ídem.
[32] Folios 35 a 69 ídem.
[33] Folios 105 a 127 ídem.
[34] Folios 138 a 140 del c. o. 4 de instrucción.

2006[35], en el que se informa a la investigación las labores que para entonces se venían adelantado por el GIT en cumplimiento de las órdenes dadas en sede de consulta respecto de las decisiones judiciales proferidas por los distintos Estrados Laborales de Barranquilla en favor de los beneficiarios del acta de conciliación 050 de 1998, salvo lo atinente al señor EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ, respecto de quien ya se había emitido acto administrativo sobre el particular.

En el anunciado escrito se encuentran enlistados los montos que debían reintegrar los extrabajadores investigados acorde a las providencias revocadas en consulta, la de los dineros cancelados en virtud de otras providencias de las que no se tenía conocimiento de si se había agotado dicho grado jurisdiccional; así como de aquellas que fueron objeto de conciliación sin que obrara evidencia de su pago; de las que habiendo sido parte de las decisiones conciliadas no se contaba con prueba de que se hubieren consultado o pagado; apreciándose como común denominador dentro del objeto de los factores conciliados el reclamo de la prima sobre prima, el cual más adelante se estudiará en detalle.

Yace el informe de policía judicial 1856 ADESP-DIJIN fechado el 10 de octubre de 2006[36], con el que personal de la Policía Nacional aporta a la investigación copias de los registros civiles de defunción de los señores EMIRO ALBERTO TRIANA DUICA, FRANKLIN WILCHES MANOTAS y PEDRO NOLASCO ROSADO OSORIO, novedad que ameritó la declaratoria de preclusión de la investigación respecto de éstos y la correspondiente cesación de procedimiento.

En torno del perfil patrimonial de los investigados, en específico, sobre los bienes muebles o inmuebles de los que éstos pudieren ser titulares, se aportó informe por el CTI de la Fiscalía General de la Nación identificado con el consecutivo 342821 FGN-CTI-DNI-N-20 fechado el 15 de mayo de 2007[37], en el que se contienen los datos de los bienes de propiedad de los señores JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, GABRIEL BARRIOS ORTIZ, JOSÉ IGNACIO MOSQUERA, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO y VÍCTOR CASTRO MIRANDA en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

El 12 de junio de 2007, fue aportado estudio contable elaborado por el mismo cuerpo investigativo, identificado con el numerado 347480-GDAP-29-N[38], complementario del anteriormente reseñado, dirigido a establecer el perfil patrimonial de los investigados, extendiéndose a la información de las cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos que cada uno de los enlistados reportaba en las oficinas de registro y entidades bancarias, aportando la documental que soporta el estudio.

Entre el 23 y el 26 de julio de 2007, se recaudaron las indagatorias de algunos de los procesados en la ciudad de Barranquilla[39], recolección que inició con

[35] Folios 145 a 184 ídem.
[36] Folios 186 a 190 ídem.
[37] Folios 219 a 242 ídem.
[38] Folios 244 a 284 del c. o. 4 de instrucción.
[39] Las indagatorias referidas se encuentran agrupadas en el cuaderno 5 de instrucción desde el folio 30 al 213.

la exposición injurada del señor **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO**, quien habiendo informado sus generales de Ley, pasó a exponer algunos pormenores de su relación laboral con la empresa portuaria, mencionando que ocupó los cargos de estibador, supervisor de cuadrilla y supervisor auxiliar; adelantó una demanda colectiva que conjuntamente iniciaron los supervisores de cuadrilla representados por el doctor RAFAEL PÉREZ, asunto por el que se le reconocieron cerca de $16´000.000,00; estando trabajando aún se tramitó demanda ante el Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla por intermedio del doctor JAVIER BORNACELLY CAMBELL que todavía no se ha pagado, en ese reclamo se discutió lo atinente a recargo del 35% de nocturno; también recuerda haberle extendido mandato a la doctora NIRA ESTHER FÁBREGAS para el reclamo de uniformes y calzado, de lo que le entregaron $3´000.000,00; a ALFONSO TAPIAS para lo de transporte de lo que le entregaron $22´000.000,00; al doctor ALFONSO COLLANTE se le encomendó el reclamo de prima sobre prima, de lo que le fueron entregados $36´000.000,00; así como asuntos adelantados por otros profesionales que en ese momento no recordó el nombre; los abogados revisaban si había lugar al adelantamiento de los solicitudes y según eso se iniciaba o se desistía de ello.

Al interrogarlo acerca del acta de conciliación 050 de 20 de mayo de 1998, comentó que entregó poder de buena fe y que ese asunto le reportó el pago de $36´000.000,00, desconociendo que en realidad se dispuso el pago en su favor de $81´600.000,00, ya que no fue posible obtener copia de la conciliación, mencionando que no recuerda cuántos poderes libró ni tampoco el nombre de los abogados a quienes les fueron extendidos. No tiene forma de saber si estuvo bien o mal liquidado, por lo que los abogados fueron quienes revisaron y encontraron algunos renglones que estaban pendientes por incluir, lo que dio lugar a las demandas que ellos mismos redactaron e iniciaron según el criterio profesional. Se le ponen de presente algunos pagos que el procesado hasta ese momento no había mencionado, dentro de los que se encuentran los relacionados con acta de conciliación de finales de 1993 y algunas de las resoluciones que disponían pagos en su favor, constituyéndose estos en hasta doble y triples pagos de los mismos conceptos, frente a lo que adujo haber recibido parcialmente los montos mencionados de manos de algunos de los abogados que se le pusieron de presente, que no percibió incrementos en su mesada pensional y que si se dio alguna clase de defraudación a los recursos de la Nación fue directamente por las gestiones de los abogados, desconociendo la presunta falsedad de las actas de conciliación de finales de 1993 que se le exhibieron dentro de los eventos sindicados, declarándose inocente del señalamiento efectuado como determinador de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

Seguidamente se escuchó al señor **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, quien se desempeñó en el terminal marítimo de Barranquilla como inspector de obras, siendo directivo del sindicato SINDEOTERMA para los años 1985 – 1986, en el cargo de secretario de la junta directiva; al retiro de la empresa por la liquidación de la misma acometió reclamo por intermedio del doctor RICARDO PRETELT que correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla en el que se discutió lo atinente a reliquidación pensional por diferencia salarial en el año 1995, percibiendo por ello $6´000.000,00; al señor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO le otorgó poder para el reclamo de diferencia de sueldo de 25% a partir de un reajuste

salarial correspondiente a 1989, profesional al que también se le entregó poder para el cobro de diferencia de primas, el cual no fue pagado y se llevó a cabo ante el mismo Estrado Judicial; reclamaciones que acometió por concejo de los mismos abogados, quienes le dijeron que había lugar a efectuar los pedimentos, sin que recuerde haber extendido más poderes.

Respecto de los pagos que se le hicieron, anota que se dieron por debajo de las sumas alcanzadas en la conciliación en consideración al porcentaje pactado con el profesional del derecho que lo representó por concepto de honorarios y que al haber sido canceladas las sumas mediante bonos TES se perdía otra parte por el cambio de los títulos, percibiendo el total de $50´000.000,00; en lo que atañe a las sentencia del Juzgado Octavo Laboral recuerda que su apoderado le comentó que esa decisión no había sido pagada, inclusive, hasta el momento en que rindió indagatoria; hace referencia al hecho de que al término de su relación laboral demandó en proceso ejecutivo a su empleadora porque después de siete meses no le habían cancelado lo correspondiente a sus derechos laborales y pensionales, y que nunca reclamó el concepto de prima sobre prima, pues lo solicitado en el proceso judicial fue la reliquidación de primas acorde al promedio semestral anterior, derecho que se encontraba contemplado en la convención colectiva de trabajo, percibiendo de esta forma el pago de la reliquidación por reconocimiento del 25% que adelantó el doctor COLLANTE PACHECO.

No obstante, la Fiscalía le pone de presente la identificación de los actos administrativos que en virtud de las diferentes reclamaciones se alcanzaron, que van desde el reconocimiento de sumas en su favor hasta las respectivas variaciones en la mesada pensional, en torno a las cuales anota que los reclamos por él efectuados se fundamentaron en las deficientes apreciaciones que realizara la empresa y que nunca se persiguió el pago de sumas dinerarias que habían sido debidamente cubiertas por la empresa como lo dice la Fiscalía; de cara a las reclamaciones consolidadas en las actas de conciliación de finales de 1993, asevera que desconoce a los abogados NICOLÁS SALINAS DE LA CRUZ y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, que nunca les ha otorgado poder para que lo representen, negando igualmente haber presentado documentación falsa dentro de los asuntos que se le han puesto de presente y declarándose inocente de los señalamientos enrostrados por la agencia persecutora.

En la misma data y urbe fue escuchado en injurada el señor **ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO**, quien se desempeñó como mecánico I y II, relación laboral a cuyo término entregó algunos documentos al abogado RICARDO TORRES para demandar a la empresa por reliquidación y diferencia de un renglón que le dejaron de pagar, sin que hubiere salido orden de cubrir esa obligación en su favor; al inquirirlo acerca de si conocía al abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO mencionó que le entregó papeles junto con el doctor RICARDO TORRES para que se adelantara el reclamo de la aludida reliquidación y una reclasificación del cargo de mecánico que ocupó, la cual sí se aplicaba a los trabajadores del puerto de Buenaventura y no a los de la costa Atlántica, por lo que se solicitó el reconocimiento de ese derecho, todo esto acorde a las indicaciones que daban los abogados respecto de la procedencia de los reclamos.

Frente al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que figura como beneficiario de $66´100.000,00, derivados de sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla gestionada por el referido profesional COLLANTE PACHECO por el concepto de prima sobre prima, acota que este abogado le entregó $16´000.000,00, que cuenta con una copia del acto que se le interroga con unos valores distintos a los que le ponen de presente; el concepto de prima sobre prima fue reclamado por que el doctor COLLANTE que dijo que había lugar a ello, agregando que nunca se le incrementó su mesada por factor distinto que el de los aumentos decretados por el gobierno. Al preguntarle acerca de las actas de conciliación de finales de 1993 en las que al parecer estuvo representado por los doctores RICARDO JOSÉ TORRES MORALES y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, manifiesta desconocer al último, haber recibido del doctor TORRES lo correspondiente a 15 días de huelga que no se le habían reconocido, no estar al tanto de los pactos relacionados con las actas de diciembre de 1993 y desconocer erogaciones en su favor por estos conceptos, cerrando su intervención con la declaratoria de inocencia.

Seguidamente fue recaudada la salida defensiva del señor **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, quien laboró para la empresa portuaria en los cargos de bracero, fiscal de tonelaje y winchero; anota que al culminar su relación laboral demandó a la entidad portuaria por intermedio del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, sin recordar cuál fue el concepto que motivó la acción judicial, alcanzándose el pago de $40´000.000,00 de más de $80´000.000,00 que recibió el abogado por la referida demanda; frente al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, la cual atendió, entre otros conceptos, el de prima sobre prima, refiere que no estuvo de acuerdo con ella porque los profesionales del derecho les decían que el reclamo era por otras prestaciones; los abogados eran los que establecían cuáles eran las acreencias a las que habría lugar a reclamar, memorando que entregó poderes a varios togados y que ya lo habían indagado sobre el particular en otra investigación.

Frente a las reclamaciones efectuadas en su nombre por los togados MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO, JORGE TOVAR GUERRA, JHONNY BARRIOS BARRIOS, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, DONALDO ENRIQUE FERNÁNDEZ, RAFAEL VILLALBA HODWALKER y ROBERTO ROMERO TURIZO menciona que esos eventos son objeto de la investigación en donde ya lo habían interrogado con antelación, sin que agregara algo distinto en esa oportunidad, pasando a cuestionar las reclamaciones realizadas en las actas de conciliación rubricadas a finales de 1993, en las que registra como beneficiario y representado por los abogados ADALBERTO DE LA HOZ MILLAN, HENRY ADOLFO DIAZ AMARIS, JOSÉ VIRGILIO MENDOZA MELENDEZ y ALBERTO JOSÉ PEÑA HERNÁNDEZ, informando no conocer a ninguno de los mencionados, no haberles entregado poder o haber recibido dinero de manos de ellos por ningún concepto, y declarándose inocente de las sindicaciones efectuadas.

El 24 de julio de 2007, vertió su exposición el extrabajador portuario **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, quien aseveró haber laborado para la empresa portuaria en los cargos de estibador y winchero por el espacio de más de quince años, vínculo al término del cual le extendió poder al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO en el año 1994, para solicitar la reliquidación de primas y vacaciones, asunto que fue adelantado en el Juzgado Octavo

Laboral de Barranquilla y del que se derivó el pago de $76´000.000,00 de los cuales su representante le entregó el monto de $33´000.000,00, precisando que libró varios poderes pero para el adelantamiento de la misma demanda, validando la interposición de la reclamación judicial en el hecho de que todos los trabajadores que salían pensionados reclamaban los rubros por él pretendidos.

De cara a la suscripción del acta de conciliación 050 de 1998, mencionó que el trámite se le había encomendado al doctor COLLANTE, pero al final el que le canceló lo correspondiente a ese pacto fue el doctor LUIS GUITIÉRREZ; inició la reclamación al encontrar que su liquidación había sido indebidamente tasada, ya que, considera, no le habían integrado correctamente los renglones que establecían la base de liquidación, y reclamó el concepto de prima sobre prima porque sí estaba en la convención colectiva de trabajo, pues había lugar a solicitar su reconocimiento, precisando que lo rogado fue la reliquidación de prima de servicios, cesantía, reamortización de la mesada pensional y salarios moratorios, lo que fue objeto del único pago que percibió de la empresa portuaria.

Al interrogarlo acerca de los pagos que se ordenaron por intermedio de otros abogados, en específico, los entregados a los togados FRANKLIN MANZANO FERNÁNDEZ, RICAURTE BARRIOS e IRIS DALIA VÁSQUEZ VÁRGAS, memora que por la gestión del primer abogado recibió de manos del doctor LUIS GUTIÉRREZ lo pagado por una tutela en cuantía de $3´000.000,00, de los demás profesionales nunca ha escuchado y dice no conocerlos, así como ignorar los trámites que rondaron la suscripción de las actas de conciliación de finales de 1993, el fundamento de las aseveraciones del doctor JOSÉ MARÍA IGUARÁN de cara a la falsedad de éstas; y declarándose inocente de los señalamientos que se pusieron de presente.

También se recepcionó la versión del señor **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, ciudadano que trabajó para la empresa portuaria por aproximadamente 14 años ocupando los cargos de estibador e integrante de la junta intergremial por el lapso de 8 meses, 4 de los cuales ostentó la calidad de directivo sindical, en donde terminó su vinculación con la empresa; memora que le entregó poder al doctor COLLANTE PACHECO para reclamar las cesantías, de lo que le fueron reconocidos $27´000.000,00, trámite que inició motivado por el concejo que le diera el mismo abogado, sin que le extendiera mandato a otros profesionales del derecho para su representación; por lo que desconoce el pago presuntamente efectuado en su favor por la gestión realizada por el abogado JORGE SAID NARVAEZ M., acorde a la evidencia que sobre este reconocimiento obra en el record de pagos que se le pone de presente en la diligencia. Frente al fundamento acogido en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que estuvo representado por el mismo profesional y que remite al reconocimiento del renglón de prima sobre prima, dijo no haber facultado al doctor COLLANTE PACHECO para el reclamo de ese emolumento, le encomendó la solicitud de cesantías nada más, y se realizó teniendo en cuenta el criterio del abogado que lo asesoró.

En torno de las reclamaciones que se concretaron en las actas de conciliación de finales de 1993, en las que presuntamente acudió representado por los profesionales del derecho MORAYMA MAJUL MAZA, IRIS

DALIA VÁSQUEZ VÁRGAS, JORGE MANUEL CAMARGO GALLARDO, JUAN AMARANTO ALONSO y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, dijo no conocerlos, no haber otorgado poder distinto al que inicialmente refirió respecto del doctor COLLANTE PACHECO y desconocer el contexto de las actas de conciliación de finales de 1993, ya que nunca concurrió a la celebración de éstas de forma personal o por intermedio de apoderado.

En la data siguiente fue recaudada la indagatoria del señor **CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS**, ciudadano hoy obitado que entonces manifestó haber laborado a órdenes del puerto de Barranquilla desde 1971 a 1991, ocupando cargos en la dependencia de obras civiles, base y finalmente, a razón de un accidente fue asignado como aguador, cargo en el que accedió a su pensión; para ese momento sus compañeros le dijeron que había quedado mal liquidado, por lo que acudió a la oficina de los doctores LILIA AREVALO, LUIS GUTIÉRREZ ALFARO y MIRYAM CHARRIS otorgándole en ese momento poder a la primera mencionada para el reclamo de reliquidación, unas primas y uniformes, sin recordar a qué Juzgado le correspondió la demanda, de la que percibió $10´000.000,00; después el doctor GUTIÉRREZ ALFARO le entregó $140´000.000,00, solicitudes que se efectuaron bajo los criterios de los abogados, librando tres poderes en total, ya que manifiesta no conocer de Leyes.

Respecto del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que se pactó el concepto de prima sobre prima en su favor y resultó beneficiado con la suma de $40´200.000,00, anota no tener conocimiento de su existencia, no haber otorgado poder para este tipo de actuación, el cual también desconoce en cuanto a su contexto. En torno de la representación que en su nombre adelantaron los profesionales LILIA DEL CARMEN AREVALO QUINTERO y HENRY PÉREZ SEQUEA comenta no estar al tanto de los pagos que de estos se desprendiera, únicamente de los tres asuntos a los que hace referencia al inicio de su intervención y el pago que le hizo la doctora MIRYAM CHARRIS BLANCO a partir de una conciliación de finales de 1993, de quien recibió $10´000.000,00; sin embargo, anota que nada tiene que ver en la presunta falsedad de las actas que se le han puesto de presente en la diligencia, ya que él desconoce ese tipo de actos a los que arribaron personas con conocimiento especializado en los temas sobre los que giraron los pactos, declarándose inocente de los señalamientos efectuados por la Fiscalía, de los cuales dice, deben ser atribuidos a los abogados.

Después de esta indagatoria reposa copia auténtica del registro civil de defunción del señor ALFONSO NIÑO ESCORCIA[40], la cual se dio el 20 de febrero de 1997; persona que estaba siendo investigado dentro de la presente actuación como beneficiario de la plurimentada acta de conciliación.

Igualmente fue escuchado el señor **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, ciudadano que laboró para la empresa portuaria en el cargo de estibador por cerca de 12 años, cuando accedió a la pensión por el plan 53 que se establecía convencionalmente; al término de su relación laboral decidió demandar a la empresa, para lo que entregó poder a la doctora MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA, sin que para ese momento recordara el objeto específico de aquel mandato, de quien recibió el monto de $3´700.000,00;

[40] Folio 67 del c. o. 5 de instrucción.

al igual que al esposo de la mencionada, doctor HENRY OFERNES AMELL sin recordar para qué renglón, percibiendo por este reclamo la suma de $3´030.000,00; al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO le encomendó el reclamo de reliquidación de prima de servicios, sin recordar cuál fue el monto que le entregó por su gestión; y al doctor ROBERTO ROMERO TURIZO le extendió mandato para solicitar el reconocimiento y pago de la prima sobre prima; pretensiones que formuló porque los abogados le dijeron que había lugar a adelantar estos reclamos, de quienes dice que lo asaltaron en su buena fe.

Frente al acta de conciliación 050 de 1998, en la que se le benefició con el monto de $50´000.000,00, relacionado con el concepto de prima sobre prima, refiere no tener conocimiento de los detalles que rondaron la firma de ese acto, reiterando que si se hizo alguna solicitud fue porque los abogados le informaron que tenía derecho a ello y tampoco le entregaron todos los dineros que se le ponen de presente. Frente a los pagos que se efectuaron en su beneficio por intermedio de otros profesionales del derecho, en específico, por la gestión de los togados RICAURTE BARRIOS BARRIOS, ENITH MARÍA ROMERO, DUBYS RAMOS RAMOS, IRIS DALIA VÁSQUEZ VÁRGAS y MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA, dice que sólo facultó a la última pero no fue para celebrar conciliación sino para una demanda, a los demás refiere no conocerlos, y si se formularon algunas pretensiones fue por el concejo que le dieron los abogados a los que se ha hecho referencia, por lo que ante los señalamientos de la Fiscalía, que incluyen las actas de conciliación falsas de finales de 1993, se declara inocente al haber sido asaltado en su buena fe.

Seguidamente se escucha al señor **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, quien laboró para la empresa portuaria desde 1979 a 1993 como mensajero, brasero y winchero, accediendo a su pensión por la liquidación de la empresa; le otorgó poder al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO quien se acercó a varios trabajadores diciendo que él les adelantaría una petición de reliquidación a la que tenían derecho, asunto del que le entregó $30´600.000,00; al doctor ÓSCAR OROZCO PACHECO le entregó poder para el reclamo de bonificación, de lo que le entregó $11´000.000,00; al doctor LUIS MARIO CORTÉS RODRÍGUEZ, quien trabajaba en Bogotá con el doctor JORGE SAID NARVÁEZ, refiere que llegó a él, se le entregó para el reclamo de trienios de lo que también resultó el pago de $11´000.000,00; a ARNULFO OLIVEROS se le encomendó el reclamo de reliquidación de vacaciones y le entregó $235.000,00.

Respecto del acta de conciliación 050 de 1998, en la que fue representado por el doctor COLLANTE PACHECO y se dispuso el pago en su favor del monto de $68´200.000,00 por concepto de prima sobre prima, anota que él no sabía nada, que el abogado lo llamó para entregarle el dinero pero no era la suma que se le pone de presente; insiste en que reclamó los conceptos porque los abogados le dijeron que había derecho a ello, además las solicitudes se hicieron por vía judicial para que los jueces revisaran la procedencia de las pretensiones; en cuanto a las actas de conciliación de finales de 1993, aduce que a algunos de los abogados que se encuentran vinculados con esos pactos les dio poder, salvo a las doctoras ESPERANZA DÍAZ CANTILLO e IRIS DALIA VÁSQUEZ VÁRGAS. En torno de los señalamientos que le enrostra la Fiscalía se declara inocente, ya que no

tenía forma de arribar a la falsedad de las actas de 1993 y confió en que los abogados estaban obrando debidamente.

Finalmente, esa data se escuchó en injurada a **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, quien una vez informados sus generales de Ley, hizo un esbozo de su paso por la empresa portuaria en donde se desempeñó como estibador y directivo de la junta gremial del sindicato de trabajadores, cargo en el que terminó su vínculo con la empresa portuaria, acogiéndose al plan especial para ello; para entonces le otorgó tres poderes al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, sin recordar tampoco cuál fue la cantidad de dinero que le entregó el togado por aquella gestión, que se dio por solicitud de éste, quien le dijo que se podría solicitar el reconocimiento de algunos conceptos acorde al contenido de la convención colectiva de trabajo, ante lo que accedió de buena fe. Comenta que también le otorgó poder al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTES PACHECO, sin que memore para qué tipo de reclamo o cuánto dinero le entregó por la reclamación que adelantó, refiriendo que las solicitudes adelantadas se fundaron en la indebida liquidación que realizó la empresa de sus prestaciones sociales.

En lo que atañe al reconocimiento alcanzado en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que registra como beneficiario del importe de $88´300.000,00, menciona que él entregó el poder para que el abogado adelantara las gestiones a que hubiere lugar, sin que tenga conocimiento de si esas solicitudes eran legales o ilegales, incluyendo el concepto de prima sobre prima que se le pone de presente en curso de la diligencia; de cara a otros pagos que registran en su favor, entregados a los abogados NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA, ROBERTO ROMERO TURIZO, JORGE SAID NARVÁEZ y LUIS CARLOS RODRÍGUEZ, manifiesta desconocer tanto a los profesionales como las actuaciones que adelantaron en su nombre de quienes no recibió pago alguno; de otro lado, al preguntarle acerca de las actas de conciliación de finales de 1993, en las que al parecer estuvo representado por los abogados JOSÉ EDUARDO PRIETO LAGOS, DIÓGENES PALACIOS RODRÍGUEZ, ELVIA MERCEDES MOLINA DE FRANCO, HERNANDO VILLAFAÑE USME y JUAN AMARANTO ALONSO, comentó que no conoce a ninguno de los mencionados y se declara inocente de los hechos que en curso de la diligencia le enrostra la agencia persecutora.

El 26 de julio de 2007, prosiguiendo con la dinámica de recaudo de indagatorias en Barranquilla, fue escuchado el señor **EDUARDO MOLINA MORALES**, quien dijo haber laborado para la empresa portuaria desde el 15 de junio de 1971 al 13 de diciembre de 1984, ocupando el cargo de estibador, comentando que para el momento en que se vertió la injurada estaba tramitando su pensión de jubilación, teniendo en cuenta que se le desvinculó teniendo un tratamiento médico pendiente que a la fecha no se le había practicado, situación que le impuso adelantar las acciones pertinentes en contra del director del puerto de la época en que se dio su retiro, al coartar sus derechos; refirió haberle entregado mandato al doctor COLLANTE PACHECO para una solicitud que nada tiene que ver con el valor real que le deben reconocer a él por los años de salario que le han dejado de entregar, que se concretó en el acta de conciliación 050 de 1998. Las reclamaciones que ha iniciado se fundamentan en los derechos que la empresa le desconoció, rechazando la imputación de los eventos presuntamente ilícitos que le revela la Fiscalía, ya que el señor CARLOS ARTURO GÓMEZ AGUDELO coordinador del GIT ha ocultado la historia

clínica que da cuenta de las afecciones que tenía para el momento en que se dio su retiro de la empresa portuaria y considera que es éste quien debe responder penalmente por el ocultamiento de los documentos que hacen parte del anotado expediente. Al único abogado que le entregó poder fue al doctor COLLANTE PACHECO para que le adelantara la solicitud de pensión y enfatizando en que se abstuvo de entregar mandatos a otros abogados.

A su turno, el señor **ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL**, hoy occiso, quien laboró para la empresa portuaria entre 1978 y 1993 desempeñándose en los cargos de auxiliar de servicios varios, tarjador y supervisor de cuadrilla, informó que al finalizar su relación laboral por la liquidación de la empresa otorgó poder al doctor ÉDISON OROZCO PACHECO para el reclamo de uniformes, quien después entregó poder a la doctora NIRA ESTHER FÁBREGAS sin recordar cuanto le dieron por esa reclamación, y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO a quien se le libró mandato para solicitar el pago de prima sobre prima; al doctor JUAN LÓPEZ AROCA también se le entregó poder y a otros que no recuerda el nombre, cada uno adelantaba el cobro de un concepto en especial. En cuanto a la reclamación concretada en el acta de conciliación 050 de 1998, en la que figura como beneficiario de $70´700.000,00, anota que no sabe nada y no recibió plata; los dineros que percibió fueron de manos de los abogados COLLANTE PACHECO, LÓPEZ AROCA y el de ÉDISON OROZCO y NIRA FÁBREGAS, sin que se equipare a las sumas que dice la Fiscalía que le han entregado por cada uno de los asuntos enrostrados.

Al interrogarlo acerca de si conocía a los togados HENRY OFERNES AMELL, HUMBERTO QUIÑONES MOLINEROS, ÉDISON OROZCO CABALLERO, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, NARCILIO ARBOLEDA CAICEDO y FREDDY HERNÁNDEZ, manifestó que no recuerda haberles dado poder o haber recibido pagos de éstos, y en torno de los que mencionó arriba se reafirma en su dicho; frente a las reclamaciones concretadas en las actas de conciliación de finales de 1993 en las cuales estuvo representado por los abogados ALFREDO LUIS TAPIA AHUMADA, CASTA MARÍA HERRERA, CLODOMIRO MARTÍNEZ BERNAL, IRIS DALIA VÁSQUEZ, JENNY CECILIA PÉREZ SOLANO, MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA y MELBA ESTHER ERAZO HERNÁNDEZ dice de estos que únicamente le ha entregado poder a la última mencionada, pero que no le había cancelado nada de lo reclamado; en lo que respecta a los demás afirma no haber entregado poder para la celebración de las actas de conciliación y fundamentar el otorgamiento de los poderes en el hecho de que los abogados le informaron que tenía derecho a efectuar esos reclamos por vía judicial y administrativa, por lo que se declara inocente de los señalamientos.

De otro lado, el ciudadano **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, informó en la versión injurada al Despacho Fiscal que trabajó para la empresa portuaria desde el 16 de septiembre de 1980 al 30 de diciembre de 1993, inicialmente como estibador y después como miembro de la junta intergremial por el lapso de seis meses en el sindicato SINDIODERMA, cuando se produjo su retiro por la liquidación de la empresa; habiéndose fracturado la relación laboral le encomendó al doctor ROBERTO ROMERO el reclamo judicial de un concepto que desconoce, del cual le entregó $37´000.000,00, ya que se limitaba a firmar un poder y los abogados se encargaban de establecer cuáles eran los conceptos a reclamar; del mismo modo

encomendó solicitud al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, quien le entregó $63´000.000,00; al doctor ARMANDO NOGUERA le extendió mandato del que no recuerda el concepto, quien le entregó alrededor de $7´000.000,00, memorando que le ha extendido poder a otros pero los mencionados son los únicos que le han dado dinero por las gestiones adelantadas; refirió que se demandó en varias oportunidades y con varias personas para poder atinarle a algo.

Al preguntarle acerca de si conocía al doctor COLLANTE PACHECO, quien adelantó la solicitud que derivó en la firma del acta de conciliación 050 de 1998, y de la que se benefició en cuantía de $123´500.000,00 por reliquidación de vacaciones, dijo que recibió ese dinero de quien inicialmente le fue otorgado el encargo profesional, esto es, del doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, quien le entregó el 50% de la suma ordenada en el acta, al otro abogado no lo conoció; frente a otros pagos que registran en su nombre, asociados con la gestión de los abogados CÁNDIDA TATIS RICARDO y ROBERTO ROMERO TURIZO dice no recordar haberle entregado poder o recibido dineros de manos de éstos, aunque no descarta que sean profesionales que sustituyeron algún poder por él librado, desconociendo igualmente las actas de conciliación de finales de 1993, en el entendido que refiere haber otorgado poderes sólo hasta 1995, manifestando que se declara inocente de las imputaciones efectuadas por la Fiscalía, ya que las reclamaciones que se hicieron contaban con sustento.

En su intervención defensiva, el señor **ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS**, actualmente fallecido, manifestó que trabajó para la empresa portuaria por el lapso de 13 años y 8 meses en el cargo de electricista 1, hasta cuando se retiró por la liquidación de la empresa, a la que pese a haber tenido un accidente que le produjo la pérdida de su ojo derecho, nunca la demandó en vigencia de la relación laboral; adelantó reclamo por conceptos que le sugerían los abogados, a su casa fueron a visitarlo los togados COLLANTE PACHECO, AHUMADA y una señora DUBYS RAMOS RAMOS, un señor de apellido NOGUERA quien solicitó el pago relacionado con uniformes y calzado, otra que se llamaba CARMEN NAME RUBIO, los mencionados le prestaban $200.000 o $500.000, de lo que le cobraban el interés del 10%, y le hacían firmar el poder; COLLANTE PACHECO le entregó en una oportunidad $6´000.000,00, se les firmaba el poder y nunca más se les veía la cara; el doctor AHUMADA le entregó como 4 o 5 millones, reclamos que se realizaron porque los abogados le decían que había derecho a ello; sin embargo, anota, que los abogados lo engañaban pues no sabe si cobraban el dinero de los reclamos que nunca le entregaban a él.

Al interrogarlo acerca del conocimiento que tenía del acta de conciliación 050 de 1998, en la que está como beneficiario de la suma de $127´900.000,00 relacionados con el concepto de prima sobre prima, anota que de esa plata le entregaron como $7´000.000,00 nada más, a él lo convencieron entre sus excompañeros y los abogados para que entregara los poderes a que ha hecho referencia, sin que tuviera ciencia respecto de los conceptos que se reclamaría. La petición adelantada por el doctor PEDRO ANTONIO AHUMADA, de quien recuerda, vivía en Sabanalarga y ahora en Bogotá, le fueron cancelados $9´000.000,00 más el dinero que el abogado le prestaba; en torno de las actas de conciliación de finales de 1993, en la que fue representado por la doctora DUBYS RAMOS RAMOS, menciona que ella fue con un señor de apellido CEPEDA a solicitarle poder para reclamar en su

nombre pero él no le dio facultad para conciliar; finalmente, cuando ella lo llamó para que ratificara el poder, le dijo que no lo haría que dejara así, que no lo metiera en más problemas, por lo que no se le pueden enrostrar eventos relacionados con conciliaciones de 1993, ya que en esa anualidad no entregó poderes para conciliar, desconociendo el contexto de las mencionadas acta; situaciones que lo llevan a declararse inocente de los señalamientos de la Fiscalía y estar arrepentido de entregar poderes a esas personas.

Interrogado el señor **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, informó a la Fiscalía instructora que laboró para la empresa portuaria en el año 1968 por el lapso de 6 meses, después se volvió a vincular en 1981, trabajando hasta 1993 en los cargos de estibador, distribuidor, liquidador, supervisor de cuadrilla, supervisor general y winchero; acota que realizó una reclamación a la empresa porque estaba mal liquidado, no le habían integrado la totalidad de los conceptos a los que tenía derecho, ese asunto se lo delegó al doctor COLLANTE PACHECO en el año 1994, sin que le diera un solo peso por ese asunto, por lo que decidió entregarle poder al doctor ARNULFO OLIVEROS para el reclamo de las horas extras que nunca le habían reconocido, petición de la que se le entregaron $23´000.000,00; al doctor JUAN LÓPEZ AROCA se le encargó la solicitud de feriados, el abogado le entregó el poder a otro que alcanzó el pago de $38´000.000,00; también al doctor LUIS GUTIÉRREZ quien no alcanzó a sacar el negocio; anota que tuvo que hacer varias reclamaciones debido a que ocupó cargos en varias dependencias de la empresa portuaria, y fueron los abogados quienes le dijeron que tenía derecho a realizar esas reclamaciones, por cuanto no se le había reconocido la totalidad de los derechos laborales que lo cobijaban en cada uno de los cargos desempeñados.

En lo que atañe al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, recuerda haberle entregado poder con unos excompañeros del puerto en su oficina, deprecando el reconocimiento de algunos conceptos según el área en la que hubieran laborado, mostrándose desconocedor del acta de conciliación 050 de 1998, en la que se pactó el pago en su favor de $100´300.000,00 por concepto de prima sobre prima, ya que después de ese evento no se volvió a saber nada del referido abogado, sólo hasta cuando les informó que el pago en su favor no se podía dar debido a un error de orden aritmético, a todos les pagaron menos a nosotros. Los reclamos que se acometieron estaban fundados en que la empresa no integró debidamente la base de liquidación de sus prestaciones sociales, ya que las percepciones especiales que tenían en cada cargo no se incluyeron en la amortización final, y cada uno de los reclamos se hizo acorde a las indicaciones de los profesionales del derecho. Recuerda que en el asunto en el que actuó el doctor ANTONIO CASTILLEJO DE SALES no se dio el pago y el abogado para los días en que le entregaron el dinero voló a Brasil y nunca se supo nada más de él.

Anota que le confirió poder a varios abogados pero que únicamente recibió dinero de algunos de ellos, se pactaba el pago de un porcentaje de las resultas del proceso y después ellos cambiaban las condiciones y les entregaban valores inferiores a los convenidos; muchas de las deprecaciones que se hicieron a su nombre carecían de poder para ello, los abogados averiguaban los datos de los extrabajadores y efectuaban solicitudes sin autorización, por lo que se muestra desconocedor de los

reclamos concretados en las actas de conciliación de finales de 1993 y del contexto de las mismas, dado que las personas que al parecer lo representaron no las conoce, negando que le hubieren dado dobles pagos de los mismos conceptos, por lo que se declara inocente de los hechos que le atribuyen y si existe responsabilidad penal en estos hechos, debe ser respecto del actuar de abogados, Jueces y Magistrados que permitieron que se concretaran los pagos indebidos.

El 27 de julio de 2007, fue escuchado en indagatoria el señor **JULIO LLANOS SARMIENTO**, quien trabajó en el puerto marítimo y fluvial de la ciudad de Barranquilla desde 1979 a 1991 en el cargo de estibador, accediendo a su beneficio pensional en consideración a que tenía tiempo complementario para ello con el ejército; después de su retiro entregó poder a varios abogados dentro de los que recuerda a la doctora JULIA GALLARDO y al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO que tenía mandato para 2 o 3 asuntos, sin que guarde recuerdo de para qué se libraron esos poderes o cuánto le representaron las gestiones de esos profesionales; memora que para el año 1993 el doctor COLLANTE le entregó cerca de 46 o 47 millones de pesos, sin que recuerde de qué asunto de los que le encomendó se dio el pago; las reclamaciones efectuadas se iniciaban por concejo de los abogados y se libraban varios poderes porque eran varios los conceptos que ellos reclamaban. En cuanto a los eventos que rondaron la emisión del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que se dispuso el pago en su favor de la suma de $100´600.000,00 por el reconocimiento de prima sobre prima, menciona que no sabía que era por ese valor, ya que recibió solo $46´000.000,00 y desconoce los pormenores del concepto reclamado.

Al preguntarle acerca de otros pagos que se registran a su nombre, derivados de actas de conciliación de finales de 1993, en donde estuvo representado por los abogados JULIA GALLARDO DE LEÓN, ANTONIO CASTILLEJO DE SALES, CESAR LEÓN JIMÉNEZ y MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ reconoce haber recibido los réditos de su representación; en cuanto a las actas de conciliación de finales de 1993 y otros actos a los que concurrió por intermedio de los abogados OMAIRA GÓMEZ TORRES, SALOMÓN CASTRO VILLAFAÑE, CÉSAR LEÓN JIMÉNEZ y JORGE HERNÁN GÓMEZ PAVÓN anota que a la doctora OMAIRA y al doctor JORGE HERNÁN no los conoce, a los demás sí; respecto del togado JOAQUÍN BUSTO CANTILLO recuerda que se reclamó por su intermedio bonificación por carbón y uniformes y calzado, pero nada de eso lo pagaron, mostrándose desconocedor de los detalles que rondaron la emisión de las actas de conciliación de finales de 1993 y declarándose inocente de los señalamientos que le enrostraba la Fiscalía, ya que ellos fueron víctimas de los abogados que eran quienes sabían de la procedencia de estos reclamos.

La misma data fue escuchado **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, ciudadano que se desempeñó como brasero y operador de maquina en la empresa portuaria desde noviembre de 1977 hasta la misma mensualidad de 1992, período en el que demandó en una oportunidad a la empresa, sin que recuerde por qué motivo ni cuánto fue lo que le representó esa reclamación; posterior a su retiro le entregó poder a varios abogados dentro de los que recuerda a LUIS ALFARO GUTIÉRREZ y a MIRNA GARCÍA, abogada que nunca le entregó dinero y, menciona, lo robó; también admite haber facultado al doctor EMILIO COLLANTE PACHECO, quien no le dio ni cinco

centavos; reclamaciones que se adelantaron mediando el concejo de los abogados porque de Leyes no sabe nada.

En cuanto a la conciliación 050 de 1998, en la que se benefició del pago de $120´300.000,00 por el renglón de prima sobre prima, dice que hasta el momento de la diligencia se entera de ese pacto, del que acota no ha recibido dinero; los reclamos realizados se dieron ante la inconformidad de lo que se pagó por liquidación de prestaciones sociales por la empresa portuaria, y en torno de los demás pagos que se realizaron en su favor a través de otros abogados dice no recordar que se hubiere dado poder a otros togados para su representación judicial y a los que le extendió mandato nunca le entregaron dinero de aquellas solicitudes; se muestra ajeno a las reclamaciones concretadas en 12 conciliaciones de las que fue beneficiario, a las que acudió por intermedio de diversos profesionales del derecho, así como desconocer el contexto de aquellas rubricadas a finales de 1993, por lo que se declara inocente ante los señalamiento de la agencia Fiscal recalcando que no ha recibido dineros derivados de los hechos que se le ponen de presente.

Luego se escucha al extrabajador portuario **LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR**, también fallecido, ciudadano que se desempeñó en la empresa Puertos de Colombia en los cargos de estibador y en el área de bioestadística de la clínica del terminal desde el 01 de septiembre de 1979 al 20 de octubre de 1989, accediendo a su beneficio pensional por invalidez a razón de un accidente; con posterioridad inició reclamación en contra de la empresa mediante la gestión del doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO para la reclamación del mes de huelga, de lo que le entregó $20´000.000,00; después le encomendó al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO liquidación de prestaciones sociales, quien le entregó por ese asunto la suma de $48´000.000,00, afirmando que son los dos únicos abogados a los que dio poder para representarlo; él acudió a la oficina del doctor COLLANTE y éste le dijo que tenía derecho a reclamar esos conceptos; no obstante, refiere que desconoce los detalles de la celebración del acta de conciliación 050 de 1998, la cual se dio en su beneficio por el concepto de prima sobre prima y representó la suma de $88´900.000,00 en la que fue apadrinado por el togado en mención, así como del concepto que fue pactado en el acuerdo.

Se le interrogó acerca de la representación que en su nombre acometieron los abogados MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA, HENRY OFERNES AMELL GARCÍA y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, delegaciones de las que se derivaron pagos relacionados con actas de conciliación falsas de finales de 1993, respecto de los que dijo desconocerlos y nunca haber entregado poder para que lo representaran en el año 1993, además de mostrarse ajeno al contexto en el que se dio la confección de las referidas actas; concluyendo con la declaratoria de inocencia, ya que los cargos que se le imputan no dicen la realidad de los hechos y los ajustes que se han aplicado a su mesada pensional se han acogido a los aumentos de Ley.

El siguiente día el señor **ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** dijo en su diligencia de inquirir haber trabajado desde el 11 de julio de 1974 hasta el 18 de septiembre de 1991 en los cargos de estibador, winchero y operador de winche; al terminar su vínculo con la empresa le confirió poder al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO para el reclamo de ropa sin que le entregara dinero

derivado de ese concepto, también le entregó otro poder para adelantar otra demanda; al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO le encomendó la solicitud de reliquidación de prestaciones sociales por reamortización de prima de antigüedad en el año 1995 o 1996 quien le entregó $21´000.000,00, anotando que decidió extender los poderes porque los excompañeros y abogados lo convencieron de ello, sin que recuerde haber entregado otros mandatos; al preguntarle acerca del acta de conciliación 050 de 1998, en la que se dispuso el pago en su favor de $103´100.000,00 por concepto de prima sobre prima, dijo no saber nada y haber recibido de manos de su abogado sólo la suma antes mencionada, así como no tener conocimiento del concepto que se reclamó, pues eran los abogados los que manejaban esos asuntos normativos y le dijeron que tenía derecho a ello.

En cuanto a las deprecaciones que en su nombre adelantaron los abogados RAUL ALFONSO EBRATT, ÓSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, JUAN AMARANTO ALONSO, EMIL ALBERTO PULGARÍN LEMOS, GLADYS GUERRERO GUERRERO, HENRY ADOLFO DIAZ AMARIS y JENNY CECILIA PÉREZ SOLANO quienes acometieron el reclamo de algunos conceptos en su nombre consolidados, en parte, en las actas de conciliación de finales de 1993, refiere no conocerlos ni haberlos facultado para adelantar trámite alguno, así como desconocer las falsedades que se atribuyen a las referidas actas de conciliación, por lo que se declara inocente de los hechos enrostrados, atendiendo que nunca le entregó poderes a los togados que efectuaron esos cobros en su nombre, que además nunca le fueron entregados.

Frente a los eventos investigados se indagó al señor **LIBARDO JOSÉ BARRAZA RIVERA**, ciudadano que al enterarse de los hechos por los cuales se estaba interrogando en esa oportunidad, informó que éstos ya habían sido objeto de señalamiento en otra investigación penal, solicitando la suspensión de la diligencia para que se corroborara lo afirmado, petición ante la que la Fiscalía instructora accedió y ordenó revisar si los hechos escrutados guardaban paridad con los del sumario 453, sin que se agregara nada distinto al recaudo defensivo.

De otro lado, el 30 de julio de 2007, el señor **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** informó a la investigación que estuvo vinculado a la empresa entre 1977 y 1992 en el cargo de estibador hasta que se produjo la liquidación de ésta; comenta que le entregó poder a ÁLVARO VELEÑO BANDERA por el que le entregó $12´000.000,00; el doctor CIRILO CANTILLO le adelantó una solicitud que fue negociada con FIDUPACÍFICO, de lo que se entregaron más de $45´000.000,00; dice que hay varios asuntos pendientes de los que aún no le han entregado dinero, pues libró bastantes poderes; reclamos que se efectuaron porque los abogados le dijeron que tenía derecho a obrar en ese sentido; en cuanto a la representación que ejerció el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO recuerda que le dio mandato y él le entregó $6´500.000,00.

En cuanto a la conciliación 050 de 30 de abril de 1998, de la que se benefició en cuantía de $53´600.000,00 por reconocimiento de prima sobre prima, dice que de ese reclamo fue que COLLANTE le dio el dinero arriba indicado, él le debía como un millón de pesos y se lo descontó de ahí, dice que le pedían el poder y confiaba en que se haría una buena gestión, pero al ver las cifras se da cuenta de que no fue así; al preguntarle por la razón de haber

solicitado el concepto de prima sobre prima, al que no había derecho, argumenta que para esa época en que se adelantaron los reclamos no tenía idea de si eso estaba bien, ya que la mayoría de quienes peticionaron creían en lo que les decían los abogados. En cuanto a la representación que en su nombre acometieron los abogados ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA, JOSÉ MIGUEL COMAS SOLANO, ANA DOLORES MEZA CABALLERO, PEDRO MARTÍN CANTILLO ARAUJO, ARNOLDO RAFAEL ROJAS URUETA, DAVID JOAQUÍN BUSTOS CANTILLO y ZULLY ELVIRA CORTÉS MARINO, dice que de éstos recuerda haber entregado poder a COMAS SOLANO, BELEÑO BANDERA y BUSTOS CANTILLO, pero a los demás no los conoce ni les dio poder, aun cuando se vio beneficiado con seis conciliaciones, mostrándose ajeno a la falsedad de las actas de conciliación de finales de 1993 e inocente de las sindicaciones de la Fiscalía.

En su oportunidad el señor **JOAQUÍN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ**, informó a la Fiscalía en su diligencia de indagatoria haber laborado para la empresa portuaria desde junio de 1976 a agosto de 1996 ocupando las designaciones de ayudante de grúa y carpintería, sin que hubiere demandado a la empresa portuaria en vigencia de su relación laboral; al salir pensionado le concedió poderes al doctor COLLANTE PACHECO, de quien no recibió dinero por su gestión, a la doctora NIRA ESTHER FÁBREGAS para que se solicitara el reconocimiento de uniformes, quien le entregó $400.000,00, y a la doctora GLADYS DEL CASTILLO, quien adelantó acuerdo con FIDUPACÍFICO y le entregó $6´000.000,00; los abogados fueron quienes le dijeron cuáles eran las acreencias que tenían que reclamar; a COLLANTE PACHECO le encomendó reajuste pensional en el año 1995, pero nunca le dio un peso por eso, mostrándose desconocedor de la expedición del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que resultó beneficiado con la suma de $40´600.000,00, derivados del reclamo de prima sobre prima; agrega que conoce a la doctora RAQUEL CHARRYS ORTIZ porque falsificó unas firmas para presentar una tutela en su nombre, asunto del que refiere le dieron un paz y salvo.

En cuanto a las actas de conciliación de finales de 1993, de las cuales registra como beneficiario en dos asuntos en los que estuvo representado por GLADYS MARINA DEL CASTILLO y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, anota que conoce a la primera pero al doctor RICAURTE nunca le ha dado poder ni lo conoce, mostrándose ajeno al contexto de la falsedad de aquellas actas que le mencionan en la diligencia, posición en la que afianza su declaratoria de inocencia frente a los señalamientos de la agencia Fiscal.

En la misma fecha se escuchó al ciudadano **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, quien laboró para la empresa portuaria entre el 28 de agosto de 1977 y el 18 de marzo de 1993, cuando fue retirado por haber accedido al beneficio pensional ante la liquidación de la empresa; cuando se produjo su retiro demandó a la su empleadora; le extendió 2 poderes al doctor EMILIO COLLANTE PACHECO de lo que le entregó $39´000.000,00; al doctor ALFARO le encomendó el reclamo de mes de huelga y una liquidación que hacía falta, sin recordar cuánto le entregó por ese concepto; a la doctora EDNA QUINTANA se le encargó la solicitud de cena y descanso y reajuste de pensión de lo que no le ha dado plata; el doctor RICAURTE BARRIOS le pagó $75´000.000,00 sin que recuerde del concepto encomendado y la doctora MIRYAM CHARRYS $11´000.000,00 por concepto de ropa, agregando que entregó más poderes pero estos los han dado de baja, reclamos que se

efectuaron teniendo en cuenta el contenido de la Convención Colectiva de Trabajo en consideración a que él tenía derecho a reclamar el reconocimiento de esos renglones que la empresa no había cubierto debidamente, entregando los poderes a cada abogado según el rubro en el que se especializara.

Frente al acta de conciliación 050 de 1998, de la que se benefició en cuantía de $87´600.000,00 por el reclamo de prima sobre prima, anota que se realizó esa solicitud porque había salido a vacaciones y le tenían que pagar prima de 15 años que para entonces la estaban reconociendo y consideró que le habían dado muy poco dinero en su liquidación de prestaciones sociales, recibiendo por las demandas que adelantó cuatro pagos de manos de los abogados; al preguntarle por los encargos entregados a MIRYAM CHARRYS BLANCO, CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, ROBERTO ROMERO TURIZO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, JAIME RUIZ FONTALVO, JORGE MANUEL CAMARGO GALLARDO, algunos de los cuales se hallan vinculados con las actas de conciliación de finales de 1993, dijo haber entregado poder a CHARRYS BLANCO quien le pagó $11´000.000,00; a los togados BARRIOS BARRIOS y CAMARGO GALLARDO les entregó mandato pero no le han dado ningún dinero por su gestión, a los demás que se le mencionaron refiere no conocerlos y no haberles facultado para representarlo, y declarase inocente de los eventos enrostrados por la Fiscalía pues desconoce los actos que dieron con la falsedad de las actas de conciliación puestas de presente y se limitó a realizar las solicitudes a las que tenía derecho.

La siguiente fecha fue interrogado el extrabajador portuario **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, ciudadano que se desempeñó en la entidad desde el 05 de mayo de 1978 al 31 de agosto de 1990, en el cargo de oficial de albañilería; su retiro de la empresa se produjo por la liquidación de ésta juntando el tiempo trabajado con el que reportaba en el ejército; en cuanto a las acciones que adelantó con posterioridad en contra de la empresa, recuerda que como eran varios los abogados a los que se les entregaba poder para ello, no memora a quiénes se les encomendaron los asuntos, pero destaca que le entregó mandato a LUIS GUTIÉRREZ ALFARO sin que recordara cuánto le había entregado o por qué concepto; igualmente le extendió encargo al doctor ROMERO TURIZO para adelantar solicitud respecto de prima sobre prima, fueron dos demandas que pagaron, los demás no entregaron ningún dinero; los abogados se ofrecían por más de cien conceptos a los que había derecho. En cuanto al poder que tenía el doctor COLLANTE PACHECO refiere que pudo ser uno que le sustituyó "Lucho" porque él no recuerda haberle entregado mandato directamente.

Frente al reclamo que en su nombre se realizó en el acta de conciliación 050 de 1998, anota que cree que esa fue la plata que le entregaron, cerca de $6´000.000,00, sin tener conocimiento de que habían sido $34´300.000,00, los abogados lo envolvían y no se sabía cuánto era lo que en realidad se había cancelado; en cuanto a la representación que en su nombre se realizó en las actas de conciliación de finales de 1993 y otros actos administrativos relacionados por los togados MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA, MIRYAM CHARRYS BLANCO, ELVIRA MERCEDES MOLÍN DE FRANCO, GLADYS GUERRERO GUERRERO, HERNANDO VILLAFAÑE USME, JUAN AMARANTO ALONSO, ÓMAR PACHECO CASTRO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, SEGUNDO EFRAÍN CASTILLO MEDINA y LUIS ALFREDO TAPIA AHUMADA, dijo no conocer a ninguno de los mencionados y jamás haber entregado poder para que

éstos lo representaran; desconoció las falsedades a partir de las cuales se celebraron las actas de conciliación de finales de 1993 y se declaró inocente de los señalamientos de la Fiscalía, ya que desconoce las reclamaciones efectuadas en su nombre.

Después se escuchó al ciudadano **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, quien se desempeñó como lavador engrasador y operador de equipo en el terminal marítimo de Barranquilla desde el 01 de agosto de 1981 al 31 de junio de 1993, y accedió a su beneficio pensional en el año 1996 después de haber adelantado demanda para el reconocimiento de éste, al retiro le entregó poder a la doctora MÁBEL PRESTAN LÓPEZ para que se solicitara el pago del retroactivo de 1983, de lo que le entregó $8´000.000,00; a la doctora GLADYS MONTERO CAMPO para recargo de carbón que devino en el pago de $3´000.000,00; también al doctor MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ para el concepto de nocivos y corrosivos, respecto de lo que le entregó $9´000.000,00; al doctor LUIS OÑORO MOLINA le encargó la solicitud de reconocimiento de días descontados por huelga, sin que pueda recordar el monto que le fue entregado por ese reclamo; el doctor RAFAEL VILLALBA adelantó la solicitud de pensión y además le entregó $16´000.000,00 en 1996, y esos fueron todos los poderes por él librados; demandó en varias oportunidades porque sus compañeros decían que se debía hacer estos reclamos que encontraban apoyo en la convención colectiva; en cuanto a la representación acometida por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO refirió que le entregó poder para reclamar prima sobre prima pero que a la fecha no le había entregado dinero por su gestión, poniéndole de presente que en el acta de conciliación 050 de 1998 fue beneficiario con el pago de la suma de $68´200.000,00, ante la mediación del abogado en comento, de quien dijo que lo había citado para informarle que su pago no se había podido dar por existir un error aritmético.

Comentó que estuvo de acuerdo con lo que se le entregó en su liquidación, pero como los derechos estaban establecidos en la convención entonces era necesario iniciar las demandas correspondientes; de cara a los reconocimientos dinerarios que registra por la representación acometida en su nombre por los abogados MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, RUTH DEL CARMEN DUQUE DE TORRENEGRA, ÉDISON OROZCO CABALLERO, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, MARIANA DE JESÚS RADA ORTEGA, GLADYS ESTHER MONTERO, JUAN AMARANTO ALONSO, MÁBEL CRISTINA PRESTAN, HENRY ADOLFO DIAZ AMARIS, LUIS RAUL OÑORO MOLINA y VICENTE REYES JIMÉNEZ, concretados en las actas de conciliación de finales de 1993 y otros asuntos, dijo que sólo recibió los pagos que memoró al inicio de su intervención y otro de manos de la doctora MARIANA DE JESÚS RADA por $3´000.000,00, precisando que a algunos de los mencionados les confirió poder pero no le han entregado dinero por su representación y desconoce al doctor JUAN AMARANTO ALONSO, anotando que se limitó a entregar algunos mandatos pero los de la responsabilidad son los abogados, al ver que sus compañeros estaban demandando pensó que esos reclamos estaban cobijados por la licitud, mostrándose ajeno a las falsedades cristalizadas en las actas de conciliación de finales de 1993 e inocente de las imputaciones efectuadas por la Fiscalía.

La anunciada fecha culminó con la indagatoria del señor **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, quien informó que se desempeñó como mecánico II desde el 16 de junio de 1977 hasta el 16 de junio de 1992; entregó poder al doctor ÉDISON OROZCO CABALLERO para reclamar una reclasificación, sin que le

hubiere entregado dinero por esa demanda que, recuerda, le correspondió al Juzgado Octavo Laboral; las reclamaciones que efectuó se fundamentaron en que sus compañeros de trabajo también las estaban haciendo; agregando que extendió mandato al doctor LUIS GUTIÉRREZ y éste a su vez lo sustituyó al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, no está seguro de haberle entregado poder a este señor; al preguntarle acerca del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que se benefició con el pago de $77´200.000,00 por el concepto de prima sobre prima, dijo no saber nada sobre el particular, los abogados nunca les muestran documentos, así como tampoco estar al tanto del monto que fue conciliado, ya que a él le entregaron apenas $32´000.000,00 de manos del señor RAFAEL MARRIAGA, asistente de COLLANTE PACHECO; al preguntarle sobre los pagos recibidos recordó que el doctor OROZCO CABALLERO sí le entregó $9´000.000,00, concretándose dos pagos en total.

En torno de las sumas erogadas con ocasión de las actas de conciliación de finales de 1993, gestionadas por la doctora LILIA ARÉVALO QUINTERO dice no conocer esos pagos, y acerca de los demás apoderados judiciales que acometieron solicitudes en su nombre, refirió desconocerlos en su totalidad ya que no entregó poderes en el año 1993, por lo que se declara inocente de las sindicaciones efectuadas, considerando que fue estafado por los abogados quienes se aprovecharon de su buena fe.

El 01 de agosto siguiente, fue recaudada la indagatoria del señor **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**, dentro de la que informó haber trabajado para la empresa en el cargo de estibador desde 1970 a 1991, desvinculándose por la liquidación de la ésta, cuando decidió entregarle poder al doctor JOSÉ DEL CARMEN ARIZA y al doctor COLLANTE PACHECO, sin que tenga referencia de cuáles eran los conceptos que cada uno de ellos reclamó en su nombre, agregando que el primero de los mencionados no le ha entregado resultados dinerarios y el segundo le dio un cheque por $27´180.000,00, exhibiendo copia del título al que hace alusión; los reclamos fueron efectuados en concordancia con las indicaciones de los togados, pues anota que son estos los que tienen el manejo de aquellos temas, quienes se encargaban también del agotamiento de la vía gubernativa.

En lo que atañe al acta de conciliación 050 de 1998, en la que se vio cobijado con el pago de $60´400.000,00 por concepto de prima sobre prima, acota que es la primera vez que ve eso, que se limitó a entregar el poder, por lo que desconoce los detalles del concepto reclamado del que se originó el único dinero percibido derivado de demandas contra su empleadora; al interrogarlo acerca de si conocía a los abogados SEGUNDO EFRAÍN CASTILLO MEDINA y JOSÉ DEL CARMEN ARIZA TEJADA dijo haberle dado poder al segundo de los mencionados pero no le entregó réditos de su gestión, informándole que CASTILLO MEDINA adelantó cobro asociado a trámite conciliatorio presuntamente falso, rubricado a finales de 1993, reiterando que a ese abogado nunca le entregó mandato, mostrándose desconocedor del contexto en el que se firmaron las actas a que se ha hecho referencia y ser inocente de las sindicaciones que le revela la Fiscalía.

Del mismo modo fue escuchado en injurada el ciudadano **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, quien en su exposición manifestó haber estado vinculado a la empresa portuaria desde el 07 de mayo de 1974 hasta el 16 de septiembre de 1992, ocupando la designación de estibador; al retiro le

extendió poder al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO quien trabajaba con otros abogados, para una reliquidación que devino en el pago de $29´340.000,00; no obstante, al indagarlo acerca del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, para cuya firma acudió el referido togado en su representación, dijo no saber nada sobre el particular, desconociendo que de este acuerdo se desprendió pago en su favor por el importe de $65´200.000,00 por el reconocimiento de prima sobre prima del que tampoco sabe nada; comenta que hizo reclamación porque salió con un monto de pensión demasiado bajo, cerca de $230.000,00.

En cuanto a si conocía a los abogados MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA y HENRY OFERNES AMELL GARCÍA manifestó no conocerlos ni haberles entregado mandato; frente a los pagos que registran en su favor por la suscripción de las actas de conciliación de finales de 1993, a las que aparentemente acudió por intermedio de los abogados JORGE MANUEL CAMARGO GALLARDO, HENRY OFERNES AMELL GARCÍA y RICAURTE BARRIOS BARRIOS anota que al último lo conoce pero nunca le dio poder para que lo representara y a los otros no los conoce, mostrándose ajeno a las falsedades que rondaron las actas de conciliación de finales de 1993 y declarándose inocente de los señalamientos efectuados por la Fiscalía.

En la data siguiente fue indagado el señor **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTÍZ**, quien adujo haber trabajado para la empresa portuaria en los cargos de estibador, bombero y winchero desde el 20 de agosto de 1979 hasta el 31 de mayo de 1993, cuando se retiró para acceder a su pensión de jubilación; al desvincularse le entregó poder a algunos abogados porque consideró que estaba mal liquidado, sin recordar qué cantidad de poderes libró; a la doctora DUBIS RAMOS le encomendó concepto del que no recuerda nada pero le entregó $24´000.000,00; a la doctora JULIA GALLARDO tampoco recuerda qué concepto le encargó pero le representó el pago de $20´000.000,00; el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO le entregó $35´000.000,00 pero no memora el renglón reclamado, así como los demás que entregó a otros abogados que no le cancelaron, éstos, a partir del estudio realizado a la convención, le decían si tenían derecho a solicitar el reconocimiento de algún emolumento.

En cuanto a la suma de $77´900.000,00 que fue declarada en su favor en el acta de conciliación 050 de 1998, relacionada con la prima sobre prima, dice no estar al tanto de que el doctor hubiere alcanzado el reconocimiento de esa suma dineraria ni que el poder por él entregado era para ese trámite, en cuanto a la prima sobre prima anota que no se llamaba así el concepto consagrado convencionalmente, sino que se trataba de una reliquidación de prima de servicios, porque la prima de junio no se estaba teniendo en cuenta para apreciar la de diciembre y viceversa.

Respecto de las actas de conciliación de finales de 1993 y otros asuntos, en los que estuvo representado por los abogados JULIA GALLARDO DE LEÓN, ANTONIO CASTILLEJO DE SALES y DUBIS ESTHER RAMOS dijo conocerlos a todos y haberles dado poderes para representarlo, pero no estaba al tanto de cuáles eran los renglones reclamados por cada uno; por el contrario, frente a los asuntos en que estuvo procurado por los abogados LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, EFRAÍN BULA PARODI, CÉSAR LEÓN JIMÉNEZ, LUIS OÑORO MOLINA y SALOMÓN CASTRO VILLAFAÑE adujo conocer a algunos de ellos pero nunca haberles entregado poder para efectuar reclamos en su

nombre; misma postura que mostró frente a los abogados MELBA ESTHER ERAZO HERNÁNDEZ y ESPERANZA DÍAZ CASTILLO de quienes aseveró no haberles encargado ningún reclamo, pregonándose ajeno a las falsedades consolidadas en las actas de conciliación de finales de 1993 y declarándose inocente de las imputaciones efectuadas por la Fiscalía en esa diligencia.

Seguidamente fue escuchado el señor **GABRIEL BARRIOS DONADO**, actualmente fallecido, informando que laboró en la empresa portuaria desde noviembre de 1970 a la misma mensualidad de 1990, ocupando las designaciones de estibador y supervisor de cuadrilla; al terminar su relación laboral reclamó judicialmente por considerar que estaba mal liquidado, por lo que le confirió poder al doctor JOSÉ DEL CARMEN ARIZA en 1991, del que le entregaron $7´000.000,00; al doctor RAFAEL PÉREZ le encomendó una reclasificación salarial que la empresa no quería pagar y mediante el abogado se alcanzó la cifra de $11´000.000,00; por intermedio del doctor EMILIO COLLANTE PACHECO en el año 1997, se materializó el pago de $18´000.000,00 sin que hiciera referencia al concepto que este profesional reclamó, el cual en otro cuestionamiento dice que se refería a uniformes y calzado; la doctora MIRYAM CHARRYS le entregó en total $5´000.000,00 sin que recuerde el renglón solicitado, acotando que todos los reclamos fueron realizados teniendo en cuenta la asesoría de los abogados que ha mencionado, fundamentado igualmente en el hecho de que su liquidación estaba un poco baja, percibiendo en total 6 pagos; en cuanto al asidero del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que aparece como merecedor de $43´900.000,00 derivados del reclamo de prima sobre prima, dice que el abogado no le dio ese monto.

En cuanto a los pagos que se registran en su favor, en los que estuvo representado por los abogados FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES y MIRYAM CHARRYS BLANCO refiere que al primero no lo conoce, pero a CHARRYS le entregó poder y recibió de ésta $15´000.000,00; comentando no haber percibido todo el dinero que supuestamente se reclamó en su nombre y desconocer los pormenores que rondaron la confección de las actas de conciliación de finales de 1993, en las que aparentemente arribó mediante la representación de DUBIS RAMOS RAMOS y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, de quienes recuerda haberles dado poderes pero no para 1993, declarándose inocente de cara a los señalamientos efectuadas en esa diligencia por la Fiscalía.

Por su parte, el señor **GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL**, hoy occiso, quien vertió su injurada el 02 de agosto de 2007, informó a la Fiscalía que laboró para la empresa portuaria entre 1974 y 1993, ocupando los cargos de estibador, supervisor auxiliar, supervisor general y operador de equipo, accediendo al beneficio pensional al finalizar su vínculo con el puerto; posteriormente entregó varios poderes, recordando el que acometió el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en el año 1994, quien le entregó $56´000.000,00, memorando que entregó cerca de 3 poderes más, recibiendo dinero únicamente del anunciado profesional; se le ponen de presente los eventos que dieron lugar a la emisión de la conciliación 050 de 1998, en la que estuvo representado por el doctor COLLANTE PACHECO y se dispuso el pago en su favor de la suma de $132´200.000,00 por el renglón de prima sobre prima, erogación frente a la que refiere no estar enterado de que la suma que se le entregó al togado era tan elevada, pese a que sabía que los abogados tomaban el 50% de las resultas procesales.

Teniendo en cuenta que en los reportes de pago que registran a su nombre se identifican otros profesionales del derecho distintos a los que el deponente ha mencionado, se le revela que los doctores VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ, ARMANDO NOGUERA IMITOLA, ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ y LIGIA BERMEJO acometieron reclamaciones en su nombre, circunstancia frente a la que comenta haberle extendido poder al doctor MARTÍNEZ, a NOGUERA IMITOLA y a LIGIA BERMEJO, última que nunca le entregó dinero, mostrándose desconocedor de los demás; frente a las reclamaciones concretadas en las actas de conciliación de finales de 1993 acota que desconoce a los abogados ELVIRA MERCEDES MOLINA DE FRANCO, HERNANDO VILLAFAÑE USME y TEÓFILO JAVIER SARABIA, así como el hecho de haber recibido dinero de manos de éstos y en general el contexto en el que se dio la falsedad de las referidas actas, pues afirma que se limitó a librar poder a los abogados con la confianza de que su gestión sería idónea, por lo que se declara inocente de los señalamientos criminales que se le imputan.

Finalmente, el 03 de agosto de 2007, fue escuchado en diligencia de injurada el señor **HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ**, también obitado, persona que se desempeñó como tarjador en el terminal marítimo de Barranquilla desde julio de 1969 a diciembre de 1990, relación laboral al término de la cual accionó judicialmente contra su otrora empleadora por intermedio de la doctora NIDIA AREVALO, deprecando la reliquidación de sus prestaciones sociales, pues consideró que éstas habían sido indebidamente apreciadas, reclamo del que le entregaron $2´645.000,00; después entregó poder a la doctora MIRYAM CHARRYS para reliquidación de Ley 4 así como uniformes y calzado, solicitud de la que se despendió el pago de $9´000.000,00 y reajuste de la mesada pensional; confirió además poder al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO para reclamar prima sobre prima, asunto del que le fueron entregados $12´000.000,00, teniendo en cuenta que de lo ordenado cancelar en su favor debían hacerse tres partes iguales para pagarle a alguien más, sin que le diera constancia de nada; al doctor JURIS PÉREZ también le entregó mandato pero nunca más fue a su oficina; a la doctora SARA MORATO le entregó encargo para reclamar uniformes y calzado, de lo que le dio como $2´500.000,00; el caso es que en el centro de la ciudad se manejaba un ambiente en el que varios abogados se especializaban en reclamar determinados conceptos, tomaban los poderes indiscriminadamente y los extrabajadores de esta misma forma los libraban, situación que fue facilitada por el desorden que se venía presentando en FONCOLPUERTOS del que se aprovecharon los abogados.

Los poderes los libró con fundamento en las normas convencionales que los abogados invocaban, sin embargo, refiere no estar del todo convencido de que tuviera derecho a esos pagos que le decían los togados que lo representaron; en torno a la guarda ejercida en su favor por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO dijo no haberle dado poder a éste y aún menos conocerlo, pero cree que se trata de la persona a la que se le tuvo que entregar un tercio del dinero resultante del reclamo de prima sobre prima acometido por el doctor GUTIÉRREZ ALFARO, pues en su sentir estos pueden estar relacionados con la firma el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, que seguidamente se le pone de presente; al interrogarlo acerca de otros pagos que registran en su nombre, comenta que el adelantado por el doctor JORGE SAID NARVÁEZ no fue por mandato que él

hubiere librado, dado que no conoce al profesional del derecho ni recibió dinero por ningún concepto; en cuanto a los togados JURIS PÉREZ PACHECO y LUIS CARLOS CORTÉS dice haberles dado poder, pero éstos nunca le entregaron dinero por su gestión, desconociendo a los abogados LILIA DEL CARMEN AREVALO y GUSTAVO AMELL GARCÍA.

En cuanto a las actas de conciliación rubricadas a finales de 1993, de las que en algunas fulge como beneficiario, anota que a los profesionales que adelantaron esas reclamaciones no los conoce, salvo el caso de la doctora SARA MORATO MARTÍNEZ a quien le entregó poder pero nunca le dio dinero, mostrándose desconocedor de las falsedades de estos acuerdos e inocente de las sindicaciones de la Fiscalía, visto que eran los abogados laboralistas y los funcionarios judiciales los que debían saber si había lugar a amparar las pretensiones formuladas en las demandas, con lo que terminó el recaudo de las versiones injuradas de los procesados en las fechas indicadas en párrafos preliminares.

En torno de las órdenes probatorias adoptadas en decisiones precedentes, fue allegado informe FGN-CTI-355541 adiado el 06 de agosto de 2007[41], por medio del cual se aportaron algunos datos relacionados con el perfil patrimonial de los encausados, reportando la identificación de los bienes inmuebles inscritos a nombre de éstos en las diferentes oficinas de registro de instrumentos públicos.

Igualmente yace estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007[42], en el que se examinan los pagos efectuados a los beneficiarios del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, al momento del retiro de la empresa portuaria, tendiente a corroborar si se habían presentado dobles pagos de renglones laborales, si la estimación de las prestaciones sociales y establecimiento de la mesada pensional estuvieron debidamente atendidas por la empresa portuaria al término de la relación laboral respecto de los ciudadanos GUILLERMO PAEZ MENDOZA, JOSÉ SÁNCHEZ VERDOOREN, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ y LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, realizándose el escrutinio pertinente de los actos administrativos en los que se detallaban los tiempos de servicios, los cargos ocupados, las resoluciones en las que se enlistaron los renglones que componían la base de liquidación de las percepciones dinerarias de cada uno de los extrabajadores previamente identificados, así como la estimación de los devengados para efectos de acceder a los beneficios pecuniarios a cargo de los recursos públicos, sin que se estableciera las probables repercusiones extendidas en el tiempo con ocasión del incremento de la mesada pensional.

En este documento, luego de confrontar los pagos efectuados por la empresa a razón de prestaciones sociales al momento de la desvinculación de los extrabajadores frente a las normas convencionales aplicables al caso, se estableció que en lo que atañe al señor GUILLERMO PAEZ MENDOZA se reporta un excedente de $11.543,91 en favor del extrabajador; respecto de los ciudadanos JOSÉ SÁNCHEZ VERDOOREN y JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ se aprecia justeza entre lo cancelado por la empresa y lo analizado por la Fiscalía; en lo que se refiere al señor JORGE ENRIQUE RUA

[41] Folios 216 a 225 del c. o. 5 de instrucción.
[42] Folios 232 a 287 ídem.

CARRILLO este examen reveló un pago por encima de lo debido de $202.699,80; y finalmente respecto del señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO se halló pago excedente en su favor por la suma de $349.029,40.

El 14 de septiembre de 2007, en la ciudad de Barranquilla fue escuchado en diligencia de indagatoria el señor **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**[43], quien informa a la persecutora que trabajó a órdenes de la empresa portuaria desde febrero de 1975 a noviembre de 1990, en las designaciones de estibador y en la oficina de reclamos de pérdida de carga, desvinculándose para acceder al beneficio pensional, momento en el que le confirió poder a la doctora IVONNE URICOECHEA VENGOECHEA para adelantar la solicitud de reliquidación y brazos caídos de lo que se dio pago en su favor por $11´000.000,00; al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO se le encomendó el reclamo de reliquidación de primas, alcanzándose el reconocimiento de $20´000.000,00, los abogados le daban el poder a otros, pero esos fueron los únicos pagos que recibió y se elevaron por la asesoría que en ese sentido se ofreció por éstos en torno de la procedencia de las solicitudes y teniendo en cuenta que consideró que su liquidación estaba muy baja; respecto del abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO memora que lo conoció pero que nunca le entregó poder, que éste trabajaba con GUTIÉRREZ ALFARO.

En lo que atañe a la conciliación 050 de 30 de abril de 1998, de la resultó beneficiado con el monto de $45´300.000,00 por el reconocimiento de prima sobre prima, dice que al doctor COLLANTE PACHECO nunca le ha dado poder y no tenía conocimiento de que se hubiera pactado por esa cantidad; respecto de otros pagos que registran en su favor, en los que acudió representado por los abogados ORLANDO SANTOS CORSO y VÍCTOR GALLARDO ROSILLO, afirma que al primero no lo conoce y nunca le ha dado poder, pero al segundo sí le entregó mandato aunque no le ha dado ni un peso por su gestión; por lo que se declara inocente de los señalamientos efectuados en esa diligencia por la Fiscalía, ya que es ajeno a las falsedades que se pudieren haber dado en esas reclamaciones en las que dice no haber entregado poderes.

Seguido a la injurada de este procesado, reposa oficio Nº 362931 FGN-CTI-DNI-N-20 fechado el 21 de septiembre de 2007[44], por medio del que se aporta el oficio ASNP-289 datado el 11 de septiembre de la misma anualidad elaborado por el GIT, contentivo del estudio de los pagos efectuados en favor de los beneficiarios del acta de conciliación 050 de 1998, enlistándose en primera medida a 45 personas que participaron de dicho acto con la individualización de las providencias judiciales que dieron lugar a la celebración del pacto, pasando a detallar lo atinente a 15 extrabajadores de los que expresamente se solicitaba el estudio.

Dentro de la información se destacan los datos de las resoluciones que dispusieron el pago de las sumas declaradas en el acta, previamente identificadas en apartes preliminares de esta decisión; así como los conceptos que fundamentaron las providencias judiciales, el monto que a cada uno de quienes fueron cobijados con su celebración le correspondió y los renglones liquidados en ésta; la identificación de las decisiones

[43] Folios 2 a 5 del c. o. 6 de instrucción.
[44] Folios 6 a 96 del c. o. 6 de instrucción.

proferidas en sede de consulta respecto de algunas de las sentencias que cimentaron el acuerdo y los fundamentos de las providencias de los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla, que según los argumentos del GIT, carecían de asidero fáctico y normativo; acompañándose reproducción del acta en cuestión, de la resolución 0495 de 15 de abril de 1998, en virtud de la cual se dispuso el pago de la conciliación 088 de 17 de septiembre de 1997, de la cual también se aporta copia informal, así como copia de los actos administrativos asociados con la desvinculación laboral y concesión de los beneficios prestacionales y pensionales del extrabajador JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ RIVERA.

En cumplimiento de la orden probatoria dirigida a glosar a la investigación el examen de procedencia de las reclamaciones y el record de pagos hechos a cada uno de los firmantes del acta 030 de 1998, el CTI de la Fiscalía General de la Nación con informe Nº 364697 FGN-CTI-DNI-N-20 adiado el 04 de octubre de 2007[45], aportó el análisis realizado sobre 5 extrabajadores portuarios, del que emergió que al señor JOSÉ IGNACIO MOSQUERA le fueron entregados en su liquidación de prestaciones sociales $252.141,28 por encima de lo que en realidad se le debería pagar; respecto de los señores HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ y GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLARREAL se encontró que la liquidación de la empresa guardaba paridad con las cuentas realizadas por el CTI; en cuanto al señor ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO fue advertido pago en exceso de lo debido en cuantía de $29.837,74; y en lo que atañe al señor LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR monto a favor de $46.630,54.

Asociado con la información agrupada en los diversos estudios que se han venido identificando, fue aportado el informe FGN-CTI-365766 de 12 de octubre de 2007[46], en el que se valoró la justeza de las liquidaciones de presentaciones sociales frente a las normas convencionales aplicables de cinco exportuarios, análisis del que se arribó a la conclusión de que el señor ALBERTO CABARCAS BETIS recibió un excedente en su liquidación de prestaciones sociales de $108.601,46; en lo que atañe al ciudadano RAFAEL CABARCAS ROMERO, si bien se realizó un examen del lapso laborado a órdenes de la empresa portuaria y de los emolumentos que al término de la relación se debían pagar acorde a la normativa convencional, este escrutinio no ameritó comentario relativo a si se estos cálculos se ajustaban a los que otrora se habían efectuado por la empresa para el momento del retiro.

En el mismo sentido, se analizó lo relativo al señor JULIO LLANOS SARMIENTO, de quien se halló una diferencia en su favor de $61.168,54; del señor JORGE PÉREZ OJEDA en monto a favor de $9.333,80; y en lo que se refiere al extrabajador portuario MIGUEL ANTONIO MUÑOZ se advirtió pago de $46.190,43 por fuera de lo debido por la empresa.

El 24 de octubre de 2007, fue recaudada la indagatoria del señor **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**[47], ciudadano que indicó haber laborado para la empresa portuaria desde el 03 de junio de 1979 al 05 de agosto de 1993, en los cargos de mensajero y estibador, produciéndose su retiró por la liquidación de la empresa; en torno de las acciones judiciales acometidas

[45] Folios 107 a 215 ídem.
[46] Folios 216 a 262 del c. o. 6 de instrucción.
[47] Folios 263 a 268 ídem.

en contra de ésta, anotó que demandó una reliquidación porque a su juicio ésta no había sido ajustada, confiriéndole poder para ello al doctor COLLANTE PACHECO, de lo que le entregó $20´000.000,00; le extendió poder a otro abogado del que no recuerda el nombre, pero el único que le entregó dinero fue el antes mencionado, recordando que las solicitudes se efectuaron teniendo en cuenta las indicaciones entregadas por los abogados. Al preguntarle acerca del conocimiento que tenía respecto el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que fue beneficiado con la suma de $98´600.000,00 por el concepto de prima sobre prima, dijo no saber de ese asunto y menos de que la cifra que fue entregada al profesional del derecho ascendía a ese monto.

Al interrogarlo respecto de los pagos que registran a su nombre por otras actas de conciliación de finales de 1993, y el contexto en el que se produjeron dichos acuerdos, afirmó desconocer al doctor EDYEE JOSÉ PADILLA NAVARRO, así como las presuntas falsedades en las actas de las que fue beneficiario, declarándose inocente de las sindicaciones de la Fiscalía, ya que se limitó a librar poder para una reliquidación.

En torno de la información relacionada con la liquidación de prestaciones sociales de algunos de los extrabajadores vinculados a la actuación, la cual se había venido aportando parcialmente al dosier, se allegó el informe 359699 FGN-CTI-DNI-N-20 adiado el 03 de septiembre de 2007[48], en el que se aprecia que al señor EMIROMEL ORTIZ ORTIZ le reporta una diferencia en su favor de $322.141,12; al señor PEDRO ROSADO OSORIO le registra coincidencia entre lo liquidado por la empresa y por la Fiscalía en el referido estudio, así como en lo que atañe al extrabajador VÍCTOR CASTRO MIRANDA quien tampoco presentó deficiencias en su liquidación de prestaciones sociales; en cuanto al exportuario MIGUEL CAICEDO ORTIZ se identificó un mayor monto pagado de $194.290,36; y respecto del señor GABRIEL BARRIOS ORTIZ se encontró un mayor valor entregado en importe de $70.229,35.

Complementario del anterior estudio se encuentra el informe FGN-CTI-369271 de 06 de noviembre de 2007[49], en el que se suministran los datos de los extrabajadores portuarios ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GRACÍA, quien recibió un menor pago en la liquidación de las cesantías definitivas derivado de la indebida apreciación de la prima de antigüedad que fue percibida en la última quincena de noviembre de 1992, presentándose un faltante de $13.940,40; en este mismo sentido respecto del señor LIBARDO BARRAZA RIVERA fue avisada carencia en la apreciación de su prima proporcional de servicios y de antigüedad que repercutió en el importe de sus cesantías definitivas en el monto de $98.337,99, irregularidad que también se encontró en la liquidación del señor FRANKLIN WILCHES MANOTAS a quien se le tasaron indebidamente los mismos renglones, presentando un faltante en su amortización final. En cuanto al escrutinio de la liquidación de los señores ADALBERTO BERDUGO y JOSÉ IGNACIO MOSQUERA no fue posible ubicar las hojas de vida pensionales en ese momento, necesaria para tenerse como base para el estudio de procedencia de las estimaciones realizadas por la empresa portuaria.

[48] Folios 269 a 284 del c. o. 6 y 1 a 65 del c. o. 7 de instrucción.
[49] Folios 66 a 95 del c. o. 7 de instrucción.

Con informe adicional FGN-CTI-369264 de la misma data que el anteriormente analizado[50], se aportaron los datos de las liquidaciones de los señores ARMANDO MARIANO SANJUAN, de quien se advirtió una incorrección en su liquidación de $17.032,86 al haberse apreciado de forma deficiente la segunda prima semestral de 1992; en cuanto a los señores JOAQUÍN PÉREZ LÓPEZ, FERNANDO MANJARRÉS MONTERO, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ y JOSÉ GÓMEZ MONROY se corroboró que les fueron debidamente amortizadas las acreencias laborales al finalizar el vínculo laboral con la empresa portuaria.

Acera de la temática de los estudios anteriores, fue adosado a la causa el informe 377907 fechado el 28 de diciembre de 2007[51], el cual se dirigía expresamente al análisis de la liquidación del señor ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL, el cual arrojó que para cuando la empresa portuaria efectuó la liquidación de prestaciones sociales, le fueron calculados por encima de lo debido los rubros correspondientes a prima de servicios proporcional, de antigüedad proporcional y cesantías, lo cual repercutió directamente en el estimado de salario promedio mensual y diario y, de contera, en el establecimiento del monto de las prestaciones sociales.

Para estudio de los datos que revelaban el perfil patrimonial de los investigados, fue aportado al infoliado el ejemplar del informe 380649-GAP de 22 de enero de 2008[52], por medio del cual se allegó información relacionada con los bienes sometidos a registro que reportaban algunos de éstos, enlistándose los vehículos que se encontraban inscriptos en las diferentes oficinas de tránsito y los inmuebles en las dependencias de registro de instrumentos públicos del territorio nacional; información que fue agrupada en el mencionado documento contentivo en 9 folios y en cuaderno complementario compuesto por 744 pliegos.

De regreso al examen de la liquidación de prestaciones sociales de los procesados, reposa informe 433163-FGN-CTI-DI-GAP fechado el 26 de noviembre de 2008[53], en el que se efectúa el correspondiente análisis al señor ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, arrojando la conclusión de que la empresa liquidó en beneficio del extrabajador la suma de $795.408,79 por encima de lo debido, al haber sopesado indebidamente prima proporcional de servicios, proporcional del antigüedad, de vacaciones y vacaciones a la fecha del retiro. En este mismo sentido se aportó ejemplar del informe 446622 FGN-CTI-SI-GDAP-EF adiado el 20 de febrero de 2009[54], en el que se elabora el estudio respecto del ciudadano ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, del que se dedujo que los cálculos efectuados por la empresa superaron lo que en realidad se debía pagar al extrabajador para cuando se produjo su retiro y tasación de prestaciones sociales, incrementándose indebidamente su percepción de jubilación en $22.689,56.

Sobre el mismo tópico, se aportó el informe 459344 FGN-CTI-SI-GDAP-EF adiado el 30 de abril de 2009[55], relacionado con el extrabajador portuario

[50] Folios 96 a 133 ídem.
[51] Folios 148 a 179 del c. o. 7 de instrucción.
[52] Folios 180 a 188 ídem.
[53] Folios 194 a 213 ídem.
[54] Folios 226 a 247 ídem.
[55] Folios 248 a 274 ídem.

EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, del que se concluyó que el mencionado recibió en su liquidación final valores por encima de lo que debía percibir, lo que generó un incremento en su mesada pensional de $50.029,08.

En cumplimiento de la orden emanada de la Fiscalía instructora en torno de la necesidad de acopiar los ejemplares de las cartillas decadactilares y alfabéticas de los documentos de identificación de los procesados, la Registraduría Nacional del Estado Civil aportó reproducción de dichos legajos el 14 de mayo de 2009[56], encontrándose como novedad el fallecimiento de los señores FRANKLIN WILCHES MANOTAS, GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA y PEDRO NOLASCO ROSADO OSORIO.

Frente a los estudios de justeza de las liquidaciones de quienes acudieron al reclamo de sus presuntos derechos en el acta de conciliación 050 de 1998, fueron aportados los informes parciales 469647 FGN-CTI-SI-GDAP-EF de 19 de junio de 2009[57], relacionado con el señor ÁLVARO DE JESÚS BLANCO CASTRO, del que se concluyó que recibió un mayor valor de $2.256,37 en el monto de la pensión de jubilación; en el mismo sentido fue aportado el informe 472090 FGN-CTI-SI-GDAP-EF de 06 de julio de 2009[58], relacionado con el señor ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ que arrojó la novedad de que el extrabajador recibió $280.562,28 como mayor percepción dineraria en las prestaciones sociales; el documento denominado informe definitivo 477066 FGN-CTI-SI-GDAP-EF fechado el 31 de julio de 2009[59], aporta los datos pertinentes al señor FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, que dan cuenta de mayores valores tanto en las prestaciones sociales a razón de $657.920,97, como en el establecimiento de la mesada pensional en $29.329,25; documento que se complementa con el oficio GPSPC-ASNP-288 de 05 de septiembre de 2007, con el que el Ministerio de la Protección Social aporta la identificación de los actos por medio de los que se produjeron los pagos a los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, ÁLVARO DE JESÚS BLANCO CASTRO, ADALBERTO HERNÁNDEZ y EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

A folios 272 a 274 del cuaderno 8 de instrucción reposa comunicación suministrada por la señora ANGERMINA CAMARGO DE TORRES por medio de la cual, en calidad de cónyuge del señor HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, informa el fallecimiento del citado ciudadano, para lo cual aporta copia del registro civil de defunción y del de matrimonio para los fines legales pertinentes.

En cuanto a las pruebas que se agruparon en los cuadernos de anexos de la etapa sumarial, se encuentran compendiados los documentos relacionados con el censo nacional de pensionados, las resoluciones por medio de las cuales se concede el beneficio pensional y los certificados de liquidación de prestaciones sociales de los ciudadanos JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, PEDRO NOLASCO ROSADO OSORIO, GUILLERMO LEÓN PAEZ MENDOZA, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, JOAQUÍN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ARMANDO RAFAÉL OSPINO HERNÁNDEZ, JUAN DE DIOS GABRIEL

[56] Folios 278 a 300 del c. o. 7 y folios 1 al 23 del c. o. 8 de instrucción.
[57] Folios 24 a 60 del c. o. 8 de instrucción.
[58] Folios 61 a 92 ídem.
[59] Folios 94 a 134 ídem.

RODRÍGUEZ RIVERA, FRANKLIN WILCHES MANOTAS, EMIRO ALBERTO TRIANA DUICA, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, GABRIEL BARRIOS DONADO, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO DE JESÚS CASTRO BLANCO, GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLAREAL, ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, LIBARDO JOSÉ BARRAZA RIVERA, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, EDUARDO MORALES MOLINA, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, ALEJANDRO MOSQUERA MAJUL, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, EMIRONEL MARCELINO ORTIZ ORTIZ, MIGUEL CAICEDO ORTIZ, VÍCTOR CASTRO MIRANDA, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETIS, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, ARMANDO MARIANO SANJUAN, ALFONSO NIÑO ESCORCIA, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, ARMANDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN[60].

También milita el memorando SNP-499 datado el 21 de octubre de 2002[61], por medio del cual se aporta a la investigación reproducción parcial de la resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, en la cual se encuentran los datos de cada uno de los mandamientos de pago y resoluciones administrativas que cimentaron el proferimiento del anunciado acto administrativo en lo que a los procesados en la presente causa se refiere, de los valores ordenados respecto de cada uno de ellos, de la resolución que autorizó el pago y número de acta de conciliación que soporta las erogaciones; así como ejemplar en copia de la resolución 1249 de 26 de mayo de 1998 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la que se dispone el pago de la suma de $3.057´400.000,00 en títulos de tesorería TES Clase B, en favor del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en representación de los trabajadores beneficiarios del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, y de las resoluciones que de este pacto se derivaron, que ya fueron objeto de identificación en esta providencia.

Del mismo modo, en curso de diligencia de inspección judicial llevada a cabo en la sede del Ministerio de la Protección Social, archivo de la Dirección Territorial del Trabajo, Regional Cundinamarca, fue incautado el ejemplar original del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, firmada entre la doctora LUZ DARY VELASCO CÓRDOBA en representación de la empresa portuaria en liquidación y el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO como apoderado de los extrabajadores beneficiarios del acta, con los anexos que la conformaban[62]; documentos a los que le siguen los printers de pago de los procesados[63], de los que se desprende la existencia de diversos pagos efectuados por el fondo liquidador de la empresa portuaria FONCOLPUERTOS en favor éstos en virtud de plurales deprecaciones administrativas y judiciales, que le fueron puestas de presente a los extrabajadores en curso de las respectivas diligencias de indagatoria que arriba se refirieron.

En relación con el perfil patrimonial de los procesados, el CTI de la Fiscalía General de la Nación realizó inspecciones judiciales a las oficinas de

[60] Folios 1 a 201 del c. o. 1 de anexos de instrucción.
[61] Folios 202 a 295 ídem.
[62] Cuadernos de anexos de instrucción 2, 3 y 4.
[63] Cuaderno de anexos de instrucción 5.

instrumentos públicos, de Tránsito y Transporte, a las dependencias de la DIAN y de la Cámara de Comercio de las urbes de Barranquilla y Cartagena, tendientes a recolectar evidencia de los bienes muebles e inmuebles y productos financieros que registrasen los procesados en esas oficinas, acopiando de otro lado la información aportada por las entidades bancarias Davivienda, Banco de Occidente y Banco Popular, en las que se glosó el registro de cuentas y créditos que éstos titulaban para 2007 en los anunciados bancos[64], información que sirvió de basamento para el informe 380649 acotado en apartes precedentes.

De otro lado, fue adosada copia de la decisión adoptada por la Fiscalía Primera de la Estructura de Apoyo para el tema de FONCOLPUERTOS el 08 de noviembre de 2007[65], en contra del señor SALVADOR ATUESTA BLANCO, por hechos acaecidos mientras fungió como director general del fondo liquidador, en la que se dispuso la suspensión de los efectos jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por éste, así como las actas de conciliación de conformidad con el cuadro inserto en aquella providencia; convocándolo como autor del reato de peculado por apropiación agravado en la modalidad de continuado.

Seguidamente, reposa reproducción de la resolución 2070 de 30 de abril de 1998[66], la cual había sido aportada parcialmente en precedencia, en mérito de la cual se ordena el pago de las sumas contenidas en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de la misma anualidad, entre otras; a la cual le acompaña copia de la resolución 2686 de 10 de agosto de 1998, a través de la cual se dispone la cancelación de providencias judiciales mediante bonos de deuda pública[67].

Milita en la actuación oficio 10100-043-01-025 de 20 de enero de 2012, con el que se aporta al expediente el oficio GIT-GPSPC-AA-444 del Ministerio de la Protección Social adiado el 07 de noviembre de 2011[68], relacionado con los eventos presuntamente delictivos señalados al señor MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ dentro del sumario 214, contentivo de la resolución 1512 de 15 de noviembre de 2011, con la que el Ministerio de la Protección Social dispuso aplicar algunos fallos proferidos por los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Pasto y Armenia, se revocan unas resoluciones, se ajusta una mesada pensional, se ordena el reintegro de $165´559.421,28, afectando los actos administrativos 242 de 1994, 1341 de 1996 y 1033 y 2070 de 1998 en lo que a éste se refiere; decisión que se complementó con el memorando GIT-GPSPC-ASNP-659 de 28 de abril de 2011, relativo a la revocatoria de las sentencias emitidas por los Juzgados Quinto y Octavo Laborales del Circuito de Barranquilla en favor de ZÁRATE MUÑOZ, informe que también fue aperado de los documentos que dieron lugar a su proferimiento.

En sentido homólogo se aprecia reproducción de la resolución 1516 de 15 de noviembre de 2011, con la que el GIT dio aplicación a la revocatoria ordenada en sede de consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja respecto de la providencia con la que el Juzgado Primero Laboral del

[64] Cuadernos de anexos de instrucción 6, 7 y 8.
[65] Folios 1 a 266 del c. o. 9 de anexos de instrucción.
[66] Folios 267 a 298 del c. o. 9 de anexos y 1 a 6 del c. o. 10 de anexos de instrucción.
[67] Folios 7 a 34 del c. o. 10 de anexos de instrucción.
[68] Cuaderno de anexos 11 de instrucción.

Circuito de Barranquilla amparó los presuntos derechos conculcados del señor MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, disponiéndose la revocatoria directa de la resolución 830 de 1997 y la 330 de 1996 en lo atinente al referido ciudadano; documento que se acompañaba del correspondiente memorando GIT-GPSPC-ASNP-1134 de 29 de julio de 2011[69]. En lo que se refiere a las actuaciones judiciales relativas al extrabajador[70], fueron aportadas copias de las sentencias dictadas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla el 11 de octubre de 1994, revocada el 22 de abril de 2004 en curso del grado jurisdiccional de consulta por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Tunja; así como la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Armenia tocante a la decisión de primera instancia emanada del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla fechada el 12 de febrero de 1996, en la cual también se dispuso la revocatoria de la de primer grado.

Luego de los referidos informes, se agregaron algunos documentos relacionados con la desvinculación de la empresa portuaria y la posterior reclamación judicial adelantada por el señor MIGUEL ÁNGEL BLANCO CORRO ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, desatada con providencia de 03 de junio de 1992[71], de las decisiones emitidas en virtud de la providencia judicial y la ulterior revocatoria proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Manizales el 08 de marzo de 2004, sin que dentro de los anotados legajos obre prueba de la revocatoria de actos por la administración.

Con decisión de 25 de septiembre de 2012, por asignación que se extendiera por la jefatura de la Unidad Nacional Anticorrupción, la instructora avocó el conocimiento de las diligencias adelantadas en contra del ciudadano MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO bajo el radicado sumarial 3762[72], teniendo en cuenta que se relacionaban con el objeto de la presente investigación, legajos dentro de los que reposa copia de la cartilla decadactilar y alfabética del procesado remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil; los antecedentes que reportaba para entonces en la base de datos de la Policía Nacional, en los que se destaca aquel que le figuraba por los eventos indagados dentro de la presente actuación identificada con el sumario 214; reproducción de las resoluciones 1038, 2686 y 0525 de 1998 y de las 138, 139 y 140 de 1995, relacionadas con las reclamaciones adelantadas por el referido ciudadano, así como las 0830 de 1997, 0354 de 1994 y 0330 de 1996 asociadas con los mismos hechos delictivos.

Mediante oficio 10100-043-01-0464 de 16 de septiembre de 2010[73], la Jefatura de la Unidad remite el oficio GIT-GPSPC-AA-3441 adiado el 06 de septiembre de la misma anualidad, por medio del cual el área de Coordinación Administrativa del GIT remite reproducción del acto administrativo 1469 de 03 de noviembre de 2009, con el que se dio aplicación a fallo proferido por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, se revocaba una decisión y se ordenaba el reintegro de una suma dineraria, respecto del señor HERNÁN

[69] Folios 1 a 14 del cuaderno de anexos 12 de instrucción.
[70] Folios 63 a 143 ídem.
[71] Folios 15 a 62 del cuaderno de anexos 12 de instrucción.
[72] Folios 154 a 261 ídem.
[73] Cuaderno de anexos 13 de instrucción.

TORRES RODRÍGUEZ y la sentencia de primera instancia emanada del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla el 17 de enero de 1997, ordenándose la revocatoria de la resolución 1042 de 1998 y el reintegro de $45´200.000,00; acto que se complementaba con el contenido del memorando GPSPC-ASNP-1183 de 23 de octubre de 2009, el cual también se glosa a la actuación.

De cara a las reclamaciones judiciales efectuadas por los procesados, fue aportado el ejemplar original del proceso adelantado por el señor ARMANDO RAFAEL OSPINO ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla[74] representado por el abogado LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO, a quien se le confió mediante poder el reclamo de reliquidación de la totalidad de las prestaciones sociales e inclusión integral del tiempo laborado en la empresa portuaria; asunto que fue decidido con sentencia de 29 de enero de 1996, en el sentido de condenar a la demandada al pago de diferencias por concepto de prima de servicios correspondientes a los períodos comprendidos por el primero y segundo semestres de 1991 a 1993, a lo que se agregó la imposición de pago por reliquidación de vacaciones proporcionales, prima de vacaciones proporcional, prima de antigüedad proporcional, prima de servicios proporcional, cesantías definitivas, salarios moratorios y costas procesales, ante la presunta omisión atribuible a la empresa portuaria; compendio dentro del que igualmente yace la providencia judicial emanada de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá fechada el 02 de noviembre de 2001, que dispuso la revocatoria de la decisión de primer grado y en su lugar absolver a la entidad accionada de las pretensiones formuladas en la demanda y amparadas por el *a quo*.

Igualmente, fue aperado el expediente agotado por el señor JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA representado por el también procesado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla[75], en el que se discutió lo atinente a la inclusión total de las sumas devengadas en el último año de servicio con la consecuente reamortización de las percepciones relacionadas con las primas de servicios, de antigüedad y de vacaciones definitivas y provisionales, de las cesantías, así como al reajuste de la mesada pensional, al pago de la indemnización moratoria y de costas procesales y agencias en derecho; pretensiones que fueron despachadas de forma favorable con decisión de 07 de febrero de 1996, encontrándose una presunta deficiencia en la liquidación de la prima de servicios de los dos semestres de 1992 de la que devino el reajuste de las percepciones reclamadas por el actor en el escrito demandatorio, sin que milite evidencia de que el asunto fue sometido al grado jurisdiccional de consulta.

En etapa de juicio, de cara a las órdenes adoptadas en audiencia preparatoria, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, aportó copias digitales de las hojas de vida pensionales de quienes se convocaron a reproche criminal, mediante oficio identificado con el consecutivo 201611100937291 de 31 de marzo de 2016[76], información que fue allegada en 32 CD´S, algunos acompañados de documentos impresos relacionados con los exoperarios, y constancia de no

[74] Cuaderno de anexos 14 de instrucción.
[75] Cuaderno de anexos 15 de instrucción.
[76] Folios 174 a 224 del c. o. 2 y c. o 3 de juicio.

haberse hallado la del enjuiciado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, teniendo en cuenta que el ciudadano nunca estuvo vinculado a la empresa portuaria como empleado.

En los referidos legados demostrativos se encuentra evidencia, aunque no completa en todos los casos, de aquellos documentos que la empleadora guardaba en torno de la vinculación del ciudadano a la empresa, de los reportes del área de recursos humanos emitidos de cara a permisos, licencias, vacaciones disfrutadas, información familiar, llamados de atención y los correspondientes descargos entregados por el trabajador, de retiros parciales de cesantías, evidencia de las certificaciones y actos administrativos proferidos por la empresa para el momento en que se produjo el retiro definitivo de cada uno de los trabajadores investigados, de las reclamaciones que de manera administrativa y judicial adelantaron junto con los poderes por ellos librados para que se acometiera su representación judicial.

Sobre el particular se destaca, por ejemplo, en el caso del ciudadano MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, quien reporta diversas reclamaciones judiciales, que dentro de la documental que compone su hoja de vida pensional obran mandatos otorgados a los profesionales del derecho MIRIAN LUZ SAUMETH DIAZ, en dos oportunidades, encomendándole el reclamo de trienios, salarios de garantía, subsidio de transporte, diferencia de vacaciones y reajuste de pensión de jubilación; el extendido al doctor JAIME RAFAEL KORTRIGHT RIPOLL para que se deprecara la reliquidación por aplicación de los ajustes contemplados en las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, debiéndose tasar la indexación y corrección monetaria a que hubiere lugar; el entregado a la doctora ERIKA SENIOR MARINO para que se adelantara la solicitud de reconocimiento de nivelación salarial por reamortización de prima de antigüedad, domingos y feriados, 70% de recargo aplicable al winchero, muelles privados, examen médico, 12% de reajuste en las cesantías y de mesada pensional, con lo que corrobora la existencia en esa compilación de por lo menos cuatro manifestaciones volitivas de accionar en contra de la entidad portuaria, de las cinco que le fueron enrostradas en el vocatorio a causa.

Por otra parte, en lo que atañe al señor JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, quien reporta haber efectuado una sola solicitud por vía judicial con resultas lesivas para los recursos de la empresa portuaria en liquidación, se aprecia en el contenido de la hoja de vida pensional aportada por la UGPP, que entregó por lo menos tres mandatos, el primero a la profesional del derecho ENITH ROMERO MELÉNDEZ para que deprecara el pago de las sumas resultantes de reliquidar la diferencia de prima de servicios de diciembre de 1991, al encontrarse una presunta inconsistencia en lo estimado por la empresa en ese pago; el siguiente entregado al togado YAMIL JOSÉ OSPINO PÉREZ tenía por objeto el reconocimiento de diferencia de tonelaje de contenedores, salario garantía, 65% de recargo por estibador, muelles privados, examen médico, bonificación 30000, aumento 83484 (25%), retroactivo 89, recargo nocturno 35%, fondo de bienestar, bonificación 40000, nocivos y explosivos, reclamos que se complementaron a los que en la misma data se le encomendaron al abogado RÓGER ALFONSO FAJARDO CARDOZO, quien se facultó para solicitar el pago de fondo social, primas de servicios, 21.5% de recargo para estibador, desgaste físico, descanso compensatorio, sobretasa, nivelación salarial, refrigerios 91,

transportes y diferencia de vacaciones, con lo que se aprecia que si bien la convocatoria a causa se realiza por la reclamación concretada en la providencia judicial proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla el 05 de diciembre de 1996, el procesado habría aspirado a dos reclamaciones adicionales que no se concretaron.

De otro lado, el Fondo de Pensiones del Nivel Nacional – FOPEP, remitió con destino a la presente actuación mediante oficio 2016016784 de 23 de marzo de 2016[77], los reportes de pago guardados en sus bases de datos respecto de los aquí procesados desde la última mensualidad de 1998, a la fecha de la solicitud, marzo de 2016, detallándose el número de cuenta a la que se efectuaron los abonos, el monto de lo devengado en cada mensualidad, la identificación de los descuentos realizados y el neto a pagar a cada uno de los exportuarios.

Mediante comunicación 141938/ARIAC-GRUCI 1.9 de 28 de marzo de 2016[78], la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, remitió los datos de antecedentes penales que reportaban en sus bases de datos los procesados, dentro de los que se aprecia la solicitud de anotaciones dentro de varios sumarios, sin que se informe la existencia de reportes definitivos respecto de los extrabajadores enjuiciados, y únicamente se detalla revocatoria de medida de aseguramiento en favor del abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO dentro de las diligencias sumariales 12.356 adelantadas por la Fiscalía 60 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. En este mismo sentido y a folio seguido de ese reporte, yace el adosado por la Fiscalía General de la Nación, en el que no se evidencia antecedentes respecto de ninguno de los procesados.

El 28 de julio de 2016, fue suministrada vía correo ordinario copia de la historia clínica del procesado ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO[79].

En curso de la vista pública, en sesión de 30 de agosto de 2016, fue recaudado el testimonio del señor **LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO**, quien informó a la causa que para ese momento se encontraba condenado por dos asuntos relacionados con el tema de FONCOLPUERTOS y se hallaba otro expediente en curso, anotando que estos se iniciaron a razón de las indebidas liquidaciones efectuadas por la empresa portuaria respecto de las primas de servicios y antigüedad, y, en especial, en lo que atañe a la reliquidación de la prima de servicios, aduce que ésta, al haber sido pagada por fuera del lapso propicio para ello, dentro del devengado del siguiente período causado, se integró a la base de liquidación de la del semestre siguiente por mandato de los jueces que tuvieron ocasión de fallar estas pretensiones; en cuanto a los días descontados por huelga que cimentaron varias de las reclamaciones judiciales que se investigan dentro de la presente causa acota que dentro de aquellos trámites judiciales nunca se aportó evidencia de que el cese de actividades hubiese sido declarado ilegal y, aun cuando el Despacho le informa la existencia de decisiones administrativas que así lo dispusieron, recalca que éstas no hicieron parte de los expedientes laborales en los que fue solicitada la reliquidación de prestaciones sociales por la indebida apreciación del tiempo laborado, lo

[77] Folios 1 a 183 del c. o. 4 de causa.
[78] Folios 185 a 187 ídem.
[79] Folios 92 a 110 del c. o. 5 de causa.

cual era carga probatoria de la empresa portuaria o el fondo liquidador de ésta.

A su oficina acudían los extrabajadores a buscar sus servicios profesionales y con fundamento en los documentos que los mismos aportaban, relacionados con su paso por la empresa portuaria, se iniciaba la reclamación por vía administrativa, acorde a las mismas normas convencionales que orientaban estas reclamaciones. Comenta que encuentra desproporcionado el señalamiento que se realiza a los trabajadores por cuanto no ostentaban los conocimientos para fraguar una determinación en los directivos de la empresa y las autoridades judiciales, recordando que, contrario o los planteamientos de la Fiscalía en torno a la responsabilidad de los aquí investigados, a algunos directivos portuarios les aplicaron en principio de la buena fe, pero en adelante a todos los abogados y trabajadores se les ha imputado compromiso por los hechos presentados en la liquidación de la empresa; últimos que desconocían detalles de los procedimientos a los cuales se sometían las sentencias contentivas de sus derechos, negando que se hubiere pagado a directivos de la empresa portuaria para que se acogieran sus reclamaciones.

De otro lado, fue escuchado el doctor **WILLIAM HERNÁNDEZ CARRILLO**, quien fungió como gerente del puerto marítimo y fluvial de Barranquilla y obras de conservación de Bocas de Ceniza, previo al proceso liquidatorio de la empresa portuaria, informando detalles del proceso de empalme que se dio entre la administración saliente con los directivos del fondo liquidador y las entidades del sector privado que a partir del 01 de enero de 1994 entrarían a asumir por concesión la administración de los puertos, de las actividades realizadas para el inventario de los bienes y obligaciones que para entonces tenía la empresa, dentro de lo que mencionó que para cuando se concretó su actividad, se dejaron las obligaciones de la empresa en cero, es decir, los asuntos judiciales y administrativos laborales y el estado de los bienes que hacían parte de la empresa, fueron entregados sin pendientes e identificados de forma plena, respectivamente.

Las conciliaciones que para entonces se rubricaron con algunos de los extrabajadores, que no superaron las 45 o 50 en los últimos seis meses, eran sometidas al escrutinio de diversas áreas de la empresa portuaria que impartían visto bueno para que se llegare a su celebración, la cual también debía avalar la junta directiva del terminal que estaba compuesta por siete personas de las que era presidente el gobernador del departamento del Atlántico. En torno de las conciliaciones presuntamente suscritas a finales de 1993 con las directivas del terminal, acota que tiene conocimiento de que éstas fueron sometidas a cobro de forma fraudulenta y la Fiscalía tuvo conocimiento de estos eventos que hacen parte de investigación de carácter delictivo, resaltando que las que se firmaron en 1993 generalmente eran individuales y no colectivas como las que se mencionan, en las que se beneficiaban plurales números de personas, que contaban con firmas espurias y sobre conceptos que no contaban con respaldo normativo.

En torno del conocimiento que podrían ostentar los extrabajadores respecto del texto de las convenciones colectivas de trabajo, memoró que el contenido de la norma a menudo era discutido en cuanto a sus interpretaciones por las personas que laboraban en la parte administrativa del puerto junto con los trabajadores, y cuando se presentaba alguna

controversia en torno a estos aspectos, se elevaba solicitud a la oficina de relaciones industriales para que se aclarara la debida aplicación de las prerrogativas convencionales, por lo que asegura que los trabajadores eran conocedores del alcance de las normas y que al terminar sus operaciones la empresa portuaria, todos sus extrabajadores quedaron debidamente liquidados, advirtiéndose un pendiente por concepto de contingencias de cerca de $5.500´000.000,00 que en nada afectaban el empalme que se debía hacer con quienes asumirían la administración portuaria.

Posteriormente se escucha en testimonio al señor **SALVADOR ATUESTA BLANCO**, quien se desempeñó como director de FONCOLPUERTOS entre febrero y agosto de 1998, exponiendo detalles de las funciones que el ejercicio del cargo aparejaba, así como algunos aspectos relacionados con las reclamaciones que se hallaban en curso para el momento en que se avecinaba la desaparición del fondo liquidador de la empresa portuaria y de las formas en que se llegó al diálogo con algunos sectores de los reclamantes para socializar temas como el pago mediante bonos de tesorería TES clase B, ilustrando a la audiencia acerca del trámite que se adelantaba al interior del fondo en los casos en los que se presentaban sentencias para el correspondiente cobro, exposición dentro de la que acota, que para entonces no se hallaba establecida la obligatoriedad del sometimiento de las providencias judiciales contrarias a los intereses de FONCOLPUERTOS al grado jurisdiccional de consulta.

Acota que en muchos de los casos se dieron los pagos debido a que la empresa, ante las reiteradas condenas que le estaban siendo impuestas por tan diversos conceptos laborales y sancionada con igualmente variadas imposiciones moratorias, decidió que por vía administrativa se adelantaran los pagos de aquellas decisiones judiciales y de otras solicitudes por vía gubernativas que se encontraban en curso, teniendo en cuenta que la misma tardanza en dichos pagos, para cuando los intereses ordinarios y moratorios se encontraban en un muy alto porcentaje, hacía que el monto de las deudas de la empresa y, por ende, la situación financiera de la misma se vieran seriamente menguadas, por lo que se decidió acceder a muchas de las solicitudes de las que se habla.

Finalmente, fue escuchado en diligencia de atestación el señor **LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, ciudadano que se desempeñó como director del fondo liquidador para los años 1992 a 1996, realizando un breve recuento de lo que fueron las funciones por él desempeñadas al interior de la entidad y del tratamiento que se daba a las solicitudes enervadas por los extrabajadores portuarios y sus representantes judiciales; interrogantes dentro de los que se le cuestionó acerca de su cercanía con las personas que se encuentran vinculadas a la presente causa, expresamente de si tenía recuerdo de haber tratado directamente con ellos, ante lo que manifestó no reconocerlos de vista o trato y no estar al tanto de que dentro de las deprecaciones que ellos adelantaron se hubieren efectuado actuaciones dirigidas a conducir de forma previamente intencionada a defraudar las arcas estatales y todos los eventos que se le interrogan y que al parecer son parte esencial de la presente investigación están cobijados por la cosa juzgada en lo que a él se refiere, anotando que si bien su actuar se relacionó con la emisión de algunos de los actos que dieron lugar a las erogaciones que en esta causa se juzgan como constitutivas de conducta criminal,

nunca tuvo trato o conoce a ninguno de los que se hallan investigados en este asunto, con lo que termina su intervención en audiencia pública.

El 06 de octubre de 2016, fue aportado a la causa ejemplar del registro civil de defunción del señor CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS[80], que da cuenta del fallecimiento del procesado el 15 de enero de 2010.

Contiguo a ese documento, se aprecia memorial 201614202252361 arrimado a la causa el 18 de agosto de 2016[81], con el que la UGPP informa que el señor EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ reporta descuentos en nómina ordenados en cuantía de $67´682.375,00, quedando pendiente por descontar a la fecha del escrito la suma de $17´617.625,00, precisándose que en lo que toca a los demás beneficiarios del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, no se registran descuentos o devoluciones dinerarias. En lo que atañe al procesado LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, no registra acto administrativo en el que se le hayan reconocido sumas por lo acordado en el acta de la referencia, anotando además que de las sentencias que hicieron parte del objeto pactado en el acta, obra evidencia de que 14 de ellas fueron objeto de revocatoria a partir de las decisiones dictadas en sede de consulta por diversos Tribunales del territorio nacional; culminando con que la conciliación fue dejada sin efectos en virtud de la sentencia de 22 de julio de 2015, proferida por la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la causa 2014-00001 que se adelantara en contra del señor CASIO ALBERTO MORA GARCÍA por el delito de peculado por apropiación, adjuntando a la anunciada comunicación el reporte de los descuentos aplicados y no aplicados a la nómina de pensionados.

Con constancia de 23 de enero de 2017[82], fueron adosadas a la causa las declaraciones vertidas por el señor MAYRON VERGEL ARMENTA que militaban en el expediente 2013-00040, en la cual reposaban los testimonios ofrecidos por el referido ciudadano relacionados con los eventos acaecidos en su paso como liquidador de la empresa portuaria desde finales de enero de 1993, versiones en las que informó algunas particularidades de lo que fue el proceso liquidatorio, de la enajenación de los bienes que a la postre hicieron parte del haber social del fondo, proceso para el cual se contrató una auditoría externa tendiente a establecer el estado de los activos y pasivos de la empresa para el momento de su desaparición, así como finalizar la relación laboral de la totalidad de los trabajadores portuarios, a fin de que no se diera la sustitución patronal, contratándose algunas cooperativas que suministraron personal que no se hallaba vinculado directamente a la entidad portuaria, ya que desde mediados de 1993 los únicos empleados de los terminales eran los gerentes de cada uno de los puertos, respecto de quienes se extinguió la relación laboral el 31 de diciembre de 1993, situación de la que se desprende que para finales de la anunciada anualidad las obligaciones laborales de la entidad portuaria se encontraban resueltas, salvo los procesos judiciales que se hallaban en curso y que quedaron debidamente identificados por las gerencias de los distintos terminales en los balances con los debidos soportes.

[80] Folios 135 y 136 del c. o. 5 de juicio.
[81] Folios 137 a 150 ídem.
[82] Folios 135 y 136 del c. o. 5 de juicio.

En torno de la presunta falsedad de algunas resoluciones y actas de conciliación advertidas en las auditorías externas, en las que pudieron haber participado algunos extrabajadores y abogados, recuerda que acorde a lo informado sobre el particular se procedió a elevar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de la que si bien no tiene un recuerdo expreso, anota que cuenta con copia con sus respectivos anexos, y en el caso específico del terminal de Santa Marta fue necesario revocar algunas resoluciones que reconocían beneficios pensionales por fuera de las prerrogativas convencionales en favor de trabajadores sindicalizados, sin que tuviere conocimiento de que se firmaran conciliaciones sin los debidos visados de las auditorias que se encargaban de corroborar la justeza de los renglones pretendidos por los reclamantes, haciendo algunas precisiones sobre el particular.

En lo que se relaciona con la suscripción de actas de conciliación, recuerda que la firma de éstas debía estar acompañada de los documentos que servían de evidencia de la existencia de la obligación, así como de concepto de la oficina jurídica y aprobación de la junta directiva de la empresa portuaria, por lo que este tipo de transacciones se daban muy eventualmente y recuerda que para entonces no superaron la cuantía de los $3.000´000.000,00.

El referido declarante, ante la solicitud que en este sentido elevaran algunos de los abogados defensores dentro del término legal señalado en la norma para estos fines, compareció para testimoniar en audiencia pública el 05 de junio de 2017[83], desde la ciudad de Cartagena, cuando el Despacho le otorgó el uso de la palabra a los presentes para que le formularan preguntas al atestante a quien se le interrogó acerca de algunos detalles de su paso por la empresa portuaria, lo cual se dio en virtud de encargo mientras fungía como superintendente general de puertos para efectos de terminar el proceso liquidatorio de la empresa portuaria, así como respecto de la forma en que fueron liquidados los trabajadores portuarios al momento en que se dio la desaparición de ésta, trámite que estaba a cargo de firmas externas especializadas que se encargaban de estas tasaciones, exponiendo algunos detalles sobre el particular y, en especial, respecto de las conciliaciones que para entonces se rubricaron, de las que destaca, no se hicieron de forma colectiva como se ha enterado que existen algunos pactos.

Al inquirírsele acerca de los procedimientos que se acometían para efectuar las liquidaciones de los extrabajadores y de los pasos que se agotaban al interior de FONCOLPUERTOS para la atención de las solicitudes de los mismos, menciona que ningún conocimiento tiene acerca de los anotados trámites, y las únicas actas que firmó de manera personal fueron aquellas en las que se encontraban los inventarios que se entregarían al fondo para que hiciere parte de los bienes destinados a solventar el pasivo social de la empresa liquidada, así como de la documentación que hacía parte de la entidad, sin que hubiere tenido ciencia de las reclamaciones presuntamente irregulares que a posterior efectuaran los exportuarios.

Respecto de las liquidaciones agrega que se hicieron con observancia de las normas convencionales que orientaban el procedimiento, sin que

[83] Folios 70 a 76 del c. o. 6 de causa.

mostrara noción expresa de las mismas, lo que atribuye a que las personas que se encargaban de efectuar las liquidaciones eran quienes contaban con el manejo detallado de estas, concluyendo que lo que se hizo fue dejar la empresa sin ningún trabajador pendiente por que se le entregara su liquidación y desvinculara de la misma, proceso que se dio con total transparencia, dando por culminada su manifestación jurada.

Con oficio 201711102362881 adiado el 09 de agosto de 2017[84], la UGPP aportó copias en medio físico de algunos documentos requeridos por el Juzgado asociados con los señalamientos efectuados por la Fiscalía acerca de los extrabajadores procesados; compendios dentro de los que se encuentran el material demostrativo solicitado en audiencia preparatoria, que ambienta las diversas solicitudes y pagos que se efectuaron en favor de cada uno de los enjuiciados; destacándose la reproducción de resoluciones que ordenan el pago de conciliaciones identificadas en el vocatorio a causa, de sentencias y mandamientos de pago que a posterior hicieron parte de las reclamaciones agrupadas en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, de actos administrativos que dieron lugar a los incrementos en las percepciones pensionales de quienes acudieron a la firma del acta por intermedio del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO; así como de las actuaciones administrativas que se gestaron al interior del fondo liquidador con ocasión de las diversas reclamaciones a que se ha hecho alusión a lo largo de este pronunciamiento, junto a algunas de las decisiones judiciales que componen el desplegar de quienes se encuentran convocados a juicio criminal, cada una de ellas por los conceptos que se han identificado previamente como presuntamente estructuradores de ilicitud.

La información contenida en estos compendios fue complementada con el oficio 201711102981471 adiado el 09 de octubre de 2017[85], en el que se hallan contenidas copias de algunos de los documentos que para entonces se encontraban pendientes por agrupar y que al igual que aquéllos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, entornan circunstancialmente las diversas reclamaciones efectuadas por los procesados.

Mediante oficio 984 de 07 de noviembre de 2017[86], el **Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla** remitió los procesos, cuyos originales fueron retornados a ese Estrado, que adelantaron los ciudadanos ÁLVARO RODADO CAICEDO, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JULIO LLANOS SARMIENTO, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, GABRIEL BARRIOS DONADO, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN y JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA, informando por otro lado que en lo que atañe a los señores EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ no se encontraron expedientes promovidos por éstos; por lo demás, se tiene que esos paginarios se encuentran agolpados en los cuadernos originales de causa 22 a 31; estos expedientes dan cuenta de los conceptos que fueron reclamados en cada

[84] Cuadernos originales 7, 8 y 9 de juicio.
[85] Cuaderno original 10 y folios 1 a 24 del c. o. 11 de juicio.
[86] Folio 27 del c. o. 11 de causa.

una de los trámites judiciales, de los que se extractarán algunos datos de interés para esta decisión.

**TABLA 7:**

| RECLAMANTE | ABOGADO | CONCEPTOS | FECHA DE LA SENTENCIA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO RODADO CAICEDO | MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ **y** DORIS DEL CARMEN PERNETH DE ALBOR | Acta de conciliación 1741 de 29 de diciembre de 1993, retroactivo sobre retroactivo, retroactivo de 1991, prima sobre prima, corrosivo, descanso compensatorio, uniforme, cena y descanso, retroactivo de 1989 y refrigerio. Acta de conciliación 1738 de 29 de diciembre de 1993, descanso compensatorio, retroactivo sobre retroactivo, uniforme, cena y descanso, retroactivo de 1989 y prima sobre prima. | Auto de **13 de agosto de 1999**, dispone la suspensión del trámite habida consideración de lo informado por el representante judicial del GIT, en torno a la prejudicialidad penal de las actas que sirvieron como título ejecutivo. | C. 22, folios 1 a 101. |
| ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | ENITH MARÍA ROMERO MELENDEZ | Teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado reliquidar las primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones, las vacaciones, cesantías definitivas, pago de diferencias salariales y reajuste de la mesada, salarios moratorios. | Sentencia de **09 de junio de 1999**, absuelve de las pretensiones a la parte demandada. Sin dato de providencia de segunda instancia. | C. 22, folios 102 a 146. |
| ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO | EFRAÍN BULA PARODI | Reliquidación de vacaciones legales y primas vacacionales convencionales de los años 1981 a 1985 y sus diferencias y reamortización de la prima de antigüedad. | Decisión de **07 de noviembre de 1990**, condena a la entidad demandada acorde a las pretensiones planteadas; fallo de segunda instancia adiado el **27 de febrero de 1992**, del Tribunal Superior de Barranquilla, confirmó la decisión de primer grado. | C. 22, folios 147 a 285. |
| RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO | ARNULFO RAFAEL OLIVEROS TORRENEGRA **y** MARLENE KALIL SARMIENTO | Teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado, reliquidación de cesantías, de prima de antigüedad, de primas de servicios de vacaciones y prima de vacaciones teniendo en cuenta el nuevo promedio salarial, pago de domingos y feriados, reajuste de la mesada y pago de salarios moratorios. | Decisión de **10 de julio de 1996**, se condenó a la parte accionada al pago de las sumas reclamada en la demanda; fallo de consulta fechado el **27 de julio de 2004**, se revoca la decisión del *a quo* y en su lugar absuelve a la demandada de las condenas reclamadas. | C. 23 y 23 A. |
| JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO | JOSÉ CASTRO BALETA | Reajuste de la prima de servicios de diciembre de 1991, de las vacaciones y prima de vacaciones de 1991 y 1992, de la prima de antigüedad, de las prestaciones sociales en general e imposición de sanción moratoria. | Providencia de **17 de julio de 1996**, imparte condena en contra de la demandada, el cual es revocado en sede de consulta por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo con pronunciamiento de **19 de septiembre de 2003**. | C. 24. |
| ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | ALFONSO GIL DE LA HOZ | Reliquidación de prestaciones sociales (cesantías), de mesada pensional e imposición de salarios moratorios al haberse dejado | El **26 de julio de 1995**, el Juzgado de primer grado emitió providencia en la que se acogían las | C. 25. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de incluir en el devengado del último año de servicios lo correspondiente a providencia judicial. | pretensiones de la demanda; posteriormente, con decisión de **20 de octubre de 2004**, el Tribunal Superior de Barranquilla ordena dar curso al grado jurisdiccional de consulta, sin que obre prueba de que efectivamente fue surtido. | |
| ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN | ANA DOLORES MEZA CABALLERO **y** HERNÁN DARIO VARGAS LOBO | Reliquidación de prima de antigüedad por erros en el cálculo de la empresa, de las primas de servicios, prima de vacaciones y vacaciones, de mesada pensional, reajustes de Ley 4 de 1976, Ley 71 de 1988 y Ley 100 de 1993, así como sanción moratoria. | Providencia de **09 de abril de 1997**, impone condena a la empresa demandada, revocada en sede de apelación interpuesta por el representante de la parte vencida, mediante decisión de **20 de octubre de 2000**, de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. | C. 26. |
| LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS GONZÁLEZ | ENITH MARÍA ROMERO MELÉNDEZ | Reliquidación de prima de servicios de diciembre de 1991, al no haberse apreciado debidamente el promedio salarial de, primer semestre, reliquidación de prima de antigüedad, de vacaciones y prima de vacaciones, reajusten de cesantías, de mesada pensional y sanción moratoria. | Sentencia de **09 de junio de 1999**, absuelve a la demandada de las pretensiones formuladas, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla al acometer el estudio en grado de consulta mediante proveído de **19 de diciembre de 2000**. | C. 27, folios 1 al 62. |
| JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA | JANNETH DE JESÚS LÓPEZ MAIGUEL | Subsidio de transporte, reliquidación de prima de antigüedad, reajuste de primas de servicios y de vacaciones, de las vacaciones, reajuste de las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, reajuste de la mesada pensional y salarios moratorios. | En audiencia de conciliación procesal de **19 de septiembre de 2000**, se declaró probada la excepción de falta de competencia al no haberse acreditado en debida forma el agotamiento de la vía gubernativa. | C. 27, folios 63 a 107. |
| MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO | Inclusión del valor real de lo devengado en el último año de servicio, con fundamento en este pedimento reajustar lo pagado en las primas de servicios de los años 1990 a 1993, reajuste de vacaciones y prima de vacaciones, de prima de antigüedad y de servicios proporcional, reamortización de cesantías, pensión de jubilación y sanción moratoria. | Mediante proveído de **15 de mayo de 1996**, se condena a la entidad demandada, obligación que es materia de la conciliación 050 de 30 de abril de 1998, acto que dio por terminado el trámite procesal. Si bien no obra reproducción de la decisión adoptada en consulta, reposa copia del auto de **10 de diciembre de 2001**, por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias ante la revocatoria de la sentencia | C. 28. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | absolutoria en favor de la demandada. | |
| GABRIEL BARRIOS DONADO | ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO | Inclusión del valor real de lo devengado en el último año de servicio, con fundamento en este pedimento reajustar lo pagado en las primas de servicios de los años 1990 a 1993, reajuste de vacaciones y prima de vacaciones, de prima de antigüedad y de servicios proporcional, reamortización de cesantías, pensión de jubilación y sanción moratoria. | Sentencia de **15 de mayo de 1996**, impone condena al extremo demandado acorde a lo pretendido; decisión que fue revocada por la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo mediante proveído de **27 de abril de 2004**. | C. 29. |
| JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | VÍCTOR GALLARDO ROSILLO | Prima sobre prima, reliquidación de prestaciones sociales y de las demás percepciones entregadas al término de la relación laboral, reajuste de las cesantías, del anticipo de pensión y de la mesada pensional. | El **14 de abril de 1999**, se dispuso absolver a la parte accionada de los ruegos propuestos en demanda; la cual fue confirmada en sede de consulta por el Tribunal Superior de Barranquilla mediante decisión de **27 de abril de 2000.** | C. 30. |
| LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR | ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO | Inclusión del valor real de lo devengado en el último año de servicio, con fundamento en este pedimento reajustar lo pagado en las primas de servicios de los años 1990 a 1993, reajuste de vacaciones y prima de vacaciones, de prima de antigüedad y de servicios proporcional, reamortización de cesantías, pensión de jubilación y sanción moratoria. | Con proveído de **05 de marzo de 1997**, impone condena a la demandada; decisión confirmada a posterior por la Sala Primera del Tribunal Superior de Barranquilla mediante proveído de **26 de octubre de 2005**, al apreciarse que el recurso de apelación interpuesto por la parte vencida nunca fue debidamente sustentado y por ello la de primera instancia quedó en firme, no procediendo la solicitud de nulidad propuesta. | C. 31. |

El 07 de marzo de 2018, arribó a la causa el informe de policía judicial 1-684624[87], del Grupo Investigativo Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el cual se aportan algunos medios de prueba relacionados con los trámites judiciales y administrativos impulsados por los procesados, dentro de los que se encuentra reproducción del acta de conciliación 008 de 22 de abril de 1998, suscrita entre el abogado FAVIO ÁVILA MORALES como representante de varios extrabajadores portuarios y el doctor JUAN BERNARDO LEÓN GALINDO como apoderado del Fondo Liquidador de la empresa portuaria, en la que se pactó el pago de sentencias proferidas por diversos estrados judiciales de Barranquilla mediante Bonos de tesorería TES clase B, acta que se acompañaba de algunos documentos que dan cuenta del trámite previo y concomitante a su rúbrica.

En este mismo sentido, se adosó copia de la conciliación 025 de 02 de junio de 1998, a la que acudió el togado MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

[87] Folios 155 a 209 del c. o. 32 y 1 a 263 del c. o. 33 de juicio.

como delegado judicial de los beneficiarios de la misma y el mencionado doctor LEÓN GALINDO como abogado de la entidad; de la 015 de 08 de mayo de la misma anualidad, firmada en representación de los extrabajadores por el doctor ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA; de la 04 de 05 de mayo de 1998, a la que asistió en representación de los reclamantes la doctora JULIA GALLARDO ROSILLO; de la 016 de 05 de junio de 1998, firmada por DUVIS ESTER RAMOS en calidad de representante de los beneficiarios; acuerdos colectivos en los que también se pactaron pagos relacionados con providencias, sentencias y mandamientos de pago, emitidos por autoridades judiciales de la misma urbe, de las que se aportan parcialmente copias, teniendo en cuenta que no reposa la totalidad de las decisiones que fundamentaron la firma de las actas.

Complementario al anterior informe, fue glosado a la causa el distinguido con el consecutivo 1-648455 de 28 de febrero de 2018, rendido por la misma dependencia investigativa, contentivo de los oficios librados con destinos a los diferentes Estrados Judiciales de Barranquilla tendientes al acopio de los expedientes judiciales requeridos por este Despacho.

En torno a las actuaciones judiciales adelantadas ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla por los ciudadanos MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ[88] y CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, se aportaron copias de las actuaciones que el primero promovió representado por el doctor ARNULFO RAFAEL OLIVEROS TORRENEGRA, decidido con proveído de 13 de mayo de 1993, en favor de las pretensiones de la parte demandante ante la presunta indebida apreciación de las vacaciones legales y primas vacacionales convencionales de los años 1980 a 1986, así como la prima de antigüedad del cuarto periodo percibido; no obstante, la sanción fue revocada con providencia de 19 de noviembre de 2003, dictada en curso del grado jurisdiccional de consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, absolviendo a la parte accionada de las condenas impuestas en primer grado.

Respecto de la actuación incoada por el señor CONTRERAS CÁRDENAS[89], en la que se reclamó el reajuste de prestaciones sociales y primas de antigüedad y servicios, reamortización de la mesada pensional, pago de las diferencias dejadas de pagar e imposición de salarios moratorios, ante la presunta imprecisión al haberse establecido el total devengado en el último año de servicios, la referida autoridad judicial con pronunciamiento de 03 de junio de 1993, absolvió a la entidad demanda de las pretensiones planteadas por el actor, siendo posteriormente revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla en sede de apelación con fallo de 14 de septiembre de 1994.

En homólogo sentido, fueron aportadas copias de los trámites judiciales que algunos de los procesados adelantaron ante el **Juzgado Primero Laboral del**

[88] Folios 3 a 193 del c. o. 34 de juicio.
[89] Cuaderno original 35 de juicio.

**Circuito de Barranquilla**, de los que se destacan los siguientes datos relevantes para la investigación:

**TABLA 8:**

| RECLAMANTE | ABOGADO | CONCEPTOS | FECHA DE LA SENTENCIA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL BARRIOS DONADO | JOSÉ DEL CARMEN ARIZA TEJADA | Prima sobre prima | Acción desistida al advertirse el pago del mismo concepto en otro trámite judicial. Se admite con auto de **06 de abril de 2000**. | C. 12, folios 1 a 38. |
| VÍCTOR CASTRO MIRANDA | SEGUNDO EFRAÍN CASTILLO MEDINA | Liquidación y pago de retroactivo 1er semestre de 1991, reliquidación de vacaciones, de prima de vacaciones, de uniformes y calzado, pago de diferencias salariales y de cesantías, salarios moratorios. | **12 de marzo de 1999**, absuelve de las pretensiones a la parte demandada; se confirma por la sala de descongestión del Tribunal de Bogotá con decisión de **29 de septiembre de 2000**. | C. 12, folios 39 a 129. |
| RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO | JOSÉ ALONSO GÓMEZ ZULUAGA | Valor del 12% de interés anual sobre las cesantías, en caso de no haberse pagado oportunamente, más el 24% de interés anual, salarios caídos. | **03 de septiembre de 1999**, el Juzgado absuelve a la demandada de las pretensiones; con decisión de **17 de mayo de 2000**, la Sala Sexta Laboral del Tribunal Superior de Atlántico confirma la sentencia de primer grado. | C. 12, folios 130 a 205. |
| ROBERTO PALMERA HERNÁNDEZ | MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA | Reliquidación de prestaciones sociales por inclusión de domingos y feriados, indemnización moratoria e indexación. | **16 de diciembre de 1999**, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá absuelve a la demandada de las pretensiones y ordena remitir en consulta; con decisión de **15 de mayo de 2000**, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia de primer grado. | C. 13, folios 1 a 79. |
| GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLAREAL | JOSUE E. SOBRINO OLIVEROS | Reconocimiento de días de huelga, reajuste de mesada pensional e imposición de sanción moratoria. | Se declara la nulidad de lo actuado al haberse advertido de manera oficiosa la ausencia de agotamiento de la vía gubernativa, auto de **10 de mayo de 2000**. | C. 13, folios 80 a 116. |
| HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ | JURIS E. PÉREZ PACHECO | Reliquidación de las primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones, cesantías definitivas | El **29 de septiembre de 2000**, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá absuelve a la demandada de las pretensiones y ordena remitir en consulta; con decisión de **28 de junio de 2002**, la Sala | C. 13, folios 117 a 181. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | de decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla confirma la sentencia primigenia. | |
| ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | ENITH MARÍA ROMERO MELÉNDEZ | Prima sobre prima, reliquidación de la prima de antigüedad, de la de vacaciones, de la de servicios, de cesantías, reajuste de la mesada pensional y sanción moratoria. | Se declara la nulidad de lo actuado al haberse advertido de manera oficiosa la ausencia de agotamiento de la vía gubernativa, auto de **10 de mayo de 2000**. | C. 13, folios 182 a 199. |
| JORGE RUA CARRILLO | ÉDINSON OROZCO CABALLERO | Reclasificación de categoría salarial de los años 1981 a 1986. Reajuste de mesada pensional. | Sentencia de **27 de noviembre de 1990**, imparte condena en contra de la entidad demandada, dando por probada parcialmente la excepción de prescripción. Condena confirmada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla con decisión de **12 de diciembre de 1991**. | C. 14, folios 1 a 203. |
| JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO | ARTURO EDGARDO GUZMÁN COBA | Reliquidación de prima de antigüedad, reajuste de prestaciones sociales a partir del ajuste inicial y pago de salarios moratorios. | El **31 de octubre de 1997**, el Juzgado accede a las pretensiones de la demanda y condena a la liquidada entidad portuaria; en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con providencia de **15 de julio de 2004**, modifica parcialmente la sentencia de primer grado modulando las condenas inicialmente impuestas. | C. 15, folios 1 a 191. |
| JOSÉ MOSQUERA DOMÍNGUEZ | GUSTAVO AMELL GARCÍA | Reliquidación de prestaciones sociales incluyendo el rubro de subsidio de transporte y subsidio familiar e imposición de salarios moratorios. | Se declara la nulidad de lo actuado al haberse advertido de manera oficiosa la ausencia de agotamiento de la vía gubernativa, auto de **10 de mayo de 2000**. | C. 16, folios 1 a 259. |
| MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ | LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO | Indemnización por despido sin justa causa, salarios moratorios. | Sentencia de **07 de junio de 1996**, condena a la entidad demandada por el despido sin justa causa; con providencia de **29 de septiembre de 2006**, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla dispuso la revocatoria de la providencia de primera instancia. | C. 17, folios 1 a 212. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO | Indemnización por despido sin justa causa, salarios moratorios. | Con providencia de **27 de febrero de 1996**, se impartió condena en contra de la entidad demandada; decisión adiada el **28 de marzo de 2006** del Tribunal Superior de Popayán dispuso en consulta la revocatoria de la de primer grado. | C. 18, folios 1 a 328. |
| LUIS VALERIO SOLANO CASTRO | RAFAEL VILLALVA HODWALKER | Reliquidación de cesantías y prestaciones sociales teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado (huelga), reajuste de mesada pensional y salarios moratorios. | Decisión de **26 de julio de 1996**, impartió condena en contra de la parte demandada; decisión de **11 de noviembre de 1998**, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa al no hallarse debidamente documentada su calidad de apoderado judicial. | C. 19, folios 1 a 192. |
| EDGARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | RAFAEL VILLALVA HODWALKER | Reliquidación de vacaciones legales y convencionales de los años 1981 a 1986 y reliquidación de prima de antigüedad. | Sentencia de **15 de diciembre de 1992**, acoge parcialmente las pretensiones y condena a la demandada; sin datos de decisión de consulta. | C. 19, folios 193 a 297. |
| JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY | ROBERTO ROMERO TURIZO | Reliquidación de cesantías y prestaciones sociales teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado (huelga), inclusión de uniformes en la liquidación final, reliquidación de prima de antigüedad, reajuste de mesada pensional y salarios moratorios. | El **06 de febrero de 1996**, se falla en contra de la entidad demandada acogiendo las pretensiones; auto de 15 de noviembre de 2002, ordena remitir en consulta, grado jurisdiccional que se desató con decisión de **22 de julio de 2004**, en el sentido de revocar la providencia de primer grado. | C. 20, folios 1 a 313. |

Con oficio 572 de 25 de mayo de 2018[90], el **Juez Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla** informa las actividades adelantadas en el Estrado que regenta con el fin de atender las solicitudes probatorias libradas por este Juzgado, dentro de las que se destacan los requerimientos librados con destino a la oficina de archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de la misma ciudad y copias de las actas de incautación de algunos procesos que fueron extraídos de sus dependencias por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, de los cuales se tiene noticia de su fundamento a partir de los diversos señalamientos efectuados por la Fiscalía en el vocatorio a causa y del contenido de las resoluciones que ordenaron el pago de las sumas declaradas en sentencia, en los casos en que prosperaron las pretensiones de los demandantes.

[90] Folios 75 a 183 del c. o. 36 de juicio.

Complementario a este reporte, el Juzgado remitió copias de los procesos asociados al extrabajador EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, e informó que los vinculados con los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO y ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA no fue posible dar con su paradero.

En lo que atañe a los dosieres del señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ[91], en el primero de los ubicados actuó por intermedio del abogado ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, en el que se reclamó la inclusión del importe de la prima correspondiente al primer semestre de 1991 para efectos de tasar la del segundo período de la misma anualidad, la reliquidación de las primas de antigüedad definitiva y proporcional, la de vacaciones y las vacaciones, de servicios proporcional, diferencias salariales, reliquidación de cesantías, de mesada pensional e indemnización moratoria, ruegos que fueron atendidos negativamente con providencia de 29 de febrero de 2000, disponiéndose la absolución de la entidad demandada; decisión confirmada en sede de consulta por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá mediante pronunciamiento de 18 de agosto de la misma anualidad.

Alrededor del otro trámite judicial adelantado por el antedicho ciudadano por intermedio de los doctores RICAURTE BARRIOS BARRIOS y JHONNY BARRIOS BARRIOS, también aportado a la causa, se aprecia que estuvo relacionado con el recargo de 70% aplicable al winchero e inclusión de la totalidad del tiempo trabajado para la empresa en su liquidación definitiva de prestaciones sociales, con los consecuentes reajustes que las alegadas imprecisiones implicarían en las diferentes primas, en las vacaciones, en las cesantías y en la mesada pensional, así como la imposición de sanción moratoria; el 13 de noviembre de 1996 el referido Estrado Judicial mediante sentencia dispuso acoger las pretensiones de la demanda y condenar al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, siendo posteriormente revocada en sede de consulta por la sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil (Santander) con proveído fechado el 30 de septiembre de 2003, absolviendo a la entidad demandada de las condenas inicialmente imputadas y no casada por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia mediante decisión adiada el 18 de abril de 2005.

A su turno, el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla** informó mediante oficio 0411 el 30 de mayo de 2018[92], el detalle de las actividades acometidas para el cumplimiento de las órdenes probatorias de este Estrado, enfatizadas en las reiteradas solicitudes elevadas ante la oficina de archivo central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Barranquilla; complementario a lo anterior, fue aportado el oficio 0425 el 05 de junio de la misma anualidad[93], al cual se le adjuntó reproducción de los expedientes que en ese Estrado se adelantaron por los señores FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, ARMANDO MARIANO SANJUAN y LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR.

[91] Cuadernos originales 37 y 38 de juicio.
[92] Folios 184 y 185 del c. o. 36 de juicio.
[93] Cuadernos originales 39, 40 y folios 1 a 180 del c. o. 41 de juicio.

En lo que atañe al trámite ordinario laboral agotado por el señor MANJARRÉS GRANADOS, se aprecia que aunque obra parcialmente dentro de las copias remitidas por el Juzgado Segundo, al haberse aportado únicamente el fragmento agotado en fase de consulta, el asunto se fundamentó en la presunta irregularidad presentada al momento de tasar la prima de antigüedad, en la apreciación de la base de liquidación para establecer el monto de la prima de servicios del último año laborado y en la alegada deficiencia en inclusión de la totalidad del tiempo trabajado a órdenes de la empresa portuaria, aspectos de los que se derivaba la reamortización de la cada una de las percepciones dinerarias entregadas al término de la relación laboral y salarios caídos; ruegos que se atendieron de manera favorable mediante decisión de 28 de abril de 1998; en sede de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de San Gil mediante decisión fechada el 28 de octubre de 2003, dispuso la revocatoria de la sentencia de primer grado para que en su lugar se absolviera a la parte accionada de las sanciones impuestas.

Por otra parte, respecto del asunto que ante esa autoridad judicial promovido por el ciudadano LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, se tiene que su basamento fue la inclusión de la totalidad del tiempo laborado para efectos de fijar el neto del que se establecería el importe de las prestaciones sociales, primas en general, mesada pensional, cesantías e indemnización moratoria. Las aspiraciones del extrabajador fueron objeto de la decisión de 24 de noviembre de 1992, alcanzando condena en contra de la entidad demandada por la presunta inobservancia de sus prerrogativas laborales y pensionales, siendo parcialmente reformada por el Tribunal Superior de Barranquilla en el sentido de morigerar las sanciones pecuniarias inicialmente impuestas con proveído de 11 de noviembre de 1993, siendo este evento objeto de aplicación del principio de doble presunción de legalidad y acierto.

En lo tocante al proceso del señor ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, éste se fundó en la inclusión de la totalidad del tiempo laborado para la empresa para efectos de establecer la base de liquidación de las prestaciones sociales y mesada pensional, reajuste de prima de servicios del segundo semestre de 1991, prima de antigüedad del cuarto trienio y proporcional, de vacaciones y prima de vacaciones, prima de servicios proporcional, de cesantías e indemnización moratoria, avideces que se atendieron de forma favorable a los intereses de la parte actora mediante proveído de 19 de marzo de 1996; dicha decisión fue objeto de revocatoria en consulta mediante fallo de 24 de febrero de 2004, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de San Gil (Santander), absolviendo a la demandada de las condenas impuestas en primera instancia.

Por último, dentro de los expedientes aportados en esa oportunidad por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, se encuentra el del ciudadano ARMANDO MARIANO SANJUAN, en el que se reclamó el pago de diferencias en la prima de antigüedad, prima de servicios, de cesantías definitivas, reamortización de la mesada pensional y reconocimiento de salarios moratorios, alegando una presunta incorrección en la liquidación de los referidos conceptos, sin que se especificara con precisión los montos o periodos en los que se había presentado la irregularidad; aspecto que motivó que mediante sentencia de 07 de marzo de 1995, se declarara la prosperidad de las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de

lo no debido, sin que dentro del infoliado aportado por el anunciado Estrado Judicial se aprecie la existencia de decisión de segundo grado, pese a que fue interpuesto el recurso de apelación y consta el envío al superior jerárquico para lo correspondiente.

El 19 de marzo de 2019, el anunciado Estrado Judicial aportó reproducción de los expedientes promovidos por los extrabajadores portuarios ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO y ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN contra la empresa portuaria en liquidación; el primero de los asuntos mencionados[94], el cual fue adelantado por el también procesado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO se fundamentó en el reclamo de reliquidación de las prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y demás percepciones dinerarias a partir del reconocimiento del estatus de directivo sindical para los años 1987 a 1992, al haberse presentado una imprecisión sobre este aspecto; pretensiones que fueron atendidas mediante decisión de 05 de diciembre de 1995, impartiéndose condena en contra de la entidad accionada, para finalmente decretarse la terminación del proceso por el pago total de la obligación, mediante auto de 12 de agosto de 1998.

No obstante, con decisión de 14 de octubre de 2003[95], la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de San Gil dispuso la revocatoria del fallo de primer grado y la absolución de la entidad demandada.

En torno al proceso tramitado por el señor ARMANDO MARIANO SANJUAN, al que acudió representado por el doctor RODRIGO ANTONIO ORTEGA SÁNCHEZ[96], y se reclamó la reliquidación de las primas de antigüedad, de servicios, de cesantías, reamortización de la mesada pensional, de las cesantías e imposición de salarios moratorios por presunta deficiencia en la apreciación de los renglones reclamados; aspiraciones que fueron resueltas de forma desfavorable para la parte actora mediante recisión de 07 de marzo de 1995, la cual fue revocada mediante providencia de 28 de febrero de 1997, condenándose a la entidad demandada al reajuste de la prima de antigüedad, de servicios y de las cesantías, a la reamortización de la mesada pensional e imposición de salarios moratorios.

Asimismo, el **Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla**[97] aportó los expedientes que en representación de los extrabajadores que se juzgan en la presente causa, adelantó el también procesado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO; asuntos en los que se aprecia uniformidad en el texto de las demandas, en las que se solicitó la inclusión de los valores reales devengados por los demandantes en el último año laborado, el reajuste de las primas de servicios de los dos semestres de las últimas anualidades laboradas para la empresa portuaria, el reajuste de vacaciones y prima de vacaciones proporcionales, reajuste de la prima de antigüedad proporcional, de las primas de servicios proporcionales, de las cesantías, de la pensión de jubilación especial proporcional, al pago de indemnización moratoria, costas procesales, ultra y extra petita, teniendo como fundamento la presunta imprecisión de la otrora empleadora en la estimación de estos renglones, de las que, se recuerda, se ha efectuado una identificación detallada en el cuerpo del pliego acusatorio que incluye el

[94] Folios 7 a 292 del c. o. 71 de juicio.
[95] Cuaderno original 72 de juicio.
[96] Cuaderno original 73 de juicio.
[97] Folios 190 a 210 del c. o. 41 y los cuadernos originales 43 a 56 de juicio.

detalle de los renglones que cimentaron las reclamaciones, el monto de las condenas y la forma de pago de las mismas, que se itera, se produjo en virtud del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, y las respectivas resoluciones de pago de cada uno de los reclamantes, posteriormente pagadas con Bonos de Tesorería TES clase B.

Esta constante se inaplica en los casos de los procesados LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, quien estuvo representado por el doctor LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO, y del señor ARMANDO OSPINO HERNÁNDEZ, quien acudió como prohijado del togado ROBERTO ROMERO TURIZO, asimilándose únicamente en lo que atañe a los renglones reclamados como presuntamente desconocidos por la empresa portuaria.

Los asuntos glosados remiten a las copias de las causas laborales de los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO, HERNÁN TORRES RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR, LUIS ALBERTO CABARCAS BETIS, JULIO LLANOS SARMIENTO, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS y MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, que en algunos casos, se acompañan de las providencias revocatorias dictadas en sede de consulta.

El 19 de marzo de 2019, el referido Estrado Judicial remitió reproducción del expediente atinente al caso promovido por el señor LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ[98], que giró en torno al reconocimiento de los días descontados por huelga del tiempo total laborado, petición a partir de la cual se desprendía la revisión de los valores percibidos por primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones y prima de vacaciones, cesantías definitivas y mesada pensional, así como la imposición de indemnización moratoria. Estas pretensiones fueron atendidas en fallo de primer grado adiado el 15 de julio de 1996, impartiéndose condena en contra de la liquidada empresa portuaria. Posteriormente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Armenia mediante pronunciamiento de 06 de febrero de 2004, revocó la anotada decisión en curso del grado jurisdiccional de consulta, absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones amparadas en primera instancia.

De otro lado, se allegó copia de la actuación ejecutiva que ante el mismo Estrado Judicial adelantó el señor FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS[99], asunto en el que sirvió como título ejecutivo la resolución 043127 de 04 de diciembre de 1990, por medio de la cual la empresa portuaria reconocía deuda en favor del reclamante por el concepto de viáticos, demanda de la que se derivó mandamiento de pago fechado el 10 de mayo de 1991, en cuantía de $231.754,69, el cual fue confirmado por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla en curso de la apelación planteada por la parte accionada, mediante providencia de 29 de agosto de 1991, asunto que no hace parte de los eventos que motivan el llamamiento a juicio del acotado ciudadano.

[98] Cuaderno original 74 de juicio.
[99] Cuaderno original 75 de juicio.

En similar sentido se aportó a la actuación reproducción del paginario del proceso ejecutivo provocado por el mismo extrabajador, teniendo como basamento para el reclamo la resolución 043004 de 02 de noviembre de 1990[100], por medio de la cual se le reconocieron prestaciones sociales en cuantía de $8´430.370,18, emitiéndose mandamiento de pago el 24 de enero de 1991, que a su vez derivó en el pago de la obligación por la empresa demandada; asuntos que no hacen parte de los eventos enrostrados al señor MANJARRÉS GRANADOS como generadores de ilicitud en el pliego de cargos.

En cuanto a las demandas ejecutivas aportadas respecto de los señores ALEJANDRO MOSQUERA MAJUL y ARMANDO MARIANO SANJUAN, se tiene que fueron inadmitidas por el Juzgado Octavo al no haberse aportado en los respectivos escritos los ejemplares de los títulos ejecutivos que habrían de servir de sustento para la acción, asuntos que se agrupan en los cuadernos 77 y 78 originales de causa.

Por último, se aperó copia del expediente adelantado por el señor JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY por intermedio del doctor ROBERTO ROMERO TURIZO[101], en el que se reclamó la inclusión del tiempo descontado de la liquidación definitiva de prestaciones sociales junto al monto correspondiente a bonificación convencional y, a partir de esta declaratoria, se efectuara la reliquidación de los renglones de prima de antigüedad, de servicios proporcional, las cesantías definitivas, la mesada pensional y pago de sanción moratoria. Si bien el conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, la decisión adoptada en primera instancia correspondió al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, Estrado que el 20 de enero de 2000, dispuso la absolución de la entidad demandada al advertir la ausencia de material demostrativo de cara a la normativa convencional que orientaba las relaciones laborales con la empresa portuaria; pronunciamiento al cual se le impartió confirmación por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia de 31 de octubre de 2001.

Por su parte, el señor JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, por intermedio del doctor ÉDISON OROZCO CABALLERO[102], solicitó el reajuste de las prestaciones sociales, de prima de antigüedad, de servicios, de vacaciones, de las cesantías y de la pensión de jubilación, aduciendo errores en su estimación por la empleadora, reclamando a la par el reconocimiento de salarios caídos o sanción moratoria; reclamo que se atendió con sentencia de 05 de julio de 1994, en el sentido de condenar a la parte demandada acorde a las pretensiones de la parte actora; poteriomente revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Armenia con pronunciamiento de 13 de febrero de 2004.

En lo que tiene que ver con el señor JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ, quien acudió representado por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO[103], se otea que solicitó el pago de las sumas resultantes de la reliquidación de vacaciones correspondientes a las anualidades 1992 y

[100] Cuaderno original 76 de juicio.
[101] Cuaderno original 79 de juicio.
[102] Cuaderno original 80 de juicio.
[103] Cuaderno original 81 de juicio.

1993, a lo que se agrega el reajuste de las cesantías, primas proporcionales y definitivas de antigüedad, de servicios, de vacaciones y monto de la pensión de invalidez, a lo que se agregó la sanción moratoria. Las pretensiones formuladas en la demanda fueron atendidas por la entidad demandada con las conciliaciones 050, 085, 074 y 054 de 30 de abril de 1998, y pagadas en virtud de la orden contenida en la resolución 2070 de 20 de mayo de la misma anualidad, situación que motivó la emisión del auto de 28 de julio de 1998, ordenando el archivo de las diligencias por ausencia de objeto al haber sido conciliado. Se anota que esta reclamación no hace parte de los eventos generadores de reproche penal en la presente causa.

El ciudadano GABRIEL BARRIOS DONADO, representado en causa laboral ordinaria por el abogado JORGE TOVAR GUERRA[104], solicitó al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla condenar a la entidad demandada a reliquidar las primas de servicios del segundo semestre de 1989 y 1991, reajustar las vacaciones y primas de vacaciones de los últimos tres años laborados, reamortizando el monto de la mesada pensional acorde con los valores presuntamente inobservados, las cesantías con sus intereses y salarios moratorios, reclamos que fueron negados mediante decisión fechada el 12 de mayo de 1998, y confirmada con proveído de 28 de junio de 2000, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

En torno del acopio de los expedientes concernientes a los procesos agotados por el **Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla**, se aprecia que mediante oficio 0711 de 31 de mayo de 2018, arribaron a la causa los que a continuación se relacionan:

**TABLA 9:**

| RECLAMANTE | ABOGADO | CONCEPTOS | FECHA DE LA SENTENCIA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO OSPINO HERNÁNDEZ | ROBERTO ROMERO TURIZO | Inclusión de días descontados de la liquidación definitiva del tiempo de servicios (huelga), reajuste de primas de vacaciones proporcionales y de vacaciones, de prima de antigüedad, de prima de servicios proporcional, de antigüedad proporcional, , reajuste de cesantías, de pensión de jubilación especial y pago de indemnización moratoria. | Providencia de **09 de agosto de 1996**, condena a la empresa demandada al pago de las sumas resultantes de la reliquidación de las primas proporcionales de antigüedad y servicios, diferencias de mesadas y sanción moratoria. Con decisión de **31 de agosto de 2004**, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo dispuso la revocatoria de la de primer grado y la absolución de la entidad demandada. | C. 57. |
| LUIS VALERIO SOLANO CASTRO | MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | Proceso ejecutivo **acta de conciliación 1629 de 30 de diciembre de 1993**, se pacta el pago de recargo del 50% de nocivos y corrosivos, reajuste pensional y salarios moratorios. | Mandamiento de pago de **29 de noviembre de 1996**, por el monto global para los cuatro demandantes de $83´761.242,07. | C. 58. |
| MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO | JOSÉ ALONSO GÓMEZ ZULUAGA | Valor del 12% de interés anual de las cesantías y en caso de no haber sido | Sentencia de **21 de enero de 2000**, dispone absolver la parte demandada. Con | C. 59. |

[104] Cuaderno original 82 de juicio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | cancelado, se le pague el 24% de interés anual. | decisión de **16 de junio de 2000**, en sede de consulta fue confirmado el fallo de primer grado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. | |

Con oficio 0577 arribado a la causa el 16 de julio de 2018[105], el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla informó que el proceso del señor ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO no había podido ser ubicado en el archivo del Juzgado o en la oficina de archivo central.

En torno de la noticia aportada a la causa acerca del posible fallecimiento del señor CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS, se dispuso en sesión de audiencia pública oficiar a la Notaría Primera del Círculo de Soledad (Atlántico) a fin de que aportara copia del registro civil de defunción del acotado ciudadano; documento que ingresó a la causa el 17 de agosto de 2018[106], disponiéndose mediante auto de esa fecha pasar al Despacho las diligencias para adoptar la correspondiente decisión.

De otro lado, el **Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla** mediante oficio 760 de 25 de junio de 2018, remitió los ejemplares originales de los procesos adelantados en ese Estrado por varios de los extrabajadores aquí encausados, que hacen parte de los eventos por los cuales se les convoca a reproche criminal, los cuales fueron reproducidos en duplicado para hacer parte de estas diligencias y los originales devueltos al anunciado Juzgado, de los que se resaltarán algunos aspectos de interés para la causa a continuación.

**TABLA 10:**

| RECLAMANTE | ABOGADO | CONCEPTOS | FECHA DE LA SENTENCIA | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO RODADO CAICEDO | MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ **y** DORIS DEL CARMEN PERNETH DE ALBOR | Acta de conciliación 1741 de 29 de diciembre de 1993, retroactivo sobre retroactivo, retroactivo de 1991, prima sobre prima, corrosivo, descanso compensatorio, uniforme, cena y descanso, retroactivo de 1989 y refrigerio. Acta de conciliación 1738 de 29 de diciembre de 1993, descanso compensatorio, retroactivo sobre retroactivo, uniforme, cena y descanso, retroactivo de 1989 y prima sobre prima. | Auto de **13 de agosto de 1999**, dispone la suspensión del trámite habida consideración de lo informado por el representante judicial del GIT, en torno a la prejudicialidad penal de las actas que sirvieron como título ejecutivo. | C. 22, folios 1 a 101. |
| ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ | Inclusión de días descontados de la liquidación definitiva del tiempo de servicios (huelga), reajuste de primas de vacaciones proporcionales y de vacaciones, de prima de antigüedad, de prima de servicios proporcional, de antigüedad proporcional, , reajuste de cesantías, de pensión de jubilación especial y pago de indemnización moratoria. | Sentencia de **13 de junio de 1995**, imparte condena a la empresa por las pretensiones planteadas. Con decisión de **29 de julio de 2003**, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo dispuso la revocatoria de la de primer grado y la absolución de la | C. 61, folios 1 A 134. |

[105] Folio 32 del c. o. 60 de juicio.
[106] Folios 79 a 81 ídem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | entidad demandada. | |
| JULIO LLANOS SARMIENTO | EFRAÍN ESCORCE E. | Vacaciones y primas de vacaciones de los últimos tres periodos causados. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Sentencia de **26 de junio de 1990**, absuelve a la entidad demandad de las pretensiones planteadas. Confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla mediante decisión de **27 de noviembre de 1992**. | C. 61, folios 135 a 180. |
| LUIS RUA BOLÍVAR | LUIS GUTIÉRREZ ALFARO **y** RICARDO TORRES MORALES | Reliquidación de vacaciones, de prima de vacaciones de los años 1981 a 1984, de prima de antigüedad del último cuatrienio. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Con providencia de **12 de junio de 1990**, se dispone impartir condena en contra de la demandada. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla con providencia de **17 de octubre de 1991**, confirma el fallo apelado. | C. 61, folios 191 a 282. |
| JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ | MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA | Reliquidación de prestaciones sociales por inclusión de domingos y feriados, indemnización moratoria e indexación. | Mediante auto de **24 de julio de 2006**, se dispone el archivo de las diligencias por desistimiento tracito de parte del demandante. | C. 62, folios 1 a 16. |
| ARMANDO MARIANO SANJUAN | EFRAÍN ESCORCE E. | Vacaciones y primas de vacaciones de los últimos tres periodos causados. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Mediante auto de **02 de agosto de 1985**, se dispone el archivo de las diligencias al aceptarse el desistimiento informado por el demandante, al haberse reconocido el derecho por la empresa demandada. | C. 62, folios 17 a 36. |
| JORGE PÉREZ OJEDA | CARLOS LUNA NOGUERA | Reliquidación de la prima proporcional de antigüedad, pago de los días descontados por huelga, reliquidación de la prima proporcional de servicios, de cesantías, de pensión de jubilación y pago de sanción moratoria. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Decisión de **27 de junio de 1997**, dispone condenar a la empresa portuaria acorde a las pretensiones de la demanda. Con fallo dictado en sede de consulta el **10 de marzo de 2005**, se revoca la de primer grado y en su lugar se absuelve a la entidad demandada. | C. 62, folios 37 a 195. |
| LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ | LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO | Reliquidación de vacaciones y de prima de vacaciones de 1981 a 1986, y reliquidación de prima de antigüedad del cuarto trienio. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Mediante pronunciamiento de **30 de julio de 1991**, se condena parcialmente a la empresa accionada. Recurrida la decisión de primer grado, el Tribunal Superior de Barranquilla con fallo de **27 de noviembre de 1992**, confirmó la providencia confutada. | C. 62, folios 196 al 276. |
| ÁLVARO BLANCO CASTRO | RICARDO JOSÉ TORRES MORALES | Reajuste de prima de antigüedad, de prima de servicios, cesantías definitivas, pensión de jubilación, mesadas atrasadas, reajuste | Decisión de **22 de febrero de 1994**, condena a la demandada acorde a las pretensiones | C. 63, folios 1 a 105. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de la Ley 4 de 1976 y salarios moratorios. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | planteadas; con fallo emitido en sede de apelación adiado el 11 de junio de 1999, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla revoca la decisión recurrida y absuelve a la demandada. | |
| JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA | MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA | Reconocimiento y pago del recargo para estibador del 21.5%, con la reliquidación general de prestaciones sociales que el reconocimiento acompasaba, reajuste de la mesada pensional, salarios moratorios e indemnización moratoria. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Providencia de **16 de marzo de 2000**, declara la prosperidad de la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa; acompasándose la nulidad de lo actuado en la causa laboral. | C. 63, folios 106 a 137. |
| JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | IVONNE URICOECHEA VENGOECHEA | Reajuste de prima de antigüedad, de prima de servicios proporcional, de cesantías y salario, de pensión de jubilación e indemnización moratoria. | Sentencia de **23 de noviembre de 1993**, emite condena en contra de la entidad demandada; auto de 19 de marzo de 1996, dispone la terminación del proceso por pago de la obligación | C. 64, folios 1 a 142. |
| JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY | MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA | Reliquidación de la mesada pensional acorde al devengado del último año incluyendo retroactivo pagado en agosto de 1989, reliquidación de las prestaciones sociales, de las primas percibidas y pago de salarios moratorios. | No obra evidencia de que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla hubiere emitido sentencia de instancia en el asunto que se analiza, pues el último acto remite al despacho comisorio que tenía por objeto notificar la admisión de la demanda. | C. 64, folios 143 a 181. |
| ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | ALFONSO GIL DE LA HOZ | Proceso ejecutivo teniendo como título judicial la sentencia de **22 de junio de 1990**, del Juzgado Sexto Laboral de Barranquilla. | Mandamiento de pago de **21 de junio de 1991**; decisión de segunda instancia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla de **13 de febrero de 1992**, confirma la primer grado. | C. 64, folios 182 a 222. |
| VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA | SEGUNDO EFRAÍN CASTILLO MEDINA | Huelga. **Reclamo que no hace parte de las imputaciones efectuadas en el vocatorio a causa**. | Sentencia de **29 de abril de 1997**, condena a la demandada a reliquidar las prestaciones sociales y primas percibidas y cesantías al incluir los días debidamente descontados por huelga. Con auto de 20 de diciembre de 2000, el Juzgado fallador declara la nulidad de lo actuado y ordena la remisión del expediente para que se surta el grado jurisdiccional de consulta ante el superior. | C. 65. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HERNAN TORRES RODRÍGUEZ | LILIA DEL CARMEN ARÉVALO QUINTERO | Huelga, reliquidación de prestaciones sociales con fundamento en ello, de primas, reliquidación de mesada pensional, pago de diferencias dejadas de entregar y sanción moratoria. | Con decisión de **19 de mayo de 1998**, se impartió condena en contra de la accionada por los descuentos aplicados a la liquidación definitiva del extrabajador; con auto de **01 de marzo de 2002**, se declara la nulidad de lo actuado para en su lugar remitir la sentencia de primer grado en consulta ante el superior. | C. 66. |
| MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO | ARMANDO NOGUERA IMITOLA | Recargo salarial del 21,5% por trabajo a destajo sobre las tarifas ordinarias, reajuste de la prima de servicios, de antigüedad, de antigüedad proporcional, de pensión de jubilación y sus diferencias, e imposición de salarios moratorios. | Sentencia de **22 de febrero de 2000**, del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá dispone la absolución de la entidad demandada, la cual fue confirmada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá con proveído de 11 de agosto de 2000. | C. 67 y 68. |

Mediante correo electrónico de 26 de diciembre de 2018[107], la UGPP aportó los datos solicitados por este Juzgado en torno de las devoluciones de dineros que se hubieren efectuado de forma voluntaria por los procesados o los descuentos que eventualmente se aplicaran a las nóminas de los mismos en relación con los eventos que se juzgan, comunicación en la que relacionan los datos de algunas decisiones administrativas a partir de las cuales se revocan los efectos jurídicos de aquellas resoluciones que ordenaron el pago de sumas en virtud de las providencias judiciales revocadas en sede de consulta, sin que se hubiere aportado reproducción física de dichos actos, a partir de los cuales sería posible corroborar las cuantías que en cada caso se entregaron de forma periódica a los extrabajadores reclamantes, información que se aperó con sigue:

**TABLA 11:**

| PROCESADO | RESOLUCIONES QUE REVOCAN ACTOS ADMINISTRATIVOS |
|---|---|
| ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO | Con **resolución 01067 de 01 de agosto de 2008**, se ordena la suspensión de la resolución **243** de 1998, por lo que se ajustan las mesadas de algunos extrabajadores, dentro de la que se encuentra la del procesado. |
| | Resolución **RDP 003842 de 03 de febrero de 2017**, se ordena dar cumplimiento a la sentencia de 22 de julio de 2015, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se dispone la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1015** de 07 de mayo, **1404**, **1519**, **1667** y **2070** de 08 de mayo, Y **369** de 06 de abril de 1998, en lo que tiene que ver con el señor RODADO CAICEDO; sin que se apreciara el reintegro de las sumas erogadas de forma presuntamente irregular. |
| FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS | Acto administrativo **0981 de 30 de agosto de 2011**, revoca directamente la resolución **1283** de 25 de junio de 1995, en cumplimiento de las ordenes emitidas en consulta por los Tribunales Superiores de San Gil y Armenia, y parcialmente la **2070** de 20 de mayo de 1998, en lo que al extrabajador se refiere, disponiendo igualmente el reajuste de la mesada pensional. |
| | Con resolución **RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016**, en cumplimiento del fallo judicial de 05 de julio de 2015, proferido |

[107] Folios 148 a 161 del c. o. 69 de causa.

| | |
|---|---|
| | por el Tribunal Superior de Bogotá, se dejan sin efectos las resoluciones **1020** y **1058** de 07 de mayo de 1998, y la **2070** de 20 de abril de la misma anualidad, en lo que tiene que ver con el señor MANJARRÉS GRANADOS; sin que se apreciara el reintegro de las sumas erogadas de forma presuntamente irregular. |
| EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Mediante resolución **1797 de 29 de agosto de 2003**, se da cumplimiento a decisión la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá respecto de la revocatoria de la resolución **1024** de 07 de mayo de 1998, y se ordena el reintegro a cargo del exportuario de $85´300.000,00; suma que acorde a lo informado para la época del anunciado memorial, tenía un pendiente por reintegrar de **$17´617.625,00.** |
| | Resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009** dispone la revocatoria parcial de las resoluciones **1194** y **276** de 1998, en lo que se refiere al señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, revocando directamente el acto administrativo **114** de la misma anualidad y reajustando la mesada pensional. |
| | Con acto administrativo **RDP 011101 adiado el 17 de marzo de 2017**, en virtud de la orden adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se dejan sin efectos las resoluciones **2217** de 10 de junio, **2226** de 12 de junio y **413** de 06 de abril, todas de 1998, en lo que atañe al procesado en comento. |
| ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ | Con resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, en cumplimiento de las órdenes dictadas por varios Tribunales Superiores, se ordena revocar parcialmente las resoluciones **932 de 1994**, **028 de 1997** y **2070 de 1998**, en lo que tiene que ver con el procesado, y de forma definitiva la **1027 de 1998**. |
| | Con resolución **151 de 29 de octubre de 2010**, dando cumplimiento a las revocatorias emitidas en consulta, se establece que el ciudadano debe reintegrar a la administración el monto de $138´974.540,28, la cual a la fecha de la comunicación no había sido entregada por el procesado o descontada de su percepción pensional. |
| ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | De conformidad con la orden impartida mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, se dejan sin efectos jurídicos y económicos las resoluciones 1029 de 07 de mayo de 1998 y 2070 de 20 de mayo de 1998, en lo concerniente al procesado SANTIAGO ARAUJO, sin que se aprecie la devolución o descuento de las sumas dinerarias indebidamente erogadas en su favor. |
| CARLOS ALFONSO CONTRERAS CÁRDENAS | Acto administrativo **1672 de 29 de agosto de 2002**, ordena descontar de la nómina del señor CONTRERAS CÁRDENAS 39 cuotas de $2´830.702,05 y 1 de $1´630.442,16. |
| | Con resolución **1727 de 30 de noviembre de 2009**, atendiendo orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión el 30 de mayo de 2008, se revocan directamente las resoluciones **2103** y **2521** de 1998 y se ajusta la mesada del beneficiario pensional. |
| | Mediante resolución **1487 de 25 de octubre de 2010**, atendiendo las órdenes proferidas en sede de consulta por varios Tribunales de diversos Distritos Judiciales del país, se dispone la revocatoria de las resoluciones **823** de 1997 y **1031** de 1998, acorde a la misma decisión judicial referida en el aparte anterior, afectando además las resoluciones **1054** de 1995 y **0125** de 1996. |
| | En virtud de las órdenes adoptadas se dispone el reintegro de la suma indebidamente erogada en favor del procesado que ascendió a la cuantía de **$421´372.217,77**, sin que a la fecha se haya corroborado descuentos o devoluciones asociadas con esta orden. |
| ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ | Con resolución **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, en cumplimiento de orden adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, se dejan sin efectos jurídicos las resoluciones **1032** de 07 de mayo, **1313** de 30 de abril, **2070** de 20 de mayo, **2217** de 10 de junio que modificaba el contenido de la **2226** de 12 de junio, todas de 1998, en lo que tiene que ver con el señor PALMERA HERNÁNDEZ; sin que obre comprobación del reintegro de las sumas indebidamente entregadas al procesado. |
| MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ | Mediante resolución (sin datos), se revocan las resoluciones **242** de 15 de abril de 1994, **1341** de 25 de junio de 1996 y **2070** de 20 de mayo de 1998, ajustando la mesada del extrabajador. |
| | Atendiendo la orden impartida por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante resolución **RDP 010648 de 16 de marzo de 2017**, se dispone dejar sin efectos las resoluciones **1033** de 07 de mayo y **1300** de 07 de mayo de 1998, en lo que al ciudadano ZÁRATE MUÑOZ se refiere. Con acto **1512 de 15 de noviembre de 2011**, se establece la obligación de devolver al tesoro nacional el monto de **$165´559.421,28**, sin que se encuentre acreditada la devolución parcial o total de la acotada cuantía. |
| ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO | Resolución **480 de 31 de marzo de 2009**, revoca de manera directa la resolución **423** de 1996, por medio de la que se dispuso |

| | |
|---|---|
| | el pago relacionado con uniformes y calzado por reclamación administrativa. |
| | Acto administrativo **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**, se revocan de manera definitiva los efectos jurídicos y económicos de la resolución **2070** de 20 de mayo de 1998 y de la **1300** de 07 de mayo de la misma anualidad, atendiendo la orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 22 de julio de 2015; no se evidencia devolución de los dineros erogados de forma presuntamente indebida. |
| ALEJANDRO FAJITH MOSQUERA MAJUL | Mediante resolución **RDP 07497 de 26 de febrero de 2018**, en su ordinal tercero, deja sin efectos las resoluciones **1055** de 07 de mayo de 1998 y **2070** de 20 de mayo de la misma anualidad, en lo que atañe al ciudadano MOSQUERA MAJUL; sin que se evidencia restitución de los dineros entregados al extrabajador. |
| ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ | Resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, en cumplimiento de las órdenes adoptadas por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 22 de julio de 2015, revoca las resoluciones **1054**, **1795** y **2070** de 1998, en lo relacionado con el señor OSPINO HERNÁNDEZ; sin que se advierta reintegro de las sumas erogadas en virtud de estas decisiones administrativas. |
| ALBERTO RAFAEL CABARCAS BETTS | Acto administrativo **RDP 045970 del 06 de diciembre de 2016**, de conformidad con la orden dictada por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 22 de julio de 2015, revoca las resoluciones **891** y **1016** de 07 de mayo y **2070** de 20 de mayo 1998, en lo relacionado con el extrabajador; no reportan devoluciones dinerarias. |
| RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO | Mediante decisión administrativa **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, dando cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 22 de julio de 2015, revoca las resoluciones **1036** de 07 de mayo, **1559** y **1642** de 08 de mayo, **2070** de 20 de mayo, la **2217** de 10 de junio y **2226** de 12 de junio de 1998, en lo relacionado con CABARCAS ROMERO; no se informan reintegros de dineros. |
| JULIO LLANOS SARMIENTO | Con **RDP 012605 del 28 de marzo de 2017**, en acatamiento de la orden proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 22 de julio de 2015, se dispuso dejar sin efectos jurídicos y económicos las resoluciones **1051** de 07 de mayo, **1565** y **1569** de 08 de mayo, la **2217** de 10 de junio y la **2226** de 12 de junio de 1998, en lo relacionado con LLANOS SARMIENTO; no se reporta devolución de los dineros indebidamente erogados. |
| MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO | Acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca directamente la resolución **830** de 10 de junio de 1997, y parcialmente la **330** de 19 de febrero de 1996, en lo que se refiere al señor MUÑOZ CAICEDO. |
| | Resolución **01677 de 29 de noviembre de 2010**, dispone el reintegro de $73´991.075,41 a cargo del señor MUÑOZ CAICEDO. |
| LUIS ENRIQUE RUA BOLÍVAR | En virtud de la orden impartida mediante decisión **1861 de 22 de diciembre de 2009**, se revoca parcialmente las resoluciones **1071** y **1757** de 1995, y se ordena ajustar la mesada pensional del extrabajador. |
| | Con acto administrativo **RDP 046880 de 13 de diciembre de 2016**, se dejan sin efectos jurídicos las resoluciones **2217** de 10 de junio, **2226** de 12 de junio, **1057** de 07 de mayo y **2070** de 20 de mayo de 1998, de conformidad con la orden impartida por el Tribunal Superior de Barranquilla en sentencia de 22 de julio de 2015. |
| | Acto administrativo **01861 de 22 de diciembre de 2009**, ordena que en virtud de la revocatoria del fallo de primera instancia el señor RUA BOLÍVAR debe reintegrar **$428´309.069,27** a la administración; recaudo del que no obra prueba de haberse realizado. |
| ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | Resolución **RDP 044037 de 22 de noviembre de 2016**, ordena dejar sin efectos jurídicos y económicos las resoluciones **243** de 15 de abril de 1994, en lo referente al señor FANDIÑO GARCÍA, teniendo en cuenta la orden impartida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en decisión de 30 de marzo de 2011; de otro lado, se dispone la revocatoria de las resoluciones **1059** de 07 de mayo, la **2070** de 20 de mayo, la **2217** de 10 de junio y la **2226** de 12 de junio de 1998, atendiendo la orden de la misma autoridad judicial fechada el 22 de julio de 2015. |
| ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN | Acto administrativo **RDP 05894 de 15 de febrero de 2018**, ordena la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones 1025 y 1813 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998, en lo que atañe al extrabajador MARIANO SANJUAN, sin que se aprecia devolución de las sumas entregadas indebidamente. |
| LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ | Con acto administrativo **RDP 02489 de 26 de enero de 2017**, se dispone la suspensión de los efectos jurídicos de las resoluciones **2217** de 10 e junio de 1997 y la **2226** de 12 de junio de 1998 en lo que atañe al señor DE LAS SALAS. No reportan reintegro de sumas dinerarias. |

| | |
|---|---|
| JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY | Resolución **RDP 047754 de 22 de diciembre de 2017**, deja sin efectos los actos administrativos **1022** de 07 de mayo y **2070** de 20 de mayo de 1998, en lo que remite al exportuario en comento, sin que la entidad que informa reporte devoluciones dinerarias en virtud de esta decisión. |
| LUIS VALERIO SOLANO CASTRO | Decisión administrativa **0661 de 13 de mayo de 2010**, del GIT revoca la resolución **1990** de 1996 en lo que al señor SOLANO CASTRO se refiere, aparejando la devolución de **$377´293.031,63**. |
| JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO | Mediante acto administrativo **RDP 015206 de 11 de abril de 2017**, se dejan sin efectos jurídicos las resoluciones **1046** de 07 de mayo y **2070** de 20 de mayo de 1998, acorde al fallo proferido por Tribunal Superior de Bogotá el 22 de julio de 2015, sin que se reporte devolución o descuento de dineros. |
| MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | Con decisión administrativa **RDP 001636 adiada el 20 de enero de 2017**, en virtud de la orden emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de 22 de julio de 2015, dispone la revocatoria de las resoluciones **1049** de 07 de mayo, **1563** y **1568** de 08 de mayo, **2070** de 20 de mayo, **2217** de 10 de junio y **2226** de 12 de junio de 1998, en lo que tiene que ver con el señor CAICEDO ORTIZ; sin que se reporten devoluciones de los dineros entregados de forma presuntamente irregular. |
| GABRIEL BARRIOS DONADO | Con resolución **928 de 17 de agosto de 2007**, se aplicó la suspensión de los efectos jurídicos del acta de conciliación **050** de 21 de marzo de 1996, acorde a la decisión de la Fiscalía General de la Nación fechada el 06 de julio de 2007. |
| | Acto administrativo **708 de 03 de junio de 2008**, revoca directamente la resolución **125** de 12 de enero de 1996, acorde a la misma directriz del ente instructor, relacionada con reclamación administrativa de uniformes y calzado, de conformidad con la sentencia de 30 de mayo de 2008 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá. |
| | Posteriormente, con decisión **RDP 020991 fechada el 27 de mayo de 2016**, dando cumplimiento a la orden de la referida autoridad judicial, se dispuso dejar sin efectos la resolución **248** de 18 de abril de 1994, la **1026** de 07 de mayo y **1404** de 08 de mayo de 1998. |
| | Con acto administrativo **RDP 01819 de 23 de enero de 2017**, en orden a aplicar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, se dejan sin efectos jurídicos las decisiones 1026 de 07 de mayo, 1404 de 08 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998, en lo que se refiere al señor BARRIOS DONADO, sin que se aprecie reporte de devolución voluntaria de dineros o descuento de los mismos. |
| GABRIEL ANTONIO BARRAZA VILLAREAL | Acto administrativo **RDP 017665 adiada el 27 de abril de 2017**, dispone en su ordinal tercero, de conformidad con la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá de 22 de julio de 2015, dejar sin efectos las resoluciones **1041** de 07 de mayo y **2070** de 20 de mayo de 1998, en lo que se refiere al señor BARRAZA VILLAREAL, sin que se evidencie devolución de los dineros asociados a los pagos efectuados con los actos revocados. |
| JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | Con decisión **RDP 047594 del 21 de diciembre de 2017**, atendiendo la orden adoptada por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá de 22 de julio de 2015, se dejan sin efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1044** de 07 de mayo, **2070** de 20 de mayo, **2217** de 10 de junio y **2226** de 12 de junio de 1998, en lo que al ciudadano SÁNCHEZ VERDOOREN se refiere. No e informa el reintegro de las sumas indebidamente erogadas. |

Mediante oficio 297 allegado a la causa mediante correo electrónico de18 de marzo de 2019[108], el Juzgado Octavo Laboral del Circuito informó las actividades efectuadas por el personal adscrito a esa oficina en aras de atender las solicitudes probatorias libradas por este Juzgado, del que se destaca el hecho de que algunos de los procesos que le fueron solicitados no pudieron ser ubicados en los registros de actuaciones, debido a que la información aportada por este Juzgado no incluía el número de radicado y que, por ejemplo, los datos de los sujetos procesales resultaban insuficientes para dar con la identificación de las causas laborales solicitadas, teniendo en cuenta que para la data en que se adelantaron las referidas causas no se contaban sistematizados los datos. No obstante, debe advertirse que este Estrado no contaba ni tampoco aún cuenta con la información que

[108] Folios 1 a 17 y 30 a 54 del c. o. 70 de juicio.

anhelaba ese Juzgado Laboral para hallar los cartularios que de conformidad con el régimen legal debe custodiar.

Con oficio 606 de 25 de abril de 2019, arribado a la causa el 08 de mayo posterior, se reciben algunos de los expedientes laborales solicitados al **Juzgado Quinto Laboral de Barranquilla**[109]; el primero de ellos correspondiente al señor JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, apadrinado por la togada LILIA DEL CARMEN AREVALO QUINTERO, asunto en el que se deprecó la reliquidación de las primas de antigüedad, de vacaciones y prima de vacaciones, de prima de servicios, por la alegada deficiente estimación atribuible a la otrora empleadora, reconocimientos a partir de los cuales se debería reamortizar el importe de la mesada pensional, de las cesantías definitivas, pago de las diferencias dejadas de entregar y pago de salarios moratorios por el reconocimiento inoportuno de los referidos renglones. Pretensiones que fueron atendidas favorablemente mediante decisión de 14 de julio de 1994; declarada la nulidad parcial de lo actuado y remitidas las diligencias ante el superior jerárquico para surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con providencia de 18 de diciembre de 2002, revoca la sentencia revisada y, en su lugar, absuelve a la entidad demandada de la condena impuesta en primera instancia.

Mediante oficio CJ-1449-23 arribado a la actuación el 01 de agosto de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil aportó copias de las cartillas decadactilares y alfabéticas de los procesados.

A continuación, se expondrá de manera sintetizada lo manifestado por los acusados que en desarrollo del juicio, cuando se sometieron voluntariamente a interrogatorio.

El 01 y 03 de junio de 2016, encontrándose en curso la audiencia pública, fueron escuchados bajo formulación de cuestionario los señores **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** y **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** a quienes se les informaron las prerrogativas que orientaban el recaudo defensivo que estaban por ejercer, procediéndose a oír a **RODRÍGUEZ RIVERA**, quien dijo estar al tanto de las previsiones informadas por el Despacho, pasando a exponer algunas particularidades de sus generales de Ley, dentro de los que comentó que para cuando se vio involucrado en este asunto judicial perdió a su esposa y se ha deteriorado su estado de salud a razón de los problemas legales y la persecución de que ha sido objeto por la Fiscalía; en torno de los eventos que motivan la presente causa, aduce que él consideró que la empresa le liquidó deficientemente sus prestaciones sociales y monto pensional, por lo que decidió acometer el reclamo por vía administrativa y judicial; acerca de los señalamiento que efectúa la Fiscalía refiere que se declara inocente, ya que todos tienen derecho a reclamar, pues la demanda interpuesta fue sometida al estudio de las áreas correspondientes de la empresa portuaria, y si se acogieron sus reclamos era porque tenía derecho a ello, y el abogado tuvo en cuenta las tarjetas de salarios e hizo el estudio "con todas las de la Ley" de los renglones a los cuales había derecho a reclamar, luego si se equivocó, fue responsabilidad del abogado, no la de él, dado que no conoce nada de derecho; frente al cobro del concepto llamado prima sobre prima, la cual

[109] Cuaderno original 83 de juicio.

se le explica acorde a lo dicho por la Fiscalía en el pliego de cargos, anota que desconoce que se haya reclamado ese concepto en su demanda, por lo que no puede hacer precisión sobre el particular; de cara al tiempo laborado con la empresa anota que fue de 18 años y algo más, alcanzando su pensión con el tiempo completo de 20 años al computarle para ello lo relativo al servicio militar, contando con tercero de bachillerato para cuando entró a laborar en el puerto.

Mientras estaba trabajando, recuerda, le dieron cursos relacionados con el contenido de las convenciones colectivas de trabajo, lo que le agradece a la empresa; la idea de que se formulara la demanda nació de un grupo de extrabajadores en vista de que algunos, pese a que estaban en el mismo cargo que otros, habían sido liquidados por debajo del promedio entregado a los del mismo cargo; en torno del pago que le fue reconocido en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, que ascendió a $65´200.000,00, dice que cuenta con copia del cheque en el que consta cuál fue el monto que le entregó el abogado por esa reclamación, que ascendió a $29´300.000,00, instándosele para que aportara copia del referido documento a la causa, suma que afirma le fue entregada porque el abogado dijo que no se les había pagado la totalidad de lo que se había solicitado en la demanda; el señor Fiscal interrogó al procesado acerca de cuánto era el porcentaje que cobraba el doctor COLLANTE PACHECO por acometer la reclamación, manifestando que la cuantía era de 35% de las resultas del proceso, para lo que le entregó la resolución de pensión, las tarjetas de devengo, partida de bautismo y registro civil, todo le entregó; la defensa efectúa algunos cuestionamientos acerca del monto entregado por el abogado y los pasos que se realizaron para alcanzar la conciliación que se asocia con los hechos investigados, respecto de los cuales dijo el deponente que no supo cuánto había sido el valor entregado al abogado, que nunca asistió ante las autoridades encargadas de atener las solicitudes judiciales o administrativas, desconociendo, inclusive, qué es un concepto salarial, y dentro de los cursos que le dieron nunca se les explicaron asuntos laborales legales, sino capacitaciones para el desempeño de sus labores, refiriendo que considera haber actuado de buena fe; el procesado COLLANTE PACHECO interrogó al versionista en torno de los hechos que rondaron la entrega del poder y de los porcentajes que se pactaron en el contrato de prestación de servicios, sin que el expositor recuerde con precisión el contenido del referido documento y el porcentaje acordado como honorarios profesionales.

Finalmente, el Juzgado formula algunas preguntas sobre los descuentos que se han efectuado a su mesada pensional o los reintegros que voluntariamente hubiere realizado, manifestando que nunca le han descontado y que tampoco ha realizado reintegros, pasando a informar algunos detalles de su vida personal y familiar.

Seguidamente, se recauda el interrogatorio del señor **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, quien al formularle algunos cuestionamientos de cara a los eventos de relevancia penal que se le endilgan se muestra desconocedor, por lo que se le ponen de presente por el Despacho, pasando a declararse inocente de los señalamientos, ya que no es abogado, no conoce de derecho y la suma que se le revela de $776´131.743,89 nunca la ha percibido, ni sabe de dónde salieron esos rubros; no obstante, el Juzgado precisa que por error involuntario y por la similitud con el nombre de otro

procesado se dio un valor errado, siendo $300´236.165,34 la cifra de lo presuntamente apropiado por este ciudadano.

Los hechos que se le endilgan remiten a cinco reclamaciones judiciales dirigidas a concretar la reliquidación de sus prestaciones sociales con fundamento en diversos renglones, a los que según la instructora no había lugar teniendo en cuenta que para cuando se produjo su retiro se liquidaron mayores valores en sus percepciones dinerarias, poniéndole de presente cada uno de los reclamos efectuados, ante lo que informa que nunca ha recibido las cantidades a las que se ha hecho referencia, que sí entregó poderes a algunos abogados pero que no en todos los casos se concretaron pagos, desconociendo su participación en las conciliaciones que dieron lugar a las erogaciones que se le enrostran; al preguntarle la razón por la cual inició dos demandas por intermedio de la abogada JULIA GALLARDO en vez de una sola, dijo que eran los abogados quienes promovían las acciones judiciales conforme se daban cuenta de que se habían presentado algunas deficiencias; al inquirirle acerca de la razón por la cual consultó al doctor COLLANTE PACHECO, anota que fue para una reliquidación de prima, pero no de prima sobre prima como se le está achacando, ante la cual el profesional del derecho le dijo que había lugar a reclamarla. El procesado COLLANTE PACHECO pregunta qué documentos llevó a su oficina para iniciar la reclamación, situación que el versionista no recuerda con precisión, momento en el que se fractura la comunicación, imposibilitándose su restablecimiento, teniendo en cuenta que ya no se encontraba el personal de apoyo en la sede de Barranquilla, por lo que se ordena continuar la sesión la siguiente data.

El 03 de junio de 2016 se prosiguió con el interrogatorio que se venía agotando, mientras efectuaba preguntas el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, preguntando acerca de algunos pormenores que rondaron la suscripción del mandato en su favor, así como el conocimiento y cercanía que tuvo el señor CAICEDO ORTIZ respecto del trámite judicial y administrativo que dio lugar a los pagos irregulares, frente a lo que manifestó el expositor que desconocía que se hubieren efectuado reuniones con funcionarios judiciales o inspectores del trabajo, o que se hubiere solicitado dinero por su abogado para entregarle a los mencionados funcionarios, negando que hubiere extendido mandato para reclamar reiteradamente el mismo concepto de reliquidación de prima de servicios; su defensora de confianza le interrogó acerca de algunos detalles de las reclamaciones judiciales adelantadas, de las sumas dinerarias recibidas por quienes ejercieron su representación judicial y sobre el origen de los pagos, mencionando que algunos de estos asuntos fueron entregados directamente a sus representantes por medio de bonos de deuda pública, sin que mostrara conocimiento de los renglones que expresamente se reclamaron en los procesos judiciales, ya que confiaba en que los profesionales que le asistieron acomodaron las pretensiones a la legalidad, sin que tuviera conocimiento de que estos asuntos posteriormente fueron sometidos a pacto en actas de conciliación.

El Despacho retoma las preguntas relativas a su personalidad, vida familiar, personal y relaciones sociales del interrogado, así como aspectos relativos a su estado de salud, con lo que culmina el recaudo defensivo material del procesado y se adoptan algunas decisiones en torno al acopio probatorio ordenado dentro del expediente.

En sesión programada para el 29 de junio de 2016, fue escuchado en interrogatorio el procesado **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, quien fungió como representante judicial de los procesados extrabajadores portuarios, y, al interrogarlo sobre los eventos que cimentaban el vocatorio a juicio, manifestó que en ningún momento se confabuló con los reclamantes o con los funcionarios judiciales y directivos de la empresa para acceder a las condenas dinerarias que se impusieron en los diferentes procesos y se concretaron en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, admitiendo que su responsabilidad radica en que, en su sentir, no se asesoró debidamente al momento de iniciar las demandas y someter las correspondientes condenas a la posterior conciliación, por lo que podría aceptar los cargos en el sentido de que su actuar se dio como interviniente, mas no como determinador, allanamiento frente al cual, adujo este Estrado, no es posible acceder con la condición que expresa el procesado, ya que este acto debe ser incondicionado y el hecho de que se pretenda cambiar el grado de participación de determinador a interviniente impide que sea acogido su planteamiento y debe ser rechazado por el Juzgado, por lo se prosigue con el interrogatorio. Decisión que también por los motivos que más adelante se explicitarán en esta sentencia queda ratificada por el grado de participación delictual endilgado y probado acerca de este abogado acriminado.

Respecto de los eventos que rondaron las reclamaciones judiciales en representación de los exportuarios que igualmente se juzgan en esta causa penal, refiere que éstos se acercaron a su oficina con el fin de que se reclamaran las diferencias de prima de servicios, teniendo en cuenta que en varios de los casos se presentaron inconsistencias en la liquidación de este rubro que se hallaba contemplado en el precepto 102 de la CCT, y nada tiene que ver con la mal llamada prima sobre prima, lo que derivó en la emisión de las providencias judiciales de las que se tiene conocimiento; en torno del grado jurisdiccional de consulta, recuerda que muchos de los Jueces tenían el criterio de no remitir la sentencia para que se surtiera y considera que no es un evento del que se le pueda sindicar responsabilidad criminal; recuerda que el pago de estos dineros fue algo difícil, porque no se concretaba, ya que algunos de los poderdantes le perdieron confianza, hasta que finalmente se concretó el desembolso.

En cuanto a los presuntos pagos dobles que se dieron respecto de los renglones reclamados en las demandas, anota que desconoce el fundamento que tuvo la Fiscalía para arribar a esa conclusión, mencionando igualmente en cuanto a la deficiencia de explicitud advertida en los escritos demandatorios que menciona la instructora, que fueron aportadas las pruebas que se requerían para documentar el paso de los demandantes por la empresa portuaria, de la norma que se invocaba para efectos de que estudiaran las pretensiones que considera se ambientaban en ese mismo material demostrativo; de cara al pago de las sumas dinerarias que se dio con ocasión de las solicitudes por él iniciadas comenta que claramente se recibió parte de aquellos pagos, pero cuando se enteró de que podían haber inconsistencias alrededor del objeto de las reclamaciones, desistió de proseguir con las solicitudes de pago de los dineros que para entonces se hallaban pendientes por entregar, debido a que en la ciudad de Barranquilla se empezó a rumorar que las demandas que se habían adelantado no eran legales, al no haberse surtido el grado

jurisdiccional de consulta, por lo que la tentativa se dio por la misma dimisión de su parte.

El pago de los honorarios se dio a cuota *litis*, al 50 % de las resultas, a lo que se agregaba la comisión que se debía entregar a la Fiduciaria del Pacífico para el cambio de los bonos; desconociendo si sus representados han realizado devoluciones voluntarias de dinero o si se han aplicado descuentos a las mesadas pensionales, lo que él tampoco ha efectuado; en cuanto a los cuestionamientos del representante del ente persecutor, menciona que para cuando realizó las reclamaciones desconocía que sus poderdantes hubieren formulado la misma pretensión en demanda anterior, negando que hubiere sido objeto de determinación ejercida por los extrabajadores; en cuanto a los pagos agrega que no fue para nada fácil, pues era la primera vez que incursionaba en el campo laboral y los demás abogados que tenían experiencia en ese ramo le trataban con desaire por tratarse de una persona que no se veía a menudo por las oficinas de FONCOLPUERTOS, en donde nunca vio o trató de forma directa con los directivos de la entidad, por lo que se le presentaron muchísimas dificultades con el cobro de los dineros que hacían parte de la referida conciliación, de cara a la deficiencia presentada en el trámite, refiere que en su criterio se trató de un error de derecho al haberse interpretado indebidamente el contenido de las normas que se debían invocar para efectuar la reclamación de la reliquidación de la prima de servicios, temática frente a la que menciona que los extrabajadores ya venían con una idea de cuál era el concepto que se reclamaría, procediendo a realizar un solo esquema de demanda para cambiar únicamente algunos datos particulares. Culmina la intervención absolviendo algunos cuestionamientos sobre su desempeño laboral, profesional, personal y familiar.

Teniendo en cuenta el material probatorio aperado a la causa, así como lo planteado en el pliego de cargos, el Despacho examinará si en el presente caso es predicable la estructuración de los comportamientos delictivos por los cuales se procede por cada uno de los acriminados respecto de aquellas conductas que aún se encuentran vigentes y analizando lo particular respecto de aquellas que se hallan prescritas para efectos de valorar si es necesario adoptar medida tendiente al restablecimiento del derecho como arriba se indicó; para lo que se precisa realizar el examen de procedencia de los renglones reclamados por vías administrativa y judicial que dieron lugar a las erogaciones que se reputan ilícitas de cara a la normativa convencional que reglaba las relaciones laborales entre quienes acudieron al reconocimiento de sus derechos y la empresa portuaria

**Reliquidación de la prima (proporcional) de servicios (“*prima sobre prima*”)**

El concepto de “*prima sobre prima*” atañe a un término derivado del uso de los abogados, trabajadores y funcionarios de la extinta Puertos de Colombia, y que se refiere a la forma de liquidar las dos primas semestrales a las que tenían derecho los exportuarios en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) vigente, consistente en liquidar la prima de junio incluyendo el valor de la prima de diciembre, y al hacer lo propio con la prima de diciembre se incorporaba el valor de la prima de junio.

La prestación social denominada prima de servicios se encuentra regulada en los artículos 306, 307 y 308 del CST, que prescriben:

*"ARTICULO 306. PRINCIPIO GENERAL.*
*1. Toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios, así:*

*a). Las de capital de doscientos mil pesos ($200.000) o superior, un mes de salario pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre que hubieren servido por lo menos la mitad del semestre respectivo y no hubieren sido despedidos por justa causa, y (…)*

*2. Esta prima de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior.*

*ARTICULO 307. CARACTER JURIDICO. La prima anual no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso.*

*ARTICULO 308. PRIMAS CONVENCIONALES Y REGLAMENTARIAS. Las empresas que por pactos, convenciones colectivas, fallos arbítrales o reglamentos de trabajos estén obligadas a conocer a sus trabajadores primas anuales o primas de navidad, tendrán derecho a que el valor de estas primas, se impute a la obligación de que trata el presente capítulo, pero si la prima de servicios fuere mayor deberán pagar el complemento*".

La CCT que rigió entre 1989-1990 y 1991–1993 para los trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia de las Terminales Marítimos de Cartagena, Barranquilla y la oficina de conservación de obras de Bocas de Ceniza, estableció:

*"ARTICULO 102. Se pagará a todos los trabajadores sin excepción, dos (2) primas en el año, consistentes cada una en un mes de salario promedio, así: La primera prima equivalente a un (1) mes de salario promedio en los primeros quince (15) días del mes de junio de cada año, y la segunda equivalente a un (1) mes de salario promedio en los primeros quince (15) del mes de diciembre de cada año.*

*La prima de junio se liquidará y pagará con base en lo devengado por el respectivo trabajador durante el lapso comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo de cada año.*

*La prima de diciembre se liquidará y pagará con base en los salarios devengados entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año*"[110].

De tal claridad normativa emerge que la liquidación de las primas de servicios se efectúa con fundamento en el salario devengado por el trabajador en el respectivo período, mas no por lo causado o recibido en períodos anteriores, situación que hace inviable en derecho tener en cuenta la prima liquidada o pagada para un lapso antecedente, como base salarial para calcular con otros rubros del período siguiente.

Así, la prima de junio corresponde al período que va del 1 de diciembre a 31 de mayo; y la prima de diciembre, al lapso del 1 de junio al 30 de

[110] Para el caso de la Convención Colectiva que rigió para los años 1987-1988 este artículo es el 92

noviembre. Por ende, lo devengado en el primer período, no debe ser tenido en cuenta para liquidar lo referente al segundo.

En este orden, contrario a lo expuesto por las defensas, técnicas y/o materiales, así como a lo dicho por algunos testigos, no tiene asidero legal ni convencional la interpretación que sostiene que al liquidar la prima de junio debía tomarse, con los otros rubros, el valor de la prima de diciembre, misma interpretación utilizada para la liquidación de la prima de diciembre, y que aviene inadmisible en derecho, mucho más cuando se observa que el mismo canon 102 de la CCT precitada hace referencia a que se liquidarán y pagarán las primas con base en los salarios devengados en dichos períodos.

En este punto, es aplicable la decisión emitida el 12 de marzo de 2002, en el radicado 17387, con ponencia del H. M. Dr. Germán Valdés Sánchez, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que precisó la diferencia que existe entre el concepto de percibir y devengar, y en donde, en criterio de esa Alta Corporación, si bien la prima de servicios pudo haberla recibido el trabajador en el semestre siguiente y correspondiente al período de la otra prima, ello no significa que se convierta en factor salarial para tasar la prima correspondiente al otro lapso, ya que el derecho fue adquirido en el período anterior. En efecto, dicha Alta Corporación señaló: *"Como significado de dichos vocablos el Diccionario de la Lengua Española, a la letra, dice: 'percibir (del lat. Percipëre.) tr. Recibir una cosa y entregarse de ella. PERCIBIR el dinero, la renta. 2. Recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto. 3. Comprender o conocer una cosa.' 'devengar. (De de y el lat. vindicäre, atribuirse, apropiarse.) tr. Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título. DEVENGAR salarios, costas, intereses'"*.

Esa misma Colegiatura en fallo adoptado el 25 de mayo de 2005, dentro del caso 24520 atinente a FONCOLPUERTOS, siendo ponente el H. M: Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, ratificó lo expresado al sostener:

> *"En efecto, se pidió el reajuste de la prima de servicios de diciembre de 1991 por haberse dejado de apreciar en su estribo de liquidación la suma de $49.472,02, pagada en la segunda quincena del mes de agosto de 1991 por concepto de retroactivo de prima de servicios.*
>
> *Conforme al artículo 102 de la convención colectiva arrimada a los autos, los trabajadores de la desaparecida Empresa Puertos de Colombia tenían derecho a dos primas en el año, equivalente cada una a un mes de salario promedio, pagaderas la primera en los primeros quince días del mes de junio y la segunda, en los primeros quince días de diciembre. La prima de junio, disponía el texto convencional, se liquidaba con fundamento en lo devengado por el empleado durante el lapso comprendido del 1° de diciembre al 31 de mayo.*
>
> *(…)*
>
> *De asumirse -por simple lógica y por registrarlo así el a quo- que esa plataforma la constituía lo devengado por el trabajador del 1° de junio al 30 de noviembre de 1991 en el caso de autos, se exhibe evidente que el retroactivo de la prima de servicios satisfecha en agosto de 1991 no debía colacionarse al no haberse devengado en el referido período, como que se*

*trataba de un derecho que se causó por labores realizadas del 1° de diciembre de 1990 al 31 de mayo de 1991".*

Carece de sentido que una prima de servicios que tiene el carácter de semestral afecte a la que habrá de pagarse en el próximo, y así sucesivamente por el solo hecho de cancelarse dentro del período de la otra prima. Arribar a esa conclusión llevaría al absurdo de que la reliquidación de una, llevaría al reajuste de la otra, que a la vez generaría otra reliquidación, la cual a su turno causaría lo propio y ésta haría lo mismo indefinidamente, incrementando injustificadamente el valor a cancelar y generando así detrimento patrimonial para el Estado.

Entonces, fue ilegal tomar como devengado en la liquidación de la prima referida el valor de la prima del lapso anterior, ya que no fue causada como salario en ese período, y no debía ser tenida en cuenta al momento de la liquidación de dicha prestación social.

Adicionalmente, resulta inadmisible y contrario a cualquier sana lógica que tal reconocimiento, se tenga en cuenta para liquidar el monto de otras prestaciones causadas de manera concomitante, por cuanto dicha tesis en la práctica, conllevaría a una cadena infinita de liquidaciones de tales emolumentos.

En este orden de ideas, no ofrece duda que era ilegal reconocer la "*prima sobre prima*" con base en el artículo 102 convencional de forma directa, mediante acta de conciliación y/o por sentencias proferidas por los Juzgados Laborales del Circuito de la Barranquilla, junto con su respectiva resolución administrativa de pago, y, por tanto, no era conforme a derecho derivar reliquidaciones o diferencias en el pago de conceptos, como el pago de diferencias en las mesadas pensionales y la indemnización moratoria, de las que más adelante se discernirá en profundidad, en donde se consagra este concepto inexistente, siendo en algunos eventos posteriormente reajustada e indexada la mesada pensional y/o pagada la sanción moratoria, situación que aconteció en los siguientes eventos:

**TABLA 11:**

| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – reajuste de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de abril de 1996, resoluciones 1015 de 07 de mayo de 1998 y 2686 de 10 de agosto de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. *Se dispone reajuste de la mesada pensional* (documento 33 HVP); Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 19 de marzo de 2004. | $81´600.000,00<br>**400.34 SMLMV de 1998.** | 10 de agosto de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO. (prescrito)** |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | |
| Judicial – prima sobre prima, sin datos de la sentencia, resolución 1443 de 1996, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $5´379.077,28<br>**37.84 SMLMV de 1996.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 26 de agosto de 1996, resoluciones 1020 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998 *(revocadas con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $81´600.000,00 **400.34 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO** | | | |
| Judicial – reliquidación de primas semestrales de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 28 de noviembre de 2008. | $66´100.000,00 **324.29 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial – prima de servicios y de antigüedad, sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996, resolución 1405 de 1996. Dr. **RAFAEL VILLALBA**. | $38´341.147,40 **269.77 SMLMV de 1996.** | 27 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1990 a 1992 y otras primas, sentencia J8LC de 25 de junio de 1996, resoluciones 1024 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Bogotá con decisión de 17 de septiembre de 2001 *(documento 88 HVP)*. Revocatoria aplicada en virtud de la resolución 1797 de 29 de agosto de 2003 *(documento 96 HVP)*. | $85´300.000,00 **418.49 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia del J8LC de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $76´900.000,00 **377.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resoluciones 1029 de 05 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998; mediante resolución **RDP 00481 de 11 de enero de 2017**, ordena la revocatoria de las decisiones administrativas. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 14 de noviembre de 2003. | $98´700.000,00 **484.23 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – salario en especie y prima sobre prima, **acta de conciliación falsa** 1517 de 22 de diciembre de 1993 *(documento 23 HVP)*, resolución 2502 de 1998. Establece nuevo monto de la mesada pensional *(soporte contable a folio 20 c. o. 5 anexos)* Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $34´942.898,00 **171.43 SMLMV de 1998.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de 1991 y 1992 (prima sobre prima), sentencia J8LC de 29 de octubre de 1996 *(documento 22 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $50´000.000,00 **245.30 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 y 1991, sentencia J8LC de 26 de noviembre de 1996, revocada mediante decisión de 07 de mayo de 2004, información contenida en el memorando 659 de 28 de abril de 2011 *(documento 89 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998 *(documento 92 HVP)* **revocada con acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011** *(documento 94 HVP)* y resolución 1033 de 07 de mayo de 1998 *(documento 93 HVP)* se dispone reajuste pensional. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 07 de mayo de 2004. | $68´200.000,00<br>**334.59 SMLMV DE 1998.** | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | | | |
| Judicial – reliquidación de primas de servicios de los años 1989 a 1992, sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, revocada con **RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016**. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $104´800.000,00<br>**514.16 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1991 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 29 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $123´500.000,00<br>**605.90 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de los años 1990 a 1993 "prima sobre prima", sentencia J8LC de 24 de enero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. **Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado**. | $100´300.000,00<br>**492.08 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios segundo semestre de 1991, sentencia J4LC de 17 de julio de 1996 *(documento 22 HVP)*. Pago pactado en el acta de conciliación 025 de 02 de junio de 1998 *(documento 39 HVP)*, Resolución 2226 de 12 de junio de 1998, acto administrativo **RDP 011623 del 22 de marzo de 2017**, revoca parcialmente la primera. Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA** y **MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $56´200.000,00<br>**275.72 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios por reajuste de retroactivo, sentencia J8LC de 02 de diciembre de 1996 *(documento 24 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $75´300.000,00<br>**369.43 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $100´600.000,00<br>**493.55 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sentencia revocada por el TS de Pamplona con decisión de 18 de mayo de 2004. | | | |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial – prima de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994, resolución 330 de 19 de febrero de 1996, acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $36´268.477,76 **255.18 SMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – huelga y reliquidación de primas de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994 *(documento 13 HVP)*, resolución 830 de 10 de junio de 1997 *(documento 35 HVP)*, acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Mesadas atrasadas y reajuste de pensión. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´235.171,03 **30.43 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Administrativa – reliquidación de prima de servicios, resolución 1689 de 11 de noviembre de 1997. Dra. **MIRNA ALEXI GARCIA**. | $23´704.985,00 **137.81 SMLMV de 1997.** | 11 de noviembre de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 24 de octubre de 2003. | $120´300.000,00 **590.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO. (prescrito)** |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia del J3LC de 13 de junio de 1995 *(documento 20 HVP)*, resolución 330 de 19 de febrero de 1996. Dispone reajuste de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**.<br>Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 29 de julio de 2003. | $45´863.492,95 **322.69 SMMLMV de 1996.** | 19 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1989 a 1992, sentencia J4LC de 12 de junio de 1996 *(documento 62 HVP)*, ordena reajuste de la mesada pensional. Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $103´100.000,00 **505.82 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1992, sentencia J8LC de 24 de abril de 1996 *(documento 28 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $53´600.000,00 **262.96 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO. (prescrito)** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1990 a 1993, sentencia J8LC de 15 de julio de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**.<br>Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 06 de febrero de 2004. | $87´600.000,00 **427.77 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios de 1988 a 1990, sentencia J8LC de 29 de abril de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $34´300.000,00 **168.28 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 09 de diciembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Suma no cancelada, acorde a lo mencionado por la Fiscalía en el pliego, mas no se tuvo en cuenta como delito tentado. | $68´200.000,00 **334.59 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO.** |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 33 HVP)* condena a reajuste pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $77´200.000,00 **378.75 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** | | | |
| Judicial – reliquidación de prima de servicios "prima sobre prima", sentencia J8LC de 05 de diciembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste pensional, pagada con resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 23 de abril de 2004. | $65´200.000,00 **319.88 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | | | |
| Judicial – prima de servicios de 1990 a 1992 "prima sobre prima", sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996 *(documento 20 HVP)* dispone el reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dra. **JULIA GALLARDO DE LEÓN**. | $77´900.000,00 **382.18 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | | | |
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996 *(documento 41 HVP)* ordena reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 26 de marzo de 2004. | $45´300.000,00 **222.24 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA** | | | |
| Judicial – prima sobre prima, sentencia J4LC de 07 de febrero de 1996 *(documento 13 HVP)* dispone reajuste de la mesada pensional, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. | $98´600.000,00 **483.74 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** | | | |
| Monto asociado al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, a la cual acudió en representación de los extrabajadores que se convocan a juicio en la resolución de acusación que se estudia. Acuerdo pagado mediante resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. | $3.057´400.000,00 **6068.36 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

**Reconocimiento de calzado y uniforme.**

Otro de los conceptos que fue asiduamente reclamado, fue el reconocimiento de uniformes y calzado al que en virtud de la Ley y la CCT estaba jurídicamente vinculado COLPUERTOS con los extrabajadores portuarios, a pesar de constituir una prestación de obligatorio cumplimiento por parte de éste como empleador, resulta diáfano que no es constitutivo de salario, como se desprende de la normatividad aplicable.

Los artículos 127 y 129 del CST regulan los elementos que conforman el salario y el concepto que constituye salario en especie, cánones relevantes para el análisis de la especie y que disponen:

> *"ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES (modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990). Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.* (Subraya fuera del texto)
>
> *ARTICULO 129. SALARIO EN ESPECIE (modificado por el artículo 16 de la Ley 50 de 1990).*
> *1. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el {empleador} suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 (128) de esta ley (…)".* (Resaltado por el Despacho)

En precepto 89 de la CCT precitada estableció:

> *"ARTICULO 89. DEFINICION DE SALARIOS. Se entiende por salario de conformidad con la presente Convención, no solo la remuneración fija u ordinaria sino todo cuanto reciba el trabajador en dinero o especie que* ***implique directa retribución de servicios****, sea cual fuere la denominación que se adopte como primas, prima de antigüedad, sobresueldos, bonificaciones, horas extras, recargos por trabajos nocturnos o sistemas de turnos, valor del trabajo en día de descanso obligatorio, viáticos en su totalidad, vacaciones compensadas en dinero, durante el servicio o al terminar el contrato de trabajo, vacaciones remuneradas, auxilio de transporte municipal e intermunicipal, valor de la incapacidad, valor del refrigerio, cena y desgaste físico y todos aquellos que constituyan salario, de conformidad con las disposiciones legales o extralegales que rigen sobre la materia."* (Subraya y negrillas del Estrado)

Es así como se evidencia que, de conformidad con esas dos definiciones, salario es lo que reciba el trabajador en dinero o especie, siempre y cuando entrañe directa retribución de servicios, aunado a que en ninguna de ellas están taxativamente señalados el vestido de labor o dotación de uniformes. Tampoco constituye salario en especie, ya que como lo establece la norma precitada la especie para ser tenida como salario de implicar contraprestación directa del servicio, y, es claro, que la dotación de uniformes pactado en la convención colectiva no son retribución directa

del servicio y, por ende, no constituyen factor salarial. Además, en ningún momento en la convención colectiva se dice expresamente que la dotación de uniforme sea constitutiva de factor salarial.

El artículo 128 del CST excluye "*las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX*", como factor salarial; y el suministro de calzado y vestido de labor, se encuentra regulado en el Titulo VIII artículo 230 del CST, normas que rezan:

> "*ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS (modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990). No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad*". (Resaltado fuera del texto).

El artículo 45 convencional que regula el "*suministro de uniforme y calzado*" consagra la obligación de COLPUERTOS a la dotación de uniformes y calzado, la época, cantidad y calidad y su valor en dinero; no obstante, en ninguno de sus apartes dispone expresamente que constituyan salario ni que implique directa retribución de servicios.

Por tanto, el calzado así como los uniformes no constituyen factor salarial, pues ninguna norma convencional o legal les da tal connotación, ya que no se entrega al trabajador para enriquecer su patrimonio, sino para que cumpla con su trabajo y desempeñe a cabalidad sus funciones, lo cual significa que debió de ser suministrado durante la prestación del servicio y en vigencia del contrato, toda vez que después este pago no tendría ningún sentido. Adicionalmente, si bien es cierto el canon convencional 45 en su parágrafo 6° indicó que "*A cambio de uniformes y calzado para todo el personal femenino, la Empresa pagará a cada empleada las sumas detalladas en las fechas indicadas a continuación: (…)*", esta norma no sólo está referida al personal femenino, sino que además no se puede entender como una retribución directa ordinaria del servicio prestado, puesto que es que la suma recibida por concepto de dotación dejada de entregar no implica directa retribución ordinaria del trabajo o servicio prestado.

Es así como el calzado y los uniformes no constituían factor salarial, y cualquier reconocimiento de tal circunstancia se estima ilegal, y, en consecuencia, las reliquidaciones de las prestaciones sociales y la mesada pensional producto de tal reconocimiento es igualmente contraria a la Ley y a las normas convencionales.

Se suma a lo anterior que ninguna finalidad y objeto laboral apareja el suministro de tales elementos o el valor dinerario que representan cuando ya el trabajador no cumple funciones en la empresa, habida cuenta de que

dicha dotación se establece para que el operario desempeñe sus labores, máxime cuando se sabe que en algunas ocasiones este reconocimiento se dio en cumplimiento del cabal compromiso de la empresa con sus trabajadores respecto de dotaciones que se encontraban pendientes por entregar y que fueron pagadas de forma acumulada ante la inminente liquidación de la empresa, situación que aprovecharon los reclamantes para que se reconocieran esos valores, que en algunos de los casos se hallaban acumulados de años anteriores, como devengos del último año laborado sin que hubiere lugar a tales reconocimientos.

Las reclamaciones que se adelantaron teniendo como fundamento esta presunta inobservancia de la empresa son las siguientes:

**TABLA 12:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, pagada con resolución 832 de 07 de mayo de 1996. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $8´649.937,00 **60.86 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial – uniformes y calzado, sentencia J1LC de 13 de febrero de 1996, implicó reajuste pensional; pagada con resolución 1194 de 29 de junio de 1997. Dr. **RAFAEL VILLALBA HODWALKER**. *Resolución revocada mediante acto administrativo **1484 de 04 de noviembre de 2009** (documento 123 HVP)* | $63´803.445,00 **370.93 SMLMV de 1997.** | 29 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resoluciones 423 de 1996, que reajustaba mesada pensional *(documento 27 HVP)*, revocada con resolución **480 de 31 de marzo de 2009,** y 832 de 07 de mayo de la misma anualidad reliquida prestaciones sociales por el mismo concepto. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. | $2´876.989,00 **20.24 SMLMV de 1996.** $15´018.158,67 **105.66 SMLMV de 1996.** **TOTAL 126 SMLMV de 1996.** | 07 de mayo de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resolución 1262 de 20 de junio de 1996, reconoce diferencia de mesadas y salarios moratorios. Dra. **CÁNDIDA TATIS RICARDO**. | $532.764,00 **3.74 SMLMV.** $13´790.422,20 **97.03 SMLMV.** **TOTAL 100.77 SMLMV de 1996.** | 20 de junio de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, pagado con resolución 2339 de 1996. Dra. **MIRYAM CHARRYS BLANCO**. | $22´682.378,79 **159.59 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Administrativa – uniformes y calzado, resolución 2133 de 09 de octubre y 2668 de 29 de diciembre de 1995. Dra. **NIRA ESTHER** | $2´558.463,49 **21.51 SMLMV de 1995.** | 29 de diciembre de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FÁBREGAS MAZA**. Actos administrativos dejados sin efectos de conformidad con la orden adoptada en resolución 1039 del 30 de septiembre de 2007 *(acorde a la información contenida en el documento 86 HVP)* | | | **(prescrito)** |

**Inclusión y reliquidación por tiempo de huelga.**

Frente a este irregular reclamo y consecuente reconocimiento, se identifica en la normatividad que gobierna las relaciones laborales en el sector público y que son paralelas a las que imperan en el privado, las disposiciones del artículo 44 numerales 4 y 8 del decreto 2127 de 1945, y el precepto 46 de la misma legislación, así como en el canon 51 numerales 4 y 7, y 53 del CST, los cuales en su contenido establecieron que:

> *"ARTICULO 44. El contrato de trabajo se suspende:*
> *(…)*
> *4o. Por licencia o permiso temporal concedido por el patrono al trabajador, o por suspensión disciplinaria;*
> *(…)*
> *8o. Por huelga lícita declarada con sujeción a las normas de la ley".*

> *ARTICULO 46. La suspensión de los contratos de trabajo no implica su extinción. Salvo convención en contrario, durante el período correspondiente se suspende para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el patrono la de pagar los salarios de ese lapso y la de asumir los riesgos que sobrevengan durante la suspensión, excepto el pago del seguro de vida y el auxilio funerario, a que haya lugar de acuerdo con la ley, y las prestaciones e indemnizaciones correspondientes a enfermedades o accidentes que hayan originado la suspensión. El tiempo durante el cual esté suspendido el contrato de trabajo, podrá ser descontado por el patrono del cómputo de los períodos necesarios para ciertas prestaciones, como vacaciones, auxilios de cesantía y pensiones de jubilación, pero no hará perder el derecho a tales prestaciones.*

De otro lado el decreto 1647 de 1967 en sus reglas 1 y 2 indicó:

> *Artículo 1 Los pagos por sueldos o cualquiera otra forma de remuneración a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital, municipal y de las empresas y establecimientos públicos, serán por servicios rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente ante los respectivos funcionarios de la Contraloría General de la República y las demás Contralorías a quienes corresponde la vigilancia fiscal.*
>
> *Artículo 2 Los funcionarios que deban certificar los servicios rendidos por los empleados públicos y trabajadores oficiales de que trata el artículo anterior, estarán obligados a ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente justificación legal.*

De lo precisado se desprende que el empleador está facultado legalmente para deducir del tiempo de servicios del acto lo correspondiente a los eventos descritos como causales por la Ley, y por lógica dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta como efectivamente laborado para efectos prestacionales. Asimismo, la suspensión del contrato de trabajo implica, por un lado, que el trabajador no está obligado a prestar el servicio personal, y, por el otro, que el patrono no está forzado a cancelar los salarios.

Por esta vía el empleador no se halla conminado a pagar salarios o conceptos en los eventos de huelga, aun cuando la misma fuere lícita, según la normativa acabada de transcribir, ni mucho menos si la suspensión colectiva del trabajo es declarada ilegal, como se evidencia con la resolución 02579 de 13 de julio de 1983[111], de modo que el descuento efectuado por días de huelga encuentra justificación en la anunciada decisión, por no existir causa que sustente la falta al trabajo.

También ha de apreciarse que los pagos a los empleados públicos y trabajadores oficiales deben ser por servicios rendidos, estando el empleador en la obligación de ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente autorización legal. Más aun, cuando se trata de empresas estatales que deben prestar un servicio público de manera constante, resultando ajustado a derecho que el servicio no prestado no deba ser pagado.

Adicionalmente, si bien es cierto las faltas al trabajo no están consagradas en las mentadas causales de suspensión del contrato de trabajo, no menos lo es que hay circunstancias que interrumpen la prestación de los servicios, que implican solución de continuidad, y, por tanto, pueden ser descontadas para el computo, en este caso, de las cesantías, toda vez que esta se concede a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios prestados en forma continua o discontinua.

No media hesitación para el Estrado que reliquidar la pensión de jubilación y las prestaciones sociales, así como ordenar cancelar salarios moratorios, sustentadas en la inclusión de días no laborados por huelga comporta el reconocimiento de dineros sin ningún soporte y fundamentación jurídica, e implica un detrimento patrimonial injustificado para las arcas estatales, que en el caso bajo examen se consolidan en los eventos que se pasan a enlistar:

**TABLA 13:**

| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | | | |
|---|---|---|---|
| Judicial – reliquidación de prima de vacaciones y huelga, sentencia del J8LC fechada el 03 de mayo de 1994 *(documento 14 HVP)*, resolución 932 de 1994. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. Reajuste | $17´249.242,75<br>**174.76 SMLMV de 1994.**<br>$3´262.168,00 | 1994 y 18 de enero de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |

[111] Documento obrante a folios 31 y 32 del cuaderno de juicio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| de la mesada pensional con resolución 028 de 18 de enero de 1997, y pago de diferencias salariales e incremento pensional; resolución **0151 de 22 de febrero de 2010**, revoca parcialmente las resoluciones que ordenaron el pago de las sumas impuestas en sentencia. Dr. **FRANKLIN MANZANO HERNÁNDEZ**. | **18.96 SMLMV de 1997.** **TOTAL 193.72 SMLMV.** | | |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga, sentencia J2LC de 19 de marzo de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $67´100.000,00 **329.20 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga y reliquidación prima de antigüedad, sentencia J6LC de 09 de agosto de 1996 *(documento 26 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución **RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016**, revoca parcialmente la primera mencionada. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO** y **ENA LEONOR QUINTANA GUTIÉRREZ**. Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 31 de agosto de 2004. | $77´500.000,00 **380.22 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | | | |
| Judicial – huelga y prima de vacaciones, sentencia J4LC de 10 de julio de 1996 *(documento 34 HVP)*, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA**. | $67´800.000,00 **332.63 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial – huelga y reliquidación de primas de servicios, sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994 *(documento 13 HVP)*, resolución 830 de 10 de junio de 1997 (*documento 35 HVP)*, acto administrativo **1516 de 15 de noviembre de 2011**, revoca parcialmente. Mesadas atrasadas y reajuste de pensión. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´235.171,03 **30.43 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial – huelga, reliquidación de prestaciones sociales y pago de mesadas atrasadas, sentencia J8LC de 26 de septiembre de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 848 de 10 de junio de 1997 *(documento 19 HVP)*, modifica la mesada pensional. Dra. **NINA DEL CARMEN CASTRO DE LEÓN**. | $9´261.397,80 **53.84 SMLMV de 1997.** | 10 de junio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – huelga y suspensiones, sentencia J4LC de 19 de marzo de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | $63´500.000,00 **311.54 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA** | | | |
| Judicial – huelga, sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996, resolución 2070 de 20 de | $60´400.000,00 **296.33 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mayo de 1998. Dr. **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 30 de abril de 2004. | | | |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – reclamo por días descontados de la liquidación, mandamiento de pago J4LC de 24 de febrero de 1998, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **DUBIS ESTHER RAMOS**. | $112´436.135,34 **551.62 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |

**Reclasificación o nivelación de cargos.**

Respecto de este reconocimiento, del cual fue beneficiario el señor JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO en virtud del mandato judicial proferido por el Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla que se concretara en la resolución 2344 de 1996, prerrogativa que se encontraba consagrada en la CCT de los años 1987 – 1988 regente en los terminales de la costa Atlántica en el parágrafo transitorio del artículo 169, se considera relevante citar el texto de la norma que lo establecía, y que a su texto enseña:

> *ARTÍCULO 169: AUMENTO DE SUELDOS. (…) PARÁGRAFO TRANSITORIO:* ***la empresa con participación del sindicato, adelantará los estudios correspondientes****, con el objetivo primordial tendiente a reclasificar o nivelar los diferentes cargos del escalafón, buscando el mayor sentido de igualdad y equidad, teniendo en cuenta para ello funciones, niveles de responsabilidad y los diferentes factores que configuran el cargo. Dentro de dicho estudio serán considerados preferencialmente los siguientes cargos: (…) tarjadores"* (resaltados no textuales).

Si bien la reclasificación de cargos encontraba consagración en el precepto transcrito, es también claro que la materialización de esa prerrogativa estaba sujeta a condición suspensiva que aún no se había concretado, toda vez que pendía del agotamiento de un trámite previo, el cual no se llevó a cabo.

En efecto, el pacto colectivo regente para los años 1989 – 1990, en los numerales 2° y 3° del parágrafo transitorio de su aparte 91, dispone:

> *"2. se reconoce un compensado de dos mil pesos ($2.000,oo) mensuales a cada tarjador, revisor de carga y documentos, basculero y distribuidor de bodegas a partir de la vigencia de la presente convención.*
>
> *3. la empresa durante la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, con participación del sindicato, adelantará los estudios correspondientes, con el objetivo primordial tendiente a reclasificar o nivelar los diferentes cargos del escalafón, buscando el mayor sentido de igualdad y equidad, teniendo en cuenta para ello funciones, niveles de responsabilidad y los diferentes factores que configuran el cargo. Dentro de dicho estudio serán considerados preferencialmente los siguientes cargos: (…)"*

Este precepto enuncia el mismo contenido del artículo 169 de la convención rectora para el período inmediatamente anterior, imponiendo igualmente la condición suspensiva para su aplicación a cargo del sindicato y la empresa, responsables en conjunto de adelantar el estudio correspondiente

para la reclasificación, sin que obre dentro de la actuación elemento que permita arribar a la conclusión de que el referido estudio fue efectivamente realizado con la mutua participación del sindicato y la empleadora estatal, lo que ubica la alegada prebenda como una simple expectativa carente del cumplimiento de los requisitos que la misma norma convencional impuso para su efectiva aplicación.

Frente a esta temática, la convención colectiva vigente para 1991 – 1993, materializa el mencionado derecho a la reclasificación en el parágrafo transitorio del artículo 91, que expresamente menciona:

> *(…)1. En los terminales marítimos de Barranquilla, Cartagena y oficina de conservación de obras de bocas de ceniza se reclasificarán los siguientes cargos a partir de la firma de la presente convención. (…)*

Sobre este tópico la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha sentado precedente en proveído de fecha 21 de febrero de 2006, dentro del radicado 26629, con ponencia del H. M. Dr. Camilo Tarquino Gallego, dentro del cual el ciudadano Ángel Pérez Gutiérrez acciona contra de FONCOLPUERTOS en reclamación del factor que se encuentra en discusión, puntualizando:

> *(…) Como se observa, las anteriores disposiciones convencionales en ningún momento ordenaban una reclasificación automática del cargo de Conductor, como lo alega el demandante y, curiosamente, lo acepta el a quo. Simplemente se referían a un estudio que adelantarían conjuntamente la empresa y el sindicato, tendientes a nivelar los diferentes cargos del escalafón, dentro de los cuales se consideraría el de Conductor. Además, se deduce que si la norma se reiteró para la convención 1989-1990, es porque el estudio no se realizó en la vigencia anterior 1987-1988.*
>
> *Pero, y lo más importante, no encontró la Sala en la revisión de la documental arrimada al expediente, estudio alguno que contuviera los resultados de la reclasificación de cargos a que hacen referencia las normas convencionales tantas veces citadas, y que fundamentaron la decisión de condena del juzgador de primera instancia. Además, vale la pena anotar que cuando el a quo se refirió a la supuesta reclasificación del demandante, dejó en blanco el espacio correspondiente al número del folio donde anuncia que:* "... reposa una certificación suscrita por el analista de nómina de la demandada en la cual certifica que el señor ANGEL PEREZ GUTIERREZ obtuvo una clasificación en clase A y su último cargo fue de D...", *pero lo cierto es que dicha certificación no obra en el expediente. (…)*

Resulta claro, entonces, que este ítem de reclasificación no trascendió al campo de los derechos convencionales, comoquiera que quedó en el nivel de mera expectativa al no darse el cumplimiento de los requisitos para su aplicación, que como ya se ha reiterado, se encontraba a cargo del sindicato y la empresa; es así, que en el mismo sentido la H. Corte Suprema de Justicia motiva su providencia de fecha 15 de febrero de 2007, con ponencia del H. M. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, dentro del radicado N° 27930, en el que indica:

> *(…) Para establecer si la sentencia del Juzgado contiene una decisión acertada, cumple examinar el alcance de la norma convencional transcrita. Por su naturaleza el acuerdo contractual contiene una obligación de hacer a cargo de los dos sujetos de la negociación (sindicato y empresa); las partes*

*en efecto se comprometieron a adelantar conjuntamente el estudio de la reclasificación de los cargos del escalafón de la empresa, fijaron para ello el criterio que debía orientar la clasificación (los principios de igualdad y de equidad) y determinaron que el estudio debía llevarse a cabo durante la vigencia de la convención.*

*(…)*

*En la demanda inicial del proceso se sostiene que la empleadora incumplió la obligación convencional y que fue renuente a efectuar la reclasificación. Sobre esa única base se apoya el dicho libelo para dar por sentado que operó la reclasificación de la trabajadora en la categoría inmediatamente superior, con las consecuencias salariales y prestacionales correspondientes y a partir del 4 de agosto de 1989.*

*Sobre esa especial argumentación la Sala observa:*

*1. La renuencia de la empleadora no es un hecho probado y debió serlo porque el estudio del escalafón de cargos se acordó como una actividad conjunta de la empresa y el sindicato.*

*2. Como empresa y sindicato no determinaron cuál podría ser la consecuencia de una eventual negativa de la empleadora a adelantar el estudio del escalafón convencional de sus trabajadores, es equivocado sostener que la supuesta negativa implique, necesariamente, el derecho del trabajador a quedar clasificado en la categoría inmediatamente superior. Esa consecuencia no fue expresamente estipulada por las partes. Y tampoco está implícita, pues la reclasificación supone el examen de las funciones del trabajador y la utilización de criterios de igualdad y equidad, lo que descarta la reclasificación automática.*

*3. Como la estipulación convencional no determina la fecha a partir de la cual debía operar la nueva clasificación de los cargos, pues lo único realmente acordado fue la fijación de un amplio espacio de tiempo para adelantar el estudio de la nómina, no puede decirse, como lo sostiene la demanda inicial, que la elevación a la categoría siguiente y más alta generaba el derecho a obtener el sueldo superior desde el 4 de agosto de 1989.*

*Vista la sentencia del Juzgado a la luz de las consideraciones precedentes es claro que decidió la controversia mediante una equivocada aplicación automática de la norma convencional, por lo cual la sentencia del Tribunal debe ser confirmada, pues a pesar del error jurídico en que incurrió, acertó al absolver de las pretensiones de la demanda.(…)*

Con el fin de ilustrar lo atiente al carácter que puede tener un precepto reconocido como derecho adquirido, frente a la mera expectativa del mismo, se hará referencia al criterio desarrollado por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia de exequibilidad dentro de los expedientes D-5310 y D-5321, que a su tenor refiere:

*"Fiore dice que el derecho adquirido en atención a la ley nueva, es el **derecho perfecto**, aquel que se debe tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir dicho derecho. Dice el mismo autor 'lo pasado que queda fuera de la ley es el derecho individualmente ya adquirido en virtud de una disposición de la antigua ley antes vigente.'*

*Luego de hacer una exploración en la doctrina y la jurisprudencia acerca del tema de los derechos adquiridos y de las meras expectativas, en la sentencia se expresó sobre estos dos conceptos:*

*"Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador.*

Por ende, para el caso de la especie, los firmantes de la CCT son los únicos que pueden modificarla, aclararla o complementarla, atendiendo a que dicho articulado es Ley para quienes lo celebran, quedando de esta forma atados a las obligaciones que ella demanda e impone y cobijados por los derechos que la misma establece. En el asunto concreto del derecho a la reclasificación, es claro que su consagración no superó el grado de anhelo o expectación y, por tanto, no alcanzó el perfeccionamiento requerido para su demanda.

Bajo este entendido, resulta diáfano que la reclasificación no fue aplicada a los cargos desempeñados por quienes acudieron por las vías administrativa o judicial a su reconocimiento, por cuanto no se cumplieron los requisitos que la misma convención establecía para tales efectos, no pudiéndose predicar la integralidad de los factores que se exigían para su usanza, y quedando de esta manera en una simple posibilidad. De allí que se estime que no era procedente reclamaran diferencias por la reclasificación de cargos, porque, se reitera no tenía la naturaleza aún de derecho sino tan sólo de mera expectativa.

**Prima de vacaciones compensadas.**

Este renglón, que fue reclamado por los señores ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ y JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ, bajo las modalidades de reliquidación de vacaciones y prima de vacaciones, contaba con enunciación normativa convencional en el parágrafo primero del canon 105 de la CCT, que en su contenido expresa:

*"Cuando el trabajador quede definitivamente fuera del servicio sin haber disfrutado de sus vacaciones en tiempo y haya trabajado más de seis (6) meses en el respectivo periodo, tendrá derecho a la compensación en dinero de las vacaciones y de la prima vacacional en proporción al tiempo trabajado".*

No obstante encontrarse amparado normativamente este concepto, revisada las hojas de vida pensionales aportadas por la UGPP respecto de los extrabajadores reclamantes, se aprecia que en lo que a los rubros reclamados se refiere, la empresa solventó oportunamente y con justeza su pago en la liquidación definitiva de prestaciones sociales[112], derrumbándose

[112] En lo que atañe al señor ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ obra evidencia del pago en el documento 8 de la hoja de vida pensional; del señor MARIO NICOLÁS ZARAE MUÑOZ en el documento 10 del

la procedencia de las pretensiones formuladas en este sentido y el fundamento jurídico y circunstancial de las decisiones judiciales y administrativas emitidas en este sentido, decisiones en las que habitualmente concurría una evidente falta de delimitación del derecho que se invoca en los soportes y texto de las reclamaciones, y un precario examen del fallador judicial de cara a la presunta omisión de la entidad portuaria, funcionario que obviando algunas circunstancias pasaba por alto el hecho de que algunos peticionarios no contaban con el mínimo de tiempo que requiere la norma para la compensación de las vacaciones y su prima en dinero por haberse dejado de percibir su disfrute, que se recuerda, era de seis (6) meses laborados en el respectivo período a liquidar.

Estas precisiones indican que el fundamento de las decisiones judiciales carecían de respaldo fáctico, pues aun cuando dicho beneficio se encontraba consagrado dentro de las normas aplicables a los trabadores de la empresa portuaria, la situación especial de quienes acudieron por intermedio del profesional al reclamo de sus derechos no se ajustaba a las exigencias objetivas y subjetivas del precepto transcrito, tornándose improcedentes sus reclamos al fundamentarse en derechos inexistentes que acompasan la ilicitud de sus pretensiones en lo que al concepto de primas de vacaciones y vacaciones se refiere.

**Descansos compensados.**

Este emolumento encuentra consagración normativa en el precepto 82 de la CCT entonces vigente en el terminal marítimo de Barranquilla y obras de conservación de Bocas de Ceniza que refiere que "*los trabajadores a destajo, intermitentes y fijos de los terminales de Cartagena y Barranquilla que se detallan en este artículo, tendrán derecho a la remuneración correspondiente a los días feriados que se enumeran en la presente convención, ya sean dobles o sencillos y se pagaran con base en los mismos valores fijados para el pago por descanso dominical, este mismo personal tendrá derecho a la remuneración correspondiente a los días domingos y su forma de pago se efectuará con base en los valores que a continuación se detallan: (…)*", y contempla una variante que remite al canon siguiente de "*descanso remunerado de vigilantes y otros*", el cual en su texto expresa:

> *"se reconocerá a los vigilantes (celadores) que presten servicio en la empresa, un (1) día de descanso compensatorio por la jornada semanal de trabajo.*
>
> *Se les reconocerá a todos los trabajadores que laboren habitualmente en día de descanso obligatorio, un (1) día de descanso remunerado compensatorio".*

Estas prebendas igualmente se extendían en virtud del precepto 84, a aquellos operarios que habitualmente desempeñaran sus labores en jornada diurna y su turno eventualmente se ampliaba hasta las 02:00 horas, caso en el que se les otorgaba medio día de descanso remunerado como compensación, y un (1) día en el evento de que la jornada se extendiera hasta las 05:00 horas, los cuales debían ser tomados de forma inmediata o

---

respectivo compendio demostrativo; y respecto del ciudadano JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMINGUEZ en el documento 7 de la hoja de vida pensional.

dentro de las semana en que se hubiere dado la prolongación de la jornada laboral y, en caso de que la necesidad del servicio impidiera que se hiciere de esta forma, la empresa debería pagar la compensación en dinero en la quincena siguiente al hecho generador.

En el caso específico de las reclamaciones efectuadas por los aquí procesados de cara a los comentados renglones, advierte el Juzgado que acorde a los señalamientos de la agencia Fiscal, aparentemente fueron amparados administrativamente en el acuerdo conciliatorio 2339 del 23 de diciembre de 1993, con relación al extrabajador ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO; respecto del exportuario RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, en el pactó 2105 de 15 de diciembre de 1993; y en lo que se refiere al ciudadano LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ mediante acta de conciliación 1526 de 16 de diciembre de esa misma anualidad.

Sobre este mismo particular, en favor del señor JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO se alcanzó la declaratoria de este rubro mediante decisiones judiciales de 17 de diciembre de 1993, en la que el Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla resolvió favorablemente la procedencia del reclamo de descanso compensatorio, y con fallo judicial de 27 de diciembre de la misma anualidad y autoridad judicial, la protección ante la presunta inobservancia al concepto de cena y descanso; y por el señor MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ quien mediante decisiones de las mismas datas y autoridad judicial, concretó el reconocimiento de los mismos conceptos.

Tal como lo anuncian las normas citadas, la compensación de las jornadas extendidas o de aquellos días laborados en los que se debía descansar, se daba, dependiendo de la hora hasta la que se laborara con el goce de medio o un plazo laboral y, en el caso del día de descanso no aprovechado, se compensaba con otro tiempo o día que podía ser gozado seguido a la fecha en que se dejaba de percibir su disfrute o dentro de la semana que le seguía; prerrogativa que considera como primera medida a aplicar para el resarcimiento del derecho del operario, el otorgamiento de un tiempo o una jornada alternativa y, en caso de que esta no pudiera ser tomada por el trabajador, se emplearía la segunda opción que remite al pago en dinero que debía ser cancelado en la quincena siguiente a haberse causado el derecho.

En esta medida, se tiene que en cualquiera de los casos las situaciones que generaban el derecho a percibir la compensación por descanso no disfrutado, bien podrían darse con el efectivo descanso en la jornada siguiente, sin que de esta forma se reflejara impacto dinerario y repercutiera en la nómina de la quincena siguiente, o con el pago y el consecuente reflejo en la próxima percepción salarial, lo que permite concluir que al haber sido disfrutados o pagados los descansos, sólo en el caso de los no disfrutados en tiempo se consolidaría el derecho a pago, el cual se entiende integrado en el monto del pago quincenal.

De hecho, revisado, a manera de ejemplo, el certificado de liquidación de lo devengado en el último año trabajado para efectos de establecer la mesada pensional del señor JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, se aprecia la estimación de conceptos como sueldos, domingos y feriados, bonificación, manejo de carbón, salario de garantía, desgaste físico, reliquidación de vacaciones y prima de vacaciones según sentencia, prima

de antigüedad proporcional, primas de vacaciones y servicios, prima de servicios proporcional, recargo del 20%, refrigerios, vacaciones en tiempo y prima de servicios de junio a noviembre, dentro de los que no se encuentran valorados los descansos compensados al no haberse generado pago discriminado por dicho rubro, lo cual en manera alguna es indicador de que no le fueron pagados, sino que éstos se atendieron al momento de su causación en vigencia de la relación laboral.

Estas claridades apoyan e imponen acoger el argumento presentado por la Fiscalía en el pliego de cargos y la exposición de las alegaciones presentenciales, en el sentido de que el pago de este renglón en virtud de las actas de conciliación de finales de 1993 –de las que más adelante se hará un análisis detallado- y las providencias judiciales en las que se discutió la presunta omisión de la empresa en el pago de los descansos compensatorios carece de asidero fáctico y su reconocimiento se constituye en atentatorio contra los recursos públicos que para entonces guardaba el fondo liquidador de la empresa portuaria, pues ninguna procedencia legal se aprecia en las aspiraciones de los extrabajadores que alegaron desconocimiento de este derecho y pretendieron su declaratoria por vía judicial o administrativa.

**Nocivos y explosivos.**

Acorde a la normativa convencional contenida en el precepto 79 convencional, que decanta lo atinente a los "*recargos en horas extraordinarias y por movilización de* ***nocivos y explosivos***" se advierte que los beneficios contemplados en ella establecen un recargo de hasta el 100% de lo devengado en los horarios laborados dentro de las jornadas posteriores a la 18:00 horas; para el personal de carga, dentro de los que se encuentran los cargos de wincheros, operador de equipo, supervisor auxiliar, supervisor de cuadrilla, supervisor general, aguateros, tarjadores, auxiliares de servicios varios, bodegueros, sub bodegueros, distribuidores, revisores de carga y documentos, supervisores de tarja y basculeros, se les reconocerá por estas jornadas un recargo del 50% del tiempo laborado bajo estas condiciones, y para los estibadores se estableció un recargo de 60%, de donde yace que el concepto contaba con la enunciación positiva requerida para aspirar a su reconocimiento.

No empece lo anterior, se aprecia que el reconocimiento de dicho emolumento en favor del señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO se dio mediante acta de conciliación 1629 de 30 de diciembre de 1993, la cual se encuentra dentro de aquellos acuerdos que acorde a la versión testimonial recaudada en el expediente respecto del señor WILLAM CARRILLO HERNÁNDEZ, quien para la época en que presuntamente fueron rubricados estos acuerdos se desempeñaba como gerente del puerto marítimo de Barranquilla, son documentos falsos que no fueron objeto de aprobación por la junta directiva de la empresa que desapareció a finales de 1993.

A lo anotado se agrega, que mediante estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, al examinar los pagos efectuados, entre otros, al señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, se halló un excedente en su favor por la suma de $349.029,40, de donde se desprende que además de haber

alcanzado la erogación irregular de la suma contenida en el pacto conciliatorio arriba referido y el acto administrativo 1092 de 29 de julio de 1997, al fundamentarse en acta de conciliación falsa, la empresa nada le adeudaba en relación con sus derechos laborales, prestacionales y pensionales.

**Subsidio de transporte.**

Esta garantía, que se encontraba a cargo de la empresa en el sentido de que era ésta, con la utilización de los buses del puerto la que debía cumplir con el traslado de los trabajadores, y su descripción se hallaba contenida en el precepto 35 de la CCT vigente para los años 1991 – 1993 en los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO 35. TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y OBREROS. Se continuará efectuando el transporte de los trabajadores en la siguiente forma:*
>
> *a) En Barranquilla, los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el terminal y que residen en los municipios de Puerto Colombia y La Playa, seguirán siendo trasportados desde el lugar de su residencia hasta el terminal y viceversa incluyendo al municipio de Salgar, para lo cual se utilizará el recorrido de Puerto Colombia. La empresa se encargará de su trasporte cuando haya seis (6) o más trabajadores al finalizar las labores nocturnas respectivas y corridos.*
>
> *b) El transporte de los trabajadores que residan en Barranquilla, se hará teniendo en cuenta las rutas y barrios donde habitan.*
>
> *c) El personal que reside en los municipios de Tubará y Juan de Acosta, se continuará transportando en la misma forma como se hace actualmente, perro en caso de que no sea transportado en los buses de la empresa, se les reconocerá el valor del pasaje de la tarifa oficial en el trasporte intermunicipal, así mismo, la empresa se obliga a trasportar a este personal en los buses de ella a partir de las 17:00 horas.*
>
> *d) En el terminal marítimo de Barranquilla, cuando haya seis (6) o más trabajadores residentes en los municipios de Galapa, Baranoa y Puerto Nuevo, la empresa les recogerá a las 08:00 horas y repartirá a las 18:00 horas. Para los municipios de Sabanalarga y Manatí, se encargará de su transporte la empresa después de las 18:00 horas y cuando haya seis (6) o más trabajadores.*
>
> *e) Para la Oficina de Conservación de Obras de Bocas de Ceniza, el transporte del personal se prestará por el sistema de recorridos de rutas equidistantes de las residencias de los trabajadores.*
>
> *f) Para el terminal de Barranquilla: Cuando haya seis (6) o más trabajadores que residan en cada uno de los municipios de Malambo, Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás, la empresa los recogerá para las 08:00 horas y se encargará de su transporte a dichos municipios, después de las 17:00 horas.*

*La empresa se encargará al terminar las labores nocturnas de repartir a los trabajadores de Campo de la Cruz y Suán, cuando haya seis (6) o más trabajadores.*

*g) Los trabajadores que tengan que transportarse por su cuenta a los municipios o corregimientos en donde la empresa no tenga servicio de transporte, se les reconocerá y pagará el valor de los pasajes de acuerdo a las tarifas oficiales vigentes intermunicipales en cada caso. Así mismo, los trabajadores del terminal marítimo de Barranquilla que residan en el municipio de Ciénaga, se les cancelará el valor del pasaje correspondiente, de acuerdo a las tarifas oficiales vigentes (…)".*

En el caso que se escruta, relacionado con el señor ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, quien ocupaba el cargo de supervisor auxiliar, se aprecia a partir de los documentos que obran en el expediente que su lugar de residencia es en Barranquilla en la Calle 47 B N° 22-43, urbe que ha habitado desde que se encontraba vinculado a la empresa portuaria, luego le aplicaba lo normado en el literal b) del precepto transcrito, esto es, su desplazamiento dentro de la ciudad de Barranquilla se cubría con los vehículos con los que contaba el terminal para aquellos efectos, lo que justifica el hecho de que en su liquidación final de prestaciones sociales no se relacionara el renglón de subsidio de transporte, al no verse compelido a sufragar de su peculio lo correspondiente a pasajes en el transporte público, para que con posterioridad la empresa le retornara los valores por él atendidos y, en consecuencia, el reclamo adelantado por este extrabajador relacionado con el concepto de subsidio de transporte carecía por completo de procedencia, comoquiera que dicho emolumento no se daba de manera automática con cada salario, sino acorde a los gastos que cada empleado tuviere que asumir de su patrimonio y acreditara ante la empresa.

**Diferencia salarial aplicable a directivo sindical.**

Este reclamo fue acometido por el ciudadano ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO quien se desempeñó en el terminal marítimo de Barranquilla como estibador y alcanzó el amparo de la presunta inobservancia en que incurrió la empresa portuaria con decisión judicial adiada el 05 de diciembre de 1995, del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla; en la que acorde a la información aportada en el pliego acusatorio, se deprecó el reconocimiento del 25% de diferencia salarial al haberse desempeñado como directivo sindical.

La norma convencional que consagraba las prerrogativas aplicables a nivel salarial para los permisos sindicales, remite al precepto 56 colectivo, que establece en su literal a) que para estibadores marítimos –designación que ocupaba el petente- y aguadores el valor diario del permiso será del equivalente a 3.5 Salarios Mínimos Legales; incremento que para el caso bajo estudio repercutió en la percepción mensual del operario correspondiente a la mensualidad de agosto de 1992 en $371.681,50[113], constituyéndose en el único rubro reportado y pagado en el último año de trabajo con relación al permiso sindical al señor BERDUGO SARMIENTO que en su liquidación de prestaciones sociales le fue amortizado en cuantía de

[113] Planilla de salarios obrante en el documento 5 de la Hoja de Vida Pensional del extrabajador.

$375.204,98[114], lo cual arroja un excedente en favor del operario de $3.523,48 en este renglón.

Teniendo en cuenta los aspectos analizados, y que de las pruebas aportadas al expediente se advierte que la entidad portuaria cumplió a cabalidad con sus obligaciones patronales frente a los derechos del señor BERDUGO SARMIENTO, se arriba a la conclusión de que ningún fundamento acompañaba la aspiración que por vía judicial y mediante representante adelantó el extrabajador, consolidándose la flagrante improcedencia del pedimento analizado.

**Reliquidación de prima de antigüedad o por trienios.**

Este concepto, el cual se circunscribe a la reliquidación de prima de antigüedad, se encuentra consagrado en la regla 103 de la CCT, en los siguientes términos:

> *"A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva, la Empresa seguirá reconociendo y pagando a sus trabajadores una prima de antigüedad por trienios cumplidos que se liquidara con base en el salario promedio, de lo devengado en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de causarse el derecho. (…) PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que un trabajador se retire o sea trasladado, este tendrá derecho a que se le liquide y pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Esta prima proporcional constituye salario"* (subrayado fuera del texto).

Este derecho fue objeto de reclamación por los exportuarios MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN y LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, por vía judicial respecto de los cuatro primeros mencionados y mediante acta de conciliación espuria en lo correspondiente al último de éstos, por lo que se pasará a revisar la procedencia de este reclamo acorde a las normas convencionales aplicables respecto de cada uno de los extrabajadores reclamantes.

Por una parte, en lo que se refiere a la liquidación de prestaciones sociales del señor MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, reporta que ésta se delimitaba por el tiempo comprendido entre el 20 de noviembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1993, sopesándose la prima de antigüedad de forma proporcional en cuantía de $580.021,89, al haberse dado el pago del trienio anterior a su retiro en diciembre de 1991, por el monto de $300.370,14, importe que claramente no hacía parte del estimado salarial del último año laborado e imponía tasar de forma fraccionada el estipendio; de este aspecto se desprende que las evaluaciones parciales efectuadas por la entidad portuaria respecto del anunciado concepto guardan justeza con la normatividad aplicable y denotan que la reclamación efectuada por el señor ZÁRATE MUÑOZ adolecía de fundamentos circunstanciales, comoquiera que la empresa valoró en debida forma el concepto de prima de antigüedad que se analiza.

En cuanto a la reclamación efectuada por el señor BERDUGO SARMIENTO, se aprecia en los desprendibles de pago aportados en la hoja de vida

[114] Liquidación de nómina, documento 7 ídem.

pensional, de los que se advierte que la relación laboral con la empresa inició el 01 de diciembre de 1980 y se disolvió el 30 de diciembre de 1992, revelan que el último pago realizado por la empresa en lo que a este concepto se refiere se dio en diciembre de 1992 por el monto de $1´047.136,14, reportándose el pago anterior en diciembre de 1989, lo que conllevó a que dentro de la liquidación de prestaciones sociales se valorara el pago de esta prerrogativa en su integridad, esto es, sin que su estimación se diera de forma proporcional como en el caso que antecede cuando se liquidó sin que aún no se agotara en su totalidad el trienio correspondiente, cálculos de los que yace la correcta valoración dada por el área correspondiente del terminal marítimo de Barranquilla a la prima de antigüedad de este exoperario, quien en virtud de las situaciones probadas en el expediente, no contaba con legitimidad para reclamar la reliquidación de sus prestaciones sociales en virtud de la presunta inobservancia de la otrora empleadora.

Seguidamente, respecto de la tasación de la prima de antigüedad realizada al ciudadano ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, obra evidencia de pago por este concepto en la mensualidad de octubre de 1989, por el monto de $138.783,15; de lo que se desprende que el siguiente pago tendría lugar en el mismo mes de 1992, del que si bien no reposa material demostrativo, pues los desprendibles de pago no aportan datos de las erogaciones efectuadas en esa anualidad, resulta claro que el derecho a percibirla se dio más de un año antes de que se produjera su salida de la empresa, en la que laboró desde el 16 de septiembre de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1993; situación que ubica la liquidación de la prima de antigüedad en la proporcionalidad, esto es, desde octubre de 1992 a diciembre de 1993, y repercutió en la liquidación de las prestaciones sociales en cuantía de $704.268,24, desdibujándose la procedencia de las aspiraciones planteadas en la demanda atendida en su favor por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla con providencia de 09 de agosto de 1996.

En torno de la liquidación efectuada por la empresa portuaria respecto de la prima de antigüedad del señor JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN, yace en la resolución 43386 de 14 de enero de 1991, por medio de la cual se concede pensión de jubilación al mencionado, la tasación de dicho concepto en cuantía de $264.051,45, que le fuera entregada al ciudadano en la nómina de febrero de 1990, así como la prima de antigüedad proporcional por el tiempo restante que ascendió a $120.927,83, en consideración a que su retiro se produjo el 16 de noviembre de 1990, lo que imponía a la empleadora valorar tanto la prerrogativa pagada dentro del último año laborado, como aquella que a la fecha del retiro se habría causado de forma proporcional, ajustándose al mandato normativo convencional arriba transcrito, lo que apareja la inexistencia de motivación para reclamar la reliquidación de prestaciones sociales por este renglón.

Finalmente, en lo relacionado con el señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO se recuerda que la base de la reclamación remite al acta de conciliación falsa 1630 de 30 de diciembre de 1993 –aserto cuyos fundamentos se explicarán a profundidad más adelante-, en la que se pactó el pago de las sumas resultantes de reamortizar la prima de antigüedad, de la cual devino el mandamiento de pago del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla fechado el 29 de noviembre de 1996; erogación en torno de la

que cabe señalar que aun cuando no se cuenta con la totalidad de los documentos que conforman la hoja de vida pensional de este ciudadano, mediante informe 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación estableció que el cálculo de las prestaciones sociales de SOLANO CASTRO refleja un excedente injustificado de $349.029,40, conclusión a la que se arribó al examinar la justeza de la liquidación de estas percepciones, concluyéndose que ninguna imprecisión se presentaba en su amortización que ameritara el adelantamiento de reclamo por la cuerda administrativa o judicial y, consecuentemente, que la concreción del pago a que se ha hecho referencia carece de procedencia.

De los anteriores asertos se dilucida cualquier duda de cara al probable cimiento de las reclamaciones efectuadas en procura de la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo como base la presunta inobservancia de la prima de antigüedad; concepto en el que además, se pretendió percibir su pago no sólo por el último trienio percibido o su fracción, sino por la totalidad del tiempo trabajado para la empresa, lo que suponía el pago de todos los trienios a los que se accedió en vigencia de la relación laboral bajo una desmedida y lesiva interpretación de la norma convencional que consagraba la prestación, a lo que se agregaba, al igual que en la mayoría de los asuntos judiciales que a lo largo de este pronunciamiento se han analizado, la petición de imposición de sanciones moratorias, actualizaciones salariales, retroactivos y mesadas atrasadas, frecuentemente reclamadas de forma concomitante y de las que más adelante se ahondará sobre su declaratoria y procedencia, agrupándose en las desproporcionadas y atentatorias condenas impuestas a la entidad portuaria, que, por ende, quedan ubicadas por fuera de la razonabilidad y legalidad.

**Reconocimiento ilegal de la indemnización por despido injusto por la terminación del contrato de trabajo originada en la liquidación de COLPUERTOS y su consecuente indemnización moratoria.**

En lo referente a este tópico, el cual fue objeto de reclamación por el señor MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, vale memorar lo consagrado en La Ley 1ª de 1991, normativa que señala:

> *"ARTICULO 33º. Liquidación. Liquídese la empresa Puertos de Colombia, Colpuertos. Su Gerente, o la persona que designe el Presidente de la República en coordinación con su Junta Directiva, actuará como Liquidador. La Liquidación tendrá una duración máxima de tres años, contados a partir de la publicación de la presente ley. Todos los activos que no se vendan o que no se aporten a una sociedad portuaria, pasarán a ser de propiedad de la Nación por obra de esta ley.*
> *(…)*
> *ARTICULO 37º. Facultades extraordinarias. Revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de un año contado a partir de la publicación de la presente ley, para:*
> *(…)*
> *37.2. Dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral y de presupuesto para la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, para la formación de las sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos*

*34, 35 y 36 de esta ley, y para asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36.*

Producto de dichas facultades extraordinarias se expidió el Decreto 035 de 1992 que reglamentó:

> *"ARTÍCULO 1o. La Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia suprimirá los cargos vacantes y los desempeñados por servidores públicos de acuerdo con el programa de supresión de empleos que apruebe la misma Junta Directiva, siguiendo las pautas que establezca la Comisión de Empleo de que trata el artículo 36 de la Ley 1a de 1991, dentro del proceso de la liquidación.*
> *Al vencimiento del término de la liquidación de la Empresa quedarán automáticamente suprimidos los cargos todavía existentes en la misma.*
>
> *ARTÍCULO 2o. La supresión de los cargos desempeñados por servidores públicos implica la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y de la relación legal y reglamentaria de los empleados públicos.*
> *La eventual vinculación que se ofrezca a los servidores públicos de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación, en otras entidades públicas, mixtas o privadas deberá hacerse mediante la suscripción de un nuevo contrato de trabajo o un nuevo nombramiento.*
>
> *ARTÍCULO 3o. El reconocimiento de la pensión de jubilación, invalidez o vejez establecida en las leyes vigentes y en las normas que se expidan en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 1ª de 1991, a que tengan derecho los servidores públicos, significará la terminación de su respectivo contrato de trabajo y vinculación legal y reglamentaria.*
>
> *ARTÍCULO 4o. Los cargos que por necesidad del servicio o de la liquidación no sean suprimidos, serán provistos por el liquidador de la Empresa con el visto bueno de la Junta Directiva.*
>
> *El liquidador de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, con autorización de la Junta Directiva, podrá ordenar el traslado de servidores públicos a otro cargo o sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos que el traslado ocasione al empleado.*
>
> *(…)*
>
> *ARTÍCULO 24. La liquidación de la Empresa Puertos de Colombia es justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 5o., literal e) de la Ley 50 de 1990".* (Resaltado por el Despacho)

En esa medida, no cabe duda alguna para el Despacho que la normatividad de la época autorizaba a COLPUERTOS a terminar unilateralmente los contratos de trabajo existente con sus empleados en razón de su inminente, a lo que se agrega que el reconocimiento pensional en el marco de la liquidación de la precitada entidad estatal comporta además la terminación de su respectivo contrato de trabajo, así como la vinculación legal y reglamentaria.

Asimismo, emerge diáfano que acorde al precepto 24 del Decreto 035 de 1992, la liquidación de COLPUERTOS era justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo de los exportuarios, norma especial aplicable para

los casos originados por la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y no el numeral 14 del artículo 62 del C.S.T invocado en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Barranquilla adiada el 27 de febrero de 1996, que indica "*TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: (…) 14 El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa*".

En este orden, yace palmario que el efecto por la terminación unilateral sin justa causa de los contratos, esto es, la indemnización por este evento consagrada en las reglas señaladas del Decreto 2127 de 1945, no era aplicable al caso que se proponía, mucho menos la regla 64 del C.S.T., toda vez que al existir norma especial, posterior y pertinente, son las consecuencias jurídicas del pacto colectivo las que gobiernan el caso y orientan su resolución, de suerte que al constituir la liquidación de COLPUERTOS justa causa para la terminación del contrato de trabajo de los operarios, se torna inaplicable la indemnización referida en la codificación ordinaria y anterior.

Por lo tanto, sostener que terminar unilateralmente el contrato de trabajo a los exportuarios de COLPUERTOS como consecuencia de la liquidación de la empresa, origina la indemnización, no tiene ningún justificante legal, contrariando las disposiciones citadas y los principios hermenéuticos del derecho, máxime cuando el canon 24 del Decreto 035 de 1992 es claro y su carácter normativo no reviste ambigüedad; precisiones de las que se funda que en manera alguna podría estimarse que se debía aplicar por hesitación la norma más favorable al trabajador.

El Despacho recalca que al no existir la causa lícita y la consecuente obligación de indemnizar al trabajador al no estarse ante un indiscutible despido injusto, tampoco se le puede atribuir al empleador las sanciones por el no pago oportuno y completo de lo debido, como el pago de la indemnización moratoria, ni tampoco puede derivar en la reliquidación de las prestaciones sociales, como se dispuso en la providencia judicial a que se ha hecho referencia en apartes preliminares.

Adicionalmente, se tiene que el inciso 2 del artículo 9 del citado Decreto 35 de 1992 señala que "*Las pensiones son incompatibles con las indemnizaciones*" (subrayado fuera del texto), por lo que resulta a todas luces irreconciliable pretender indemnizaciones por terminación del contrato con pensiones de jubilación, de la cual algunos exportuarios fueron beneficiarios.

Igualmente, se destaca que la supresión paulatina de los cargos de los extrabajadores ordenada por la Junta Directiva de COLPUERTOS y el Comité de Empleo, no implicó solución de continuidad o rompimiento del nexo laboral entre la desvinculación efectiva del trabajador y el reconocimiento pensional, según lo dispuesto en el Acta de Acuerdo y Aclaración del 20 de

mayo de 1993[115], suscrita entre los sindicatos de la Empresa Puertos de Colombia y la entidad estatal.

Entonces, no existe asomo de duda en cuanto que era ilegal reconocer la indemnización por despido sin justa causa como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo originado por la liquidación de COLPUERTOS, lo mismo que la consecuente indemnización moratoria, reliquidación de prestaciones sociales y reajustes pensionales.

**Actas de conciliación de finales de 1993.**

Frente a los referidos pactos conciliatorios, sobre los que ahora se ha de ahondar en cuanto a su demostrada falsedad, según lo arriba anunciado, se memora que acorde a los señalamientos expresamente realizados por la agencia Fiscal en el pliego acusatorio, la entidad encargada del pasivo social de la empresa portuaria convino el pago de los siguientes conceptos consagrados en los anunciados pactos:

**TABLA 14:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
| Administrativa – descanso compensatorio, Acta de Conciliación falsa 2339 de 23 de diciembre de 1993. Pagada en virtud de la resolución 243 de 19 de marzo de 1998. Dra. **MELBA ESTHER ARAZO HERNÁNDEZ**. *Efectos económicos revocados con resolución 1067 de 01 de agosto de 2008 (documento 115 HVP), no obra evidencia del monto de la suma pagada de más en la mesada pensional.* En la liquidación de prestaciones sociales se encuentra relacionado el concepto de COMPENSADOS *(documento 7 HVP).* | $7´257.159,00 **35.60 SMLMV de 1998.** | 19 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – nivelación salarial reconocida en el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998, **RDP 011101 del 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $583´840.833,00 **2864.40 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – salario en especie, acta de conciliación falsa 1561 de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998; acto administrativo **RDP 013753 de 31 de marzo de 2017**, deja sin efectos la resolución. Dra. **MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA**. | $10´170.000,00 **49.89 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial ejecutivo – salario en especie y prima sobre prima, **acta de conciliación falsa** 1517 de 22 de diciembre de 1993 | $34´942.898,00 **171.43 SMLMV de 1998.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE.** |

[115] *El numeral 4° de dicha acta señala:* "A los trabajadores que hubieren obtenido derecho a pensión proporcional de jubilación entre los meses de mayo y diciembre de 1.993, dando aplicación al acta del 27 de agosto de 1.991, suscrita en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., se les reconocerá a título de conciliación, el valor de su salario promedio mensual hasta la fecha en que hubieran completado los trece (13) años de haberse vinculado a Colpuertos, o de servicio al Estado con un mínimo, en este último caso de diez (10) años de vinculación a Colpuertos".

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(documento 23 HVP)*, resolución 2502 de 1998. Establece nuevo monto de la mesada pensional *(soporte contable a folio 20 c. o. 5 anexos)* Dr. **RICAURTE BARRIOS BARRIOS**. | | efectos jurídicos y económicos. | **(prescrito)** |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | | | |
| Judicial ejecutivo – descanso compensatorio según acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ALFONSO CASTILLEJO DE SALES**. | $48´700.000,00 **238.92 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 29 de octubre de 1997, resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $282´181.058,05 **1384.42 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial ejecutivo – acta de conciliación falsa 2409 de 29 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J2LC de 12 de noviembre de 1997, resolución 2226 de 08 de junio de 1998. Dr. **OSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO**. | $81´456.459,04 **399.63 SMLMV de 1998.** | 08 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – cena y descanso, acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC mandamiento de pago de 26 de septiembre de 1996, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ**. | $250´800.000,00 **1230.46 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial ejecutivo – reliquidación de prima de antigüedad, **acta de conciliación falsa** 1630 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J8LC de 29 de noviembre de 1996. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. | $13´098.885,00 **92.16 SMLMV de 1996.** | 29 de noviembre de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial ejecutivo – movilización de nocivos, **acta de conciliación falsa** 1629 de 30 de diciembre de 1993, mandamiento de pago J6LC de 28 de noviembre de 1996, pagada con resolución 1092 de 29 de julio de 1997. Dr. **MANUEL ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ**. No obra en el expediente físico evidencia del pago. | $13´128.541,37 **76.32 SMLMV de 1997.** | 29 de julio de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |

Estos actos tienen como aspecto común el hecho de haber sido presuntamente celebrados a finales de 1993, particularidad frente a la que ha de memorarse que obra en el expediente la declaración vertida ante este Juzgado por el señor **WILLIAM HERNÁNDEZ CARRILLO** el 30 de agosto de 2016, en la que informó a la audiencia haberse desempeñado como gerente del puerto marítimo y fluvial de Barranquilla y obras de conservación de Bocas de Ceniza, previo al proceso liquidatorio de la empresa portuaria, precisando respecto de las conciliaciones que para aquel momento histórico se rubricaron con algunos de los extrabajadores, que éstas no superaron las 45 o 50 en los últimos seis meses, comentando que previo a su firma eran sometidas al escrutinio de diversas dependencias de la empresa portuaria para que fueran visadas al momento de su protocolización en las Inspecciones del Trabajo, aval que igualmente debía impartir la Junta

Directiva del terminal que estaba compuesta por siete personas de las que era presidente el gobernador del departamento del Atlántico; por lo que frente a las conciliaciones que al parecer fueron suscritas a finales de 1993 con la supuesta anuencia de las directivas del terminal, dijo tener conocimiento de que éstas fueron sometidas a cobro de forma fraudulenta y la Fiscalía estuvo al tanto de estos eventos, que hacen parte de investigación de carácter delictivo, memorando que las firmadas en 1993 por la gerencia del terminal marítimo de Barranquilla generalmente eran individuales y no colectivas como las que se mencionan dentro de los hechos constitutivos de reproche en esta causa, en las que se beneficiaban plural número de personas, que contaban con firmas espurias y celebrados sobre conceptos que no tenían respaldo normativo.

Los esbozos vertidos de manera jurada por doctor HERNÁNDEZ CARRILLO, quien acredita haber estado al tanto de los pormenores que rondaron el empalme entre la empresa Puertos de Colombia y el fondo liquidador FONCOLPUERTOS, se elevan como indicio razonable y verosímil de que aquellas actas de conciliación fueron confeccionadas de forma fraudulenta con la decidida concurrencia de algunos abogados y al margen de los lineamientos establecidos por las normas convencionales y legales para el amparo de los derechos de los exportuarios; pactos de los que se valieron para presentar en los años 1996 a 1998, acciones administrativas y judiciales dirigidas a cristalizar la erogación de las sumas dinerarias en ellas contenidas; apreciándose que respecto de las afirmaciones expuestas por el anotado ciudadano, además de resultar admisibles y contextualizadas con lo que fue el tránsito de la empresa portuaria a su liquidación, del que fue colaborador, carecen de la discusión que frente a su certeza hubieren podido plantear quienes se hallan interesados en las resultas de este asunto, ya que ninguna justificante se puede plantear en torno de la ilicitud de los anunciados pactos.

De las pruebas aperadas al expediente se arriba a la conclusión de que los pactos presuntamente celebrados a finales de 1993, se encuentran afectados en cuanto a su licitud al haber sido espuriamente elaborados, y en cuando a su procedencia, al contener el reconocimiento de derechos laborales a los que no tenían derecho quienes se beneficiaron con ellos, ora por tratarse de derechos inexistentes convencional y legalmente, ora por remitir a conceptos debidamente valorados y cuantificados por la empresa portuaria al término de la relación laboral de sus beneficiarios, circunstancias que envuelven la ilicitud de los correspondientes reconocimientos y pagos.

**Reliquidación de prestaciones sociales, de cesantías, reajustes o retroactivos salariales y pensionales sin especificación en la acusación de los factores reclamados.**

Dentro del grupo actos desplegados por los procesados que derivaron en la consolidación de decisiones judiciales o administrativas irregulares, aparejándose la igualmente ilícita erogación de dineros del Estado a partir del reconocimiento de reliquidación general de prestaciones sociales, cesantías, reajuste pensional, pago de retroactivos, de indemnizaciones moratorias al amparar aspiraciones genéricas, en algunos casos sin especificación de las circunstancias en las que se cristalizaba la presunta

omisión de la empresa y con fundamento en factores laborales sin sustento factico y/o jurídico, se encuentran las que se pasan a enlistar:

**TABLA 15:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J8LC de 26 de mayo de 1996, resoluciones 2371 de 1996 y 1404 de 08 de mayo de 1998 *(documento 47 HVP) (revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. *Solicitud que repercutió en la variación de la mesada pensional (documento 28 HVP)*. **RDP 003842 de 03 de febrero de 2017**, se ordena dar cumplimiento a la sentencia de 22 de julio de 2015, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se dispone la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1015** de 07 de mayo, **1404**, **1519**, **1667** y **2070** de 08 de mayo y **369** de 06 de abril de 1998. | $25´889.313,53 **127.01 SMLMV de 1998.** | 08 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – retroactivo salarial, sentencia J4LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998 (Documento 43 HVP) *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)* Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO**. | $157´982.645,18 **775.08 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial ejecutivo – reliquidación de salarios moratorios de sentencia anterior del J8LC, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *(revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017)*. Dr. **FABIO ABSALÓN ÁVILA MORALES**. | $6´700.000,00 **32.87 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | | |
| Judicial – sin dato de la sentencia, resolución 792 de 1994, sin datos del representante judicial que acometió el reclamo. | $19´205.524,92 **194.58 SMLMV de 1994.** | No obran datos de los que se establezca la variación de la mesada a partir de este reclamo. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – 25% de diferencia salarial, sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995, resoluciones 1283 de 25 de junio de 1996 *(revocada con resolución 0981 de 30 de agosto de 2011)* y 1058 de 07 de mayo de 1998 *(revocada con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016)*, varía la mesada pensional. Dr. **RICARDO RAFAEL PRETEL PACHECO**. | $12´395.740,00 **60.81 SMLMV de 1998.** | 07 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | | | |
| Judicial ejecutivo – nivelación salarial reconocida en el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998, **RDP 011101 del 17 de marzo de 2017**, revoca los efectos de esa resolución. Dr. **MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO**. | $583´840.833,00 **2864.40 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reajuste de la mesada pensional, sentencia J8LC de 02 de febrero de 1995, resolución 114 de 20 de febrero de 1998, dispone la modificación de la mesada pensional del reclamante *(documento 41 HVP)* Resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009** dispone la revocatoria directa de la resolución. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´706.073,07 **23.08 SMLMV de 1998.** | 20 de febrero de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial – sin datos del concepto reclamado, sentencia J3LC de 26 de noviembre de 1996 *(documento 35 HVP)*, resolución 276 de 20 de marzo de 1998, | $26´727.957,84 **131.13 SMLMV de 1998.** | 20 de marzo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| resolución **1484 de 04 de noviembre de 2009,** ordena la revocatoria parcial del acto administrativo. Dr. **JHONNY BARRIOS BARRIOS** y Dra. **DELFA AMARANTA CANTILLO**. Este reclamo contempló reajuste pensional. | | | |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 12 de febrero de 1996, resolución 238 de 05 de febrero de 1996. Mesadas atrasadas y salarios moratorios. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $5´545.692,23 **39.01 SMLMV.** $33´318.261,69 **234.42 SMLMV.** **TOTAL 273.43 SMLMV de 1996.** | 05 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – nueva reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la autoridad judicial, resolución 1909 de 1996. Salarios moratorios Dr. **JOSÉ CASTRO BALETA**. | $73´991.075,41 **502.60 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – retroactivo salarial, sentencia J6LC de 21 de diciembre de 1993, resolución 369 de 06 de abril de 1998. Dr. **RAFAEL SEGUNDO PRECIADO BIOJÓ**. | $195´587.022,72 **959.57 SMLMV de 1998.** | 06 de abril de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | | | |
| Judicial – Reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 243 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | $950.701,02 **9.63 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de la providencia judicial, resolución 2414 de 1995. Dr. **ALFONSO GIL DE LA HOZ**. | $81´065.143,00 **681.59 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la fecha de la sentencia se solventa el mandamiento de pago mediante resolución 2399 de 1996. Dr. **EMIL ALBERTO PULGAR LEMUS**. | $7´606.205,00 **53.51 SMLMV de 1996.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $32´500.000,00 **159.44 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J2LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 05 de diciembre de 1997, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA**. | $37´000.000,00 **181.52 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | | |
| Administrativa – reliquidación de prestaciones sociales, resolución 296 de 01 de diciembre de 1993. Sin datos de apoderado judicial. | $746.377,41 **9.15 SMLMV de 1993.** | 01 de diciembre de 1993. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de identificación de autoridad judicial o fecha de la sentencia; devino en reajuste pensional y pago de mesadas atrasadas. Dra. **ENA LEONOR QUINTANA**. | $6´726.372,33 | Reclamo que carece de soporte contable dentro de los printers de pago o de ejemplar de la providencia. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados ni de la autoridad judicial, mandamiento de pago de 21 de octubre de 1996, conciliado en acta 020 de 06 de mayo de 1998, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $4´900.000,00 **24.04 SMLMV de 1998.** | 20 de mayo de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | | | |
| Administrativa – reliquidación general de prestaciones sociales, resolución 173 de 31 de enero de 1995 *(folio 165 C. O. 4 de instrucción)* sin variación de la mesada pensional. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $10´255.483,39 **86.22 SMLMV de 1995.** | 31 de enero de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de autoridad judicial ni fecha de la providencia judicial, pagada con resolución 262 de 08 de febrero de 1996. Dr. **LUIS GUTIÉRREZ ALFARO**. | $1´234.066,17 **8.68 SMLMV de 1996.** | 08 de febrero de 1996. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación de prestaciones sociales, sentencia J1LC de 06 de enero de 1996, resolución 677 de 21 de mayo de 1997. Dr. **ROBERTO ROMERO TURIZO**. | $55´542.636,49 **322.91 SMLMV de 1997.** | 21 de mayo de 1997. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | | | |
| Judicial – sin datos de los conceptos reclamados, de la autoridad judicial o de la fecha de la sentencia, se le reconoce el pago de suma dineraria con resolución 792 de 1994. **Sin datos del representante judicial**. | $165.586,20 **1.67 SMLMV de 1994.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| Judicial ejecutivo – diferencias de mesada pensional, mandamiento de pago J2LC de 27 de noviembre de 1996, conciliado en acta 006 de 05 de junio de 1998 resolución 2226 de 12 de junio de 1998. Dra. **RUTH DEL CARMEN DUQUE DE TORRENEGRA**. | $27´509.892,15 **134.96 SMLMV de 1998.** | 12 de junio de 1998. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia del J8LC de 05 de julio de 1994 *(documento 12 HVP)*, resolución 1136 de 23 de septiembre de 1994. Dr. **RICARDO PRETEL PACHECO** y **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $25´817.393,30 **261.57 SMLMV de 1994.** | 23 de septiembre de 1994. | **PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sin datos de fecha de la providencia judicial, resolución 352 de 1995. Dr. **ÉDISON OROZCO CABALLERO**. | $17´914.072,17 **150.62 SMLMV de 1995.** | Sin dato de la fecha hasta la que produjo efectos jurídicos y económicos. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales por indebida apreciación, sentencia J5LC de 14 de julio de 1994 *(documento 22 HVP)*, mandamiento de pago J5LC de 17 de mayo de 1995. Dra. **LILIA DEL CARMEN AREVALO**. Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 18 de diciembre de 2002. | $3´543.524,37 **29.79 SMLMV de 1995.** | 17 de mayo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN ATENUADO. (prescrito)** |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | | | |
| Judicial – reliquidación general de prestaciones sociales, sentencia J3LC de 23 de noviembre de 1993, resolución 629 de 25 de marzo de 1995 y 316 de 1996 por salarios moratorios y agencias en derecho. Dra. **IVONNE URICOHECHEA VENGOHECHEA**. | $13´054.331,52 **109.76 SMLMV.** $3´256.980,67 **27.38 SMLMV.** **TOTAL 137.14 SMLMV de 1995.** | 25 de marzo de 1995. | **PECULADO POR APROPIACIÓN SIMPLE. (prescrito)** |

Respecto de estas solicitudes emerge relevante traer el contenido de los informes presentados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de cara a la justeza de las percepciones de quienes se hallan vinculados a la presente causa penal, destacándose el 446622 FGN-CTI-SI-GDAP-EF del 20 de febrero de 2009, en el que se revisa la liquidación del ciudadano ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, del que se concluyó que la amortización efectuada por la empresa superaba la cuantía que se debía pagar por concepto de prestaciones sociales,

incrementándose indebidamente su percepción de jubilación en $22.689,56.

En lo tocante al procesado FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS yace el informe definitivo 477066 FGN-CTI-SI-GDAP-EF fechado el 31 de julio de 2009, por medio del cual se informa la existencia de mayores valores en las prestaciones sociales en monto de $657.920,97, como en el establecimiento de la mesada pensional, la cual excedió la debida evaluación en $29.329,25. Sobre la misma temática fue adosado el estudio 459344 FGN-CTI-SI-GDAP-EF adiado el 30 de abril de 2009, relacionado con el extrabajador portuario EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, del que se concluyó que recibió en su liquidación final valores por encima de lo que tenía derecho a apreciar, lo que generó un incremento irregular en su mesada pensional de $50.029,08.

En el informe FGN-CTI-365766 de 12 de octubre de 2007, se revisó la justeza de la liquidación de presentaciones sociales y mesada pensional del extrabajador portuario MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, entre otros, del que se concluyó que la empresa portuaria generó pago de las prestaciones sociales y estableció la mesada pensional teniendo en cuenta un excedente de $46.190,43 no debidos; concluyéndose que no había lugar a que el enjuiciado efectuara reclamaciones argumentando presuntas falencias de parte de la empresa en la amortización de aquellos rubros que debían ser entregados al momento de la ruptura de la relación laboral.

Como complemento de los comentados estudios y respecto del señor ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, yace el informe FGN-CTI-369271 de 06 de noviembre de 2007, en el que se advierte que este ciudadano recibió un menor pago en la liquidación de las cesantías definitivas derivado de la indebida estimación de la prima de antigüedad que fue percibida en la última quincena de noviembre de 1992, presentándose un faltante de $13.940,40; teniendo en cuenta la incorrección en que incidió la empleadora, el extrabajador adelantó proceso judicial por intermedio del abogado ALFONSO GIL DE LA HOZ ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, en el que se discutió la reliquidación de primas de servicios y de antigüedad, pretendiendo además la reamortización de cesantías, mesada pensional y el pago de sanción moratoria.

No obstante lo anterior, la deficiencia en la estimación de la prima de antigüedad que, acorde con las pruebas aportadas al expediente, se liga a la resolución 2414 de 1995, así como a la sentencia de 09 de julio de 1993, fue deprecada paralelamente por el señor FANDIÑO GARCÍA con la reliquidación de vacaciones y prima de vacaciones, rubros que como lo demuestra el estudio citado en el párrafo que antecede, habían sido debidamente amortizados por la otrora empleadora, hacen que el reclamo que en principio guardara justas proporciones con las lícitas expectativas del reclamante, se tornara en irregular al concretarse el pago de sumas ya sufragadas, de lo cual da cuenta la resolución 46250 de 04 de diciembre de 1992[116], donde se enlistan para efectos de establecer el monto de las prestaciones sociales la prima de vacaciones en importe de $337.110,09 y vacaciones en tiempo a razón de $376.770; evento que pese a que fue

[116] Documento 7 de la hoja de vida pensional, resolución por medio de la cual se reconocen prestaciones sociales al exoperario FANDIÑO GARCÍA.

consumado en su totalidad en regencia de la Ley 43 de 1982, y es objeto de decaimiento de la oportunidad para proseguirse la persecución penal por prescripción, será parte, como los demás analizados en estas condiciones, de aquellos que ameritan dejarse sin efectos en virtud del restablecimiento del derecho.

En este mismo sentido, con informe adicional FGN-CTI-369264 de 06 de noviembre de 2007, se aportaron los datos de las liquidaciones del señor ARMANDO MARIANO SANJUAN, entre otros, de quien se advirtió una incorrección en su liquidación de $17.032,86 al haberse apreciado de forma parcial la segunda prima semestral de 1992, deviniendo la reclamación analizada en el aparte pertinente a la prima sobre prima, el cual no sólo se ventiló respecto de la advertida carencia, sino que se amplió a las primas de servicios de 1990 a 1992, lo que constituye una evidente desproporción de lo que fuera su genuino interés, al que además se adicionaron las pretensiones relacionadas con reamortización de vacaciones, prima de vacaciones, prima antigüedad proporcional –última que fue debidamente pagada dentro de las prestaciones sociales, tanto de en la fracción generada en su totalidad como de forma proporcional-, reajuste de cesantías y de mesada pensional e imposición de indemnización moratoria, envolviendo las anotadas pretensiones en la ilicitud, al desbordar la procedencia de lo que legítimamente podía reclamar.

Del análisis realizado se advierte que, si bien esta solicitud se encuentra dentro de aquellos que aqueja prescripción de la acción penal acaecida en la etapa de investigación, amerita el enderezamiento a derecho acorde al precepto 21 procedimental, lo que se declarará en el parte pertinente de esta decisión.

En lo correspondiente a los señores LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ y JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, de quienes se efectuó el examen de prestaciones sociales en el mismo informe adicional FGN-CTI-369264 referido en apartes anteriores, se precisa que el escrutinio reveló que les fueron debidamente valorados los renglones constitutivos de la base de amortización de las acreencias laborales al finalizar el vínculo laboral con Puertos de Colombia; de donde se desprende que las reclamaciones enlistadas en el cuadro que antecede -tanto las prescritas como aquellas que aún son pasibles de juzgamiento-, que denotan una clara ambigüedad respecto de los renglones que las fundamentaron, carecen de cualquier miramiento de cara a su procedencia y, consecuentemente, los actos administrativos que dispusieron su pago serán objeto de revocatoria, al adolecer del probado sustento para su emisión.

De otro lado, mediante estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, fueron analizados los pagos realizados al ciudadano LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, así como el contenido y fundamento de los actos administrativos en los que se detallaban los tiempos de servicios, los cargos ocupados y las resoluciones en las que se enlistaron los renglones que componían la base de liquidación de las percepciones dinerarias entregadas al término de la relación laboral; examen que reveló que al mencionado le fue pagado un excedente en la suma de $349.029,40; ubicando las reclamaciones judiciales y administrativas por él adelantadas en la improcedencia y correlativa ilegalidad, de las que si bien ha sido

advertida la operancia de la prescripción, serán materia de revocatoria ante la necesidad del ajuste a derecho.

En el mismo estudio citado en el párrafo precedente se examinaron las prestaciones sociales y establecimiento de la base de liquidación de la mesada pensional de los señores JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN, hallándose respecto de primero pago indebido en *quantum* de $202.699,80; y en lo relacionado con el segundo, fue establecida justeza entre lo cancelado por la empresa y lo analizado por la Fiscalía, lo que denota que con ningún soporte contaban para acometer las reclamaciones judiciales que les sindica la Fiscalía como transgresoras de la normativa penal, que aunque se encuentran prescritas, serán objeto del restablecimiento del derecho.

**Otras irregularidades.**

Adicional a las anomalías observadas en precedencia, el Despacho percibe la existencia de otras sindicadas por la Fiscalía en el vocatorio a juicio a partir de las que se reconocieron renglones de manera ilegal, asociadas con reliquidación general de prestaciones sociales, horas extras y recargos nocturno y especiales, sobre los que si bien algunas encuentran respaldo normativo, como en el caso de los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO y RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO con relación a horas extras; aquel vinculado con incremento nocturno de 35% que deprecó el señor EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ; o el aplicable a determinados cargos como el adelantado por el señor ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO quien reclama el recargo de 21.5% por ocupar el cargo de estibador, como quedó arriba decantado cuando se analizó lo atinente a descanso compensado y cena y descanso, requieren de que no sólo se cuente con este apoyo positivo para anhelar su pago, sino que debe encontrarse acreditada la inequívoca omisión de la empresa de cara a la aspiración planteada, delimitadas las pretensiones en cuanto a los períodos en los cuales se concretó su presunta inobservancia e identificada la cuantía de lo que se dejó de percibir con ocasión de la inactividad de la empleadora.

De esta forma, se encuentra que el reclamo acometido, de una parte, por los señores ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO y RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO se dirigió al reconocimiento de horas extras ante la alegada negligencia de la entidad portuaria en su debida apreciación, formulación que aun cuando fue atendida respecto de RODADO CAICEDO en amparo de sus pretensiones por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla mediante decisión de 07 de mayo de 1996, al revisar el material demostrativo que se agrupa en la hoja de vida pensional del extrabajador, se encuentra acreditado dentro de los certificados de liquidación de prestaciones sociales[117] la valoración del rubro de EXTRAS CONVENCIONALES allí tasado en cuantía de $289.382,73, así como el concepto de "HORAS EXTRAS al 200" en monto de $965.514.92; hallazgos que permiten arribar a la convicción de que el extrabajador convocado a reproche percibió la remuneración relacionada con las horas extras en vigencia de la relación laboral y fueron tenidas en cuenta para efectos de establecer el pago de sus prestaciones sociales y mesada pensional, que

[117] Información obrante en el documento 7 de la hoja de vida pensional aportada por la UGPP.

posteriormente reclamó por vía judicial, acto que se erige como lesivo a la descripción típica que en esta decisión se analiza.

En cuanto a las pretensiones asociadas con el ciudadano CABARCAS ROMERO, se precisa que si bien no fue aducida la reproducción de la providencia judicial proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla el 05 de julio de 1996, por medio de la que se amparó la solicitud del mencionado exportuario en el sentido de reconocer el pago de las horas extras ante la presunta inobservancia de la empresa portuaria, cuanto se alcanzó el reconocimiento de $78´600.000,00, pagados con resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, no lo es menos que se tiene probado dentro de la causa que la empresa portuaria al momento de tasar el promedio del último año laborado para fijar la base de liquidación de la mesada pensional, tuvo en cuenta en los renglones enlistados en la resolución 48515 de 27 de agosto de 1993, el de horas extras al 200 en monto de $812.886,73, quedando demostrado que en manera alguna se le puede atribuir imprecisiones a la empresa en cuanto a la valoración de este ítem para efectos de fijar el importe de las percepciones del extrabajador al momento del retiro; evidenciándose, por el contrario, que fueron reconocidas y pagadas en vigencia de la relación laboral, pues yace columna designada exclusivamente a esta percepción en las planillas de devengo aportadas en la carpeta pensional.

En este mismo sentido se aprecia que en lo referente al señor EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien solicitó el pago del recargo nocturno de 35% por la presunta desatención de la empresa en el reconocimiento de esta prerrogativa, el Juzgado anota que esta aspiración no contaba con expreso respaldo normativo, por cuanto el canon 79 convencional enunciaba el pago de "*recargos por trabajos en horas extraordinarias y por movilización de nocivos y explosivos*" que distinguía los complementos dinerarios para el desempeño de labores que sobrepasando las 18:00 horas -tenidas para entonces como horas extras nocturnas- ameritaban un pago adicional, y para el cargo de winchero que desempeñaba el reclamante, se trataba de un 50% de recargo sobre el ordinario laborado, esto es, que se le pagaría la hora trabajada por fuera del horario común al 150% del valor que regularmente se reconocía, sin que se aprecie la consagración del reclamado 35% que cimentó el ruego del exoperario.

A esto se suma que revisado el certificado de factores salariales que milita dentro de su hoja de vida pensional, no se encuentra reporte de horas extras que ameritara incluir este renglón dentro de aquellos que componían la base de apreciación de la mesada pensional y prestaciones sociales; concluyéndose que la petición enervada por este ciudadano adolecía de afianzamiento de orden normativo y circunstancial.

Frente a la solicitud formulada por el señor ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO tocante al recargo de 21.5% al haber ocupado el cargo de estibador, atendiendo que únicamente se le reconoció este agregado en proporción del 20%, legitimando el reclamo de la facción de 1.5% restante, esta solicitud fue atendida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla con providencia fechada el 16 de diciembre de 1996, amparando la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda.

Sobre esta deprecación conviene mirar con detalle el fundo de la demanda y las resultas de la misma de cara a los pagos efectuados al procesado en el último año de trabajo, compuesto por lo devengado en 1992, advirtiéndose en los reportes de sueldos que en efecto la empresa aplicó el incremento del 20% a la percepción salarial del ciudadano en lo que a este recargo se refiere, circunstancia que consolida la expectativa para promover la causa laboral analizada por el excedente que se alegó desconocido por la empresa. No empece lo anterior, aun cuando el asiento principal del reclamo cuenta con validez, la pretensión accesoria de pago de salarios moratorios –como se examinará en el aparte siguiente de forma detallada- se encuentra inmersa en la ilicitud, pues esta sanción de ninguna manera puede ser imputada de forma automática ante una imprecisión de la parte demandada y se erige como un correctivo desmedido e improcedente, haciendo que la loable aspiración del demandante se torne en irregular.

**Reconocimiento irregular de la indemnización moratoria e incompatibilidad de las sanciones reconocidas como actualizaciones salariales.**

La indemnización moratoria está regulada en el inciso 1° original del precepto 65 del CST que indicó:

> *"INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO. 1. Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo".*

Acerca de la indemnización moratoria en razón de las Convenciones Colectivas suscritas por COLPUERTOS, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha señalado:

> *"(…)*
> *1.2 La indemnización moratoria constituye un derecho incierto y discutible y, por ende, es susceptible de conciliación. La consulta se refiere de manera general a la conciliación de derechos laborales no ciertos y renunciables, pero menciona específicamente la indemnización moratoria, entendida tradicionalmente como aquella a cargo del empleador que, al terminar el contrato de trabajo, no paga los salarios y prestaciones debidos o no hace practicar al trabajador el examen médico de retiro, y que consiste en una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.*
>
> *En cuanto se refiere a los trabajadores oficiales, se ha considerado que esta clase de indemnización se encuentra consagrada de manera implícita, en el parágrafo 2° del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, subrogado por el artículo 1° del Decreto 797 de 1949, ya que tal norma establece un plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha de retiro del trabajador, para efectuar la liquidación y pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones que se le adeuden, término durante el cual el contrato de trabajo se considerará "suspendido" y si se vence, sin que se hubieran satisfecho las obligaciones laborales, el contrato "recobrará su vigencia", con lo cual se causará nuevamente el salario.*
>
> *Es de señalar que en el caso de la Empresa Puertos de Colombia, según se indica en la consulta "Todas las convenciones colectivas suscritas entre*

*Puertos de Colombia y sus ex trabajadores consagran la indemnización moratoria, si las prestaciones no han sido pagadas dentro de los primeros setenta (70) días para el caso de Santa Marta y los restantes dentro de los primeros treinta (30) días".*

*La indemnización moratoria, también llamada sanción por falta de pago o "salarios caídos", constituye un derecho que no es cierto e irrenunciable para el trabajador, por cuanto el hecho que la genera puede ser objeto de controversia y discusión, dado que tal indemnización puede presentarse cuando el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones no se hace dentro de la oportunidad que señala la ley o la convención colectiva, o cuando el pago no comprende a todos y cada uno de los conceptos salariales o prestaciones debidos, legales y extralegales o convencionales, o no se liquidan como debe ser y, en caso de retenciones o deducciones de salarios o prestaciones no autorizadas por el trabajador o la ley, o cuando el empleador no entregó al trabajador la carta para el examen médico de retiro. Todas estas situaciones deben ser demostradas, con la consiguiente aplicación del principio de contradicción de la prueba, lo que hace que la indemnización moratoria no sea, por sí misma, un derecho cierto e irrenunciable del trabajador y por lo tanto, sobre ella y su cuantía es dable efectuar una conciliación.*

*Además, la jurisprudencia laboral ha establecido que si el empleador demuestra haber acusado de buena fe, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria. Por tanto, esta circunstancia puede válidamente alegarse y discutirse en el caso concreto y de ser probada, enerva la reclamación o la pretensión de la indemnización moratoria.*

*La Corte Suprema de Justicia expresó sobre este particular lo siguiente, en sentencia de mayo 30 de 1994: "Los jueces laborales deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria, pues de acuerdo con lo dicho por la jurisprudencia de la Corte, el contenido del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo introduce una excepción al principio general de la buena fe, al consagrar la presunción de mala fe del empleador que a la finalización del contrato omite pagar a su ex trabajador los salarios y prestaciones que adeude".*[118].

Es así como cuando el empleador no paga los salarios o prestaciones debidos producto de la terminación del contrato de trabajo o no entrega el certificado médico de retiro a la finalización del mismo, como ejemplo de una de las referidas causales, dentro del término estipulado en la norma, sin desvirtuar la mala fe, se genera la sanción para el patrono de un día de salario por cada día de retardo, de suerte que el no reconocimiento oportuno de la pensión no se puede entender como producto de la terminación del contrato de trabajo para efectos de ordenar el pago de la indemnización moratoria.

La Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral ha establecido que tal pretensión no procede automáticamente, ya que es necesario determinar si el empleador actuó o no de mala fe. Al respecto ha indicado: *"La jurisprudencia de la Sala ha aceptado (…) que la aplicación automática de las normas que consagran salarios moratorios (C.S.T., art. 65 y D. 797 de 1949,*

[118] Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 19 de septiembre de 1996, numero de radicaron 878, Consejero Ponente CESAR HOYOS SALAZAR.

*art. 1) equivale a una interpretación equivocada de dichas normas, por cuanto no tienen en cuenta el elemento de buena o mala fe en la conducta del patrono incumplido o moroso"*[119]. Es así como para que se genere indemnización por ese motivo, se requiere de un proceso judicial basado en pruebas claras para valorar la mala o buena fe del empleador, lo cual también se puede predicar de la entrega del certificado médico a la terminación del contrato de trabajo.

Además, se itera que el salario pese a estar compuesto por múltiples factores constituye un único concepto y por consiguiente la sanción por mora no puede proceder por cada uno de los factores que integran el salario, como asiduamente reclamaron los aquí procesados por vía judicial y administrativa, con lo cual es evidente que en caso de quedar insoluto un factor salarial diferente al reclamado, el empleador queda liberado de la sanción moratoria, habida consideración, si el incumplimiento de esta genera correlativamente a su cargo una obligación, según lo señala el artículo 1625 inciso 1 del Código Civil, se extingue por la solución efectiva de pago.

Entonces, los reconocimientos de la indemnización moratoria alcanzados en las sentencias de los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla y en otros actos aquí analizados se efectuaron bajo criterios contrarios a la Ley, generando una apropiación indebida de recursos estatales en favor de terceros, en flagrante desconocimiento de la normativa legal y convencional que señalaba que la sanción por mora no puede proceder de forma automática ni por cada uno de los factores que integran el salario, debiendo mediar para ello decisión judicial y mala fe comprobada en el impago atribuible al empleador respecto de los conceptos que se alegaren desconocidos, máxime cuando ésta sanción formulada como pretensión secundaria debe correr la misma suerte de las principales (reliquidaciones de prestaciones sociales), las cuales no eran procedentes por irregulares como arriba se dejó sentado.

Por otra parte, los intereses moratorios corresponden a una sanción que procede en los eventos previstos en el canon 141 de la Ley 100 de 1993, que establece:

> *"INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago".*

Significa lo anterior que los intereses aludidos proceden cuando existió mora en el pago de la mesada pensional, mas no por retroactivos de diferencias cuando ésta es reajustada.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en fallo emitido el 6 de diciembre de 2011, en el radicación No. 41392, con ponencia del H. M. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, indicó que los intereses moratorios también buscan morigerar la pérdida del poder

---

[119] Corte Suprema de Justicia,, Sala de Casación Laboral, Sentencia 2 de diciembre de 1992 y 20 de mayo de 1992

adquisitivo por lo que son incompatibles con la indexación de la mesada pensional, al respecto adujo:

> *"Sobre esta base es claro que el ad quem le dio una inteligencia a la norma acorde a lo que ha sostenido esta Corporación sobre el asunto, en cuanto al carácter resarcitorio de los intereses moratorios cuyo fin es el de paliar, en cierto modo, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, tal como lo señaló la Sala en la sentencia del 12 de mayo de 2005, radicación 22605, en los siguientes términos:*
>
> *"El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.*
>
> *"Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.*
>
> *"No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones."*
>
> *Conforme con ello, si lo que se busca con los intereses moratorios es paliar los efectos adversos producidos sobre el acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, debe tenerse en cuenta que uno de esos efectos es el de la devaluación monetaria surtida durante todo el tiempo que dure la anomalía en el cumplimiento.*
>
> *Como quiera que el Tribunal, al confirmar la condena por indexación impuesta por el a quo, no observó que se creaba la incompatibilidad ya señalada con los intereses moratorios por los que condenó, dio una aplicación indebida al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que el cargo es fundado y habrá de casarse la decisión recurrida en este aspecto".*

En este orden, son incompatibles, en primer lugar, los intereses moratorios y la indexación por constituir ambas, formas de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones; y, en segundo término, son incompatibles la indemnización moratoria y los intereses moratorios, por ser sanciones que reprochan circunstancias disimiles, una, el no pago de los salarios o prestaciones debidos producto de la terminación del contrato de trabajo, y la otra, la mora en el reconocimiento de la pensión, sin que la primera proceda para el caso de pensiones.

Por consiguiente, el reconocimiento simultáneo de los intereses moratorios y la indexación se traduce en ilegal e infundado en derecho, por reconocer dos veces lo mismo, más aun cuando al mismo tiempo se reconoce el pago de indemnización moratoria con el reconocimiento de cualquiera o ambos de los dos conceptos anteriores, ya que, como se señaló ésta no procede en asuntos pensionales, dicho esto sin perjuicio de lo establecido en la regla 177 del entonces CCA.

En esa medida, no media hesitación que las referidas sentencias judiciales y actas de conciliación reconocieron simultáneamente intereses moratorios y,

al mismo tiempo, indexación de mesadas pensionales, desconociendo que no se pueden acoger coetáneamente dichos conceptos, así como se decretó el pago de indemnización moratoria, contraviniendo las normas convencionales y criterios jurisprudenciales que establecen que debe mediar decisión judicial y mala fe probada en el impago de parte del empleador, generándose, por tanto, una apropiación indebida de recursos estatales en favor de terceros.

**Reconocimiento pensional.**

Dentro de esta categoría se aprecia el evento enrostrado al señor JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY en el que, acorde a los argumentos de la Fiscalía, habría incurrido al acceder a dicho beneficio en ausencia del cumplimiento de los requisitos para ello, sin que se realizara alguna precisión adicional en torno a la forma cómo el enjuiciado arribó a éste, de las normas que presuntamente quebrantó al acceder a su disfrute o las argucias fraudulentas de las que se pudo valer para defraudar las arcas de la Nación y que, por ejemplo, se hubiese cristalizado al no haber sido parte de la empresa portuaria y haber accedido a la pensión o no haber cumplido con los requisitos mínimos para ello; señalamiento que impone al Juzgado corroborar el contenido de la hoja de vida pensional del procesado a fin de establecer con certeza si según la documental aperada a ese compendio es posible identificar los actos reprochables en que se incurrió para acceder a su percepción de jubilación.

No empece advertirse que dentro del referido digesto demostrativo yacen las manifestaciones realizadas por el procesado con posterioridad a su retiro de la empresa y los actos administrativos emitidos en vigencia de la relación laboral y con posterioridad a su desvinculación, la hoja de vida pensional carece por completo de los mencionados elementos, siendo lo más aproximado a los asuntos pensionales aquí discutidos la resolución 1055 de 18 de agosto de 2010[120], por medio de la cual el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, en acatamiento de la orden impartida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de FONCOLPUERTOS fechada el 28 de noviembre de 2008, en proceso adelantado en contra del otrora director del Fondo liquidador de la empresa portuaria, señor SALVADOR ATUESTA BLANCO, ordena la revocatoria de, entre otros actos administrativos, la resolución 0520 de 17 de abril de 1998, con la que se dispuso el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor GÓMEZ MONROY, estableciéndose que la suma dineraria a reintegrar ascendía a $248´968.911,00.

Dicho decreto se acogió al haberse advertido la indebida aplicación del precepto 113 de la CCT regente en el terminal marítimo y fluvial de Barranquilla para los años 1991 a 1993, en consideración a que la normativa a valorar respecto de la expectativa pensional del extrabajador era la vigente para los años 1989 y 1990, en vista de que su retiro de la empresa, acorde al contenido de la resolución 42799 de 09 de septiembre de 1990[121], con la que le fueron reconocidas prestaciones sociales, se dio el 01 de

[120] Documento 2 de la hoja de vida pensional del señor JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY.
[121] Folios 132 y 133 del c. o. 7 de instrucción.

septiembre de esa anualidad. Luego, era el pacto colectivo regente para ese momento el que gobernaría el reconocimiento pensional.

El anunciado ordenamiento imponía en su canon 107 como requisito para acceder a la pensión, haber laborado a órdenes de la empresa por el espacio de 20 años y tener 50 años de edad, condición que según el parágrafo del mismo artículo variaba en el caso de aquellos operarios que hubieren ingresado con posterioridad al 31 de diciembre de 1985, quienes para tales efectos debían acreditar los mismos 20 años de servicios en la empresa y 55 años de edad; contemplándose otra vertiente de la prerrogativa en el precepto 108, que hacía referencia a aquellos casos en los que el aspirante, teniendo 20 años laborados con la entidad portuaria, sin importar la edad, podría acceder a la pensión si se hubiere desempeñado por el interregno de por lo menos 12 años en determinadas designaciones, dentro de las que no se encontraba relacionada la de "ayudante de albañilería" en la que laboró el procesado a lo largo de su paso por el puerto; precisiones de las que se concluye que en efecto el señor GÓMEZ MONROY no contaba con los requisitos para acceder a la pensión, al no reunir los requerimientos de la norma.

Sin embargo, como se dijo en precedencia con apoyo en los lineamientos esbozados en la resolución 1055 de 18 de agosto de 2010, la justeza del otorgamiento del beneficio pensional avalado por el señor SALVADOR ATUESTA BLANCO en la resolución 0520 de 17 de abril de 1998, pasados 7 años, 7 meses y 16 días después de darse el retiro de la empresa del reclamante, se hallaba envilecido no sólo por otorgarse sin el cumplimiento de estos derroteros, sino porque también se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la gracia una norma que no era aplicable al caso, aspecto que fue examinado en cuanto a la entidad típica que el hecho envolvía por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de FONCOLPUERTOS, encontrándose que se apartaba de las debidas formas y constituía transgresión al reato de peculado por apropiación, de donde se desprende que se trata de conducta que actualmente es objeto de cosa juzgada demostrada de forma incuestionable en curso de aquella causa penal, por lo que no se hará apreciación distinta en torno a su comprobada tipicidad en este aparte.

De otro lado, en lo que se refiere a la conducta enrostrada al señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, en la que se atiende, en virtud de providencia judicial de la que no se tiene información, la pretensión de reconocimiento pensional mediante resolución 255 de 1996, y el pago de mesadas atrasadas según resolución 1990 de 30 de septiembre de la misma anualidad, el Despacho advierte que al igual que en la circunstancia evaluada en precedencia, no es posible arribar a un análisis justo a partir de los documentos obrantes en la hoja de vida pensional, comoquiera que en esta carpeta no reposan elementos que revelen los pormenores de la relación laboral del procesado.

Por lo anterior, huelga hacer remisión al estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, presentado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el que se tuvo a la mano las planillas de nómina de último año laborado por el señor SOLANO CASTRO, así como las apreciaciones efectuadas por la empresa a estos renglones para efectos de establecer el monto a pagar por prestaciones sociales. De estos elementos demostrativos

se extrae que el exportuario estuvo vinculado a la empresa hasta el 01 de junio de 1993, por el lapso de 11 años, 8 meses y 25 días; de la que se retiró cuando ostentaba 54 años de edad.

En esta medida, se hace necesario observar los preceptos que convencionalmente orientaban la relación laboral de este ciudadano con Puertos de Colombia para cuando se produjo su retiro, los cuales se encuentran compendiados en la CCT vigente para el terminal marítimo de Barranquilla en el período de 1991 a 1993, que establece los lineamientos a seguir en el proceso liquidatorio de la entidad portuaria y, expresamente en torno de las pensiones contemplaba, además de las modalidades que se identificaron en párrafos previos como los conductos básicos para acceder al derecho en los cánones 107 a 109, por ejemplo, variaciones de cara a la exigencia de mínimo de tiempo laborado al servicio de la empresa en el artículo 110, que disminuyó ese lapso a 5 años, entre otras disposiciones dirigidas a dar curso al proceso de liquidación y empalme a los privados que desde el 01 de enero de 1994, asumirían la administración de los puertos.

Dentro de este catálogo de nacientes normas, se destacó la contenida en el numeral 3º, del parágrafo quinto del canon 113 convencional, que estableció la concesión de "*pensiones con factor cincuenta y tres (53)*", regla que introdujo la posibilidad de que:

> "*La empresa reconocerá pensiones proporcionales a los trabajadores que, teniendo trece (13) o más años de servicio con el Estado y menos de quince (15) años, cuando sumando su tiempo de servicio y su edad alcancen o superen el tope del factor cincuenta y tres (53). Para tener derecho a esta pensión, el trabajador debe haber laborado un mínimo de diez (10) años para Colpuertos.*
>
> *Los trabajadores que alcancen o superen el tope del factor 53, tendrán una pensión proporcional calculada así: el treinta (30%) por ciento del salario promedio mensual como base y el dos y medio (2.5%) por ciento, por cada año de servicio a la empresa Puertos de Colombia, sin superar el tope de sesenta y cuatro (64%) por ciento en ningún caso.*
>
> *A los trabajadores que tengan trece (13) o más años de servicio a Colpuertos y menos de quince (15) años, sin alcanzar el referido tope de cincuenta y tres (53), la empresa y los sindicatos le resolverán sus derechos laborales generales en el primer semestre del año 1993.*
>
> *Si las circunstancias lo permiten, estos trabajadores laborarán hasta alcanzar el tope necesario, sin superar el último trimestre de 1993, para tener derecho a la pensión de que trata este parágrafo. Entendiéndose que si durante este lapso alcanzan o superan los quince (15) años de servicio, se les aplicará la pensión correspondiente a dicho tiempo de servicio.*
>
> *Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Régimen Disciplinario pactado en la presente convención*".

En esta medida, se recuerda que el señor SOLANO CASTRO, laboró en la empresa portuaria por el interregno de 11 años, 8 meses y 25 días, con lo que si bien se encuentra superada la exigencia del inciso primero del aparte normativo acabado de citar, de haber laborado para la entidad portuaria por el lapso de mínimo diez (10) años, generándose con ello la expectativa de acceder a la pensión por el comentado factor 53, no menos cierto resulta

que no se halla prueba dentro del infoliado de que la segunda de las condiciones contempladas en ese precepto se hubiere concretado, esto es, haber trabajado para el Estado por el interregno de 13 o más años, ante lo que se dejaría de considerar una perspectiva para ascender a categoría de derecho reclamable.

En efecto, el texto del artículo es claro en cuanto al lapso mínimo de trabajo requerido a órdenes de Colpuertos para acceder al beneficio pensional, pues en el primer aparte reza "*La empresa reconocerá pensiones proporcionales a los trabajadores que, teniendo* ***trece (13) o más años de servicio con el Estado y menos de quince (15) años****, cuando sumando su tiempo de servicio y su edad alcancen o superen el tope del factor cincuenta y tres (53).* ***Para tener derecho a esta pensión, el trabajador debe haber laborado un mínimo de diez (10) años para Colpuertos***" (Negrilla del Juzgado), de donde se desprende que para el momento en que se dio el retiro del señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, aunque contaba con más de 11 años trabajando en la empresa, no satisfacía el segundo ítem, atinente a acreditar al menos 13 años o más al servicio del Estado, con lo que se advierten insolutas las exigencias del precepto.

De hecho, la inexistencia de actos tanto de parte del extrabajador, por ejemplo, formulando solicitud sobre el particular, como de la empresa atendiendo negativamente la probable pretensión pensional, denotan que para cuando se dio el retiro de la empresa no se tranzó discusión sobre el particular, por las razones ya expuestas, y fue sólo hasta el año 1996 ante el adelantamiento de demanda para su reconocimiento, que el señor SOLANO CASTRO accedió al beneficio, desconociéndose los exámenes que en esa causa laboral se abordaron de cara a la procedencia de la pretensión del ciudadano o del texto de la decisión administrativa que ordenó dar cumplimiento a la primera, por lo que ante lo probado en este expediente, se tiene acreditado que el procesado carecía del cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión y en ese sentido se encuentra materializada la tipicidad de aquel acto por medio del cual obtuvo la prerrogativa.

El hecho de haberse reconocido el derecho a la jubilación sin que se encontraran satisfechos los requisitos normativos para ello, ubican los actos acometidos por el señor LUIS VALERIO SOLANO CASTRO, así como aquellos mediante los cuales la empresa acogió sus ruegos en virtud de providencia judicial en la ilicitud, al contrariar los mandatos convencionales que regían la aprobación de este beneficio; pretensiones que además de ventilarse respecto de la acotada prerrogativa, acompasó el pago de mesadas atrasadas en favor del extrabajador, generando una evidente apropiación de recursos públicos sin que mediara causa justa en ello.

**Comportamiento que carece de sustento probatorio suficiente.**

Sobre este punto, en primera medida, el Juzgado identifica dentro de los eventos materia de acusación aquel señalado contra el señor ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, por haber alcanzado la firma del acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, que posteriormente fue objeto del mandamiento de pago del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito adiado el

16 de marzo de 1998, ante la representación del abogado JORGE SAID NARVÁEZ, señalamiento que efectúa la Fiscalía en el pliego de cargos a partir del reporte de pagos que militaba en el expediente y que le fue puesto de presente al procesado en la diligencia de indagatoria; condena que fue solventada por la entidad estatal con la resolución 2070 de 20 de mayo siguiente, cuyos efectos jurídicos fueron revocados con acto administrativo RDP 00481 de 11 de enero de 2017.

No obstante haberse enlistado este evento dentro de los hechos que en criterio de la agencia Fiscal merecían reproche criminal, llama la atención del Despacho la total ausencia de discriminación específica del elemento generador de ilicitud, derivado del mismo desconocimiento del texto del referido acuerdo conciliatorio, del que no se cuenta con reproducción física o digitalizada en el infoliado y sólo obra como evidencia de su existencia y presunto desembolso el comentado reporte de pagos examinado por la Fiscalía y presentado en curso de la diligencia de indagatoria al procesado, del que no se desprende especificidad alguna.

En la anunciada salida defensiva el procesado desconoció haber entregado mandato al doctor JORGE SAID NARVÁEZ para que acometiera petición en su representación, ya que el único poder que recordó entregar fue aquel ejercido por el doctor COLLANTE PACHECO, mostrándose igualmente ajeno a aquellos eventos relacionados con actas de conciliación falsas de finales de 1993, oportunidad en la que la Fiscalía tampoco formuló cuestionamiento directo atinente al acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, y el consecuente mandamiento de pago de 16 de marzo de 1998, emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla que se liga de forma directa con las gestiones del abogado NARVÁEZ.

En este mismo sentido, en cuanto a la forma en que aduce la Fiscalía se solventó la suma declarada en la citada acta de conciliación, al parecer mediante resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, ha de precisarse que a folio 14 de la anotada decisión administrativa se encuentra relacionado el pago efectuado en favor del referido doctor NARVÁEZ, que se asocia con providencia judicial emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla fechada el 29 de enero de 1997, por el importe de $1.551´600.000,00, situación de la que se concluye que el pago allí ordenado no se suscribe al evento analizado, teniendo en cuenta la fecha de la providencia, la autoridad judicial que la emite y la cuantía de la condena, ratificándose así que el señalamiento de la instructora no cuenta con apoyo probatorio del que se derive indefectiblemente que el procesado SANTIAGO ARAUJO promovió el proceso ejecutivo laboral a que hace referencia este hecho y que dicho trámite contraríe la normativa convencional de forma que consolide la conducta típica enrostrada por la Fiscalía.

Si bien dentro del examen que se ha realizado a las reclamaciones promovidas por este ciudadano se identificó la elevada por reliquidación de prima de servicios o "prima sobre prima", reprochable al haberse hallado en la liquidación de prestaciones sociales la correcta valoración de este renglón por el interregno semestral generado y por la fracción a pagar de forma proporcional al retiro, el fundamento del evento analizado carece de la ineludible filiación del proceder del enjuiciado acabado de enunciar,

consolidado en el reclamo injusto, con la materialización de las consecuencias irregulares lesivas a los recursos públicos, pues no basta la mención del hecho ciertamente acaecido, sino que también el señalamiento criminal demanda al ente persecutor rotular junto a las demás pruebas los indicios fundados que sustentan el reproche; elementos que en el presente acontecimiento no vislumbra el Despacho.

Al omitirse por la Delegada el examen pertinente al reconocimiento que fundó la celebración del pacto conciliatorio, que acompasó el reajuste pensional, así como el correspondiente análisis de los pormenores de la relación laboral del extrabajador, importantes para establecer la improcedencia de sus ruegos, se obviaron detalles relevantes de cara a los conceptos tenidos en cuenta para efectos de pagar prestaciones sociales, montos de éstas, tiempo de servicios prestado a la empresa portuaria, edad de retiro, fecha de retiro que la empresa portuaria tuvo en cuenta para establecer los pagos a que tenía derecho el beneficiario del acuerdo, así como la observación del texto del pacto conciliatorio que señala como irregular, necesario en el ejercicio que el órgano acusador debe acometer mediante la confrontación demostrativa que lo lleve a identificar en qué consistía la ilegalidad que amerita el llamamiento a juicio, se dejaron al garete aspectos que penalmente resultaban relevantes en lo que a este proceder se refiere y, de paso, desprovista la tesis acusatoria que denota la ilicitud en el acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997.

En esta medida, aprecia el Juzgado que la Fiscalía no ofrece las razones de hecho ni tampoco de derecho que supuestamente sustentan la ilicitud del comportamiento, más allá de incluirlas dentro del grupo de reconocimientos atendidos en favor del señor ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO; máxime cuando algunos de los hechos escrutados no encuentran apoyo con la documental agrupada en la hoja de vida pensional y/o laboral del procesado.

A lo anterior se agrega que en manera alguna la Fiscalía se ocupó de aportar estudio contable sobre la justeza de la liquidación final de prestaciones sociales y del cálculo de la mesada pensional del extrabajador ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, lo cual impide sostener que no tuviera derecho a efectuar lícitamente alguna reclamación posterior a la terminación de su vínculo laboral, salvo la ya analizada en lo que concierne a un concepto ilegal.

De este modo, es claro que el supuesto sobre el cual el órgano persecutor sustentó en primer momento el llamamiento a juicio por este evento sindicado al señor SANTIAGO ARAUJO, resulta endeble al haberse desconocido la obligación de argumentar meridianamente la existencia de conducta punible, acorde a lo advertido en precedencia, razones que al demostrar las serias falencias en que incurrió la entidad acusadora, impiden predicar jurídicamente que la apropiación de dineros provenientes del erario materia de examen tiene el carácter ilícito y los alcances que comporta el tipo delictivo de peculado por apropiación, ya que los motivos del reproche por parte de la misma además de mostrarse insuperablemente deficientes, carecen de fundamento en el ordenamiento jurídico en los términos de la acusación pábulo de este juicio, y resultan objetivamente atípicos, por lo que se impartirá decisión absolutoria en favor del señor ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO por este hecho.

**Responsabilidad penal a partir del cobro de sentencias sin surtir el grado jurisdiccional de consulta.**

En lo relativo a la obligatoriedad que acompasaba los fallos emitidos contra FONCOLPUERTOS respecto del grado jurisdiccional de consulta, que fue expuesto por el delegado Fiscal como evento generador de reproche penal, al ser presentadas para su cobro sin que contaran con el estatus de exigibles, resulta imperioso aquilatar que la falta de unidad de criterio jurisprudencial frente a la imposición legal de esa exigencia procesal, se constituyó en elemento facilitador de la expedición de las decisiones administrativas que ordenaban el pago de las sumas ordenas en las sentencias, de suerte que si bien es cierto en algunos casos se surtió dicho grado jurisdiccional, no lo es menos que tal revisión oficiosa de la judicatura se llevó a cabo con posterioridad a que se emitieran los actos dispositivos por parte de los funcionarios de la entidad portuaria en liquidación, como lo aludieron algunos miembros de las bancadas defensivas.

De hecho, respecto del planteamiento de la agencia persecutora en torno a esta circunstancias, el procesado COLLANTE PACHECO refiere que para la época en que se dictaron las sentencias materia de esta causa no se encontraba establecido como obligatorio dicho trámite, en consideración a que la entidad portuaria se catalogaba como de economía mixta y, por ello no se imponía la obligación de someter las decisiones contrarias a sus intereses al anunciado grado jurisdiccional, imposición que se dio sólo hasta 1999 cuando en sentencia de unificación se instituyó ese deber cuando la decisión no fuera recurrida; tesis que fue secundada por los profesionales del derecho LUIS RAFAEL DELUQUEZ FRAGOZO, quien recordó que previamente se habían emitido algunos conceptos del Tribunal Superior de Barranquilla en los que se adoptaba la posición de que las sentencias emitidas en contra de la empresa portuaria no eran susceptibles de consulta; así como por los togados NATIVIDAD PÉREZ COELLO, JHONNY RAFAEL BARRIOS BARRIOS, ÓSCAR ABEL JURADO JURADO y WILLINTON JOSÉ GOENAGA GRANDET, quienes en cuanto a este señalamiento agregan que esta presunta omisión no acompasa compromiso de orden penal atribuible a los Jueces de la República ni a quienes acudieron a la jurisdicción Laboral para el amparo de sus derechos presuntamente conculcados, aspecto que lleva a predicar que el señalamiento que pretende hacer valer la Fiscalía en este sentido como generador de ilicitud carece de cualquier elemento valedero que le asigne respaldo.

En efecto, sobre el particular cabe memorar que la Ley y la jurisprudencia señalan que en materia laboral tal escrutinio oficioso es de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 69 del CPT, el cual dispone: "*serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio*".

La incidencia de este lineamiento jurídico debe guardar congruencia con la doctrina emanada del máximo órgano penal colombiano en lo tocante a FONCOLPUERTOS y la situación histórica de la comisión de los hechos que se analizan, atendiendo que otrora no había solidez conceptual acerca de la institución que llamaba a someter las sentencias laborales contrarias a FONCOLPUERTOS al mencionado grado, tema que fue dilucidado por la

Sala de Casación Laboral y la H. Corte Constitucional a finales del año 1999, de donde emerge que ocupándose de fallos de condena contra esa entidad estatal, tal precisión sobre la revisión oficiosa no se hallaba libre de dudas antes de las postrimerías del año 1999, como se expondrá.

Pese a que para ese período regía la disposición 69 del CPT, los precedentes jurisprudenciales estructuradores y pertinentes corresponden al fallo adoptado por la Sala de Casación Laboral el 19 de octubre de 1999, en el caso 12158, con ponencia del H. M. Dr. Rafael Méndez Arango; y a la sentencia SU-962 expedida por la Corte Constitucional el 01 de diciembre de 1999, siendo ponente el H. M. Dr. Fabio Morón Díaz, última providencia que unificó en sede de tutela la doctrina de la guardiana de la Carta sobre el particular, de la cual se estima oportuno citar el siguiente aparte:

> "(…) *Ante tan claras disposiciones, a juicio de la Corte no hay ninguna duda acerca de la obligatoria aplicación del artículo 69 del C.P.L. y, por ende, de la forzosa tramitación de la consulta de las sentencias de primera instancia que sean total o parcialmente adversas a* ***FONCOLPUERTOS****, toda vez que el pago de las acreencias reconocidas estaría a cargo de la Nación, responsable directa de las obligaciones laborales y del pasivo laboral de* ***COLPUERTOS*** *y de* ***FONCOLPUERTOS,*** *según lo dispusieron, en particular, la Ley 1ª de 1991, el Decreto-Ley 036 de 1992 y el decreto-Ley 1689 de 1997.*
> (..)".

La Sala de Casación Penal hizo pronunciamiento de manera pacífica y consecuente respecto del entendimiento que se ha materializado sobre este tema, como se observa en la decisión emitida el 22 de febrero de 2012, dentro del asunto 35606, con ponencia del H. M. Doctor Fernando Alberto Castro Caballero, donde se sostuvo:

> *"... En punto del delito de peculado, no resulta imperioso establecer que la orden de pago emitida a través de una sentencia y de unos mandamientos ejecutivos, configuran prevaricación judicial, baste con establecer que el superior jerárquico revocó tales decisiones al encontrarlas contrarias al orden jurídico, más allá de que esa contrariedad con el ordenamiento legal, no haya sido objeto de condena penal por el transcurso del tiempo.*
>
> *Así las cosas, por una parte el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, decidió en providencias del 22 de agosto y 28 de noviembre de 2001 que era imperioso que se surtiese el grado jurisdiccional de consulta, y aunque la omisión en la tramitación del mismo, no pueda considerarse como manifiestamente ilegal, ni mucho menos configurativa del delito de prevaricato, dado que no era claro el asunto desde el punto de vista jurisprudencial, ello no es obstáculo para que la omisión sea analizada y valorada en el contexto de los hechos y aún más de otros delitos.*
>
> *Como certeramente lo advierte el defensor, mediante sentencia del 10 de agosto de 2010, dentro del radicado 34175 expuso la Corte:*
>
> *Sobre este tópico, la Corporación encuentra que para los años 1997 y 1998 no era unánime la posición doctrinal y jurisprudencial sobre tales aspectos, por cuanto la naturaleza jurídica de establecimiento público otorgada por el Decreto Ley 36 de 1992 al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, no encajaba en el tenor literal del artículo 69 del Código Procesal Laboral, situación que generó variadas interpretaciones. En efecto, el canon legal preveía: 'Además de estos recursos existirá un grado jurisdiccional denominado de consulta. También serán consultadas las sentencias de*

*primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio.'*

*Sólo con la emisión de la sentencia No. 12158 de octubre 19 de 1999 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se unificaron criterios en el sentido de que el grado jurisdiccional de consulta, no obstante su carácter de establecimiento público, debía ser concedido a favor de FONCOLPUERTOS[122], para lo cual la Corte expuso los siguientes argumentos:*

*'Por sus funciones y el origen de sus recursos, y dado que la directamente obligada es la Nación, resulta imperativo entender que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, si bien es un establecimiento público, su naturaleza jurídica es de carácter especial, por lo que se justifica que las prerrogativas establecidas directamente en el decreto de creación se extiendan aun al grado jurisdiccional de consulta, cuando la providencia le fuere total o parcialmente adversa, porque en este caso se está hablando de obligaciones contraídas por la Nación. Máxime que dentro de sus funciones se le ordena "ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la Nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación y del Fondo'.*

*Como quiera que para la época en que el doctor MANUEL EDUARDO HERNÁNDEZ BALLESTEROS profirió las sentencias cuestionadas no había unidad de criterio entre los diferentes operadores judiciales sobre la procedencia o no del grado jurisdiccional de consulta, no puede calificarse por este aspecto la decisión de manifiestamente contraria a la ley. Si bien la postura jurídica que pregonaba la improcedencia de la consulta para FONCOLPUERTOS a la postre resultó contraria a los parámetros que vía jurisprudencial fijó la Sala Laboral de la Corte, tal claridad surgió con posterioridad a la emisión de las providencias censuradas. En el mismo sentido, sólo hasta el 1 de diciembre de 1999 la Corte Constitucional en sentencia de tutela SU 962, sentó postura, reafirmando la procedencia de la consulta para FONCOLPUERTOS.*

*Por manera que, si bien la omisión de consultar la sentencia condenatoria no puede resultar manifiestamente contraria a la ley, ello no obsta para que se le considere como parte de un despliegue total de maniobras que se encausaban a defraudar el patrimonio estatal, aprovechando la confusión que sobre el particular se generaba, omitiendo el grado de consulta y con ello eliminando lo que podría constituir un obstáculo en el logro de los objetivos defraudatorios..."*

Acompasando estos lineamientos con los eventos materia de estudio, no ofrece duda que las sentencias emitidas por los referidos Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla, surgieron mucho antes del 19 de octubre y 1 de diciembre de 1999, para cuando se esclareció el tema relativo a la obligatoriedad de ejercer el grado jurisdiccional de la consulta respecto de los fallos adversos a COLPUERTOS o FONCOLPUERTOS, de forma que no es viable derivar ilicitud alguna contra los acusados por el hecho de que para la época de emisión de las sentencias no se tuviera la definición en la jurisprudencia nacional sobre la perentoriedad del ejercicio del grado oficioso de revisión comentado, sumado a que el sometimiento de la actuación al mismo no corresponde a un deber atribuido por Ley a la parte actora ni tampoco a la parte accionada, para el caso y por vía de sucesión

[122] En el mismo sentido, las sentencias de la Sala Laboral de la Corte del 5 de diciembre de 2001, Rad. 17222, del 25 de enero de 2002, Rad. 17216, del 13 de abril de 2011 radicado 35854, del 16 de marzo de 2011 radicado 35839, crean así la certeza de la existencia de una línea jurisprudencial por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

la estatal en liquidación, sino en principio a la judicatura por tratarse de un trámite oficioso, que para ese momento, se recuerda, tenía en duda su obligatoriedad.

Ahora, ciertamente las sentencias fueron proferidas en primera instancia por los aludidos Juzgados Laborales, siendo contrarias a los intereses de Puertos de Colombia o FONCOLPUERTOS, cuando aún no era palmaria la perentoriedad de su sometimiento al grado jurisdiccional de consulta según las providencias de la Sala de Casación Laboral y de la H. Corte Constitucional arriba enunciadas, y, por ende, no resulta penalmente reprochable a los enjuiciados que se hubiere considerado, en gracia de discusión, que habían adquirido firmeza luego de no ser apeladas por la parte vencida, ni era imprescindible aplicarles dicho trámite oficioso por no reputarse necesario.

El hecho de que tales fallos no fueran impugnados en alzada, de que se hubiere desistido de la apelación, se declarase desierta la alzada, o ese grado de revisión oficiosa no se realiza en el tiempo oportuno sino mucho después, condujo a que la erogación dineraria a cargo del Estado en muchos de los eventos analizados se llevara a cabo sin que efectivamente la judicatura valorara mediante la actividad del Juzgador de segundo nivel la legalidad de las pretensiones y de los fallos, facilitando así el menoscabo del erario.

Acorde a los lineamientos trazados, resulta claro que para la fecha de proferimiento de las sentencias referidas en apartes preliminares y expresamente identificadas dentro del pliego acusatorio, contrario a lo que esgrime la Fiscalía en ese digesto, no se encontraba sentado el criterio unificado nacional respecto de la obligatoriedad de agotar el referido tramite jurisdiccional en casos como los analizados en el presente asunto, y, por tanto, no puede ser tenida en cuenta esta omisión como indicador de ilicitud en el actuar de los acriminados, tanto en el caso de los exportuarios como en el de su representante judicial, o de las autoridades judiciales que conocieron de los procesos.

También resulta cierto que, en torno de las reclamaciones adelantadas en los diferentes Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla que culminaron con las mentadas sentencias y los mandamientos de pago, como ya se analizó, aviene diáfano que los demandantes carecían del derecho material para recibir percepciones dinerarias por los conceptos reclamados y en las cantidades pretendidas, salvo aquellos casos analizados previamente donde no fue viable arribar a la conclusión de la tipicidad de la conducta, y que algunas revocatorias de las sentencias ponen de presente que las mismas son contrarias a derecho, aspecto del que surge la conclusión de que las acreencias que se ordenaron pagar y que se erogaron en su favor, no se ajustaban al ordenamiento normativo; hecho que, por contera, conduce indefectiblemente a pregonar que la obtención de tales resultados jurídicos y económicos avienen abiertamente constitutivos por vía objetiva de comportamientos típicos y antijurídicos de peculado por apropiación.

De la doctrina decantada por el máximo órgano definitorio en lo penal en asuntos relacionados con FONCOLPUERTOS, se desprende que las determinaciones judiciales que en materia laboral fueron afectadas por la

revocatoria decretada por el superior funcional competente en sede oficiosa de consulta, no estaban ajustadas al sistema jurídico, en palabras suyas como sigue, "*no estaban asistidas por el derecho*", y por tanto los pagos percibidos con base en ellas resultan defraudatorios de las arcas de la Nación. Así lo ha expresado esa Corporación:

> *"Con la revocatoria de las sentencias ordinarias laborales por parte de la Sala de Descongestión Laboral mediante el grado jurisdiccional de consulta queda en evidencia que no estaban asistidas por el derecho, y por tanto los pagos que generaron constituyeron una defraudación del erario público (sic); independientemente de que las decisiones sean calificadas de prevaricadoras o no*" [123].

De otro lado, aunque el órgano persecutor no realizó dentro del marco fáctico de la acusación por los hechos y circunstancias que rodean los injustos derivados de la promoción de la acción laboral ordinaria junto a la materialización y efectos de las citadas sentencias de primera instancia, el análisis pertinente en cuanto al claro desconocimiento de lo normado en el artículo 177 del CCA, seguidamente el Despacho expondrá lo propio sin que esto configure una adición a la imputación fáctica.

En este sentido, se detalla que la mayoría de estas providencias judiciales ordenaron pagos a favor de exportuarios con cargo al Tesoro Público antes de que feneciera el período de 18 meses posterior a la supuesta ejecutoria de la sentencia de primer grado, con desconocimiento de lo normado en la regla 177 del CCA, de conformidad con lo indicado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal.

Así lo ha dejado ver la citada Alta Colegiatura en providencia de 16 de marzo de 2011, adoptada en el caso No. 35839, con ponencia del H. M. Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ:

> *"En ese plexo indiciario que termina por comprometer al acusado, debe así mismo hacerse alusión a lo consignado por la primera instancia en lo concerniente al hecho, jamás controvertido por la defensa, que el procesado dejó pasar bastante tiempo, luego de que se unificaron las posiciones jurisprudenciales de la Corte Suprema y la Constitucional, para hacer llegar en consulta sus fallos, por lo demás, obligado después de que así lo demandó la representación de la Empresa Puertos de Colombia.*
>
> *Tampoco el defensor aludió a la manifiesta intención de favorecer a los demandantes, inserta en el comportamiento acucioso desplegado para librar el mandamiento de pago consecuencial a las sentencias que acogieron las pretensiones de los demandantes.*
>
> *Si, como lo establecía el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, las condenas contra la Nación o entidades territoriales sólo pueden ejecutarse después de 18 meses de la ejecutoria del fallo, no era posible que el procesado librase los correspondientes mandamientos de pago con antelación a ese perentorio plazo.*

[123] Cita parcial del texto consignado por la Sala de Casación Penal en la sentencia emitida el 13 de abril de 2011, dentro del caso 35854, con ponencia del H. M. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, cuando invoca el fallo del 14 de diciembre de 2010 y 16 de marzo de 2011, Radicados 35.025 y 35.839, respectivamente.

*En contra de lo que la ley contempla, el acusado, en los tres casos examinados, libró el mandamiento de pago 12 o 13 días después de dictadas las sentencias respectivas, como así se hizo constar por el A quo en la decisión que aquí se revisa.*

*Precisamente, tan ostensible yerro obligó que el procesado, conforme previamente lo solicitara el apoderado de FONCOLPUERTOS y admitiendo el alcance del artículo 177 del C.C.A., cabalmente desarrollado por la Corte Constitucional, anulara el trámite seguido al asunto, incluso desde que se libraron los mandamientos de pago en comento.*

*Como se aprecia, la definición de que el acusado tomó dolosamente decisiones manifiestamente contrarias a la ley y que así obtuvo el pago de dineros indebidos a terceros, no nace apenas de una u otra manifestación judicial controversial, o siquiera de que de buena fe errara al aplicar la ley, sino de una serie de actos inequívocamente dirigidos a tan protervo fin, materializados tanto en el contenido de las sentencias laborales, como en los mandamientos de pago, la celeridad, desde luego ilegal, en librar estos, y la completa desatención cuando supo o debió saber que existían decisiones definitivas en torno de la necesidad de consultar los fallos en mención*".

Este aserto, sin que, según lo dicho, configure una adenda a la imputación fáctica consignada en la acusación, ratifica la ilegalidad de lo actuado, toda vez que, además de lo expuesto, saca a la luz otra de las vías por las que se quebrantó el ordenamiento jurídico nacional.

El Despacho, luego de escrutar discriminadamente el señalamiento criminal propuesto por la Fiscalía y encontrar probadas las irregularidades referidas, salvo en el caso de la conducta analizada respecto del señor ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, estudiará si éstas, además de contrariar los parámetros convencionales transgreden la normativa penal por la cual se procede.

El delito de peculado por apropiación, como ya se estableció, se halla regulado en el artículo 397 original del CP aplicable a este caso. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, dicho tipo penal comporta las siguientes características.

Versa sobre un comportamiento punible de sujeto activo calificado, esto es, que la conducta material o ejecutiva, debe ser desplegada por un servidor público, quien según el artículo 20 del estatuto represor se entiende: "*Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. // Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo de la Constitución Política*".

La conducta descrita en el tipo consiste en que ese servidor público se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones donde éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes particulares. De donde surge que el objeto

material del peculado por apropiación se constituye por los bienes sobre los cuales recae la apropiación.

El verbo rector del tipo es "apropiar", por el cual "*(…) se entiende la ejecución o materialización de actos de disposición 'uti dominus', es decir, actos de señor y dueño, lo que comportaría, de un lado, el que bien entrase, por un instante siquiera, en la esfera de disponibilidad jurídica del agente delictual y, de otro, obviamente, la salida de ese bien de la esfera de disponibilidad jurídica del titular real y verdadero del mismo, que en este caso no es otro que la misma Administración*"[124].

De cara al elemento subjetivo del tipo, "*en provecho suyo o de un tercero*", *tenemos que el "provecho es cualquier utilidad, goce o ventaja, expresamente perseguidos o procurados por el infractor, sin que importen su naturaleza, oportunidad ni proporciones*"[125]. Beneficio que en el caso del peculado por apropiación debe ir encaminado a satisfacer intereses materiales, o cuando menos, el goce de un deseo[126]. En el mismo sentido, el tratadista ANTONIO JOSE CANCINO sostiene que dicho elemento subjetivo "*(…) indica que es requisito indispensable para el proceso de adecuación típica que el sujeto activo establezca que el bien objeto de la apropiación ha permitido la real disponibilidad de la misma, pero sin que sea preciso que la real apropiación se agote. Es decir que para que el resultado se produzca es imprescindible que se menoscabe, o se ponga en peligro, la recta funcionalidad de la administración pública, aun sin el enriquecimiento del delincuente (…)*"[127].

Por ello, el beneficiario del provecho no sólo puede ser el autor del delito, sino también un tercero, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en sentencia del 17 de agosto de 1989 M.P. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA: "*Tal comportamiento corresponde, entonces ampliamente, con aquel que describe el Código Penal en su artículo 133 bajo la denominación del peculado, sin que puedan acogerse los reparos de la defensa al objetar que en esa acción no consiguió la acusada beneficio alguno, cuando la norma prevee la alternativa aquí cumplida de que la apropiación ocurra no solo en beneficio del empleado desleal, sino también de "un tercero", siendo lo relevante el destacar que el acto de abuso no permite interpretación distinta a la voluntad de "Apropiación", cuando el manejo de los bienes administrados se cumple al margen de las formalidades legales, y procediendo con la misma amplitud y autonomía como ocurre en el manejo de los propios bienes*" (subrayado fuera del texto).

Es necesario que dichos bienes se hubieren confiado al servidor público para su administración, tenencia o custodia, por razón o con ocasión de sus funciones, es decir, que los bienes deben haberle sido entregados con una finalidad o intención específica, esto es, para su administración, tenencia, o custodia, y dicha potestad para administrar, custodiar o tener

---

[124] MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública. editorial Leyer, Bogotá, 4 edición, 2005 pág. 114.
[125] PEREZ, Luis Carlos. Derecho Penal: partes general y especial. Tomo III, editorial Temis, Bogotá, 1984, pág. 230.
[126] MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública. editorial Leyer, Bogotá, 4 edición, 2005 pág. 117.
[127] CANCINO, Antonio José. Lecciones de derecho penal parte especial. editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, págs. 95-96.

la debe fijar la norma jurídica que rige la respectiva función adscrita al servidor público, pudiendo asumir, en algunos casos, la forma de un acto administrativo.

Finalmente, frente a la expresión "por razón o con ocasión de sus funciones", es preciso manifestar que *"la entrega será por razón de las funciones, cuando es precisamente de resorte del funcionario encargarse de la administración, tenencia o custodia, física o jurídica de tales bienes; y será en razón de las funciones, cuando no siendo esa la función propia, esencial o fundamental del servidos, ella se desprende de lo que ordinariamente le compete hacer"*[128]. Por lo que *"no es necesario que los bienes que constituyen el objeto material de la infracción en comento sean detentados por el servidor público con una tenencia material o directa, como que puede existir en relación con tales bienes la llamada disponibilidad jurídica, es decir, (…) aquella posibilidad de libre disposición que por virtud de la ley tiene el servidor público"*[129].

Conforme a lo reseñado en el asunto bajo examen, el actuar de los extrabajadores procesados dirigido a los reconocimientos pecuniarios antedichos valiéndose de las reclamaciones administrativas y judiciales identificadas, algunas de ellas gestionadas por el doctor COLLANTE PACHECO consolidadas en el acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, así como las demás amparadas, representan cifras dinerarias que, en cuanto bien, se dieron con cargo al Tesoro Público y, por tanto, el comportamiento se ajusta materialmente al tipo penal establecido en el artículo 397 del CP, esto es, peculado por apropiación agravado, como con toda claridad emerge del pliego de cargos, con las aclaraciones que a lo largo de este proveído se han efectuado en cuanto a la diversidad de conductas, ora consumadas ora tentadas, y las cuantías apropiadas en cada evento individualizado, y de las pruebas obrantes en el plenario, lo cual ha sido refutado de forma inane por las defensas, pretendiendo restar entidad a los señalamientos de la persecutora y demeritar la responsabilidad de sus prohijados.

Los comportamientos identificados a lo largo de esta providencia son atentatorios contra la administración pública en lo que atañe a los rubros pecuniarios, y conculcatorios de la misma en lo relativo a la probidad debida de sus funcionarios, pues a partir de las deshonestas intenciones de los extrabajadores y abogados se concretó el proferimiento de decisiones que contrarían el correcto desenvolvimiento de la función pública, ya que como se ha detallado a lo largo de esta decisión, los rubros respecto de los que se alcanzó erogación con cargo a los recursos Estatales se cimentaron en irregulares interpretaciones de las normas convencionales y legales, de donde emerge su efectiva antijuridicidad, ya que además de contrariar efectivamente los parámetros normativos que gobernaban las relaciones laborales de la empresa portuaria con sus otrora operarios, impactó de forma negativa en los recursos de la Nación que para entonces administraba el fondo liquidador de Colpuertos.

De las precisiones efectuadas se ultima que las conductas reseñadas en la tabla 5, extrayendo de ese compendio aquella que no superó el examen

[128] MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública. editorial Leyer, Bogotá, 4 edición, 2005 pág. 93.
[129] Ibídem pág. 97

de tipicidad ante la palpada ausencia de afianzamiento demostrativo respecto del ciudadano ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, de conformidad con las valoraciones que en torno de los conceptos y cuantías se ha efectuado en esta providencia, encontrándose demostrada la existencia de eventos jurídicamente relevantes con entidad conculcatoria a la descripción típica contenida en los preceptos sustantivos que enuncian el reato de peculado por apropiación agravado consumado y tentado en cada una de las codificaciones identificadas y aplicables, y advertido el impacto que de estos eventos se derivó en menoscabo de las arcas públicas, se tiene establecido el conjunto de circunstancias que, detectados y decantados los elementos objetivos del reproche criminal, serán objeto de estudio de cara al componente volitivo endilgable a los procesados.

En esa medida, el Despacho abordará la exploración de la probable responsabilidad de los extrabajadores y el abogado COLLANTE PACHECO en la comisión de las conductas enlistadas, inspección que se enfilará a corroborar el posible conocimiento que respecto de la improcedencia de los ruegos ostentaban los llamados a juicio criminal, si este pudo haberse dado desde los albores de las reclamaciones o con posterioridad cuando se puso en marcha el aparato judicial para acceder a sus aspiraciones; y si estuvieron en posibilidad y oportunidad de declinarlas.

**ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO**.

Este ciudadano reporta dentro de los eventos irregulares tres conductas constitutivas del delito de peculado por apropiación, relacionadas con el reclamo de horas extras, subsidio de transporte y pago de retroactivo salarial así como de prima sobre prima que configuró la conducta de peculado por apropiación tentado, ante los que se memora que en su diligencia de indagatoria informó haber adelantado demanda conjuntamente con los supervisores de cuadrilla representados por el doctor RAFAEL PÉREZ, y promover otra ante el Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla por intermedio del doctor JAVIER BORNACELLY CAMBELL en la que se discutió el recargo nocturno del 35%; la adelantada por la doctora NIRA ESTHER FÁBREGAS para el reclamo de uniformes y calzado; la encomendada al profesional ALFONSO TAPIAS para reclamar transporte; y aquella impulsada por el doctor ALFONSO COLLANTE para el reclamo de prima sobre prima; entre otros asuntos de los que para ese momento no recordó la identificación de los abogados ni la cantidad de poderes que libró.

Al ponerle de presente los pagos relacionados con actas de conciliación de finales de 1993, y la identificación de las resoluciones que disponían pagos en su favor, adujo haber recibido parcialmente los montos mencionados de manos de algunos de los abogados; que no percibió incrementos en su mesada pensional y que si se dio alguna clase de defraudación a los recursos de la Nación fue directamente por las gestiones de los letrados.

Frente a la posición del procesado en torno de los pagos que se realizaron en su beneficio, se aprecia que en su totalidad las deprecaciones elevadas por éste carecen de fundamento jurídico y fáctico, teniendo en cuenta lo ya valorado respecto de la justeza de la liquidación de las prestaciones sociales realizada en el informe 446622 FGN-CTI-SI-GDAP-EF del 20 de febrero

de 2009, en el que se advirtió un moto de $22.689,56, pagado por encima de lo debido en su favor, de donde se desprende que ninguna procedencia acompañaba sus reiterados reclamos, los que además reflejan la clara intención de incrementar su patrimonio de forma irregular, ya que además de los eventos expresamente endilgados por la Fiscalía, se identificó dentro de la hoja de vida pensional la existencia de la resolución 1667 de 08 de mayo de 1998, que dio cumplimiento a la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla del 05 de junio de 1996, en la que se reconoció el pago de horas extras, reliquidación de primas de antigüedad, de servicios, de cesantías definitivas e imposición de salarios moratorios, que no hace parte de los eventos penalmente relevantes dentro de esta causa; así como copia de la sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla de 04 de marzo de 1998, que cobijó el reconocimiento de los días descontados por huelga; proceso que al igual que el anteriormente mencionado no hace parte de los hechos por los que se investiga al procesado RODADO CAICEDO.

Estos hallazgos reflejan que el enjuiciado desde el mismo retiro de la empresa era conocedor de las prerrogativas convencionales inherentes a este evento y al acceso al beneficio pensional, así como de que aquellas le fueron reconocidas de forma justa y oportuna, lo que hacía que cualquier pretensión adicional enfilada a acceder a los diversos pagos que, de hecho promovió de forma intencionada y decidida, se constituyeran en actos atentatorios contra la normativa colectiva; por lo que el Despacho encuentra probada la intención dolosa del señor RODADO CAICEDO en las resultas criminales enrostradas por la Fiscalía, demostrando su clara voluntad de menoscabar los dineros del tesoro y efectuando los actos inequívocamente dirigidos a concretar su trazado.

**FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**

Por su parte, acerca de este procesado, quien se desempeñó en el terminal marítimo de Barranquilla en la designación de inspector de obras, de donde también fue directivo del sindicato SINDEOTERMA entre 1985 y 1986, ocupándose como secretario de la junta directiva, ha de observarse que el hecho de haberse desempeñado en esa plaza dentro de la organización sindical le otorgaba un conocimiento detallado de las normas convencionales, a lo que se agrega que mediante informe definitivo 477066 FGN-CTI-SI-GDAP-EF de 31 de julio de 2009, el CTI de la Fiscalía General de la Nación en examen de las prestaciones sociales del acriminado, encuentra que percibió mayores valores tanto en las prestaciones sociales $657.920,97, como en la base de liquidación de la mesada pensional en importe de $29.329,25; no empece lo anotado, reclamó por intermedio del doctor RICARDO PRETELT ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla reliquidación pensional por diferencia salarial en el año 1995, percibiendo por ello $6´000.000,00; así como por mandato librado en favor del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO la diferencia de sueldo de 25% a partir de un reajuste salarial correspondiente a 1989, y diferencia de primas, ante el mismo Estrado Judicial sin que se alcanzara el pago de este último reclamo.

No obstante, anota que nunca se persiguió el pago de renglones que habían sido debidamente atendidos por la empresa, contrario a lo que

aduce la Fiscalía; y de cara a las reclamaciones presuntamente consolidadas en las actas de conciliación de finales de 1993, que no hacen parte de los eventos criminales que se le enrostran, asevera que desconoce a los abogados NICOLÁS SALINAS DE LA CRUZ y RICAURTE BARRIOS BARRIOS, a quienes nunca les extendió poder.

Pese a que respecto de este acriminado subsiste una sola conducta de las cuatro que inicialmente se le atribuyeran en la resolución de acusación, esta circunstancia en manera alguna le resta compromiso a su actuar, pues de éste se desprende el inequívoco arrojo de impulsar acciones judiciales en procura del cometido de acrecentar por cualquier medio su patrimonio, aun cuando su especial manejo de las prerrogativas convencionales le asignaban el conocimiento necesario para razonar acerca de la ilicitud de las pretensiones formuladas por intermedio de apoderado judicial; reflexiones que llevan a concluir que la intención del señor MANJARRÉS GRANADOS fue la de asirse de manera ilícita de los dineros administrados por el fondo liquidador de la empresa portuaria, a los cuales accedió mediando las reclamaciones judiciales identificadas en precedencia, que lo hace merecedor del reproche reclamado por la Agencia Fiscal y la Parte Civil.

**EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**.

Se sindica a este exoperario haber alcanzado cinco pagos a partir de igual número de reclamos judiciales, en los que se discutió el reconocimiento de 35% de recargo nocturno, reliquidación de primas de antigüedad y de servicios, uniformes y calzado, reajuste de mesada pensional y proceso ejecutivo en el que se aportó como título de recaudo el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993; reclamos que precisan hacer remisión al informe 459344 FGN-CTI-SI-GDAP-EF fechado el 30 de abril de 2009, del que se dedujo que el extrabajador recibió en su liquidación final monto de $50.029,08 por encima de lo debido, impactando en un incremento irregular en su mesada pensional; aspecto que conduce a predicar que ninguna procedencia tenían las reclamaciones judiciales efectuadas por el mencionado, quien además de haber sido debidamente liquidado, adelantó estos reclamos judiciales por conceptos que fueron debidamente apreciados en vigencia de la relación laboral, como la estimación y pago de las primas de servicios y antigüedad o carecían de consagración normativa para los efectos perseguidos como el alegado 35% de recargo nocturno y el reconocimiento de uniformes y calzado.

En la salida defensiva este procesado se mostró enterado de la acción judicial promovida por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, sin recordar cuál fue el concepto que la motivó, así como de las reclamaciones efectuadas por los togados MANUEL DE JESÚS MANJARREZ TORO, JORGE

TOVAR GUERRA, JHONNY BARRIOS BARRIOS, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, DONALDO ENRIQUE FERNÁNDEZ, RAFAEL VILLALBA HODWALKER y ROBERTO ROMERO TURIZO, respecto de las que mencionó que fueron objeto de otra investigación donde ya lo habían indagado sobre el particular, sin que aportara la identificación de aquel sumario, la información de la autoridad judicial que la adelantó o el estadio procesal en el que se encontraba para ese momento. Respecto de las reclamaciones consolidadas en las actas de conciliación de finales de 1993, donde estuvo representado por los abogados ADALBERTO DE LA HOZ MILLAN, HENRY ADOLFO DIAZ AMARIS, JOSÉ VIRGILIO MENDOZA MELENDEZ y ALBERTO JOSÉ PEÑA HERNÁNDEZ dijo no conocer a ninguno de los mencionados, no haberles entregado poder o haber recibido dinero de manos de ellos por ningún concepto.

Frente al compromiso personal del procesado se tiene que encontrándose demostrada la justeza de su liquidación de prestaciones sociales, lo que lo apartaba del derecho de ejercer cualquier aspiración de orden resarcitorio a cargo de su otrora empleadora; y el hecho de que una vez se desvinculó de la empresa su proceder estuvo dirigido a acceder a numerosos pagos e incrementos en su mesada pensional a partir de los también variados conceptos y reclamos judiciales, consolida la proterva volición de su actuar, que siempre estuvo dirigido a acceder a beneficios pecuniarios que, como se ha identificado en este pronunciamiento, contrarían las normas convencionales pertinentes, revelándose potencial defraudatorio en los procesos ordinarios laborales tramitados ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla decidido con providencia de 22 de noviembre de 1995, y pagado con resolución 413 de 06 de abril de 1998; aquel fallado por el Juzgado Primero Laboral de la misma urbe el 27 de febrero de 1996, pagado con resolución 1405 de 1996; el adelantado ante la misma autoridad judicial fallado el 13 de febrero de 1996, y pagado con resolución 1194 de 29 de junio de 1997; y aquel promovido ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla dentro del que se emitió providencia el 25 de junio de 1996, atendido por la empresa con resoluciones 1024 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998, por los que será impuesta la correspondiente sanción penal.

Respecto del proceso ejecutivo laboral, sin especificar en qué Estrado Judicial fue tramitado, en el que sirvió como título ejecutivo el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, ha de precisarse que este pacto espurio, del que se no se tiene conocimiento de su contenido más allá de la referencia realizada en cuanto a que se pactó nivelación salarial sin especificar a partir de qué renglón, también carece dentro del expediente de referencia en torno de los soportes, tanto del asunto judicial como de la reclamación administrativa que pudo haber antecedido la firma del pacto, de los que se desprenda de forma indefectible que el procesado extendió mandato al doctor MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO para que lo representara y que se tuviera certeza del concepto sobre el cual se acordó, máxime cuando se tiene probada la falsedad de esos convenios, situación de la que se puede explicar la ausencia de soportes que dan

cuenta de la expresión de voluntad de quienes presuntamente se beneficiaron con su suscripción.

De lo analizado se concluye que respecto de este evento, señalado por la Fiscalía como transgresor de la normativa punitiva, que a pesar de relacionarse con concepto que no fue desconocido a quienes al parecer lo suscribieron por intermedio de apoderado judicial, lo que se constituiría en el pago de lo no debido, no cuenta con afianzamiento demostrativo del que se avizore la concurrencia personal y la aquiescencia subjetiva del extrabajador RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y, en consecuencia, se impartirá absolución por este evento.

**ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**.

El compromiso de este procesado remite al proferimiento de la sentencia de 26 de septiembre de 1996, con la que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla acogió las pretensiones formuladas por el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en la demanda, relacionadas con reliquidación de las percepciones dinerarias del extrabajador a partir de valorar la prima sobre prima, concepto del que se ha realizado un amplio examen en apartes precedentes, y que se erige como atentatorio a las prerrogativas convencionales y legales; que si bien subsiste como el único evento reprochable al procesado, es importante recalcar que de los documentos que componen la hoja de vida pensional de señor HERNÁNDEZ PÉREZ, se desprende que no fue ésta la única reclamación acometida por vía judicial, ya que ante el mismo Estrado Judicial promovió demanda por intermedio del letrado LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ ALFARO, en la que se discutió la inclusión de la totalidad del tiempo de servicio o inserción de los días descontados por huelga, reliquidación de prima de servicios del segundo semestre de 1991, reliquidación de la prima proporcional de antigüedad y la reamortización de los demás rubros a los que hubiere lugar a partir de los reconocimientos principales.

Igualmente, por vía administrativa solicitó el pago de corrosivos y la reliquidación de prima de servicios del segundo semestre de 1989, aduciendo que no se había tenido en cuenta la totalidad de lo devengado en el correspondiente período para efectos de establecer el monto de ésta, mismo argumento que regularmente se presentaba para efectos de acceder a la liquidación de prima sobre prima; proceder del que yace que el exoperario procuró por diferentes vías alcanzar el incremento de su patrimonio, valiéndose de las desatinadas e infundadas pretensiones aquí identificadas, con lo que se demuestra que aunque el reproche criminal se concreta en un solo asunto, además de ser abiertamente ilícito, es apenas el que llegó a concreción de los tantos que presentó ante su empleadora por vía administrativa y ante la autoridad judicial competente con las resultas conocidas, por lo que lejos de tratarse de la formulación de una legal expectativa, la reclamación judicial que se estudia es un claro

proceder doloso dirigido a alcanzar el provecho económico a que se ha hecho referencia a lo largo de esta decisión a la que se le asignará el consecuente reproche punitivo.

**ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**.

La arista subjetiva que compromete a este ciudadano, a quien en la resolución de acusación le fueron señalados dos eventos probablemente delictivos, uno de los cuales, previo a realizarse la minuciosa valoración fáctica que lo cimentaba, no superó el requisito de tipicidad, como quedó decantado en precedencia, emerge de la plurimentada reliquidación de la prima de servicios o "prima sobre prima" a la que arribó mediante demanda judicial atendida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, siendo representado por el doctor COLLANTE PACHECO; evento del que se otea que el procesado acometió el reclamo de concepto abiertamente ilícito, sin contar con fundamentos reales para ello y con una clara voluntad de acrecentar su patrimonio y percepción pensional que, aunque dentro del señalamiento criminal fue advertido por la persecutora en los dos hechos acabados de identificar, el material demostrativo aperado al infoliado revela que se trató de un actuar recurrente que se extendió a otros eventos que no hicieron parte de la sindicación en esta causa penal, de los que se hará referencia a modo de contexto de lo que fue el comportamiento del procesado una vez se dio su retiro de la empresa portuaria.

En este sentido se aprecia que en la hoja de vida pensional obra en el documento 10 reproducción de la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla del 27 de enero de 1998, en la que junto a otros exportuarios apoderados del abogado ROBERTO ROMERO TURIZO, deprecaron el reconocimiento de huelga y reliquidación de las prestaciones sociales por el ajuste que el amparo de este concepto acompasaba; obrando igualmente prueba de otro asunto promovido en el Juzgado Cuarto de la misma especialidad y urbe, en el que se debatió nuevamente la inclusión de la totalidad del tiempo laborado para la empresa portuaria, la reliquidación de prestaciones sociales e imposición de sanciones moratorias a que hubiere lugar, en donde estuvo representado por la doctora ENITH MARÍA ROMERO MELÉNDEZ y se resolvió de forma desfavorable a los intereses del demandante con sentencia de 09 de junio de 1999.

De lo anterior se advierte que el actuar del procesado de cara a la inequívoca decisión de obtener dineros en su favor con el correlativo detrimento de los recursos de la entidad portuaria, no puede calificarse como desprevenido o insular, pues a pesar de que en el asunto que se relacionó con el acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, no fue posible examinar los fundamentos de la solicitud que precedió la firma del

acuerdo ante la ausencia de material probatorio que diera cuenta de los pormenores de aquella solicitud, imponiéndose la absolución por emerger duda razonable en torno de la tipicidad de la conducta, para el Juzgado es claro que el señor SANTIAGO ARAUJO enfiló los actos que estaban a su alcance para obtener los recursos públicos arbitrariamente.

A partir de estas exploraciones se concluye que le es atribuible responsabilidad subjetiva al procesado a partir de la iniciación del trámite judicial que culminó con la emisión de la sentencia de 20 de agosto de 1996, amparando la reliquidación de prestaciones sociales por el concepto de reamortización de primas semestrales o "prima sobre prima", al encontrarse demostradas las insistentes diligencias acometidas por el procesado en procura del resultado conocido al que arribó con entero discernimiento de la improcedencia del reclamo, de lo que repercutirá la correspondiente consecuencia sancionatoria.

**ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**.

Refiere la Fiscalía que este ciudadano adelantó dos reclamos ante los Juzgados Segundo y Octavo Laborales de Barranquilla, en los que en su orden se pretendió la inclusión de días descontados por huelga y reliquidación de prima de servicios, siendo representado por los abogados ROBERTO ROMERO TURIZO y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, respectivamente; trámites que, se sabe, contrarían las normas convencionales regentes de la actividad laboral portuaria; en torno de estas deprecaciones y de algunos detalles de su paso por la empresa adujo el enjuiciado en su diligencia de indagatoria haber laborado como estibador por cerca de 12 años, cuando accedió a la pensión por el plan 53, así como haber demandado a su empleadora por intermedio de la doctora MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA, sin recordar el objeto de aquel encargo, al igual que al esposo de ésta, doctor HENRY OFERNES AMELL, de quienes memora haber recibido pagos; igualmente al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO para la reliquidación de prima de servicios, y al doctor ROBERTO ROMERO TURIZO para solicitar el reconocimiento y pago de prima sobre prima; pretensiones que en su dicho, se fundamentaron en la orientación que le dieron los profesionales del derecho.

En relación con la amortización de las prestaciones sociales del ciudadano, milita informe 433163-FGN-CTI-DI-GAP adiado el 26 de noviembre de 2008, donde se concluye que la empresa liquidó en su beneficio y por fuera de lo convencionalmente adeudado, la suma de $795.408,79, al haber sopesado indebidamente la prima proporcional de servicios, proporcional de antigüedad, de vacaciones y vacaciones a la fecha del retiro; hallazgo que acompasa la improcedencia de las pretensiones que por vía judicial promovió.

Aunque éste refiere haberlas adelantado acogiendo las indicaciones que sobre el particular le brindaron los abogados arriba mencionados, lo cual expone como aspecto indicador de su posible ausencia de compromiso delictivo, lo cierto es que para el Despacho resulta claro que le es atribuible responsabilidad en cuanto a las resultas endilgadas a título criminal, pues los rubros que fundaron estas reclamaciones, por un lado, habían sido debidamente solventados por la empresa portuaria al momento en que se dio su retiro, lo cual era de su dominio desde entonces, y, por otro, se trataba de percepciones abiertamente contrarias a la Ley y carentes de consagración convencional, ya que de una inspección desprevenida al texto del pacto plural se puede descartar la existencia de prerrogativa que se equipare a la liquidación de "prima sobre prima" o que contemple el pago de los días descontados por huelga, luego el desavenido entendimiento que pretendieron darle al claro contenido de esa norma amerita el respectivo compromiso penal que demanda la agencia Fiscal.

**MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**.

El señalamiento formulado contra este ciudadano hace referencia a los reclamos que por vía judicial promovió por los conceptos de reliquidación de vacaciones, así como de prima de vacaciones de 1980 a 1986, y reliquidación de prima de servicios de las anualidades 1990 y 1991, representado por los abogados ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA y ALFONSO COLLANTE PACHECO, conceptos que como en anteriores pasajes de esta providencia se identificó, transgreden los parámetros normativos convencionales, ora por haber sido debidamente pagados en vigencia de la relación laboral, ora por tratarse de percepción manifiestamente ilegal.

A manera de contexto, y sin que ello implique modificación de orden fáctico a la imputación efectuada por la Fiscalía, del material demostrativo aperado en la hoja de vida pensional del procesado se extracta que éste impulsó otros procesos judiciales, que aunque no hayan sido incluidos dentro de los eventos investigados en esta causa penal y se aprecien como simple elemento indiciario de lo que fue el comportamiento del procesado ZÁRATE MUÑOZ, se tiene que libró mandato en favor del togado ÓSCAR OROZCO PACHECO para el reclamo de bonificación de $30.000, percibiendo por ello la suma de $11´000.000,00; al doctor LUIS MARIO CORTES RODRÍGUEZ, quien trabajaba en asocio con el togado JORGE SAID NARVÁEZ, les entregó poder para reclamar trienios; de regreso sobre la versión injurada, acerca de las actas de conciliación de finales de 1993, comenta que a algunos de los togados que se encuentran vinculados con esos pactos les dio poder, salvo a las doctoras ESPERANZA DÍAZ CANTILLO e IRIS DALIA VÁSQUEZ VÁRGAS; sin embargo, dentro de las sindicaciones que componen el vocatorio respecto de este extrabajador no se evidencia evento relacionado con la emisión de aquellos pactos.

Adicional a lo anterior, yacen pruebas de que por intermedio de la doctora LILIA DEL CARMEN AREVALO QUINTERO deprecó reliquidación de prestaciones sociales a partir de uniformes y calzado, mandato ubicado en el documento 19 de la hoja de vida pensional; a la doctora DUBYS RAMOS RAMOS para que por vía ejecutiva reclamara el pago del concepto de trienios contenido en el acta de conciliación 2543, sin que obren datos adicionales de este acuerdo; a la doctora GLORIA STELLA SABOGAL AGUILAR para que se solicitara uniformes y prima sobre prima y reliquidación general de prestaciones sociales en virtud de los poderes obrantes en los documentos 43 y 44 del mismo compendio y a documento 47 en favor de la misma profesional del derecho, tendiente a alcanzar el reconocimiento de 12% de intereses sobre las cesantías.

Estas probanzas muestran que el actuar del señor ZÁRATE MUÑOZ, lejos de perseguir el pago de rubros que legalmente le eran inherentes, estuvo dirigido a alcanzar el reconocimiento de beneficios pecuniarios y variación de su mesada pensional a partir del reclamo de derechos inexistentes, acorde a las reflexiones realizadas en precedencia de aquellos conceptos reclamados y la decidida conducta del procesado, aspectos de los que se consolida el dolo en su proceder, al pretender lucrarse a partir de las numerosas solicitudes efectuadas por vía judicial, generando el correlativo detrimento a los recursos públicos; por lo que en criterio del Juzgado el procesado es merecedor de reproche criminal por los hechos que se le endilgan.

**ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**.

La Fiscalía efectúa señalamiento criminal contra este ciudadano por cuatro eventos constitutivos del reato de peculado por apropiación agravado, relacionados con el reclamo de 25% de recargo por haberse desempeñado como directivo sindical, recargo del 21.5% por laborar como estibador, reliquidación de primas de servicios de los años 1989 a 1992 y reliquidación de prima de antigüedad, renglones que como quedó arriba identificado, fueron peticionados en ausencia de amparo fáctico y normativo, pues su observancia se dio cabalmente en vigencia de la relación laboral en lo que a los derechos existentes se refiere; salvo en el caso de la bonificación a que tenía derecho por haber ocupado el cargo de estibador, respecto del que se apreció una deficiencia en el 1.5% de cara a lo que debía percibir. No empece haberse dado la anotada deficiencia -atribuible a la empleadora-, se recuerda que la pretensión formulada en la demanda desbordaba lo que en derecho se le adeudaba, donde además se incluyó la deprecación de reajuste de las demás percepciones dinerarias e imposición de sanciones moratorias, circunstancia que caló en la ilicitud de las resultas procesales que en ese asunto se alcanzaron.

En lo que atañe a las demás solicitudes que por vía judicial conquistó este procesado, analizadas de forma pormenorizada a lo largo de esta decisión, y de las que se tiene discutida y demostrada su improcedencia, conducen a corroborar la tesis de la Fiscalía en torno de la efectiva presencia de responsabilidad del sindicado, ya que habiéndose desempeñado como integrante de la junta gremial del sindicato de trabajadores, escaño que le asignaba manejo especial y conocimiento de las normas convencionales y, particularmente, de la aplicación de las mismas, resuelve acometer las variadas peticiones que se le endilgan a título criminal.

El hecho de haber ejercido funciones dentro del sindicato se instituye como circunstancia de la que se desprende que le sea exigible mayor grado de probidad en su actuar, pues su cercanía con el objeto mismo de la agrupación le asigna la ciencia y dominio de las normas convencionales, notándose por el contrario que en el fundamento propuesto en las acotadas reclamaciones judiciales se valió de protervas interpretaciones de la norma y falaces argumentos circunstanciales para acceder irregularmente a los recursos públicos; reflexiones que llevan a predicar la indudable existencia de compromiso de carácter penal en lo que a este ciudadano se refiere, respecto de quien, por las razones expuestas, se valorará su adeudo en mayor grado.

**ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**.

En lo que se refiere a este procesado, la formulación efectuada en el pliego de cargos remite a dos reclamaciones judiciales asociadas con el reconocimiento de días descontados por huelga y reliquidación de prima de antigüedad; y otra relacionada con "prima sobre prima" tramitadas ante los Juzgados Sexto y Octavo Laborales del Circuito de Barranquilla, respectivamente, frente a las que el acriminado en su salida defensiva adujo haber encomendado al doctor ROBERTO ROMERO el reclamo judicial de concepto por el cual le entregó $37´000.000,00, sin recordar por qué renglón se efectuó la demanda; el doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, $63´000.000,00; y el togado ARMANDO NOGUERA, la suma cercana a $7´000.000,00, comentando que le entregó poder a otros pero éstos son los únicos que le han reportado réditos por las gestiones adelantadas, agregando que se demandó en varias oportunidades y con varias personas para poder atinarle a algo, afirmación que denota el inequívoco interés del procesado; al preguntarle si conocía al doctor COLLANTE PACHECO, quien adelantó la solicitud que derivó en la firma del acta de conciliación 050 de 1998, en la que se benefició en cuantía de $123´500.000,00 por reliquidación de vacaciones, informó haber recibido el dinero de manos del doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, quien le entregó el 50% de la suma ordenada en el acta, a COLLANTE PACHECO refiere no haberlo conocido.

Igualmente se destaca que éste trabajó para la empresa portuaria inicialmente como estibador y después como miembro de la junta intergremial del sindicato SINDIODERMA por el lapso de seis meses, hasta el momento en que se produjo su retiro de la empresa; aspecto que, como se ha dicho en caso homólogo revisado en precedencia, le otorga a este ciudadano un especial manejo cognoscitivo y aplicativo de las normas convencionales, luego no se aprecia justificante para que ostentando ciencia sobre el particular acometa el reclamo de conceptos que carecen de asidero normativo y fáctico.

Los ítems que cimentaron las reclamaciones judiciales, identificados en precedencia y respecto de los cuales se estableció lo inoportuno y lesivo de su reconocimiento y pago, dan cuenta de que el procesado OSPINO HERNÁNDEZ era conocedor de que con su actuar se transgredían los parámetros que otrora gobernaban las relaciones laborales con la empresa portuaria, concretándose de esta forma el compromiso delictual y personal de este ciudadano, quien pudiendo obrar con apego a derecho resuelve apartarse de ello y beneficiarse de las irregulares resultas que a partir de sus pretensiones se concretaron, por lo que se considera que el planteamiento de la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad del señor OSPINO HERNÁNDEZ, cuenta con serios fundamentos y así se enunciará en el aparte pertinente de esta providencia.

**RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**.

El compromiso de este procesado radica en el adelantamiento de tres procesos ordinarios ante los Juzgados Tercero, Cuarto y Octavo Laborales de Barranquilla, el primero, que giró alrededor de reliquidación por horas extras; en el segundo, del reconocimiento de días descontados por huelga y reajuste de prima de vacaciones; y, el último, de la solicitud de "prima sobre prima"; así como el proceso ejecutivo laboral en el que sirvió como título de recaudo el acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, pactándose el pago de descanso compensatorio.

Frente a los señalamientos en contra de este procesado, se mostró conocedor del trámite encomendado al doctor COLLANTE PACHECO, pese a que refiere que éste no le reportó pago por esa gestión, por lo que decidió extender mandato al doctor ARNULFO OLIVEROS TORRENEGRA para el reclamo de las horas extras que nunca le habían reconocido, petición de la que se le entregaron $23´000.000,00; al doctor JUAN LÓPEZ AROCA se le encargó la solicitud de feriados, quien le entregó el poder a otro profesional que alcanzó el pago de $38´000.000,00; también al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO, togado que no concretó réditos por esta solicitud; comenta que hizo varias reclamaciones debido a que ocupó diversos cargos en la empresa portuaria; confirió poder a varios abogados pero únicamente

recibió dinero de algunos de ellos, y dice que muchas de las deprecaciones que se hicieron a su nombre carecían de poder para ello, sin referir cuáles de las que se endilgan como delictivas, ya que al parecer los abogados averiguaban los datos de los extrabajadores y efectuaban solicitudes sin autorización, por lo que se muestra desconocedor de los reclamos concretados en las actas de conciliación de finales de 1993 y del contexto de las mismas, pues no conoce a las personas que al parecer lo representaron.

En torno de la legitimidad con la que contaba el ciudadano CABARCAS ROMERO para promover los procesos que se le enrostran como generadores de compromiso penal, se precisa que en el informe FGN-CTI-365766 de 12 de octubre de 2007, se efectuó examen a la amortización de las prestaciones sociales y base de liquidación de la mesada pensional, estudio en el que si bien es cierto no se arribó a una conclusión certera tocante a la justeza de estas percepciones dinerarias, esto es, si se habían liquidado por fuera de lo debido o en perjuicio del extrabajador, ya que para la elaboración de éste sólo se tuvo en cuenta la certificación que sobre los montos devengados del último año de trabajo emitió la empresa, así como las planillas de devengo del último año laborado y, al parecer, no se tuvo a la mano el contenido de la resolución 48515 fechada el 27 de agosto de 1993, por medio de la cual se concede pensión de jubilación al procesado -obrante en el documento 5 de la hoja de vida pensional aportada por la UGPP-, en el que se advierte la valoración para aquellos fines de la totalidad de los elementos que conformaban salario que a posterior cimentaron el adelantamiento de los demás procesos judiciales; situaciones de las que se revela que la cuantificación de las prestaciones sociales y mesada pensional se ajustaron a derecho y, por consiguiente, los diversos reclamos que adelantó el señor CABARCAS ROMERO por vía judicial carecen de sustento fáctico y respaldo normativo, no es menos cierto que emerge diáfano que pese a haberse advertido justeza en la tasación de las percepciones dinerarias, el procesado alcanzó por varias vías el incremento injustificado de sus prestaciones sociales y monto de la mesada pensional, presentando para estos fines argumentos ilegales y alejados de la realidad que devinieron en el consabido detrimento de las arcas públicas; resultado al que se arribó con el pleno conocimiento de no contar con amparo para ello y que denota la irrefutable responsabilidad dolosa del procesado en los eventos asociados con los asuntos ordinarios laborales.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el proceso ejecutivo laboral fundado en el acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, la cual fue usada como título de recaudo, donde fue representado por el doctor ALFONSO CASTILLEJO DE SALES, a quien refiere en su indagatoria desconocer y no haberle entregado poder, se recuerda que el dicho del procesado encuentra respaldo en el hecho de que dentro de esta actuación los pactos conciliatorios celebrados a finales de 1993, carecen de soportes de los que se desprenda que efectivamente fueron suscritos en virtud de mandato efectivamente entregado por los beneficiarios a profesional del derecho; aspecto en el que igualmente encuentra afianzamiento la postura del procesado en el sentido de no haber librado mandato a este abogado para que lo representara en el asunto que se examina; circunstancias que como se precisó en apartes preliminares, aunque son abiertamente irregulares y el objeto sobre el que se pactaron

carece de procedencia en derecho, no cuentan con respaldo probatorio del que se desprenda inequívocamente que en el presente evento la rúbrica del acta fue sentada por el señor CABARCAS ROMERO, incertidumbre que impide sostener por hesitación el compromiso subjetivo del procesado y, en consecuencia, se absolverá por la responsabilidad enrostrada a partir de este comportamiento.

**JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**.

Este procesado se convoca a juicio criminal por las diversas reclamaciones que por vía judicial acometió, tendientes a que se reamortizara la prima de servicios, en tres de los procesos adelantados ante los Juzgados Cuarto Laboral del Circuito en una oportunidad, y dos veces ante el Octavo de la misma especialidad de Barranquilla; así como el concepto de cena y descanso ante el último Estrado Judicial mencionado, tópicos respecto de los cuales en títulos que preceden se estableció su indiscutible improcedencia, teniendo en cuenta que, en el caso de la prima de servicios, que, por una parte, la empresa cubrió oportunamente en vigencia de la relación laboral y la valoró para efectos de estimar sus prestaciones sociales, y, por la otra, resultaba inaceptable bajo la figura de "prima sobre prima" que constituía una forma de acrecentar indebidamente la percepción que por este renglón le correspondía; así como lo atinente a la cena y descanso, rubro del que se decantaron las exigencias para que procediera su pago, dentro de los cuales no se hallaba acreditado el derecho materializado del reclamante a percibirlo.

En su intervención injurada dijo haber entregado diferentes poderes sin especificar puntualmente la cantidad o los conceptos reclamados en cada uno de ellos, memorando la identificación de algunos de los profesionales del derecho a los que les fueron entregados, quienes se encargaban de establecer el renglón a deprecar, anotando que libró varios en razón a que eran diversos los rubros a reclamar, aspecto que lo ubica en el meridiano discernimiento del fundo acogido en cada uno de los reclamos.

Los hallazgos yacentes en la hoja de vida pensional del procesado en torno de la justeza de la amortización de sus prestaciones sociales, fueron sintetizados en el informe FGN-CTI-365766 de 12 de octubre de 2007, que refleja que la empresa pagó diferencia en favor del extrabajador en cuantía de $61.168,54; por lo que esta situación, sumada al hecho de que reclamó reiteradamente reliquidación de prima de servicios y en una oportunidad cena y descanso sin que hubiere lugar a ello, denotan su inequívoco arrojo para alcanzar por vía judicial la emisión de decisiones contrarias a derecho tendientes a beneficiarse económicamente; aspecto que para el Juzgado se erige como una clara evidencia del dolo con el que actuó y el correlativo compromiso penal de carácter subjetivo existente, que demanda la imposición de la sanción que en el aparte pertinente se graduará.

**MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**.

El señalamiento criminal que se atribuye a este ciudadano se concreta en la promoción de seis eventos constitutivos de reproche penal, cinco de los

cuales remiten al adelantamiento de procesos ordinarios laborales en medio de los cuales se solicitó la reliquidación general de prestaciones sociales en dos oportunidades; reliquidación de prima de servicios ante los Juzgados Primero y Octavo laborales del Circuito de Barranquilla, último de éstos que acorde a las pruebas obrantes quedó en grado frustrado; una solicitud de reconocimiento de retroactivo salarial deprecado ante el Juzgado Sexto Laboral y proceso ejecutivo laboral incoado ante la misma instancia judicial en el que se aportó como título de recaudo el acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, todos ellos enlistados dentro de los eventos que merecieron órdenes de pago dentro del reporte que sobre el particular se aportó a la causa.

En torno al conocimiento mostrado por el procesado respecto de los eventos penalmente relevantes, comenta que a su retiro demandó en una oportunidad a la empresa, sin que recuerde por qué motivo ni cuánto fue lo que le representó esa reclamación; posteriormente entregó poder a varios abogados dentro de los que recuerda a LUIS ALFARO GUTIÉRREZ, MIRNA GARCÍA, también al doctor EMILIO COLLANTE PACHECO, siempre mediando el consejo de éstos pues refirió no saber nada de Leyes; sin embargo, todos se motivaron en la inconformidad frente a lo que se le pagó por liquidación de prestaciones sociales.

Respecto de las demás reclamaciones que se realizaron en su favor y que se le pusieron de presente en esa diligencia, dice no recordar que se hubiere dado poder a otros abogados para su representación judicial y a los que le extendió mandato nunca le entregaron dinero de aquellas solicitudes, mostrándose ajeno a las reclamaciones concretadas en las actas de conciliación de las que fue beneficiario, así como al contexto de las fechadas a finales de 1993.

Encontrándose debidamente demostrado que la mayoría de las reclamaciones efectuadas por este ciudadano por intermedio de apoderados judiciales por vía ordinaria contrarían la normativa convencional, y advertido el hecho de que entregó poderes en varias oportunidades para el reclamo de presuntas acreencias insolutas, inclusive en repetidas ocasiones por el mismo concepto, se recuerda, reamortización de primas de servicios o "prima sobre prima" y reliquidación general de prestaciones sociales, sin que hubiere consideraciones válidas para ello, encuentra el Despacho que el actuar del señor MUÑOZ CAICEDO, lejos de tratarse de una serie de inconformidades con fundamentos razonables y documentados, se encuadra en el actuar de quien pretende alcanzar por cualquier medio el incremento injustificado de su mesada pensional y monto de prestaciones sociales, a lo que se agrega que por cada uno de los trámites judiciales a que se ha hecho referencia se imponía condena a la demandada por salarios moratorios, haciendo que la situación del para entonces fondo liquidador de la entidad portuaria y en general de los recursos públicos que éste administraba, se vieran disminuidos injustificadamente antes las plurales demandas.

En esta medida, se aprecia que en lo que atañe a las reclamaciones judiciales en las que se concretaron los reatos de peculado por apropiación agravado, configurado en cuatro de las seis peticiones acometidas por el acusado, y en aquella que remite a la comisión del mismo reato en grado imperfecto, materializado en la sentencia del Juzgado Octavo Laboral del

Circuito de Barranquilla de 12 de febrero de 1996, sin que alcanzara su pago, componen el conjunto de eventos que en criterio del Despacho revisten responsabilidad penal atribuible al procesado.

De cara al acto derivado de la celebración del acta de conciliación 2290 de 21 de diciembre de 1993, constitutivo del reato de peculado por apropiación agravado, en la que el procesado MUÑOZ CAICEDO presuntamente estuvo representado por el doctor MANUEL DE JESÚS MANJARRÉS TORO, estima este Estrado que tal como se ha referido en precedencia al analizar eventos análogos al presente, ante la ausencia de elementos demostrativos de los que se desprenda fehacientemente que la voluntad del procesado se dirigió a otorgar poder para el adelantamiento del referido trámite, el cual manifiesta expresamente desconocer en su versión injurada, se erige como evento materialmente irrefutable que desarticula los componentes de la responsabilidad subjetiva del procesado ante la duda, por lo que se emitirá decisión absolutoria en lo que a este evento se refiere.

**ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**.

Se convoca al exportuario por las reclamaciones judiciales adelantadas en procura de alcanzar el pago de reliquidación de prima de servicios, denominada también "prima sobre prima", asuntos que se promovieron ante los Juzgados Tercero y Cuarto Laborales del Circuito de Barranquilla; así como proceso ejecutivo laboral en el que se deprecó el pago del acta de conciliación 2409 de 29 de diciembre de 1993; señalamientos en torno a los cuales informó que al finalizar su vínculo con la empresa confirió poder al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO para el reclamo de ropa –uniformes y calzado- sin que percibiera dinero por ese concepto; al mismo profesional le encomendó la solicitud de reliquidación de prestaciones sociales por reamortización de prima de antigüedad en el año 1995 o 1996 quien le entregó $21´000.000,00, y memora que libró otro poder para adelantar otra demanda sin recordar más detalles sobre el particular; comentando que decidió extender los poderes porque los excompañeros y abogados lo convencieron de ello.

En cuanto a las reclamaciones que presuntamente adelantaron en su nombre los abogados RAUL ALFONSO EBRATT, ÓSCAR EDUARDO OROZCO PACHECO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, ÁNGEL RODRÍGUEZ VILLANUEVA, JUAN AMARANTO ALONSO, EMIL ALBERTO PULGARÍN LEMOS, GLADYS GUERRERO GUERRERO, HENRY ADOLFO DIAZ AMARIS y JENNY CECILIA PÉREZ SOLANO, acorde a lo inquirido por la Fiscalía en la diligencia de indagatoria; respecto de conceptos pactados, en parte, en las actas de conciliación de finales de 1993, refiere no conocerlos ni haberles dado poder para adelantar trámite alguno; aspecto que al igual que en las situaciones similares analizadas en precedencia denota ausencia de dominio de parte de quienes al parecer se vieron beneficiados con el pago de los anunciadas acuerdos.

Acorde a los esbozos plasmados en el informe FGN-CTI-369271 de 06 de noviembre de 2007, acerca de la debida apreciación y pago de las prestaciones sociales del procesado, fue advertido un menor pago en la

liquidación de las cesantías definitivas por la deficiente tasación de la prima de antigüedad de la última quincena de noviembre de 1992, lo que constituyó un faltante de $13.940,40 en la anotada percepción; no obstante haberse atisbado el yerro atribuible a la empleadora, que motivó el reclamo acometido por el abogado ALFONSO GIL DE LA HOZ ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, y que no hace parte de los eventos sindicados por la Fiscalía en el pliego de cargos, además de reclamar la reamortización de cesantías por el concepto de prima de antigüedad, alcanzó el pago de sanción moratoria, percepción que como se dijo en el aparte pertinente de esta decisión, desborda la legalidad y razonabilidad de la condena, comoquiera que la imposición de sanción moratoria supone la discusión y comprobación al interior de la causa laboral de la alegada e ineludible existencia de mala fe atribuible a la empleadora, situación que en manera alguna fue materia del litigio y controversia procesal, tanto en el asunto en mención como en las demás reclamaciones que por vía judicial acometió el procesado.

De las manifestaciones efectuadas por éste se advierte que, pese a que pretende diluir su responsabilidad a partir del presunto compromiso exclusivo de los abogados que le brindaron la asesoría legal en materia laboral, como lo han manifestado con frecuencia los demás convocados a causa, para el Juzgado resulta claro que aun cuando éste hubiere acogido las indicaciones de los profesionales del derecho para iniciar las demandas que se le señalan como ilícitas, no hay lugar a dudas que en los dos asuntos ordinarios laborales previamente identificados se realizó el reclamo del mismo concepto irregular de "prima sobre prima", situación que aunque pretende presentar el procesado como eximente de responsabilidad, no reviste tal entidad, pues además de tratarse del triple pago del mismo rubro, ya que fue atendido debidamente en vigencia de la relación laboral y pretendido dos veces en demanda judicial, el discernimiento acerca de la protuberante ilicitud del concepto no demanda conocimientos específicos en derecho con los que claramente la mayoría de los procesados no cuentan, lo que claramente no admite ninguna clase de justificación válida e indica que de estos eventos se desprende compromiso penal atribuible al señor FANDIÑO GARCÍA.

**ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**.

Inicialmente convocado por las resultas delictivas de tres causas judiciales adelantadas ante los Juzgados Segundo, Cuarto y Octavo Laborales del Circuito de Barranquilla por los renglones de reliquidación general de prestaciones sociales en los dos primeros Estrados Judiciales, de la cuales se advirtió la prescripción de la acción penal, y un evento que subsiste relacionado con "prima sobre prima" en el último Despacho mencionado, encuentra el Juzgado pertinente recordar la postura del procesado frente a estas reclamaciones, expuesta en la diligencia de indagatoria, cuando dijo haberle entregado poder a ÁLVARO VELEÑO BANDERA; al doctor CIRILO CANTILLO le adelantó una solicitud que fue negociada con FIDUPACÍFICO, de lo que se entregaron más de $45´000.000,00; en cuanto a la representación que ejerció el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO recuerda que le dio mandato y él le entregó $6´500.000,00; recordando que

para ese momento proseguían varios asuntos de los que aún no le han entregado dinero, pues libró bastantes poderes.

Respecto de la representación que en su nombre acometieron los abogados ÁLVARO EMILIO BELEÑO BANDERA, JOSÉ MIGUEL COMAS SOLANO, ANA DOLORES MEZA CABALLERO, PEDRO MARTÍN CANTILLO ARAUJO, ARNOLDO RAFAEL ROJAS URUETA, DAVID JOAQUÍN BUSTOS CANTILLO y ZULLY ELVIRA CORTÉS MARINO, dice que de éstos recuerda haber entregado poder a COMAS SOLANO, BELEÑO BANDERA y BUSTOS CANTILLO, pero a los demás no los conoce ni les dio poder.

En torno de la apreciación efectuada de sus prestaciones sociales al culmen de su relación laboral, se detalló en el informe adicional FGN-CTI-369264 de 06 de noviembre de 2007, una incorrección en su liquidación que ascendía a la cuantía de $17.032,86, al haberse tasado de forma deficiente la segunda prima semestral de 1992, renglón que en principio se compadece con el reclamo efectuado ante el Juzgado Octavo por reliquidación de prima de servicios que aún se halla vigente; no empece otearse una probable justificante en el mencionado reclamo, se recuerda que al analizarse la procedencia del ruego en el pasaje correspondiente a la "prima sobre prima" en este pronunciamiento, se halló como circunstancia notoria las pretensiones consistentes en que éstas trascendieron de forma injustificada a las primas de servicios de los años 1990 a 1992, anhelo que claramente desbordaba el legítimo derecho del exportuario y que transgrede la norma convencional.

El comportamiento demostrado por el procesado, quien se memora, había incoado dos asuntos más enfilados a la reamortización general de prestaciones sociales, demuestra el irrefutable arrojo exhibido por el señor MARIANO SANJUAN para acceder a variaciones en sus percepciones dinerarias sin el respaldo normativo y circunstancial requerido para ello; sin que se perciba vaguedad en el hallazgo ilustrado en el informe que evaluó la justeza de sus prestaciones sociales, pues el hecho de haberse presentado deficiencia en la última prima semestral percibida, en manera alguna extiende la facultad de reclamar las de los últimos tres años, y menos, que ello se configure como un acto de mala fe endilgable a la empresa, comoquiera que aunque la estimó por debajo de lo debido, el renglón fue incluido dentro de su liquidación final, situación que denota la marcada y proterva intención de defraudar a la entidad portuaria, para entonces en liquidación, y alcanzar el desembolso de sumas dinerarias en su favor, lo cual se considera como un marcado interés ilícito que merece el reproche penal.

**LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**.

Los señalamientos enrostrados contra este exoperario de Puertos de Colombia se asocian a la solicitud administrativa de reconocimiento de salario en especie; cena y descanso contenida en el acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, que fue objeto de mandamiento de pago del Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla; reliquidación de prima de servicios o "prima sobre prima" en proceso ordinario adelantado ante el mismo Estrado y días descontados por huelga ante el Despacho Cuarto de la misma especialidad y urbe; incriminaciones frente a las que recordó haber demandado a la empresa en dos oportunidades valiéndose de la

gestión del doctor EMILIO COLLANTE PACHECO; también apoderar al doctor GUTIÉRREZ ALFARO para el reclamo de mes de huelga y una liquidación que hacía falta; a la doctora EDNA QUINTANA le encargó la solicitud de cena y descanso y reajuste de pensión; y a la doctora MIRYAM CHARRYS, quien tramitó el reconocimiento de ropa, recordando que entregó más poderes pero estos los han dado de baja, todos efectuados en virtud de las normas de la Convención Colectiva de Trabajo que le otorgaba el derecho a reclamar esos renglones que la empresa no había cubierto debidamente, entregando los poderes a cada abogado según el rubro en el que se especializara.

Frente al acta de conciliación 050 de 1998, y la suma dineraria de la que se benefició en ese pacto, por el concepto de prima sobre prima, anota que la correspondiente solicitud se realizó porque había salido a vacaciones y le tenían que pagar prima de 15 años que para entonces la estaban reconociendo y consideró que le habían dado muy poco dinero en su liquidación de prestaciones sociales; al preguntarle por los poderes entregados a MIRYAM CHARRYS BLANCO, CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, ROBERTO ROMERO TURIZO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, JAIME RUIZ FONTALVO, JORGE MANUEL CAMARGO GALLARDO, dijo haber extendido mandato a CHARRYS BLANCO, quien le pagó $11´000.000,00; y a los togados BARRIOS BARRIOS y CAMARGO GALLARDO les entregó poder pero no le han dado ningún dinero por su gestión; a los demás refiere no conocerlos.

La percepción de prestaciones sociales y establecimiento de mesada pensional fueron objeto de estudio y del informe adicional FGN-CTI-369264 que reveló que le fueron debidamente valorados los anunciados renglones al finalizar el vínculo laboral con Puertos de Colombia; por lo que evidentemente carecía de sustento fáctico para promover reclamaciones tendientes a que se revisara el ajuste de esos rubros, menos aun cuando se trata de conceptos que carecen de consagración normativa, contravienen los axiomas que gobiernan las relaciones laborales de cualquier índole y fueron deprecados de manera reiterativa y dentro del ambiente de desbarajuste administrativo presentado al interior del fondo liquidador de la entidad.

La postura del procesado respecto de los señalamientos revelados por la instructora en su diligencia injurada, denota que gozaba de un conocimiento especial de las normas que regían su relación con la empresa y adujo como argumento exculpatorio haber arribado a la conclusión de que le habían liquidado deficientemente sus percepciones dinerarias al término de la relación laboral, circunstancia que aun cuando la propone como asidero de sus pretensiones, carece de respaldo fáctico, pues del estudio mencionado en párrafos precedentes se tiene probada la justeza de la liquidación de sus derechos laborales, prestacionales y pensionales, de lo que se ultima que el fundo de sus solicitudes administrativa y judiciales no era distinto al de acceder de forma irregular a los dineros del tesoro en beneficio particular, con lo que se consumaron las conductas delictivas arriba identificadas.

De otro lado, en lo que se refiere al reclamo concretado en el mandamiento de pago del Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla de 26 de septiembre de 1996, cimentado en el acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993, donde se acordó el reconocimiento y pago de cena y

descanso en virtud de la representación que acometiera el doctor CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, el Despacho encuentra que la ajenidad que muestra el procesado respecto de este evento, contrastado con el evidente manejo revelado frente a las demás reclamaciones, y la misma ausencia de elementos demostrativos a que se ha hecho referencia a lo largo de este examen de responsabilidad subjetiva respecto de otros extrabajadores, relacionada con la carencia de poderes o soportes administrativos de los que se desprenda que la rúbrica del acta de conciliación se llevó a término con el pleno consentimiento y conocimiento de quienes se beneficiaron con ella, imponen impartir absolución por el presunto compromiso que de este hecho se le atribuía, lo cual será declarado en la parte resolutiva de este pronunciamiento.

**JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**.

Refiere la persecutora que el ciudadano adelantó reclamación administrativa en la que alcanzó reconocimiento pensional sin que le asistiera derecho a ello; así como solicitud de reliquidación de prestaciones sociales mediante demanda adelantada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, resolviéndose favorablemente sus pretensiones mediante decisión de 06 de enero de 1996, eventos consolidadores del reato de peculado por apropiación.

El extrabajador refiere en su indagatoria que atendiendo que fueron varios los abogados a los que les entregó poder, no evoca con precisión a quiénes les encomendó los asuntos; sin embargo, memora haberle extendido uno a LUIS GUTIÉRREZ ALFARO sin que recordara el concepto objeto del mismo; así como al doctor ROMERO TURIZO para adelantar solicitud respecto de "prima sobre prima".

En cuanto al mandato ejercido por el doctor COLLANTE PACHECO comenta que pudo ser uno que le sustituyó "Lucho" porque él no recuerda haberle entregado poder directamente; mostrándose ajeno a la entrega de la suma contenida en el acta de conciliación 050 de 1998, pues sólo le cancelaron cerca de $6´000.000,00, sin tener conocimiento de que habían sido $34´300.000,00; de cara a la representación que en su nombre se realizó en las actas de conciliación de finales de 1993 y otros actos administrativos relacionados por los togados MARTÍN ESQUIVEL PATERNINA, MIRYAM CHARRYS BLANCO, ELVIRA MERCEDES MOLIN DE FRANCO, GLADYS GUERRERO GUERRERO, HERNANDO VILLAFAÑE USME, JUAN AMARANTO ALONSO, ÓMAR PACHECO CASTRO, RICAURTE BARRIOS BARRIOS, SEGUNDO EFRAÍN CASTILLO MEDINA y LUIS ALFREDO TAPIA AHUMADA, aseveró no conocer a ninguno de los mencionados y jamás haber entregado poder para que éstos lo representaran.

Con informe adicional FGN-CTI-369264, se conoció que le fueron debidamente valorados los renglones constitutivos de la base de amortización de las acreencias laborales al finalizar el vínculo laboral con Puertos de Colombia; aspecto del que emerge que ninguna procedencia acompañaba los ruegos efectuados, pues como se concluyó en precedencia, por un lado, al haberse desvinculado con anterioridad a la vigencia de la CCT de 1991-1993, no le asistía derecho a acceder al beneficio pensional, siendo un aspecto revelador de su reprochable

intención; el hecho de haber solicitado el reconocimiento pensional después de ocho años de producida su desvinculación, cuando precisamente la empresa estaba siendo víctima del advertido embate de reclamaciones por extrabajadores y abogados proponiendo multiplicidad de reclamos por vías administrativa y judicial, denota que el ambiente de caos fue aprovechado por el procesado para acceder a sus ilícitas pretensiones; misma improcedencia que se advierte en cuanto a la reliquidación de prestaciones sociales, ya que como se informó en el precitado estudio, las estimaciones realizadas inicialmente por la empresa se ajustaban a los parámetros normativos que garantizaban las prerrogativas del extrabajador, encontrándose demostrado el compromiso penal del procesado y el consecuente juicio de reproche que en lo venidero se definirá.

**LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**.

Inicialmente convocado a juicio penal por cinco eventos conculcatorios de la normativa penal, de los cuales tres se vieron afectados por el fenómeno prescriptivo, el compromiso de este ciudadano se concreta en la solicitud de reconocimiento pensional sin que se reunieran los requisitos establecidos en la norma convencional para acceder a éste, y el reclamo del renglón de "prima sobre prima", examinados en los acápites correspondientes de esta providencia; advirtiéndose, respecto del primero, que el señor SOLANO CASTRO no acreditó haber laborado como mínimo por espacio de 13 años para la entidad portuaria, y que la ausencia de esta condición le impedía aspirar al beneficio; no obstante, con solicitud elevada por vía judicial, consiguió la declaratoria del derecho en su favor.

Por otra parte, el otrora trabajador portuario, quien de conformidad con los datos contenidos en el estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, fue debidamente liquidado en el momento de la ruptura del vínculo laboral, hallándose inclusive, pago excedente en su favor por la suma de $349.029,40, era conocedor de que no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión y a partir de este conocimiento, decidió no elevar solicitud en ese sentido al momento de su desvinculación; prerrogativa que se cristalizó por vía judicial pasados más de tres años, accediendo igualmente a los pagos derivados de mesadas atrasadas.

Dentro de la versión aportada en la diligencia de indagatoria, al cuestionarlo sobre los mandatos entregados para demandar a la empresa portuaria, comentó que le delegó poder a la doctora MÁBEL PRESTAN LÓPEZ para que se solicitara el pago del retroactivo de 1983; a la doctora GLADYS MONTERO CAMPO para recargo de carbón; al doctor MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ por concepto de nocivos y corrosivos; al doctor LUIS OÑORO MOLINA le encargó la solicitud de reconocimiento de días descontados por huelga; al doctor RAFAEL VILLALBA la de pensión; y facultó al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO para reclamar prima sobre prima, pero a la fecha no le había entregado dinero por su gestión.

A partir de la enunciación de estas circunstancias que, como se ha dicho, algunas fueron objeto de afectación de cara al decaimiento de la vigencia de la acción penal, el Despacho encuentra que el comportamiento del señor SOLANO CASTRO estuvo enfilado a favorecerse de forma irregular de

los recursos públicos administrados por la entidad encargada del pasivo social de la empresa liquidada, ya que además de no contar con derecho a percibir el derecho pensional, rogó el reconocimiento de renglones que habían sido debidamente entregados en vigor de la relación laboral, así como otros que adolecían de consagración normativa; proceder que devela el irrefutable dolo con el que actuó y que indudablemente le asigna compromiso de carácter penal, como lo reclama la agencia Fiscal y el representante de la parte civil.

**JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**.

El objeto del señalamiento criminal que subsiste actualmente respecto de este acriminado, remite a las resultas del proceso ordinario adelantado ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla en el que se deprecó la reliquidación de la prima de servicios, "prima sobre prima", siendo relevante recordar que su compromiso, en principio, se concretaba conjuntamente en cinco eventos cuya acción investigativa fue afectada por el fenómeno prescriptivo acaecido en etapa de instructiva, relacionados e identificados en precedencia, respecto de los cuales fue establecida su improcedencia a partir del contenido del estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, en el que se encontró que al señor RUA CARRILLO, le fue entregado pago en exceso de lo legalmente debido en monto de $202.699,80.

En indagatoria dijo haberle extendido encargo al doctor ÉDISON OROZCO CABALLERO para reclamar una reclasificación, sin que le hubiere entregado dinero por esa demanda; también al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO y éste a su vez le sustituyó al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, desconociendo por otra parte aquellos pagos asociados con las actas de conciliación de finales de 1993, gestionadas por la doctora LILIA ARÉVALO QUINTERO.

Los matices apreciados en el comportamiento del procesado, quien acudió por vía judicial en cuatro oportunidades solicitando reliquidación general de prestaciones sociales, reclasificación y "prima sobre prima" y en una oportunidad por vía administrativa en reclamo de uniformes y calzado, permiten arribar al convencimiento de que el enjuiciado dirigió su actuar inequívocamente a cristalizar el provecho ilícito a partir de los dineros públicos administrados por el fondo liquidador, presentando diversas reclamaciones sin que le asistiera derecho a ello, ya que, como se anotó en precedencia, sus prestaciones sociales se reconocieron en mejora de lo debidamente adeudado, aspecto que para el Juzgado reviste compromiso de carácter doloso, y, por ende, será materia de sanción penal.

**VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**.

Este ciudadano fue citado a reproche criminal por la solicitud adelantada por vía judicial ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, fundamentada en la inclusión de días descontados por huelga; rubro que como se ha dicho reiteradamente, carecía de asidero circunstancial y normativo, y no constituía elemento justificante para promover pretensión resarcitoria; lo que se afianza a partir de las manifestaciones realizadas por

el sindicado, por ejemplo, en el acta de conciliación de 18 de diciembre de 1991 –obrante en el documento 10 de la hoja de vida pensional–, en la que se declara debidamente liquidado y renuncia de forma voluntaria al derecho a acceder al anticipo pensional consagrado convencionalmente, aspecto que se reafirma a partir del contenido del informe 359699 FGN-CTI-DNI-N-20 adiado el 03 de septiembre de 2007, que concluye que el señor CASTRO MIRANDA no reportó deficiencias en su amortización de prestaciones sociales.

En esta medida, se aprecia que el procesado mostró un decidido interés por impulsar las reclamaciones que a posterior le reportaron beneficios pecuniarios, pues aunque no hicieron parte de los eventos penalmente relevantes en esta causa, se advierte que reposa copia de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla el 07 de mayo de 1997, en la que nuevamente se pretende la reliquidación de prestaciones sociales a partir del reconocimiento de días descontados por huelga, -documento 59 hoja de vida pensional-; así como el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral de la misma urbe el 29 de abril de 1997, referente al proceso en el que se rogó idéntico concepto; a lo que se agregan las múltiples solicitudes administrativas compendiadas en el legajo documental, a las cuales se ha hecho referencia en la relación de pruebas, todas ellas contrarias a derecho y sin fundamento fáctico.

La posición mostrada por el procesado en su indagatoria de cara a las diversas reclamaciones efectuadas, se enfila a justificarlas en las indicaciones que sobre el particular le ofrecieron los profesionales del derecho, quienes además agotaban la vía gubernativa ante FONCOLPUERTOS; mostrándose desconocedor de la conciliación 050 de 1998, en la que se concedió pago en importe de $60´400.000,00 en su favor por concepto de prima sobre prima.

No empece declararse ajeno a las plurales peticiones administrativas y judiciales de las que se halla prueba en el infoliado, que se erigen como muestra indiscutible de las ocasiones en que invocó la reliquidación de ítems prestacionales y pensionales ante su empleadora y la autoridad judicial competente, para este Despacho la posición del enjuiciado de ninguna manera logra restar forma al dolo con el que obró, ni tampoco diluir su responsabilidad en las resultas delictivas achacadas, ya que como se ha dicho, ninguna procedencia o expectativa yacía en las reclamaciones del señor CASTRO MIRANDA, quien a sabiendas de que había sido debidamente liquidado, intentó de manera proterva y persistente defraudar a FONCOLPUERTOS, proceder que le hace acreedor a la correspondiente correctivo punitivo que en lo venidero se tasará.

**JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**.

Se le atribuye el adelantamiento de causa ordinaria laboral teniendo como fundamento el reconocimiento del concepto de "prima sobre prima", renglón identificado como abiertamente ilegal a lo largo de esta decisión, a lo que se añade que de conformidad con el examen realizado a sus prestaciones sociales mediante estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, lo cancelado por la empresa por esta percepción guarda justeza con los cálculos efectuados por la Fiscalía, descartándose

que le asistiera meridiano asomo de expectativas en torno de la reclamación judicial de marras.

A este proceder lo acompañaron, aunque por fuera de los eventos penalmente endilgados en esta causa, solicitudes administrativas yacentes en la hoja de vida pensional enfiladas al reconocimiento de bonificación del año 1983, uniformes y calzado de los años 1989 a 1993, corrosivos, prima sobre prima, diferencia de prima de diciembre de 1991, prima de antigüedad; militando también en el compendio documental evidencia de pago relacionado con la sentencia de 21 de agosto de 1996, sin que se especifique la identidad de la autoridad judicial que la emite -documento 38 de la hoja de vida pensional-, en la que se reconocen los conceptos de recargo del 70% de compensado, reliquidación de prestaciones sociales y salarios moratorios, condena que ascendió a $8´470.311,80, siendo representado en ese diligenciamiento por la doctora MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA, ruegos de los que se desprende un marcado interés en alcanzar mejoras económicas a cargo de la empresa.

Escuchado en injurada, manifestó haber extendido delegación al doctor ALFONSO COLLANTE PACHECO, quien trabajaba con otros abogados, para una reliquidación; comenta que realizó la reclamación porque salió con un monto de pensión demasiado bajo; informando que no conocía a los abogados MARÍA DEL CARMEN RUIZ PADILLA y HENRY OFERNES AMELL GARCÍA ni les había entregado encargos; manifestaciones que ratificó en etapa de juicio, agregando que adelantó el proceso que se le endilga a título de responsabilidad criminal por exhortación que le hiciera el profesional del derecho que lo representó.

No empece pretender mostrarse ajeno a la irregularidad que envolvía la solicitud impulsada por intermedio de letrado en la causa laboral que se enrostra como ilícita, este Juzgado encuentra que las diversas peticiones formuladas tanto de forma personal como en asocio con profesionales del derecho, desdicen la veracidad de la posición del enjuiciado, comoquiera que sus pretensiones no contaban con asidero de cualquier índole y, aun así, dirigió su actuar a concretar el inequívoco propósito de alcanzar la erogación de dineros públicos con destino a su patrimonio en varias oportunidades, lo que analizado frente a la debida estimación de sus percepciones prestacionales y pensionales indican que su proceder se hallaba al margen de la licitud; razones por las que el Despacho considera acertado el llamamiento a reproche penal doloso respecto de este ciudadano, a quien se le impondrá la respectiva sanción penal.

**MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ.**

La Fiscalía efectúa sindicación criminal en contra de este ciudadano por los eventos relacionados con el reclamo de descanso compensatorio y cena y descanso, otrora declarados en providencias judiciales del Juzgado Octavo Laboral de Barranquilla; el de "prima sobre prima" que fundamentó la decisión del Juzgado Cuarto de la misma especialidad; y la contenida en el proceso laboral ejecutivo promovido en el mismo Despacho Judicial en el que se discutió el concepto de días descontados de la liquidación definitiva de prestaciones sociales. El fundo en estos asuntos se diluye a partir de los

datos aportados en el informe 359699 FGN-CTI-DNI-N-20 fechado el 03 de septiembre de 2007, en el que se identificó mayor importe pagado en favor del referido ciudadano en cuantía de $194.290,36, novedad que indica que las demandas judiciales no contaban con apoyo en expectaciones ciertas y las resultas que de éstas se generaran, se hallarían sumergidas en la ilicitud.

En torno del probable conocimiento que podría tener el procesado respecto de la improcedencia de sus aspiraciones, ha de recordarse el dicho ofrecido en indagatoria, cuando aseveró estar mal liquidado a su retiro, razón que lo motivó a extender mandato al doctor DUBIS RAMOS, sin recordar el concepto encomendado; así como a la doctora JULIA GALLARDO, al doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, y a otros abogados que no le reportaron pagos por su gestión; menciona que los togados, a partir del estudio realizado a la CCT, concluían si había derecho a solicitar el reconocimiento de algún emolumento; mostrándose por otra parte ajeno a que se hubiere solicitado reconocimiento de "prima sobre prima", aduciendo que no se denominaba así al concepto consagrado convencionalmente, ya que se trataba era de una reliquidación de prima de servicios, porque la prima de junio no se estaba teniendo en cuenta para apreciar la de diciembre y viceversa.

En el interrogatorio practicado en etapa de juicio, recordó haber dado impulso a dos demandas por intermedio de la abogada JULIA GALLARDO, porque le dijo que tenía derecho a ello; el doctor COLLANTE PACHECO solicitó reliquidación de prima, aclarando que no de prima sobre prima como le indica la instructora, agregando que desconocía que se hubieren efectuado reuniones con funcionarios judiciales e inspectores del trabajo, o que se hubiere solicitado dinero por su abogado para entregarle a los mencionados funcionarios, negando que hubiere extendido mandato para reclamar reiteradamente el mismo concepto de reliquidación de prima de servicios.

De las afirmaciones del deponente se desprende tanto la fehaciente voluntad de dar impulso a los numerosos pedimentos que se le endilgan criminalmente, valiéndose de la infundada circunstancia de haber quedado indebidamente liquidado, como el irrefutable conocimiento de las imprecisas interpretaciones que se pretendió dar a las normas convencionales para alcanzar la declaratoria de pagos carentes de sustento, ya que además de contar con el arrojo de librar poderes de forma irresponsable, estaba al tanto de que los conceptos que se discutirían en esos trámites judiciales se apartaban de la sensatez, de los principios fundamentales que gobiernan los derechos laborales y de la equidad que se enfila a proteger tanto al operario como a la empresa, hallazgos que reflejan la ilegalidad en los actos por medio de los cuales se materializaron las irregulares erogaciones materia de reproche, que imponen sancionar penalmente al señor CAICEDO ORTIZ.

**JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**.

El compromiso de este procesado radica en las reclamaciones efectuadas por intermedio de los profesionales del derecho IVONNE URICOECHEA VENGOECHEA tendiente a la reliquidación general y brazos caídos, generándose el pago de $11´000.000,00; al doctor LUIS GUTIÉRREZ ALFARO el

reclamo de reliquidación de primas, que le mereció el reconocimiento de $20´000.000,00, afirmando que los abogados le daban el poder a otros, pero esos fueron los únicos pagos que recibió; todo ello acorde a la asesoría que éstos le ofrecieron frente a la procedencia de las solicitudes, agregando que consideró que su liquidación estaba muy baja; respecto del abogado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO recuerda que lo conoció pero nunca le entregó poder, que éste trabajaba con GUTIÉRREZ ALFARO; mostrándose ajeno al acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que se dispuso el pago en su favor del monto de $45´300.000,00 relacionado con prima sobre prima, por gestión del doctor COLLANTE PACHECO.

En cuanto a otros pagos de los que aparece agraciado, a los que al parecer acudió representado por los abogados ORLANDO SANTOS CORSO y VÍCTOR GALLARDO ROSILLO, dice no conocer al primero ni haberle extendido poder, pero sí facultó al segundo para actuar en su nombre aunque no le ha entregado dinero por su gestión; declarándose inocente de los señalamientos efectuados por la Fiscalía.

Acorde a lo mencionado en pasajes preliminares de cara a la improcedencia de los renglones reclamados, se aprecia que dentro de los demandados por el mencionado ciudadano se encuentran los de prima sobre prima y reliquidación de prima de antigüedad, respecto de los cuales se halla identificada su improcedencia; a lo que se suma el hecho de que acorde al estudio 357744/357745 FGN-CTI-DNI-N-20 de 21 de agosto de 2007, al examinar los pagos efectuados a los beneficiarios del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, se advirtió que las estimaciones efectuadas por la empresa portuaria al término de la relación laboral respecto de las prestaciones sociales y base de la mesada pensional hallaban justeza con los cálculos realizados por la Fiscalía en ese escrutinio, aspectos que denotan la inequívoca decisión del procesado de asirse de manera irregular a las variaciones de sus percepciones dinerarias, cometido para el cual se valió de los servicios de los togados acabados de señalar encargándoles deprecaciones que habían sido debidamente solventadas por su otrora empleadora en vigencia de la relación laboral, luego las aspiraciones del señor SÁNCHEZ VERDOOREN, resultan abiertamente ilícitas e indicadoras del irregular actuar del procesado, a quien le asiste responsabilidad subjetiva a título penal en las resultas que reprocha la Fiscalía y se le impartirá condena por ellas.

**JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**.

Este ciudadano es citado a causa criminal por la solicitud elevada ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito por el concepto de "prima sobre prima", pretensión que, se itera, contraría el espíritu de la norma que consagra la prima semestral y la forma de preciarla. A lo anterior se agrega que en el informe FGN-CTI-365766 de 12 de octubre de 2007, se identificó que el señor PÉREZ OJEDA percibió en sus prestaciones sociales monto por fuera de lo debido en importe de $9.333,80; circunstancia que sustraía la procedencia de cualquier deprecación que por vía administrativa y/o judicial se pretendiera.

En su injurada adujo que demandó una reliquidación porque a su juicio ésta no había sido debidamente tasada, encomendando para ello al doctor

COLLANTE PACHECO, de lo que le entregó $20´000.000,00, único que le entregó dinero por su representación; extendiéndole poder a otro abogado cuyo nombre no recuerda; al interrogarlo acerca del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, en la que fue acordado pago en su favor en importe de $98´600.000,00 por el renglón de prima sobre prima, dijo no saber de ese asunto y menos de que la suma que fue entregada al profesional del derecho ascendía a ese monto.

A lo anterior se adicionan las solicitudes administrativas tendientes a que se reconociera el pago de reliquidación por trienio o prima de antigüedad, subsidio de transporte, interés del 24% sobre el valor de las cesantías al no haber sido pagadas oportunamente y salarios moratorios, reclamos de los que obran pruebas en la hoja de vida pensional aportada por la UGPP en etapa de juicio; donde también yace copia de la providencia judicial de 27 de junio de 1997, por medio de la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla condenó a la empresa portuaria a la reliquidación y pago de las sumas resultantes de la inclusión de los días descontados por huelga, en la que también se dispuso el reajuste de la pensión del señor PÉREZ OJEDA, donde lo representó el abogado CARLOS LUNA NOGUERA.

El discernimiento mostrado por el procesado de cara al fundamento de las causas laborales adelantadas en su favor, así como la reiterada intención de concretar el reconocimiento de sumas dinerarias sin que concurriera razón para ello, se erigen como elementos concluyentes de que actuó con plena conciencia de que aun cuando la empresa al término de la relación laboral garantizó a cabalidad el pago de las acreencias prestacionales y pensionales, su trasado fue el de acceder al incremento patrimonial reprochado, donde se encuentra consolidado el dolo y el adeudo criminal del señor PÉREZ OJEDA.

**JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**.

Vinculado a la causa mediante declaratoria de persona ausente, se le atribuye el hecho de alcanzar por vía judicial el reconocimiento de diferencia de vacaciones de los años 1992 y 1993, mediante sentencia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla adiada el 19 de diciembre de 1996, renglón respecto del que se corroboró, a partir de la documental aperada a la causa, había sido debidamente reconocido y pagado cuando subsistía el vínculo laboral, así como debidamente valorado para efectos de establecer sus prestaciones sociales; reclamo que se ubica en el campo de la improcedencia partiendo del hecho que la empresa portuaria solventó debidamente este renglón, por lo que su declaratoria se erige como el doble pago del mismo concepto.

Frente al conocimiento que pudiere haber ostentado este ciudadano respecto de la improcedencia del reclamo, la reproducción de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla fechada el 17 de enero de 1997, en la que se condena a la demandada a la reliquidación de prestaciones sociales y primas de servicios de los años 1990 a 1992, "prima sobre prima" de la que obra prueba de su existencia en el expediente, brinda un indicio claro y razonable de que el procesado intentó por diversas vías acceder al incremento de sus percepciones dinerarias, pues el concepto reclamado en el último asunto mencionado no

contaba con consagración normativa y, como se ha dicho con insistencia, se trataba de una deleznable forma de interpretar la norma convencional que contraría los principios generales del derecho, máxime cuando se evidencian varias reclamaciones administrativas tendientes a alcanzar reliquidaciones por subsidio de transporte, permiso sindical, prima sobre prima y recargo para estibador.

En esta medida, se estima que el señor MOSQUERA DOMÍNGUEZ estaba al tanto de que FONCOLPUERTOS, para cuando se produjeron comentadas reclamaciones se hallaba desprovisto de la defensa que el protuberante volumen de peticiones administrativas y reclamaciones judiciales demandaba, circunstancia que le garantizaba en alto grado que se accedería a sus desatinadas pretensiones, aprovechando el estado de congestión por el que atravesaba la accionada, trazado que claramente se concretó con el pago de las sumas contenidas en la sentencia imputada, y que de paso aporta elemento consolidador del dolo y de la responsabilidad subjetiva del sindicado, por lo que el Despacho procederá a imponer la correspondiente sanción.

**ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**.

Finalmente, el compromiso de este abogado se consolida en el adelantamiento de las causas laborales ante los distintos estrados judiciales laborales de Barranquilla en representación de los extrabajadores procesados por el concepto de "prima sobre prima", uniformes y calzado y otras erogaciones a las que no había lugar, atendiendo que, o se habían apreciado debidamente para cuando se dio la terminación de la relación laboral, o se trataba de conceptos que carecían de fundamento jurídico y fáctico, trámites de los que devino condenada en contra de la entidad portuaria; siendo posteriormente parte de la materia de conciliación en el acta 050 de 30 de abril de 1998, imponiéndose adicionalmente sanción moratoria; aspectos que envuelven al referido pacto en la ilicitud, como se ha referido de forma insistente a en este proveído.

Este procesado, quien pese a que fue vinculado a la investigación mediante declaratoria de persona ausente, acudió a juicio y aportó su versión sobre los eventos investigados en diligencia de audiencia pública, oportunidad en la que manifestó que en ningún momento se asoció con sus poderdantes o con los funcionarios judiciales y directivos de la empresa portuaria con el fin de alcanzar irregularmente las condenas que se impusieron en los procesos laborales identificados a lo largo de esta decisión, admitiendo en aquella salida procesal que su responsabilidad radica en que en su sentir no se asesoró debidamente al momento de iniciar las demandas y someter las correspondientes condenas a la posterior conciliación, contemplando que, inclusive, podría aceptar los cargos en el sentido de que su actuar se dio como interviniente, mas no como determinador, manifestación frente a la cual no se accedió por hallarse condicionada y disímil al señalamiento de la Fiscalía.

Anota que se iniciaron las reclamaciones por solicitud de los extrabajadores, quienes acudieron a su oficina solicitando se demandara la diferencia de prima de servicios, habida consideración de que en varios de los casos revisados se hallaron inconsistencias en su liquidación, que se hallaba

consagrado en el precepto 102 de la CCT, anotando que nada tiene que ver con la mal llamada "prima sobre prima". Frente al grado jurisdiccional de consulta que se endilga por la Fiscalía como presuntamente irregular, comenta que muchos de los Jueces tenían el criterio de no remitir la sentencia para que se surtiera dicha revisión y considera que no es un tema del que se derive compromiso criminal.

Aduce desconocer los tópicos a partir de los que la Fiscalía arribó al hecho de que existieron dobles pagos de los conceptos rogados en las demandas, argumentando en cuanto a la presunta deficiencia de explicitud advertida dentro de los escritos demandatorios, que dentro de éstos fueron aportadas las pruebas que se requerían para documentar el paso de los demandantes por la empresa portuaria y el texto normativo invocado para que se estudiaran las pretensiones; en cuanto al pago de los rubros declarados en las sentencias y el acta de conciliación, comenta que estos fueron recibidos parcialmente, y al enterarse de que podían no contar con el respaldo lícito para su amortización, desistió de proseguir con las solicitudes de pago para entonces pendientes por entregar, atendiendo que en la ciudad de Barranquilla se empezó a rumorar que las demandas que se habían adelantado presentaban irregularidades, al no haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta, de donde se desprende que la tentativa se dio por su desistimiento en proseguir con el cobro de las sumas ordenas judicialmente.

Agrega que el pago de honorarios se pactó a cuota *litis*, al 50 % de las resultas, a lo que se descontaba previamente la comisión que se debía entregar a la Fiduciaria del Pacífico para el cambio de los bonos; para cuando realizó las reclamaciones desconocía que sus poderdantes hubieren efectuado el solicitudes del mismo renglón por otra vía.

Refiere que la "prima sobre prima" no se trataba de una solicitud que contrariaba las normas convencionales, ya que remitía a la reamortización derivada de la indebida tasación de las primas semestrales atribuible a la empresa portuaria, situación que dio lugar a la presentación de las consabidas demandas laborales en las que la autoridad competente, previo escrutinio de las pretensiones y el fundamento invocado, arribó a la conclusión de que efectivamente les asistía derecho para reclamar las reliquidaciones pretendidas.

Los aspectos a destacar de las afirmaciones del acusado, se concretan en el grado de instrucción que le otorgaba el ser profesional del derecho, el indiscutido acceso que tuvo al texto de las normas convencionales previo y paralelamente al momento en que se adelantaron las demandas ante las autoridades judiciales de Barranquilla, y la misma explicitud de los conceptos en el pacto colectivo, que llevan a predicar que ninguna justificación yace para que por vías judicial y administrativa se aspirara al reconocimiento de los conceptos arriba identificados, pues ninguna ambigüedad se halla en la norma que establece la forma en que se deben liquidar las primas semestrales o el precepto 89 colectivo que fija la definición de salario y, consecuentemente, la base de liquidación de la mesada pensional, dentro del que se contempla que estará compuesto por todo aquello cuanto perciba el trabajador como directa retribución del servicio y constituya salario, categoría dentro de la que no se encuentran los uniformes y calzado, a partir de los que en algunas de las causas laborales

se alcanzó la variación de la mesada pensional; renglón que fue analizado con suficiencia respecto de su espíritu e impacto frente al salario, concluyéndose que se trata de un beneficio que no hace parte de lo entregado al trabajador por la labor desarrollada, sino con el fin de brindar un apoyo para la prestación de la misma, por manera que su apreciación para los fines pretendidos por los procesados carece de afianzamiento.

A partir de las estimaciones efectuadas se arriba a la conclusión de que aunque el enjuiciado proponga como circunstancia dirigida a diluir o morigerar su responsabilidad el hecho de no haber solicitado asesoría especializada respecto de la procedencia de los conceptos que hicieron parte de las pretensiones de las demandas, lo cierto es que dentro de la normativa invocada para acceder a las condenas dinerarias en favor de sus prohijados no se halla aspecto que estuviera sometido a reserva, que implicara meditaciones especializadas para entender con claridad lo pretendido con las normas convencionales, o que tuviese pasajes oscuros que dificultaran su interpretación; pues aunque se trata de normas especiales que consagraban mayores beneficios para sus destinatarios, se orientaban por los mismos principios superiores y su consagración convencional no acompasa variación ostensible frente al texto legal, y a pesar de ser persona académicamente preparada en asuntos litigiosos con años de ejercicio pretende mostrarse incauto frente a los plurimentados preceptos.

La ajenidad que pretende mostrar el señor COLLANTE PACHECO frente a los eventos investigados carece de la relevancia que éste le pretende asignar, comoquiera que de una lectura desprevenida del texto de la norma emerge diáfano su trasfondo y sentido, gozando de claridad y precisión frente a lo que se quiso enunciar y proteger, luego la posición del sindicado en torno de su compromiso personal, que persigue disgregar con la tesis de haber actuado de buena fe y convencido de que se estaba ante reclamos legítimos, no se compadece con lo probado al interior de la causa, pues de la consabida condición de profesional del derecho y persona instruida en el litigio se desprende la inequívoca obligación de cimentar legalmente sus formulaciones y armonizarlas con los eventos que se reclaman transgredidos por la demandada; aspecto que muestra claras deficiencias en los trámites que se examinan en este asunto y que ameritan, al constituirse como una transgresión a la preceptiva penal concretada en la intencional omisión del abogado, imponer la correspondiente sanción.

Concretada la responsabilidad subjetiva de la totalidad de los procesados, el Juzgado, a manera de estimaciones generales, encuentra demostrado que los extrabajadores convocados a reproche criminal dirigieron su actuar a que se reconocieran prebendas laborales, prestacionales y pensionales, que, en su orden, fueron debidamente atendidas por la empresa portuaria al momento de finalizar la relación laboral con la liquidación de la empresa Puertos de Colombia; y en los casos en que se adelantó reclamo al haberse estimado de forma parcial determinado renglón, quien ostentaba el derecho a demandar su reconocimiento extendió las pretensiones a la ilegalidad rogando pagos respecto de períodos de tiempo indebidos o por conceptos inexistentes.

La amortización de las percepciones dinerarias a que tenían derecho los procesados fueron apropiadamente valoradas y enlistadas por la empresa

dentro del pago de las prestaciones sociales tasadas en el mismo instante histórico en que se adelantaba la liquidación de la entidad, justeza que también se aplicó a la base de liquidación de las respectivas mesadas pensionales, salvo algunos los específicos plenamente individualizados en precedencia; circunstancias de las que se concluye que las resultas lesivas identificadas por la Fiscalía dentro del pliego de cargos como transgresoras del tipo penal de peculado por apropiación ostentan el carácter punible atribuido, al haberse dado en detrimento de los recursos públicos y con la plena conciencia de quienes acudieron a su reconocimiento de estar accionando en ausencia de respaldo para ello.

Sin embargo, se recuerda que aunque la instructora tuvo pleno conocimiento de las reclamaciones judiciales y administrativas impulsadas por los enjuiciados en procura de sus irregulares pretensiones, detalladas desde los albores de la actuación, fue omitida la debida adecuación de algunos de los eventos, obviándose la introducción del concurso de conductas o calificándose algunos eventos como consumados cuando en realidad se trataba de tentados, lo cual además de generar trazas de impunidad respecto de la justeza en el señalamiento criminal, dio al traste con la vigencia de la acción penal de algunas de las conductas que, integradas dentro del presunto delito de peculado por apropiación agravado que se le atribuyera a cada uno de los convocados en las variables detalladas, se trataba de eventos independientes consolidadores de reatos de peculado por apropiación atenuado y simple, modalidades que se dieron en estado de consumación o en grado de tentativa, viéndose afectados por la prescripción en fase investigativa como arriba se decantó.

La totalidad de los procesados conocían meridianamente el contenido y aplicación de las normas convencionales, pues en desarrollo de su labor cotidiana estaban atentos y cuidadosos del reconocimiento y pago de los beneficios inherentes a los cargos que particularmente desempeñaban; de los que con ocasión de la extensión de su jornada laboral se debían reclamar o aquellos que en virtud del manejo de determinadas operaciones se debían tasar de forma deferente en su salario; y resulta insensato acoger la postura de que un trabajador que laboraba por fuera de su horario ordinario no aspirara a percibir el recargo por horas extras; o que manejando sustancias nocivas desconociera o no reclamara el recargo que se tenía convencionalmente estatuido para estos oficios, cuando precisamente estas especiales prerrogativas se consagraban para que quien tuviera derecho a ellas las conociera y percibiera.

Lo anteriormente esbozado encuentra apoyo en el dicho vertido, por ejemplo, por el doctor WILLIAM HERNÁNDEZ CARRILLO, quien se recuerda, se desempeñó como gerente del puerto marítimo y fluvial de Barranquilla y obras de conservación de Bocas de Ceniza para la época en que se agotaba su proceso liquidatorio, informando en su testimonio que con frecuencia el texto de las Convenciones Colectivas de Trabajo eran socializados entre el personal administrativo del puerto y los trabajadores y, en caso de presentarse dudas respecto de los alcances de determinada prerrogativa, se procedía a elevar consulta ante la oficina de relaciones industriales tendiente a dilucidarla, circunstancia que fue corroborada por algunos de los procesados en ejercicio de su defensa material; luego no se puede dar por hecho de que las personas que acudieron al reclamo de los derechos laborales lo hacían llanamente porque los abogados o los demás

extrabajadores les indicaron que debían accionar en ese sentido, pues resulta insensato que después de laborar al servicio del terminal por varios años y percibir salarios periódicamente con los correspondientes adeudos especiales de cada cargo, se pretenda justificar las indebidas reclamaciones en el hecho de que no se tenía claridad en torno de los derechos que convencionalmente les asistían, lo que patentemente se trató del propósito de enmascarar su responsabilidad en el presunto desconocimiento de la Ley, postura que para el Juzgado carece por completo de apoyo natural.

Aunque los enjuiciados pretendan escudar su compromiso criminal en la impericia mostrada de cara a la normatividad que regía las relaciones con la empresa, haber sido indebidamente asesorados y/o asaltados en su buena fe por los abogados, así como haber actuado con incuria de cara a las reclamaciones endilgadas dentro del compromiso penal, lo cierto es que acorde al examen precedente esas exculpaciones en manera alguna desvirtúan la trascendencia del reproche sindicado por la Fiscalía, pues la ajenidad de responsabilidad que plantean palidece ante las pruebas glosadas al expediente, a partir de las que se derruye la presunción de inocencia y se consolida el compromiso de los convocados a reproche penal, sin que emerja duda de que eran conocedores de que como extrabajadores de la empresa portuaria no tenían derecho a la reamortización de sus prestaciones sociales y mesada pensional a partir de la presunta inobservancia atribuible a la empleadora, mucho más cuando conocían las cifras dinerarias y los conceptos que mes tras mes les fueron pagados y apreciados en la liquidación final.

Los aspectos identificados permiten zanjar las tramas consolidadoras de la responsabilidad de los extrabajadores, quienes pretendieron mostrarse ajenos e ignorantes del contexto que se dio en la presentación de las múltiples solicitudes para acceder de forma irregular a los recursos públicos, valiéndose del momento propicio en el que la empresa en liquidación se hallaba desprovista de defensa para postular las deleznables pretensiones, alcanzando el consabido provecho dinerario; comportamiento que resulta reprochable en mayor grado respecto del doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO y de aquellos extrabajadores que ocuparon cargos dentro de los sindicatos de trabajadores, quienes al igual que los demás exoperarios pretendieron mostrarse distantes al compromiso penal a partir del presunto desconocimiento del alcance de las normas convencionales, así como en el hecho de que, según el dicho del togado, fueron los trabajadores quienes se acercaron a su oficina profesional solicitando el reclamo de conceptos previamente concebidos, postura que además de no revestirse de credibilidad, se enfila a atribuir a los extrabajadores el escrutinio de perspectivas judiciales y postulaciones de orden legal que aunque premeditadas eran de entero resorte del abogado que presentaría la demanda ante la autoridad judicial, comoquiera que era éste quien a partir de su especial conocimiento acometería la defensa de los derechos de los demandantes.

Estas precisiones encausan el examen probatorio a afirmar que tanto los otrora trabajadores de la portuaria como los abogados que los representaron tenían ciencia de que las pretensiones plasmadas en las demandas y reclamaciones administrativas contrariaban los derroteros convencionales y principios generales del derecho, que quisieron consolidar

los conocidos resultados merecedores del reproche penal, definidos en el pago de sumas declaradas en las providencias judiciales, por hacer referencia a los casos en que dicho desembolso llegó a consumación, y aun siendo conscientes de que con sus pretensiones lesionarían la administración pública, dirigieron su decidido actuar a la efectiva consumación de los propósitos delictuales; deliberaciones que reafirman el compromiso atribuido por la Fiscalía y demandan la necesidad de imponer las sanciones penales que más adelante se graduarán.

Los planteamientos esgrimidos dejan sin fundamento la tesis del doctor HERNÁN SÁNCHEZ BUSTILLO, representante del procesado VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, dirigido a, de alguna forma, demeritar las evaluaciones de la Fiscalía, dando por válidos los argumentos de los Estrados Judiciales Laborales de Barranquilla que, según su dicho, no fueron tenidos en cuenta por la agencia Fiscal en el calificatorio; posición que no pasa de ser una afirmación desprovista de puntos fundamentados de controversia, pues se contrae al presunto evento de que la persecutora desconoció la postura del Juzgado Laboral, sin que extienda su alegato a refutar con idoneidad las razones por las que considera sí tenía derecho a que se le reconocieran los derechos judicialmente declarados, máxime cuando el señalamiento que se efectúa a su prohijado remite al reconocimiento de días descontados por huelga, concepto del que ya se dijo en precedencia se trata de una expectativa totalmente ilegal.

Finalmente, cabe referir que con fundamento en las conocidas calidades profesionales y personales del togado COLLANTE PACHECHO, emerge inaceptable la aseveración de que fue hasta cuando se conoció en el ambiente general la presunta ilicitud de las reclamaciones elevadas contra Puertos de Colombia o FONCOLPUERTOS cuando declinó de proseguir con el reclamo de las condenas alcanzadas por vía judicial, pues su condición de profesional del derecho le habría permitido evaluar previamente la ilegalidad de los trámites que acometería en favor de extrabajadores; circunstancia diferente es que una vez conocido a nivel territorial o nacional el gran desfalco detectado, como se ilustrará más adelante, y el interés mostrado por algunas autoridades para emprender las investigaciones de rigor, dejara de insistir en los cobros respectivos para, como aviene lógico, evitar ser sujeto pasivo de requerimientos posteriores, salir airoso de aquellos procesos que se incoaran en su contra u alcanzar una situación punitiva menos adversa a sus intereses, como, por ejemplo, lo confirma el hecho de que hubiere condicionado la aceptación de responsabilidad a que se degradara el nivel de participación de determinador que la Fiscalía le enrostro al de interviniente.

En lo que atañe a la lesividad de los comportamientos delictivos de los acriminados, se estima que, como se precisó en apartes precedentes, además de típicos son abiertamente antijurídicos, pues resultan atentatorios del bien jurídicamente tutelado conocido como la administración pública.

Ese valor superior amparado por el ordenamiento normativo en lo que toca al delito de peculado por apropiación, es la administración pública, acerca del cual la doctrina ha decantado que no sólo implica las funciones relativas a la rama ejecutiva del poder público, sino que concierne a las otras, incluso los órganos de control. Es así como se ha sostenido que *"el concepto de administración publica comprende toda la actividad funcional del Estado;*

*en ella quedan cobijadas las tres funciones fundamentales del Estado: la legislativa, la jurisdiccional y la denominada actividad jurídica que comprende específicamente la actividad puramente administrativa"*[130]*. En el mismo sentido se ha decantado lo que comprende dicho bien jurídico, cuando se manifiesta que "se entiende por administración pública toda actividad cumplida por quienes están encargados de poner en funcionamiento al Estado para el cumplimiento de sus fines, funciones sometidas a una jerarquía en todos sus órganos"*[131].

Frente al objeto jurídico de protección específico del peculado por apropiación el tratadista ya mencionado ANTONIO JOSE CANCINO sostiene: "*en el delito de peculado propiamente dicho el objeto jurídico de la tutela penal es el interés del Estado en la probidad y corrección del funcionario (o servidor público) y el interés de la defensa de los bienes patrimoniales de la administración pública"*[132].

La legislación nacional en el artículo 11 del CP establece que "*Para que una conducta típica sea punible requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley*". Por tal razón la conducta debe no sólo contradecir el ordenamiento jurídico penal, sino que también debe lesionar o poner en peligro efectivamente el alto valor protegido por la Ley.

De cara al caso concreto, se observa que el propósito de los acusados, desde las distintas clases de actuaciones que han sido individualizadas en apartes preliminares, se constituyen en actos inequívocamente orientados a alcanzar el reconocimiento y pago irregular de acreencias laborales improcedentes en derecho y a generar un sistemático desfalco al erario, generando también una lesión a la administración pública al afectar el interés del Estado en la probidad y corrección de los funcionarios que concurrieron en la confección de tales actos, vulnerando asimismo el desarrollo estatal de las funciones públicas de administración, custodia o tenencia de los bienes oficiales. Por ello, es claro que los acusados con su actividad no sólo contradijeron el ordenamiento jurídico penal, sino que también lesionaron el bien jurídico tutelado, sin que mediara justa causa para ello.

En esa medida, el Despacho encuentra acreditado que las conductas descritas son objetivamente típicas y antijurídicas, y corresponden al punible de peculado por apropiación agravado consumado y tentado, de acuerdo con el canon 397 primigenio inciso 2° de la actual codificación represora, y el morigerante descrito en el artículo 27 de la misma obra, dado que en razón de los comportamientos perpetrados por los acriminados como extrabajadores portuarios y representante judicial de los mismos, se concretó la afectación a los recursos públicos en cuantía superior a 200 SMLMV, configurando ello una agresión efectiva contra el bien jurídico tutelado de la administración pública.

---

[130] BERNAL PINZON, Jesús. Delitos contra la Administración Pública. Editorial Temis, Bogotá, 1965, pág. 1

[131] FRANCISCO JOSE FERRERA, Delitos contra la Administración Pública. 3 ed., Editorial Temis, Bogotá, 1995.

[132] CANCINO, Antonio José. Lecciones de derecho penal parte especial. editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, págs. 93-94.

Del comprobado manejo que ostentaban los procesados respecto de las normas convencionales y la clara intención mostrada de favorecerse económicamente de las resultas de sus reclamaciones judiciales y administrativas se ultima que las exculpaciones presentadas por algunos de éstos y por sus representantes defensivos tendientes a mostrar la presunta ajenidad de cara a los resultados lesivos que convocan la presente causa penal no son de recibo para el Juzgado, ya que en principio, y como se ha anotado con insistencia, el hecho de que los extrabajadores desempeñaran a periódicamente labores generadoras de percepciones dinerarias que implicaban reajustes directamente relacionados con las normas convencionales, muestran incoherencia al pretender mostrar ajenidad con beneficios pecuniarios, cuando en vigencia de la relación laboral se pagaban habitualmente y era de entero manejo de los extrabajadores su tasación en la nómina; ciencia que se hace extensiva en razón de su condición personal y profesional al abogado que acometió el reclamo de las presuntas inobservancias de la empresa en representación de los extrabajadores.

Estas aseveraciones encuentran respaldo probatorio en los distintos informes presentados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y los datos aportados por la UGPP, en donde se aprecia que, salvo algunos casos puntuales, en donde pese a hallarse imprecisiones en la estimación efectuada por la empresa los reclamantes desbordaron lo que legalmente correspondía, las prestaciones sociales de los extrabajadores se encontraban debidamente tasadas, identificándose, inclusive, eventos en los que fueron reconocidos montos por encima de lo debido; hallazgos que conducen a reafirmar que ninguna procedencia asistía las aspiraciones de quienes se citan a reproche criminal.

Por manera que el Despacho arriba al convencimiento exigido por el ordenamiento jurídico acerca de que los encausados desplegaron las actividades típicas y antijurídicas peculadoras aquí analizadas con dolo, es decir, con pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento y con entera voluntad de desarrollar las conductas y conquistar la finalidad delictual y sancionada por la Ley previamente propuesta.

Asimismo, fortalece estas conclusiones el hecho que se extrae del comportamiento de los procesados así como del momento y contexto histórico en el cual, en cuanto oportunidad y escenario propicio, fue usado por los mismos para perpetrar la conducta que se examina[133], puesto que aviene inhesitable que las pretensiones formuladas se gestaron en medio de masivos cobros irregulares por parte de abogados y los extrabajadores, quienes de manera generalizada y en vista de la liquidación de la Empresa Portuaria, del desgreño administrativo de la misma y su pronta desaparición, entablaron altísima cantidad de reclamaciones, aún sin justificación alguna, como en los eventos que ocupan la presente causa, amparados en interpretaciones amañadas de Convenciones Colectivas de Trabajo, con de una u otra forma concurrencia de Jueces y funcionarios de esa entidad estatal.

[133] La Sala de Decisión Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión de fondo emitida el 09 de mayo de 2012, en el asunto 11001310104720090003 69, con ponencia de la H. M. Dra. Esperanza Najar Moreno, señaló que el estado de corrupción que se generó y que campeaba por entonces en Foncolpuertos, en lo tocante a la liquidación de la empresa nacional portuaria, constituye un hecho notorio conocido por todos, y no un simple rumor público.

Ese hecho es abiertamente conocido en la historia de este país, y ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia nacional, como lo cita y precisa la Sala de Casación Penal de la H. de la Corte Suprema de Justicia en providencia emitida el 01 de abril de 2009, en el radicado No. 28128, cuando adujo:

> *"…se investiga a servidores públicos, abogados y trabajadores de Puertos de Colombia, resultando palmario en tales asuntos que el fondo de liquidación de dicha entidad se convirtió en la caja menor de personas que se propusieron obtener retribuciones económicas que en estricto derecho no les correspondía*[134].
>
> *Para el efecto y en aras de la obtención de actos administrativos o fallos judiciales, abogados y trabajadores presentaron peticiones y demandas que a la postre, y en muchos asuntos con la intervención de servidores públicos, le significó a Foncolpuertos egresos millonarios que nunca debió poner a disposición de los defraudadores…".*

También dijo en otra decisión:

> *"…Un tal modus operandi se ajusta a la perfección a aquel que de años atrás ha caracterizado uno de los episodios de corrupción más deplorables, como lo ha sido la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, a través del fondo especial –Foncolpuertos- que el Ejecutivo creó para esos efectos, y que puso en cabeza de la Nación la asunción del costo del complejo procedimiento.*
>
> *Recuérdese –tal como lo ha precisado la Sala en abundantes pronunciamientos emitidos en sede de casación*[135]*- la manera en que operó la masiva defraudación a los bienes estatales, cuando los ex trabajadores portuarios -a través de un bien montado contubernio en el que participaron abogados litigantes y, de manera decisiva, algunos jueces laborales- se hicieron a multimillonarias e ilegales prestaciones, aprovechando así, no solamente el desorden administrativo imperante en todo el proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, sino la participación de*

---

[134] La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha proferido sentencias y autos de casación, y como juez de primera y segunda instancia por hechos referidos a la defraudación de Foncolpuertos por delitos de *peculado*, *prevaricato*, *fraude procesal*, *estafa*, *falsedad*, *concierto para delinquir* y otros punibles, así: 07/11/2001, radicación 18882; 12/05/2000, radicación 16863; 25/09/2001, radicación 18021; 28/11/2002, radicación 17022; 16/12/2002, radicación 19095; 21/01/2003, radicación 19489; 06/03/2003, radicación 18021; 23/04/2003, radicación 18021; 27/05/2003, radicación 18666; 26/11/2003, radicación 19630; 09/02/2005, radicación 23153; 04/05/2005, radicación 23550; 15/11/2005, radicación 24466; 26/01/2006, radicación 20647; 18/05/2006, radicación 23350; 01/06/2006, radicación 21428; 16/06/2006, radicación 24746; 16/06/2006, radicación 24145; 16/06/2006, radicación 23954; 22/06/2006, radicación 24379; 29/06/2006, radicación 23350; 13/07/2006, radicación 25159; 13/07/2006, radicación 25617; 27/07/2006, radicación 25615; 12/09/2006, radicación 25362; 26/09/2006, radicación 26072; 05/10/2006, radicación 25290; 12/10/2006, radicación 26046; 19/10/2006, radicación 26221; 19/10/2006, radicación 25804; 09/11/2006, radicación 26198; 20/11/2006, radicación 25615; 23/11/2006, radicación 26300; 23/11/2006, radicación 26091; 01/02/2007 radicación 26198; 28/02/2007, radicación 23564; 28/02/2007, radicación 25475; 07/03/2007, radicación 23979; 21/03/2007, radicación 26695; 27/03/2007, radicación 27124; 09/04/2007, radicación 27124; 11/04/2007, radicación 25612; 20/04/2007, radicación 27124; 27/04/2007, radicación 27124; 03/05/2007, radicación 27124; 06/06/2007, radicación 25661; 27/06/2007, radicación 27393; 01/08/2007, radicación 27598; 01/08/2007, radicación 25263; 15/08/2007, radicación 25800; 06/09/2007, radicación 27092; 28/11/2007, radicación 24905; 28/11/2007, radicación 27225; 30/01/2008, radicación 25043; 20/02/2008, radicación 27425; 29/02/2008, radicación 29222; 06/03/2008, radicación 29317, entre otros asuntos.

[135] Entre otras muchas, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 3 de diciembre de 2009, radicación No. 30816.

*funcionarios judiciales corruptos que hicieron caso omiso de la ostensible improcedencia de las demandas instauradas.*

*El anterior proceder ha constituido lugar común en las numerosas defraudaciones a los bienes del Estado con ocasión de las demandas dirigidas contra Foncolpuertos, a tal punto que, a través de incontables pronunciamientos jurisprudenciales, se ha elevado a una verdadera regla de experiencia, la cual fue aplicada a varias de las también numerosas sentencias condenatorias…*[136]"

Es claro que los acriminados utilizaron este contexto en cuanto oportunidad y escenario propicio para perpetrar las conductas que se examinan[137]. En efecto, se aprecia que estaban al tanto de esta situación, pues en algunas de sus salidas procesales informaron haber resuelto accionar en contra de la empresa al enterarse de que compañeros suyos estaban reclamando renglones a los que presuntamente tenían derecho, recordando que aquellos les aconsejaron adelantar las deprecaciones judiciales que se les imputan criminalmente, lo cual los ubica en la advertida situación de embate del que estaba siendo víctima la entidad liquidada y hace emerger a la luz de los principios que gobiernan la sana crítica, la persuasión racional y la valoración probatoria el indicio de oportunidad grave contra los acriminados, máxime cuando sus actuaciones se enderezaron a lograr efectos dinerarios ilícitos, cuando al interior de FONCOLPUERTOS era conocida la ligereza con que sus dependencias internas emitían conceptos en torno de las presuntas conductas delictivas cometidas con las reclamaciones y su acogimiento, la falta de defensa integral de la Nación, y el bajo nivel de importancia dado al control respecto de las peticiones formuladas y de los conceptos estimados por los Jueces Laborales del Circuito, como se deriva del material suasorio aquí acopiado.

Corrobora lo expuesto el conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del "escándalo" de la referida Empresa Portuaria, el cual sin duda alguna era sabido por abogados y exempleados, así como por la comunidad nacional, percibiéndose que los mismos trabajadores junto con los abogados ante su eminente liquidación, utilizaran en provecho propio el momento propicio que se brindaba y que les garantizaría la prosperidad de sus pretensiones, por más descabellados que fueran sus fundamentos e ilícita su finalidad, y el pago de las mismas, mucho más cuando en el ambiente se difundía la emisión de sentencias y actos administrativos indiscriminados, o conciliaciones, inclusive falsas, por factores inviables en derecho o rubros no explicitados ni debidamente calculados, favorables a los pedimentos de los exempleados, de forma que sin importar el concepto que se alegara, se obtendrían pingües valores dinerarios, situación que, sin duda alguna, fue robustecida por la falta de atención oportuna de los procesos laborales, la deficiente defensa de los intereses de la Nación, el desparpajo administrativo de esa entidad y el acceder sin óbice legal alguno a los pedimentos.

---

[136] Radicado 32552, sentencia de 22 de septiembre de 2010. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.

[137] La Sala de Decisión Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión de fondo emitida el 09 de mayo de 2012, en el asunto 11001310104720090003 69, con ponencia de la H. M. Dra. Esperanza Najar Moreno, señaló que el estado de corrupción que se generó y que campeaba por entonces en Foncolpuertos, en lo tocante a la liquidación de la empresa nacional portuaria, constituye un hecho notorio conocido por todos, y no un simple rumor público.

Así, en ese marco de acontecimientos, la realidad brindaba la oportunidad necesaria y requerida para que los acusados en concurso con sus apoderados, intentaran lo propio en su beneficio. Por ello, los hechos acreditados permiten demostrar que en ese contexto de desfalco de FONCOLPUERTOS los acriminados adelantaron las acciones que estaban a su alcance y disposición para concretar el reconocimiento y pago de procesos judiciales que a posterior se agruparon en el acta conciliatoria, con el proferimiento de las respectivas resoluciones administrativas obteniéndose los beneficios dinerarios a cargo de la Nación.

Sobre el particular, en sentencia del 12 de mayo de 2010, con ponencia de la H. M. Dra. María del Rosario González de Lemos, en el asunto No. 29799, el máximo órgano en lo penal, reitera[138]:

> "… *hacía por lo menos dos años (noviembre de 1996) desde cuando los diversos medios de comunicación escrita y oral de Colombia venían registrando en forma profusa noticias entorno a la millonaria defraudación, precisamente con ocasión del masivo cobro irregular de obligaciones laborales ya pagadas o reliquidaciones infundadas, que se sustentaron en resoluciones espurias, mediante la connivencia entre ex trabajadores, abogados litigantes quienes los representaban, así como apoderados de la empresa, ex directivos de Colpuertos, directivos de Foncolpuertos y lo más importante, funcionarios judiciales*…"

Todo aquel ámbito de caos de la empresa portuaria fue aprovechado por los enjuiciados, pues, con el recuento anterior, se muestra cómo mediante las múltiples reclamaciones judiciales se declaró el reconocimiento de conceptos sin sustento legal ni convencional en tiempo en el que ya era de conocimiento nacional a través de los medios de comunicación las irregularidades que se estaban presentando en torno de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, y que llevaban a determinar el actuar para obtener un provecho económico huérfano de fundamento cierto, situación que no le era ajena a quienes acudieron al reconocimiento de sus acreencias prestacionales y pensionales ante la presunta impericia de la empresa.

Esta conclusión se fortalece en el hecho previamente advertido de que nadie puede alegar a su favor haber actuado de buena fe cuando quebranta el ordenamiento normativo perpetrando actos defraudatorios lejanos de la verdad, la justicia y la equidad; y cuando a voces de la regla 9ª del Código Civil (CC) ninguna persona puede excusarse en la ignorancia de la Ley, mucho más cuando, como resulta cierto en el presente caso, está demostrado que los extrabajadores y el letrado sobre los que ha recaído el llamamiento a juicio eran conocedores de las prebendas derivadas de la normatividad especial y supletoria aplicable, pues aquéllos no sólo habían sido instruidos abiertamente sobre el particular, como fue acreditado mediante las atestaciones acopiadas, sino también por otros trámite acometidos para lograr otros pagos, y, en lo que toca al profesional del derecho, vista su preparación y especialidad académica y ejercicio litigioso como togado.

---

[138] Radicado 000369, sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del 09 de mayo de 2012. MP. Esperanza Najar Moreno.

Superado el examen de los tópicos consolidadores de la existencia de la conducta punible y decantada la responsabilidad de quienes se convocan a juicio criminal, el Despacho pasa a referirse al grado de concurrencia personal de los procesados en los comportamientos por los cuales se procede, respecto de quienes se encuentra demostrado que su actuar es objetivamente típico y antijurídico, y que acorde a las precisiones realizadas en torno a su compromiso personal les es reprochable la irregular intención de acometer las reclamaciones efectuadas por intermedio de varios representantes judiciales dentro de los que se encuentra el doctor ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, a quienes se convocan a título de partícipes determinadores de las conductas reprochadas.

Frente al amplificador del tipo denominado participación, se tiene que el precepto 23 del Decreto Ley 100 de 1990 incorporó esta modalidad, la cual mantuvo la codificación penal actual en su canon 30, que indica:

> "*ARTICULO 30. PARTÍCIPES. Son partícipes el determinador y el cómplice.*
>
> *Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.*
>
> *Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.*
>
> *Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte*".

La doctrina referente a la figura del determinador ha señalado que "*es un partícipe cuya responsabilidad penal se fundamenta en el dispositivo amplificador y se rige por el principio de accesoriedad limitada; el determinado, ejecutor material, es el verdadero autor que tiene el dominio de hecho y por tanto debe reunir las características personales exigidas en el tipo*"[139]. También ha sostenido que el "*partícipe es el que efectúa un aporte doloso en el injusto doloso de otro, trátese de una instigación [determinador] o de un cómplice, por ello esta forma de concurso de personas se caracteriza de manera negativa, pues el agente no ejecuta la acción típica*" [140].

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha delimitado y establecido las características y requisitos de la determinación. Es así como en sentencia emitida el 13 de abril del 2009, en el caso 30125, con ponencia del HH. MM. Drs. Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca, estableció:

> "*(…) El determinador (artículo 30 Ley 599 de 2000) como forma especial de la participación, es aquella persona que por cualquier medio, incide en otro y hace surgir en el autor determinado la decisión de realizar la conducta punible. Quiere decir lo anterior que su conducta y su rol se limita a hacer*

[139] HERNÁGNDEZ ESQUIVEL, Alberto. Lecciones de derecho penal, "Autoría y participación", Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006, pág. 292.
[140] MANUAL DE DERECHO PENAL, Parte General Fernando Velásquez V. Bogotá, 4ª edición, ediciones jurídicas Andrés Morales, 2010, página 584.

*nacer en otro la voluntad de delinquir, y como conducta contrae elementos a identificar. En efecto:*

*Los aspectos esenciales que identifican ese comportamiento, están dados en que aquel se constituye en el sujeto que de manera dolosa (en tanto, no puede haber determinación culposa) provoca, genera, suscita, crea o infunde en su referente, tanto la idea como la voluntad criminal, resultados que como bien lo ha dicho la jurisprudencia, pueden darse de diversa manera o en especial por la vía del mandato, convenio, la orden, el consejo o la coacción superable.*

*Desde la teoría del delito, bajo la cual se entiende que los itinerarios puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son punibles, porque ello traduciría penalizar las expresiones del pensamiento, se comprende que los actos del determinador no se pueden quedar en la simple cooperación o solidaridad moral ni en sólo hacer surgir en el otro la idea o en reforzar la ya existente al respecto, sino que además, deberá ser incidente en la génesis de la voluntad criminal del inducido, la cual debe tener una materialización consumada o al menos tentada, pues sin ese principio de ejecutividad no puede haber autoría y menos participación en esa modalidad.*

*La Corte, al respecto, ha dicho:*

> *Lo que si merece una reflexión separada es el significado jurídico y gramatical de la conducta determinadora. En efecto, "determinar a otro", en el sentido transitivo que lo utiliza el artículo 23 del Código Penal, es hacer que alguien tome cierta decisión. No es simplemente hacer nacer a otro la idea criminal sino llevarlo o ir con él a concretar esa idea en una resolución. Esa firme intención de hacer algo con carácter delictivo, como lo sostiene la doctrina jurisprudencial y lo acepta el impugnante, puede lograrse por distintos modos de relación intersubjetiva: el mandato, la asociación, el consejo, la orden no vinculante o la coacción superable.*
>
> *Así entonces, si una de las posibilidades conductuales para determinar es la asociación entendida como concurrencia de voluntades para la realización de un fin común, no podría circunscribirse la determinación a la sola actividad unilateral de impulso del determinador para sembrar la idea criminosa en el determinado o reforzar la que apenas se asoma en él, sobre todo porque, como lo señala la jurisprudencia citada, siempre se requiere la presencia de una comunicación entre el determinador y el determinado*[141].

*A su vez, entre la conducta singularmente inducida y la realmente producida, debe existir un nexo de correspondencia, porque si la resultante difiere de los objetos de incidencias subjetivas realizadas por el inductor, no se le podrá atribuir responsabilidad penal alguna.*

*La Corte, entre otros pronunciamientos ha dicho que el determinador:*

> *No es realmente autor sino persona que provoca en otro la realización del hecho punible, bien a través del mandato, del convenio, de la orden, del consejo de la coacción.*

[141] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 27 de junio de 2006. Rad. 25068.

*(…) en la determinación que se presenta en los casos del mandato, asociación, consejo, orden no vinculante, coacción superable, se requiere la presencia de una comunicación entre determinador y determinado, de manera que entre ellos se establezca una relación en virtud de la cual el determinador sabe que está llevando al determinado a la realización de una conducta punible y ésta actúa con conciencia de lo que está haciendo y de la determinación*[142].

*En otra oportunidad dijo:*

*Sin la pretensión de agotar los desarrollos doctrinarios en torno al tema, es de decirse que el determinador, instigador o inductor, es aquél que acudiendo a cualquier medio de relación intersubjetiva idóneo y eficaz, tales como ofrecimiento o promesa remuneratoria, consejos, amenazas, violencia, autoridad de ascendiente, convenio, asociación, coacción superable, orden no vinculante, etc., hace nacer en otro la decisión de llevar a cabo un hecho delictivo, en cuya ejecución posee alguna clase de interés.*

*Como presupuestos de la inducción, asimismo la doctrina tiene identificados, entre otros, los siguientes que se tornan como los más relevantes: En primer lugar, que el inductor genere en el inducido la definitiva resolución de cometer un delito o refuerce la idea con efecto resolutorio de la idea preexistente, no bastando con realizar una simple cooperación moral ayudándole a perfeccionar el diseño del plan delictivo ya trazado de antemano por el futuro autor material (el denominado ovni modo facturus); en segundo término, el inducido (autor material) debe realizar un injusto típico, consumado o que al menos alcance el grado de tentativa, pues si su conducta no alcanza a constituir siquiera un comienzo de ejecución, no puede predicarse la punición del inductor; en tercer lugar, debe existir un nexo entre la acción del inductor y el hecho principal, de manera que lo social y jurídicamente relevante es que el hecho antijurídico se produzca como resultado de la actividad del inductor de provocar en el autor la resolución delictiva, a través de medios efectivos y eficaces como los atrás mencionados; en cuarto lugar, que el inductor actúe con conciencia y voluntad inequívocamente dirigida a producir en el inducido la resolución de cometer el hecho y la ejecución del mismo, sin que sea preciso que le señale el cómo y el cuándo de la realización típica; en quinto término, el instigador debe carecer del dominio del hecho, pues éste pertenece al autor que lo ejecuta a título propio, ya que si aquél despliega una actividad esencial en la ejecución del plan, ya no sería determinador sino verdadero coautor material del injusto típico*[143].

*(…)*

*Entre esos comportamientos existe un punto de convergencia, cual es que ninguno de los dos tiene el dominio material del hecho criminal de que se trate, con ello se significa que no ejecutan de manera directa la conducta punible, la cual se materializa a través de un referente sobre el que han incidido o inducido. En un caso es llamado "ejecutor determinado" a quien de igual se le deriva responsabilidad penal, y el otro a diferencia, se constituye en "instrumento", el cual actúa exento de reprochabilidad penal, ora por*

---

142 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 3 de junio de 1983. Rad. 1983.
143 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 26 de octubre de 2000. Rad. 15610.

*haber sido engañado de manera invencible o coaccionado por una fuerza irresistible (…)".*

Frente a la figura del determinador en los delitos con sujeto activo cualificado, el máximo órgano de lo penal colombiano, en fallo de 03 de junio de 1983, había señalado que la condición especial exigida en el tipo sólo se reclama de quien materialmente realiza la conducta y no del determinador. Sobre el tema precisó esa Alta Colegiatura:

> "(…) *En cambio en la determinación que se presenta en los casos del mandato, asociación, consejo, orden no vinculante, coacción superable, se requiere la presencia de una comunicación entre determinador y determinado (…). En este caso, si se trata de sujeto activo cualificado, tal condición sólo se exige para quien materialmente realiza la conducta y no para quien ha sido determinador, pues del autor es de quien se debe exigirse la calidad.*"

En ese sentido, dicha Corporación en sentencia expedida el 03 de diciembre de 2009, dentro del asunto 32763, con ponencia del H. M. Dr. Augusto Ibáñez Guzmán, reiteró:

> "*Bastante se ha dicho por la jurisprudencia de la Sala, que en los delitos de sujeto activo cualificado –servidor público- es posible atribuir la conducta a título de determinador, al particular que sin ejecutarla directamente, induzca a otro a realizarla, caso en el cual le corresponde la pena prevista para la infracción*".

De estas puntualizaciones se concluye que, contrario a lo manifestado por el procesado ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, en torno a acoger los señalamientos efectuados por la Fiscalía si se consideraba el hecho de que arribó a la comisión de los eventos en calidad de interviniente, el material probatorio da cuenta clara de que los matices propios del actuar de éste y de los demás procesados se compadecen con la determinación de las conductas reprochadas, ya que el abogado desplegó su labor como profesional del derecho y apoderado de los extrabajadores acriminados para lograr que, previos los trámites respectivos, los servidores públicos competentes que tenían la potestad dispositiva sobre el erario desarrollaran su actividad, ya dictando una sentencia condenatoria, en lo que toca al Juez Laboral, ya pactando un convenido o conciliación, ya emitiendo un acto administrativo que ordenara pagar esa condena, en lo atinente al para entonces director de FONCOLPUERTOS, y que el valor ordenado en esas decisiones ilícitas le fuera efectivamente pagado, cuando así lo fue.

En este orden, emerge diáfano que ni el togado COLLANTE PACHECO ni sus prohijados tenían la facultad legal para disponer directamente del peculio oficial ni les había sido confiado éste para su administración, razón por la cual no se le puede atribuir la condición propia que demanda el sujeto calificado activo del delito de peculado por apropiación, el cual, para el caso, sólo es predicable de los citados Jueces Laborales, director del fondo liquidador o del funcionario conciliador, situación de la que se desprenden que no puede ser entendidos como autores del reato peculador.

A ello se agrega que tampoco puede enrostrarse a estos procesados haber actuado como coautores o como cómplices, pues para ello era necesario, en principio, demostrar la presencia de un acuerdo común entre los sujetos

agentes del ilícito, y, en el asunto de la especie, no se acreditó dicho estado compartido de consentimiento o confluencia de voluntades producto de un convenio entre éstos. Tampoco está probado que actuaran como autores carentes de la calidad especial reclama por la Ley, al menos para predicar la existencia de una autoría impropia, mucho más cuando, se memora, no fueron ellos quienes dieron vida jurídica ni validaron las referidas sentencias, resoluciones administrativas o conciliación que ordenaron los pagos que se escrutan, lo cual elimina la posibilidad de considerar que desplegaron su conducta como intervinientes.

En este orden, estima el Juzgado que en el presente caso no se revelan las circunstancias fácticas acreditadas para arribar al predicamento de que el acriminado COLLANTE PACHECO y los demás encausados obraron dentro de los parámetros de la autoría, la coautoría, la complicidad o la intervención de acción para enrostrarles alguna de estas modalidades de agente delictivo, ante lo cual no se atisba confusión en la acusación, aunado a que tampoco se detalla que se halle demostrado que formaban parte de una red o asociación delincuencial. No empece, con toda certeza se deriva que el grado de concurrencia personal que les es propio es el de determinadores.

En efecto, cuenta el paginario con el material demostrativo pertinente e idóneo que, al ser analizado de forma crítica y conjunta, conduce a manifestar que se está ante la existencia de eventos provistos de mérito para sostener con certeza que a los acusados les es enrostrable un grado de aparición en escena y de despliegue de su accionar que en criterio de este Estrado no es el que corresponde al de autores o, por lo ya dicho, al de coautores, al de cómplices o intervinientes, sino al de un partícipe en condición de determinador con relación a las conductas constitutivas de los hechos estudiados en esta decisión, comoquiera que en éstos no tenían el dominio del hecho para comprometer directamente y *mutuo propio* el erario, habida consideración de que quienes por Ley tenían esa potestad eran los referidos Jueces Laborales, el Director General de FONCOLPUERTOS, su apoderado o el funcionario conciliador.

De lo analizado se arriba a la clara y advertida ausencia de incertidumbre respecto de la incursión personal de los procesados instando a quienes disponían de los recursos estatales, pues del actuar de los mismos se derivan necesariamente los elementos que estructuran la determinación ejercida respecto de quienes desde sus sitiales disponían de los recursos del tesoro, comoquiera que la interposición de demandas con la enunciación de pretensiones lejanas de la realidad, con el entero conocimiento de que los conceptos que cimentaban las pretensiones previamente habían sido pagados por la empresa en vigencia del vínculo laboral, se erige como la clara intencionalidad de pretender dar apariencia de legalidad a un reclamo que no contaba con ella, actuar que en criterio del Juzgado revela la indefectible voluntad de los demandantes y su apoderado de impulsar al funcionario judicial o administrativo a que adoptara la decisión que era de su competencia en contra vía de derecho, instigación que aunada al advertido manejo de las garantías laborales que exhibían los solicitantes y su representante, aunque al unísono se declararan ajenos a éste, congregan los requisitos que en antecedencia se identificaron.

Lo anterior aviene libre de hesitaciones, mucho más cuando también se aprecia que si bien es cierto la doctrina jurisprudencial en materia penal ha admitido que la determinación se fragua a través de las modalidades a las que hace mención, como la coacción superable, la promesa de remuneración y muchas otras, no lo es menos que tales corresponden únicamente a ejemplos de mecanismos, sin que alguna vez hubiese establecido un número cerrado (*numerus clausus*), de allí que haga también referencia a que no pretende agotar el tema o que igualmente es viable a través de otros medios (*numerus apertus*) que conducen efectivamente a que el determinador logre que el determinado obre injustamente en el sentido ilícito que el primero se propone, sin que para este efecto, como en el presente asunto, sea necesario el conocimiento previo o concomitante, o la relación interpersonal, negocial, de amistad, o el común acuerdo expreso entre éstos, como sin mérito alguno alegan algunas bancadas defensivas al echar de menos atestaciones o pruebas no practicadas ni aducidas sobre el trato de los Jueces y servidores de los Despachos Judiciales de Barranquilla con los acusados, situación que en manera alguna exculpa a los acriminados en lo que mira a su posición de determinadores, en cadena, ni desvirtúa su actuar concreto y probado.

Así las cosas, los exportuarios señalados, al otorgar múltiples poderes a profesionales del derecho, con el propósito innegable de apropiarse ilícitamente de dineros públicos, viabilizaron efectivamente lo que estaba de su parte para mover el aparato judicial y administrativo, a fin de que fueran las autoridades judiciales y administrativas competentes las que dispusieran lo necesario, y, en la medida de su competencia, ora mediante providencias, ora mediante conciliación, ora a través de resoluciones, para que su propósito se materializara en la realidad, es decir, lograr que del Tesoro nacional se destinaran algunos rubros para engrosar indebidamente el peculio personal de terceros o el propio, a través de cadena de determinadores en la cual, sin duda alguna, participaron aquéllos y el letrado aquí procesado.

Por ello, resulta diáfana la resolución en los acriminados de que dichos servidores públicos cometieran una conducta típica y antijurídica para beneficio propio, como lo fue que se reconocieran conceptos irregulares en las mentadas providencias judiciales, actas conciliatorias y que la entidad estatal emitiera las resoluciones administrativas mediante la cuales se ordenó pagar montos sin ningún sustento fáctico ni tampoco jurídico.

Así, los exportuarios encausados extendieron múltiples mandatos a abogados, incluido el aquí enjuiciado, de los cuales se derivaron todas las actuaciones que culminaron en los referidos reconocimientos, con el propósito y voluntad inequívocos de conseguir que la idea delictual se transformara con la necesaria actuación del respectivo servidor público o quien se le equiparaba, en una decisión ilegal favorable a la finalidad delictual por ellos trazada, la cual se concretó en la comisión de los delitos peculadores ya examinados.

Y para tal efecto no era necesario que el mismo Juez, Conciliador o Director ante quien se presentaron las reclamaciones administrativas o judiciales, hubiese sido quien elaborara el proyecto, o que entre el determinador y el determinado existiera una relación interpersonal, de negocios, de amistad, o el común acuerdo expreso, toda vez que para el caso bastó con que las

actuaciones de los procesados, inequívocamente dirigidas a defraudar el peculio público, constituyesen el motivo de impulso de los trámites pertinentes y de la apropiación irregular.

En este orden, es evidente que los reconocimientos de los conceptos y rubros arriba escrutados, con contravención de las normas convencionales, supletorias y líneas jurisprudenciales pertinentes, fueron posibles con el concurso efectivo de servidores públicos, como los Gerentes Generales de FONCOLPUERTOS de manera directa y/o por medio de apoderados en la celebración de las actas de conciliación y los inspectores de trabajo que participaron en las mismas, así como de los Jueces Laborales del Circuito de Barranquilla de la época, quienes tenían la facultad de disponer del erario, cumpliéndose así lo normado en el artículo 20 del actual CP y en el precepto 18 de la Ley 190 de 1995, respecto de quien es considerado como servidor público, logrando determinar los encausados con su conducta criminal la comisión de los ilícitos aquí analizados.

Las solicitudes elevadas por los procesados exportuarios a través de los abogados y del letrado aquí sindicado así como la radicación de memoriales, participación en audiencias, y, en general, el impulsó de los trámites judiciales y administrativos de dichos togados investidos del mandato conferido por los poderdantes, unidos en cadena, constituyeron el motivo que impulsó todo el diligenciamiento que a su turno culminó en las providencias judiciales, en las actas de conciliación mentadas y en las resoluciones administrativas. El actuar de los acusados, contrario a lo aducido por la bancada de las defensas, fue un medio eficaz e idóneo para determinar la perpetración del comportamiento ilícito, y apropiación de los dineros del Estado.

Estas apreciaciones encausan las conclusiones a que la participación del profesional del derecho y los extrabajadores portuarios en los trámites judiciales estaba previa y conscientemente trazada para dar apariencia de licitud en desarrollo de los procesos laborales, con conocimiento de que los funcionarios judiciales de la ciudad de Barranquilla despacharían de forma favorable sus pretensiones, sin olvidar lo atinente a la conciliación; empero, esa estrategia, consistente en una cadena real y material de determinadores, no llama a confusiones ni tampoco a dudas, toda vez que resulta diáfano que el entramado creado entre quienes se convocan a juicio criminal conlleva a un punto común que es el de concretar los actos consumativos del reato de peculado por apropiación agravado en detrimento de los recursos públicos.

Superada la anterior temática, se observa que el mandato 12 del CP establece: "*Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradica toda forma de responsabilidad objetiva*".

En torno del esquema de culpabilidad consagrado en la Ley 599 de 2000, la doctrina nacional indica que "*El nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), a diferencia del Código Penal de 1980, no dedica un título o capitulo especifico a la culpabilidad como categoría dogmática; sin embargo, se podría afirmar que sigue imperando entre nosotros la teoría normativa de la misma, es decir, aquella que la entiende como un juicio de valor, como un juicio de reproche que se le hace a un individuo que ha realizado una*

*conducta típica y antijurídica, pese a haber podido actuar de otra manera y conforme a sentido"*[144].

Respecto de este elemento requerido para la concreción del punible, discutido en detalle previamente, el Despacho considera que los procesados merecen el correspondiente juicio de reproche, en calidad de imputables, por haber realizado comportamientos típicos y antijurídicos, al serles exigible otra conducta, ya que pudiendo actuar conforme al ordenamiento, por ejemplo, absteniéndose de perpetrar los reclamos que devinieron en el adelantamiento de la actuaciones judiciales, decidieron deliberadamente llevar a cabo las actividades delictuales descritas con anterioridad, obrando con conocimiento de la antijuridicidad al saber la ilicitud de su comportamiento y que con él lesionaban los más altos valores estatales que garantizan la convivencia, máxime cuando eran personas que por entonces conocían los cánones imperantes y los asuntos prestacionales y laborales relativos a las reclamaciones aquí examinadas, lo cual resulta aún más deleznable en lo que atañe al actuar del profesional del derecho acusado.

Siendo las conductas típicas, antijurídicas y culpables, y al no encontrar este Estrado la activación de causales de antijuridicidad o inculpabilidad, debe concluir que se logra desvirtuar el principio de inocencia y, por tanto, no es posible aplicar el principio *in dubio pro persona* respecto de los acriminados.

Cabe en este aparte recordar que la agencia Fiscal identificó en el cuerpo del calificatorio aquellas conductas enrostradas a los señores **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** y **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** como eventos constitutivos del reato de peculado por apropiación agravado tentado, pero omitió emitir decisión en ese sentido en el aparte resolutorio pertinente, dejándolas como consumadas, y de paso obviando introducir el concurso homogéneo sucesivo entre los delito de peculado por apropiación agravado consumado y tentado. Por manera que, aunque esta circunstancia se erige como una incorrección atribuible al ente persecutor, no menos cierto es que de ésta no se desprende variación del acontecer fáctico que implique mutación en perjuicio de los procesados, pues por el contrario, reviste morigerante frente a la estimación inicial efectuada por la Fiscalía y así se valuará al momento de fijar la pena privativa de la libertad, degradando el señalamiento consumado a tentado; esta misma suerte correrán aquellas conductas endilgadas a los señores **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** y **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, respecto de las que aun cuando militaba material demostrativo que revelaba que en su ejecución no se alcanzó el agotamiento del trasado, la persecutora no realizó apreciación sobre el grado de consumación en el que quedaron estos eventos ni en la parte considerativa del pliego de cargos ni en la resolutiva del mismo, debiéndose apreciar como tentados.

No así se procederá con las sindicaciones elevadas en contra de los señores **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** y **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** respecto de quienes, como se dijo arriba, se prescindió enrostrar el concurso de conductas peculadoras agravadas, falencia de entera

---

[144] CORDOBA ANGULO, Miguel. Lecciones de derecho penal parte especial. editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, págs. 364.

responsabilidad de aquellos funcionarios que atendieron el diligenciamiento en etapa instructiva, a quienes les son atribuibles las trazas de impunidad que de esta inatención se generen, pues como se ha advertido a lo largo de estas consideraciones las actividades desarrolladas por estos procesados remiten a una pluralidad de comportamientos ilícitos, desplegados de forma independiente y en distintos tiempos, teniendo como fundamento diversos conceptos carentes de amparo normativo o que en el momento oportuno fueron cubiertos por la empresa portuaria y en cuantías que se alejan ostensiblemente de lo que el ente persecutor estimó como un solo hecho peculador.

Finalmente, cabe dejar por sentado que con estas consideraciones el Juzgado responde **en lo esencial** a las alegaciones presentadas por los sujetos procesales en los tópicos pertinentes al objeto de este acápite.

## PUNIBILIDAD

Superado el examen de los elementos estructuradores de las conductas punibles y el compromiso de los procesados, el Despacho definirá la sanción a imponer por la comisión de los comportamientos ilícitos cometidos, analizando lo correspondiente a la pena principal y a las accesorias respecto de cada uno de los convocados a reproche.

En esta medida, acorde al tenor de los cánones 60 y 61 del CP, para individualizar la pena de los delitos perpetrados por los sancionables, es necesario en primer lugar fijar los límites de los mínimos y máximos en los que ha de moverse el Juzgador; en segundo término, dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos; luego, ubicarse en el cuarto correspondiente de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del canon 61 del estatuto penal; y, finalmente, fijado el cuarto correspondiente en el que se moverá, impondrá la sanción correspondiente según el inciso 3° del mandato 61 del CP.

El peculado por apropiación simple establece como pena de prisión, según la disposición 397 original del CP vigente, de 6 a 15 años de prisión, es decir, de 72 a 180 meses; empero, en el caso de circunstancia de agravación por cuantía, el Legislador indica que si el objeto material del mismo supera el valor de los 200 SMLMV, dicha sanción se aumentará hasta en la mitad, y en el presente caso el valor corresponde a una cuantía que excede sobremanera dicho límite, tal como se anunció en el acápite pertinente, de suerte que los nuevos extremos punitivos, de conformidad con el canon 60 inciso 2° regla 2ª de la Ley 599 de 2000, serán de 72 a 270 meses de prisión.

Según el artículo 61 del CP, luego de establecidos los límites mínimos y máximos en los que se moverá el Juzgador, se dividirá el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, como sigue.

| PRIMER CUARTO | SEGUNDO CUARTO | TERCER CUARTO | ÚLTIMO CUARTO |
|---|---|---|---|
| 72 a 121, 5 meses | 121,5 a 171 meses | 171 a 220,5 meses | 220,5 a 270 meses |

De otro lado, en lo que atañe al peculado por apropiación agravado tentado, los límites de la pena establecidos en el apartado anterior varían, en atención a que el artículo 27 del CP prevé que cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, se incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes, de allí que los nuevos extremos punitivos serán de 36 a 202 meses y 15 días, en virtud del canon 60 inciso 2 regla 5.

Entonces, el ámbito punitivo de movilidad en cuartos para el punible tentados queda así:

| PRIMER CUARTO | SEGUNDO CUARTO | TERCER CUARTO | ÚLTIMO CUARTO |
|---|---|---|---|
| 36 a 77,6 meses | 77,6 a 119,25 meses | 119,25 a 160,9 meses | 160,9 a 202,5 meses |

Ahora bien, para fijar el cuarto en el que el Despacho debe moverse, se tendrá en cuenta que en el presente caso no se encuentran acreditadas ni circunstancias atenuantes o de atenuación punitiva respecto de la totalidad de los procesados, por lo que al no haberse imputado circunstancias genéricas de incremento sancionatorio, de acuerdo con el inciso 2° del mandato 61, la pena a imponer se ubicará en el primer cuarto, esto es, entre 72 y 121.5 meses de prisión para el delito consumado y ente 36 y 77.6 meses de prisión para la conducta tentada.

Ahora bien, en lo que atañe a los señalamientos criminales concursales efectuados sobre algunos de los procesados, el Juzgado tomará como referencia el evento que revista mayor impacto generado a la administración pública, así como la naturaleza y modalidad del hecho junto a la intensidad dolosa que éste revista, acorde a los parámetros contenidos en el precepto 31 del CP, el cual gobernará la imposición de la pena y encabezará la enunciación de las conductas juzgadas, considerándose justo y equilibrado atribuir incremento del **10%** de la sanción básica por cada conducta concursal de peculado por apropiación agravado y el **5%** por cada evento constitutivo de peculado por apropiación agravado tentado.

Para efectos de la tasación dentro de los límites señalados anteriormente, teniendo en cuenta que se trata de un grupo voluminoso de procesados y que los aspectos a valorar para establecer el *quantum* de la pena imponen el examen de tópicos que resultan análogos, en consideración a la unidad de objeto sobre el recayeron los efectos lesivos de las conductas y los actos acometidos por cada uno de los extrabajadores para acceder a los recursos del erario, acorde al inciso 3° del artículo 61 represor, el Juzgado realizará este escrutinio de forma conjunta como sigue.

Frente a la gravedad de la conducta se detalla que ésta se instituye en la seriedad y trascendencia de los comportamientos ilícitos perpetrados, en razón de los cuales se cometieron los reatos de peculado por apropiación agravado consumado y/o tentado que tocan un bien jurídico de gran relevancia para el ordenamiento normativo como la administración pública. Las conductas desplegadas por los procesados no sólo implicaron una amenaza real y cierta del citado bien objeto de tutela, sino que se gestaron en el marco del gran detrimento patrimonial generado al Estado en el caso de FONCOLPUERTOS, el cual aún hoy sigue teniendo repercusiones pecuniarias para las arcas estatales, dentro de la materia

particular y atinente al área de las pensiones en el sector público, punto que revela su importancia e impacto estatal y social.

Se consolida el reproche a partir de la actuación de los acriminados como extrabajadores de la empresa Puertos de Colombia y la del doctor COLLANTE PACHECO la calidad de representante de éstos en las reclamaciones judiciales en las que se cristalizó el compromiso penal, transgresor de la descripción típica de peculado por apropiación en las condiciones ya examinadas, delito atentatorio contra la administración pública de innegable relevancia para el ordenamiento jurídico y la convivencia pacífica del conglomerado, con los cuales se puso igualmente en entredicho la confianza y credibilidad de los asociados en sus autoridades administrativas y judiciales así como en la legalidad de sus decisiones y actuaciones.

Además, los acusados con su accionar se alejaron conscientemente y por completo de los principios que gobiernan la administración pública, consagrados en el canon 209 superior, del deber de obrar con lealtad de cara al principio de la buena fe y de la obligación de actuar con probidad ante las autoridades de la República, de velar y salvaguardar la "*res publica*" en cuanto principal garante de la entidad referida, y de que acorde a los fines del Estado y el precepto 1° de la Carta, el bien general prevaleciera sobre sus intereses particulares.

De lo anterior emerge que los comportamientos desplegados por los enjuiciados no sólo atentaron contra la administración pública como valor jurídicamente protegido por el Legislador, sino también contra el bienestar de la colectividad, constituyéndose el peculado en términos generales como acto materializador de corrupción, en una barrera que ocasiona un alto grado de consternación e impacto social, por el perjuicio real y potencial que representa para la comunidad.

Profundizando en el tema la doctrina penal ha señalado:

> *"…la corrupción administrativa, perversión generalizada en el Estado contemporáneo, ha sido considerada como una de las amenazas más graves contra la estructura y esencia del Estado de derecho, unida a la amenaza del totalitarismo, la violencia subversiva y la delincuencia organizada.*
>
> *En nuestro país, los índices de corrupción en el sector público han alcanzado dimensiones que lindan con lo que la doctrina ha dado en llamar 'hipercorrupción', 'corrupción galopante' o generalizada, ya que el flagelo ha invadido todos los ámbitos de la vida social…"* [145.]

En cuanto al daño real o potencial creado con el proceder de los acusados, se detalla que la lesión causada con sus conductas consumadas, acorde a los pormenores contenidos en el calificatorio, menoscabó el erario en suma de $3.057´400.000,00, configurando con ello una vulneración cierta y proporcional a la obtención dineraria ilícitamente lograda, cuantía que si bien ha sido reintegrada en una ínfima fracción mediante descuento por nómina, acorde a los datos aportados por la UGPP al expediente, el recaudo de los recursos públicos por esta vía no refieren a su devolución

142 Manual de Derecho Penal, Dr. Pedro Alfonso Pabón Parra, Pág. 1147.

voluntaria, luego no se tendrán en cuenta según el mandato 401 represor como aspecto morigerante de la pena que se habrá de abrir paso; a lo anterior se agrega el importe relacionado dentro de los eventos que no alcanzaron consumación, lo cual ascendió a la cuantía de $582´200.000,00, que si bien no reviste una lesión efectiva al bien jurídico protegido, dan cuenta de aquellos eventos en los que con ocasión a causas ajenas a la intención de los procesados no se alcanzó la concreción del itinerario criminal.

A las resultas dinerarias ligadas a los actos reprochados se agrega que con el desplegar de éstos se afectó materialmente la administración pública en otros elementos que le son esenciales e inescindibles como son los principios que constitucional y legalmente la gobiernan y también la probidad, lealtad, transparencia, moralidad y rectitud de sus funcionarios, los cuales en razón de las ilicitudes escrutadas hicieron perder la confianza que el conglomerado social les debía. Ahora bien, el no haberse acreditado antecedentes judiciales al momento en que se cometieron los hechos, muestra que los implicados no han atentado contra el ordenamiento jurídico en otras ocasiones previas.

Y en lo referente a la intensidad de dolo, se advierte que asiste en un alto nivel, teniendo en cuenta los aspectos reseñados en precedencia, relacionados con el conocimiento y manejo que ostentaban los extrabajadores y el togado de las normas convencionales, entendimiento que aplicaron en perjuicio de los intereses de la empresa dentro de las reclamaciones judiciales y administrativas, mostrando un diáfano interés de beneficiarse de los recursos públicos.

En este sentido, e igualmente frente a los **principios, fines, necesidad y funciones de la pena** consagrados en los artículos 3° y 4° de estatuto punitivo, el Juzgado pasará a establecer la pena a imponer a cada uno de los acriminados por los delitos de peculado por apropiación agravado, discriminando de forma ascendente el monto de lo indebidamente captado para efectos de establecer progresivamente la gravedad de las conductas, así como el evento que respecto de cada uno de los procesados a quienes se convocan a reproche por el concurso de conductas reviste la mayor gravedad frente al bien jurídico tutelado, salvo cuando dicha circunstancia no fue expresamente formulada, casos en los que el número de reclamaciones no puede ser tenido en cuenta en razón de la advertida deficiencia de la calificación y la valoración se efectuará por un solo reato con el impacto económico de la totalidad de las conductas.

La relación se realizará señalando en la primera columna el nombre del procesado; en la segunda se detallará la totalidad de los hechos lesivos actualmente vigentes y el *quantum* de lo erogado por la Nación con ocasión de las reclamaciones constitutivas de las conductas consumadas asociadas a cada uno de los procesados, datos que servirán para estimar las penas de multa a imponer, debiendo manifestarse desde ahora que esta sanción se establecerá individualmente acorde a la suma dineraria nominal no tasada en SMLMV objeto de estudio; en la tercera se detallará la equivalencia en SMLMV de lo percibido por los enjuiciados por los delitos por los que se les enjuicia, a partir de la cual se podrá identificar el detrimento causado a las arca públicas; y en la cuarta se implantará la pena estimada

en virtud de las apreciaciones efectuadas a lo largo de esta providencia, recordando que el ámbito de movilidad en el que fluctúan las sanciones privativas de la libertad analizadas en este aparte y constitutivas del delito de peculado por apropiación agravado se encuentra enfincado entre 72 y 121.5 meses de prisión; y las consolidadoras del reato de peculado por apropiación agravado tentado entre 36 a 77,6 meses de prisión.

**TABLA 16:**

| PROCESADO | CUANTÍA DE LO APROPIADO | EQUIVALENCIA EN SMLMV | PENA A IMPONER |
|---|---|---|---|
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** | $53´600.000,00 **TENTADO.** | **262.96 SMLMV de 1998.** | **37 meses de prisión.** |
| **TOTAL** | $53´600.000,00 | **262.96 SMLMV** | |
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA** | $60´400.000,00 | **296.33 SMLMV de 1998.** | **73 meses de prisión.** |
| **TOTAL** | $60´400.000,00 | **296.33 SMLMV** | |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | $68´200.000,00 **+ INCREMENTOS PENSIONALES.** | | 74 meses **+** 7 meses y 12 días **= 81 meses y 12 días.** |
| | $687.420,18 $5´494.862,00 **+ INCREMENTOS PENSIONALES.** | | |
| **TOTAL** | $165´559.423,28 | **309.11 SMLMV** | |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** | $65´200.000,00 | **319.88 SMLMV de 1998.** | **74 meses y 10 días de prisión.** |
| **TOTAL** | $65´200.000,00 | **319.88 SMLMV** | |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | $76´900.000,00 | **377.28 SMLMV de 1998.** | **74 meses y 20 días de prisión.** |
| **TOTAL** | $76´900.000,00 | **377.28 SMLMV** | |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | $77´200.000,00 | **378.75 SMLMV de 1998.** | **74 meses y 25 días de prisión.** |
| **TOTAL** | $77´200.000,00 | **378.75 SMLMV** | |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | $39´105.745,92 **+** $15´635.980,00 | **385.16 SMLMV de 1996.** | 75 meses **+** 3 meses y 23 días **= 78 meses y 23 días.** |
| | $68´200.000,00 **TENTADO.** | **334.59 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $54´741.725,92 | **385.16 SMLMV** | |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | $81´600.000,00 | **400.34 SMLMV de 1998.** | **75 meses y 10 días de prisión.** |
| **TOTAL** | $81´600.000,00 | **400.34 SMLMV** | |
| **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ** | $97´000.000,00 | **475.89 SMLMV de 1998.** | **75 meses y 20 días de prisión.** |
| **TOTAL** | $97´000.000,00 | **475.89 SMLMV** | |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA** | $98´600.000,00 | **483.74 SMLMV de 1998.** | **76 meses de prisión.** |
| **TOTAL** | $98´600.000,00 | **483.74 SMLMV** | |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | $98´700.000,00 | **484.23 SMLMV de 1998.** | **77 meses de prisión.** |
| **TOTAL** | $98´700.000,00 | **484.23 SMLMV** | |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | $67´100.000,00 | **329.20 SMLMV de 1998.** | 74 meses **+** 7 meses y 12 días **= 81 meses y 12 días.** |
| | $50´000.000,00 | **245.30 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $117´100.000,00 | **574.50 SMLMV** | |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | $78´600.000,00 | **385.62 SMLMV de 1998.** | 75 meses **+** 15 meses **+** 3 meses y 23 días **= 93 meses y 23 días.** |
| | $67´800.000,00 | **332.63 SMLMV de 1998.** | |
| | $48´700.000,00 | **238.92 SMLMV de 1998.** | |
| | $100´300.000,00 **TENTADO.** | **492.08 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $195´100.000,00 | **957,17 SMLMV** | |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | $123´500.000,00 | **605.90 SMLMV de 1998.** | 75 meses **+** 7 meses y 15 días **= 82 meses y 15 días.** |
| | $77´500.000,00 | **380.22 SMLMV de 1998.** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | $201´000.000,00 | **986.12 SMLMV** | |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | $103´100.000,00 | **505.82 SMLMV de 1998.** | **91 meses de prisión.** |
| | $81´456.459,04 | **399.63 SMLMV de 1998.** | |
| | $45´863.492,95 | **322.69 SMMLMV de 1996.** | |
| **TOTAL** | $230´419.951,99 | **1.228,14 SMLMV** | |
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | $157´982.645,18 | **775.08 SMLMV de 1998.** | 76 meses y 15 días **+** 15 meses y 2 días **+** 3 meses y 24 días **= 95 meses y 11 días de prisión.** |
| | $49´200.000,00 | **241.38 SMLMV de 1998.** | |
| | $47´600.000,00 | **233.53 SMLMV de 1998.** | |
| | $81´600.000,00 **TENTADO.** | **400.34 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $254´782.645,18 | **1.249,99 SMLMV** | |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | $100´600.000,00 | **493.55 SMLMV de 1998.** | 77 meses **+** 23 meses y 3 días **= 100 meses y 3 días.** |
| | $75´300.000,00 | **369.43 SMLMV de 1998.** | |
| | $56´200.000,00 | **275.72 SMLMV de 1998.** | |
| | $42´700.000,00 | **209.49 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $274´800.000,00 | **1.348,19 SMLMV** | |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | $112´436.135,34 | **551.62 SMLMV de 1998.** | 77 meses y 15 días **+** 23 meses y 5 días **= 100 meses y 20 días.** |
| | $77´900.000,00 | **382.18 SMLMV de 1998.** | |
| | $57´200.000,00 | **280.63 SMLMV de 1998.** | |
| | $52´700.000,00 | **258.55 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $300´236.135,34 | **1.472,98 SMLMV** | |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | $248´968.911,00 | **1221.47 SMLMV de 1998.** | 80 meses **+** 8 meses **= 88 meses de prisión.** |
| | $55´542.636,49 | **322.91 SMLMV de 1997.** | |
| **TOTAL** | $304´511.547,49 | **1.544,38 SMLMV** | |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | $140´300.000,00 | **688.33 SMLMV de 1998.** | 78 meses **+** 23 meses y 12 días **= 101 meses y 12 días.** |
| | $104´800.000,00 | **514.16 SMLMV de 1998.** | |
| | $88´300.000,00 | **433.21 SMLMV de 1998.** | |
| | $42´100.000,00 | **206.54 SMLMV de 2016.** | |
| **TOTAL** | $375´500.000,00 | **1.842,24 SMLMV** | |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | $250´800.000,00 | **1.230.46 SMLMV de 1998.** | **104 meses de prisión.** |
| | $87´600.000,00 | **427.77 SMLMV de 1998.** | |
| | $63´500.000,00 | **311.54 SMLMV de 1998.** | |
| | $32´213.140,82 | **226.65 SMLMV de 1996.** | |
| **TOTAL** | $434´113.140,82 | **2.196,42 SMLMV** | |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | $534´032.153,27 | **2.620.3 SMLMV de 1998.** | 86 meses **+** 8 meses y 16 días **= 94 meses y 16 días de prisión.** |
| | $45´300.000,00 | **222.24 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $579´332.153,27 | **2.842.54 SMLMV** | |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | $282´181.058,05 | **1.384.42 SMLMV de 1998.** | 81 meses **+** 32 meses y 12 días **+** 4 meses y 2 días **= 117 meses y 14 días de prisión.** |
| | $195´587.022,72 | **959.57 SMLMV de 1998.** | |
| | $73´991.075,41 | **502.60 SMLMV de 1996.** | |
| | $5´545.692,23 **+** $33´318.261,69 | **273.43 SMLMV de 1996.** | |
| | $36´268.477,76 | **255.18 SMLMV de 1996.** | |
| | $120´300.000,00 **TENTADO.** | **590.20 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $626´891.587,86 | **3.375,20 SMLMV** | |
| | $583´840.833,00 | **2864.40 SMLMV de 1998.** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | $259´458.013,40 | **1272.93 SMLMV de 1998.** | 87 meses **+** 34 meses y 24 días **= 121 meses y 24 días de prisión.** |
| | $85´300.000,00 | **418.49 SMLMV de 1998.** | |
| | $63´803.445,00 | **370.93 SMLMV de 1997.** | |
| | $38´341.147,40 | **269.77 SMLMV de 1996.** | |
| **TOTAL** | $1.030´743.438,80 | **5.196,52 SMLMV** | |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** | $3.057´400.000,00 | **6.068.36 SMLMV de 1998.** | 98 meses **+** 4 meses y 27 días **= 102 meses y 27 días de prisión.** |
| | $496´900.000,00 **TENTADO.** | **2.437.86 SMLMV de 1998.** | |
| **TOTAL** | $3.057´400.000,00 | **6.068.36 SMLMV** | |

En estos términos queda establecida la pena privativa de la libertad que deberá purgar para cada uno de los procesados, la cual fue impuesta teniendo en cuenta las repercusiones dinerarias, así como el conjunto de conductas desplegadas, como se dijo en precedencia; resaltando que en lo que atañe a los señores **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** y **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, a quienes la Fiscalía no les imputó el concurso de conductas, la sanción les fue graduada acorde a la cuantía general de la apropiación y a los demás parámetros arriba indicados.

Del mismo modo, la tasación de la pena principal de prisión será acogida para efectos de imponer **la sanción principal de INHABILITACIÓN PARA EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS**.

Por otra parte, al haber concurrido el ciudadano ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO en los comportamientos delictivos aquí examinados en despliegue de su ejercicio como profesional del derecho, habida consideración de que presentó las reclamaciones judiciales y administrativas, el Juzgado halla la necesidad perentoria de imponerle la pena accesoria de **INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO**, según las siguientes puntualizaciones.

En primer lugar, se detalla que según lo aquí esbozado, el delito escrutado fue cometido en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, modificado por la Ley 190 de 1996, el cual comportaba para este efecto en sus apartes 44 y 58, una sanción accesoria de prohibición para el ejercicio de profesión máxima de 5 años, en tanto que la norma paralela y posterior contenida en los cánones 46 y 51 de la Ley 599 de 2000 señala el lapso estriba entre 6 meses y 20 años, de donde emerge que la primera preceptiva en cita revierte para el acusado por efectos de legalidad ultractiva un beneficio que no envuelve la normatividad del año 2000, y, por ende, debe observarse para dosificar esta sanción accesoria, la cual debe efectuarse según el sistema de tasación por cuartos contemplada en la Ley 599 de 2000, ya que resulta más favorable para los intereses del acusado, por cuanto dicho sistema apareja una serie de limitaciones objetivas a las facultades discrecionales del Juzgador que antes no existían.

El aludido sistema queda como a continuación se expone, limitado al interior de cada cuarto por la cifra de 449.75 días:

| PRIMER CUARTO | SEGUNDO CUARTO | TERCER CUARTO | ULTIMO CUARTO |
|---|---|---|---|
| 1 a 450.75 días | 450.75 a 900.5 días | 900.5 a 1300.25 días | 1300.25 a 1800 días |

Y, en segundo término, a fin de conservar la unicidad de criterios en la dosimetría objeto de este acápite, se considera razonable, necesario y pertinente definir esta pena accesoria con arreglo a la misma proporción en que fue fijada la pena privativa de la libertad dentro del primer cuarto con referencia a la cifra que gobierna su amplitud de movilidad interior, de suerte que al estar regido cada cuarto acabado de deducir por el algoritmo de 449.75 días como diferencia entre sus respectivos extremos, y aplicarse el citado valor de 62.42%[146] en lo que toca a la movilidad dentro del primer cuarto, se obtiene el punto de doscientos ochenta punto setenta y tres (280.73) días[147], que se aproximará por favorabilidad a siete (09) meses y diez (10) días.

En esta medida el Juzgado impone al acriminado **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** sanción accesoria de **INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA** durante el término de **NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.**

**De la pena de multa.**

El Legislador adicionalmente prevé como sanción principal, la multa, en los términos de los artículos 34, 35 y 39 del estatuto penal. De acuerdo a la regla 397 inciso 1° del CP se impondrá "*…multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes*…".

Así, en el presente caso se impondrá multa equivalente al valor de lo apropiado tal como se totalizó en las filas correspondientes de la segunda columna de la relación que antecede, importe en el que se englobaron los valores relacionados con los eventos consumados, quedando por fuera de esta sanción pecuniaria el señor **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** respecto de quien si bien se habían imputado inicialmente varias conductas delictivas, actualmente subsiste sólo una tentada, visto adicionalmente que las cuantías identificadas no exceden el tope señalado en la mencionada norma, y acorde al derrotero seguido por el máximo Juez Penal Colombiano en su jurisprudencia[148]; dichas sanciones son las siguientes:

---

[146] Porcentaje obtenido según el siguiente criterio: el cálculo matemático responde al planteamiento de que la pena mínima de 72 meses es incrementada en 30.9 meses para alcanzar la sanción de 102.9 meses dentro del primer cuarto, cuya movilidad es de 49.5 meses, de suerte que para establecer la proporción de dicho aumento de 30.9 meses respecto del rango de movilidad se efectúa la siguiente operación: 30.9/49.5 = 0.624242, de forma que para señalarse en porcentaje este resultado se multiplica por 100 y a fin de eliminar los decimales reiteradamente sucesivos se aproxima al siguiente decimal, resultando el valor de 62.42%.

[147] Esta cifra se obtiene de extraer al rango de movilidad del primer cuarto equivalente a 449.75 el respectivo 62.42%, así: 449.75x62.42/100= 280.73 (aproximado para evitar los decimales sucesivos).

[148] Por ejemplo, en sentencia SP9225-2014 proferida con ponencia de la H. M. Dra. María del Rosario González Muñoz, dentro del radicado N° 37462, el 16 de julio de 2014, al momento de definir la punición, esa Corporación señaló que en tratándose del delito de peculado por apropiación agravado por cuantía superior a 200 SMLMV, de conformidad con el inciso segundo del artículo 397 del CP, la sanción corporal allí contemplada, que se entiende en el inciso primero, se aumenta en una mitad; en tanto que la pena de multa equivale al valor de lo apropiado. De dicha tasación se desprende que la Colegiatura encargada de unificar la jurisprudencia nacional sobre el particular, ha dejado sentado que el monto de sanción pecuniaria a imponer en los eventos de peculado por apropiación agravado por cuantía superior a 200 SMLMV, es el mismo de la suma dineraria sobre la que versó el ilícito, baremo que es acogido por este Estrado, de cara a lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta y habida consideración de que el citado pronunciamiento constituye precedente jurisprudencial, y, por ende, criterio auxiliar de la actividad judicial.

**TABLA 17:**

| PROCESADO | MULTA |
|---|---|
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA** | $60´400.000,00 |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ** | $165´559.423,28 |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA** | $65´200.000,00 |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | $76´900.000,00 |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO** | $77´200.000,00 |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** | $54´741.725,92 |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | $81´600.000,00 |
| **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ** | $97´000.000,00 |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA** | $98´600.000,00 |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | $98´700.000,00 |
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ** | $117´100.000,00 |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO** | $195´100.000,00 |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ** | $201´000.000,00 |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA** | $230´419.951,99 |
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | $254´782.645,18 |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO** | $274´800.000,00 |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ** | $300´236.135,34 |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY** | $304´511.547,49 |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO** | $375´500.000,00 |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | $434´113.140,82 |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** | $579´332.153,27 |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO** | $626´891.587,86 |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | $1.030´743.438,80 |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO** | $3.057´400.000,00 |

Ahora bien, la condena dineraria por los comportamientos que desplegaron los acusados en calidad de determinadores responsables de los reatos identificados, relacionadas en precedencia, **deberá ser cancelada por cada uno de ellos en la cuenta especial destinada para tal efecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho**, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2197 de 2022, que modificó el canon 42 de la Ley 599 de 2000, una vez adquiera firmeza esta decisión, comoquiera que es a partir de ese momento cuando se hace exigible. Igualmente, **cuando quede ejecutoriado este fallo, se remitirá por la secretaría de este Juzgado** la primera copia del mismo con constancia de ello y de prestar mérito ejecutivo, indicando la fecha de firmeza, a la **Oficina de Cobro Coactivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado** para los fines legales pertinentes, o en su defecto certificación en el sentido, para el propósito indicado en el referido precepto 6 de la Ley 2197 de 2022.

## DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 modifica, entre otros aspectos, la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por consiguiente, con el fin de determinar cuál es la Ley más benigna, resulta indispensable partir de la definición de favorabilidad en materia sustantiva que trae el artículo 6° del CP, en los siguientes términos:

> *"Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal*

*competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco.*

*"La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados.*

*"La analogía sólo se aplicará en materias permisivas"*.

Lo aquí relevante es que identificada una previsión normativa como precepto, cualquiera sea su conexión con otras, se aplique en su integridad, porque, no es posible tomar de la antigua Ley una parte y de la nueva, otra, porque de hacerlo, correspondería a una modalidad de configuración híbrida o de *lex tertia* que es inadmisible en casos como el que se examina, según lo expresado por la Sala de Casación Penal[149], y en la que además el Juez trascendería su rol de aplicador del derecho e invadiría abusivamente el ámbito de la producción de normas propio del legislador, lesionando así los principios de reserva legislativa y de legalidad.

Pues bien el canon 63 del CP, establecía como parámetros para conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dos requisitos, uno de índole objetivo, que habilitaba su otorgamiento siempre que la pena impuesta no supere los tres (3) años de prisión, y otro de carácter subjetivo, que se refería a que de los antecedentes personales, sociales y familiares de los sentenciados, así como de la modalidad y gravedad de la conducta punible se pudiera inferir que no se hacía necesaria la ejecución de la pena.

Ahora, la nueva legislación en su regla 29, determina que los presupuestos son:

*"1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.*

*2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el Juez de conocimiento concederá lo medido con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.*

*3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el Juez podrá conceder lo medido cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena"*.

Confrontando las dos legislaciones y anteponiendo el principio constitucional de favorabilidad, se observa que si bien es cierto inicialmente y frente al primer requisito, se podría pensar que es más ventajosa la Ley posterior, por cuanto se amplía el espectro sobre el factor objetivo, vale decir, de la exigencia de tres años pasa a cuatro, frente al caso concreto se aprecia que la sanción corporal a imponer a los procesados, salvo el caso del señor **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN** quien se juzga por un solo

[149] Providencia emitida por la Sala de Casación Penal el 24 de febrero de 2014, en el caso de única instancia identificado con el radicado 34099 (AP782-2014) adelantado contra Piedad Zucardi. Igualmente puede consultarse el auto de 3 de septiembre de 2014, adoptado por esa Alta Colegiatura en el radicado AP 5227-2014, 44.195, con ponencia de la H. M. Dra. Patricia Salazar Cuellar.

evento tentado y la sanción fue establecida en 37 meses de prisión, rebasando el confín por tan sólo 1 mes, superan con creces tales linderos objetivos, motivo por el cual no se concederá el subrogado penal bajo examen a los sentenciados, de forma que deberán purgar las respectivas sanciones privativas de la libertad, propósito para el cual se emitirá la correspondiente **orden de captura contra todos una vez el fallo adquiera ejecutoria**.

**DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA**

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la prisión domiciliaria[150], advirtiendo que el artículo 23 de la citada Ley 1709 del 2014, establece los siguientes requisitos para su concesión como sustitutiva de la intramural:

> *"1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la Ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.*
> *2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.*
> *3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.*

Por su parte el canon 38 original del CP, prevé al respecto:

> *"1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la Ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.*
> *2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.".*

El reato básico por el que se procede en este asunto es el de peculado por apropiación agravado por la cuantía consumado, que tiene prevista pena de prisión mínima de 6 años, y, respecto del tentado, 3 años, por lo que frente al primer requisito este preceptiva parecería en principio más favorable; sin embargo, al observar la segunda de las condiciones, se encuentra una prohibición explícita, ya que claramente se indica que, por la calidad del bien jurídicamente protegido de la administración pública, no es posible la concesión del beneficio. Lo que conlleva a sostener que el nuevo régimen no es más favorable, y, por tanto, el aplicable es el originalmente previsto en la Ley 599 de 2000, lo cual se analizará más adelante en caso de ser necesario.

No empece, para agotar el orden lógico de las normas, no ofrece duda desde otra óptica que el inciso 3° del actual canon 68 A del CP[151], el cual fue entronizado por el precepto 32 de la mencionada Ley 1709, establece ciertas excepciones a la prohibición de la concesión de la prisión domiciliaria, las cuales han de valorarse de cara a los artículos 461 y 314

---

[150] El H. Tribunal Superior de Bogotá en decisión del 20 de abril de 2021, bajo el radicado 11001310401620150005 3-01, estableció que "*… al emitir sentencia adversa a los intereses del acusado, atañe al fallador el deber de pronunciarse respecto de la figura regulada en el Código Penal [prisión domiciliaria], comoquiera que a él le corresponde imponer las penas principales, sustitutivas y accesorias en tanto consecuencias jurídicas de la conducta punible, al tenor de los preceptos 34 y siguientes del mencionado canon*".

[151] "*Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004*".

numerales 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 906 de 2004. Entonces, es claro que a pesar de que el mandato 68 A actual del estatuto represor excluye de manera general ese beneficio para el(los) delito(s) base de punición de este caso, es posible concederlo si se reúnen los presupuestos descritos en los artículos 461 y 314 numerales 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 906 de 2004.

En este caso, de conformidad con lo acreditado en el plenario, el Juzgado encuentra que los acriminados no cumplen de forma acreditada las exigencias consagradas por el legislador en los numerales 3°, 4° y 5° del aludido artículo 314 de la Ley 906, esto es, estado de gravidez, parto o lactancia, estado grave por enfermedad, o situación de madre o padre cabeza de familia.

De hecho, frente a los procesados MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ y ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, si bien se aportaron ejemplares de sus historias clínicas, del primero en medio físico de manos de su protectora defensiva[152], y del segundo mediante correo ordinario remitido por el mismo procesado[153], de las que se concluye que los ciudadanos padecen varias enfermedades y afectaciones de salud como hipertensión arterial, problemas cardiacos y diabetes, no menos cierto aviene que en las mismas no se consigna la actual necesidad de someterse a tratamiento intrahospitalario que impida la reclusión carcelaria, circunstancias que impiden acreditar el cumplimiento de los requisitos del canon 314 en su numeral 4°, y por ende, la concesión del beneficio bajo estudio en lo que concierne a los referidos acriminados.

De los aspectos obrantes en el infoliado y analizados para efectos de corroborar la procedencia del otorgamiento de este sustituto penal, se despende que los acusados **ÁLVARO ALBERTO RODADO CACIEDO** cuenta con actualmente 69 años de edad; **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, 70; **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, 77; **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, 66; **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, 74; **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, 77; **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, 66; **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, 75; **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, 78; **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**, 74; **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**, 67; **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, 75; **ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, 72; **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**, 69; **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, 76; **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, 74; **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, 76; **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, 83; **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, 66; **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, 81; **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**, 74; **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, 68; **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**, 83; **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, 74; y **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, 72; por lo que en su totalidad satisfacen la exigencia que contiene el numeral 2° del anunciado canon, es decir, tener edad superior a 65 años y que su personalidad, así como la naturaleza y modalidad del delito aconsejan la concesión del mecanismo sustitutivo.

Acerca de la prohibición expresa de conceder la sustitución de la detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria, respecto del delito de peculado por apropiación, cabe advertir que la H. Corte Constitucional en la

[152] Folios 127 a 211 del c. o. 1 de causa.
[153] Folios 92 a 110 del c. o. 5 de causa.

sentencia C-318 de 9 de abril de 2008, señaló: "…*el juez podrá conceder la sustitución de la medida* ***siempre y cuando*** *el peticionario fundamente, en concreto, que* ***la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas de delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2°, 3°, 4° y 5° de la norma en mención***…".

En el presente proceso, se observa que la reglamentación adjetiva penal de 2004, no exige presupuestos diferentes de que "*el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años*" y de que "*su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia*", los cuales han de estar debidamente acreditados, de donde surge que efectivamente no reclama valorar los baremos previstos en el canon anterior 38 del CP, tampoco en su versión actual introducida por la Ley 1709 de 2014, ni en el artículo 38 B represor creado por esta última. De allí que para este caso sólo se debe examinar si se cumplen o no los requisitos acabados de citar, sin que ello impida tener en cuenta otros elementos que, una vez sopesados, apoyen la conclusión.

El ordenamiento jurídico en aplicación del principio de solidaridad, de la protección a la dignidad humana y de la tutela especial que requieren ciertos grupos de personas en razón de la vulnerabilidad derivada de su condición etaria, según los artículos 1°, 13 y 46 superiores, reconoce especial amparo al adulto mayor, esto es, a la persona mayor de 60 años de edad, según el artículo 3° de la Ley 1251 de 2008[154], consagrando expresamente: "*El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria*".

Por su parte el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece:

> "…*Artículo 17: Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:*
> *1. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.*
> *2. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos.*
> *3. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la*

[154] Dice el texto legal: "*ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia. // ARTÍCULO 2o. FINES DE LA LEY. La presente ley tiene como finalidad lograr que los adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos. // ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para la interpretación y aplicación de la presente ley, téngase en cuenta las siguientes definiciones: (…)* "***Adulto mayor.*** *Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más*".

*calidad de vida de los ancianos…"*

Bajo este panorama, se estaría frente a una ponderación de derechos, en el que, a los intereses sociales en el cumplimiento de las penas, se opone el interés superior de proteger y garantizar los derechos fundamentales del adulto mayor, quien, por su situación física y mental ya disminuida por la edad, se halla en condición de debilidad manifiesta, derechos, que, como lo señala la misma constitución, son prevalentes. En el caso de la especie, se aprecia que la totalidad de los procesados deben ser considerados según los lineamientos anteriores como personas de la tercera edad, sujetos de protección constitucional especial, y mayores de 65 años acorde a la exigencia del artículo 314 numeral 2° de la Ley 906 de 2004.

Ante la otra exigencia, se destaca que el plenario no da razón de que los procesados se hubieren o se hallen involucrados en problemas de índole familiar o social distintos de los derivados de su vinculación a la presente actuación procesal y a los hechos que se analizan, comoquiera que no militan antecedentes o anotaciones judiciales o policiales indicativos de comportamiento inapropiado, de irrespeto a las normas básicas de convivencia social o a las autoridades, sumado a que se tiene que los encausados poseen arraigo familiar y social, no se acreditó al menos que hubieren sido sometidos a sanciones disciplinarias por desatención a las obligaciones que aparejaban sus relaciones laborales con el Estado, y que cuando fueron citado por las autoridades penales acudieron al llamado, salvo en el caso del señor **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, quien fue vinculado a la investigación mediante declaratoria de persona ausente, a quien pese a contar con el requisito de ser mayor de 65 años, no se le concederá el sustituto que se estudia en este aparte, por lo que la pena privativa de la libertad deberá ser purgada de forma intramural en centro de reclusión.

La anterior situación enseña que estos acusados tienen rasgos de personalidad que muestran su capacidad para vivir en comunidad y cumplir los deberes que sus calidades de miembros de la misma y de una familia les imponen.

También percibe el Juzgado la necesidad de efectuar el siguiente balance alrededor de la situación particular de los procesados EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ y JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO tienen **66** años; el señor JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA cuenta con **67** años de edad; el ciudadano MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ cuentan con **68** años de edad; el señor ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO y el señor ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN tienen **69** años; el ciudadano ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ ostenta **70** años de edad; los señores ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA y ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO **72** años de edad; los extrabajadores portuarios ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS y VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA cuentan con **74** años de edad; los señores ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ y MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO tienen **75** años; JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY y LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ ostentan con **76** años de edad; los ciudadanos ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO y ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ tienen **77** años de edad; RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO actualmente **78** años de edad; el señor JUAN DE DIOS GABRIEL

RODRÍGUEZ RIVERA cuenta con **81** años de edad; y los señores LUIS VALERIO SOLANO CASTRO y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN, tiene actualmente **83** años de edad; de forma que, a manera de ejemplo y en el orden en que fueron enlistados, acorde a la resolución 0110 de 22 de enero de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera mediante la cual se adoptan las Tablas de Mortalidad para la población del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS-[155], su esperanza de vida es de tan sólo del 20.6%, 19.8%, 19.0%, 18.2%, 17.4%, 15.9%, 14.4%, 13.7%, 13.1%, 12.4%, 11.8%, 10.0% y 8.9%, que en manera alguna dignificaría lo que les queda como expectativa.

En este orden, es menester recordar que de cara a los principios y fines de las penas, y en especial al principio de dignidad humana como pilar y directriz indeclinable de la punición, si bien es cierto se encuentra el que atañe al carácter retributivo de las mismas, no menos lo es que también se orientan a garantizar el tratamiento, la resocialización y la integración social de las personas, de donde se colige que la imposición de una condena y la definición sobre los subrogados penales debe tener en cuenta tales baremos, y, en el caso de la especie, vista la realidad particular de los procesados, no ofrece duda para el Despacho que el confinamiento de los mismos en institución penitenciaria, habida cuenta de los castigos aquí irrogados en el respectivo acápite, de suerte que en la práctica si hubieren de cumplir la sanción de forma intramural, la expectativa de vida que les queda les alcanzaría para egresar vivos del reclusorio supuestamente resocializados y vivir unos cuantos años, derivándose entonces que en el caso concreto no se cumplirían a plenitud los fines de la sanción corporal si ésta se purga en un establecimiento oficial; pero que sí se lograría bajo el entendido de que los sujetos permaneciendo en su lugar de residencia conserven la garantía de que la sanción respeta su dignidad como persona perteneciente al género humano, su inclusión social y sujeción familiar, como red de apoyo en el proceso de rejerarquización y vivencia de valores, máxime cuando se detalla su arraigo y desempeño social como factores que permiten al Despacho elevar un juicio favorable en torno de la concesión de dicho beneficio a estos acusados.

Es menester señalar que los cálculos aquí realizados son ajenos a cualquier juicio intencional o subjetivo del Despacho, de forma que no se entiendan en cuanto el deseo del mismo respecto de lo que estos acriminados sancionables puedan vivir, ni mucho menos que se refieran a lo que materialmente alcancen como límite temporal de vida, sino que se extraen a partir de los datos oficiales que habilitan establecer para algunos efectos, como el presente, cómputos a manera de vaticinios con grado de probabilidad.

Por lo tanto, encuentra este Despacho que surge el consejo a manera de conclusión de que en este caso es jurídicamente viable otorgar bajo los

---

[155] Página https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1005947&downloadname=r011014.docx. El artículo 23 del CPP faculta aplicar por remisión la normatividad adjetiva civil en los temas no regulados por la primera siempre que no riña con la naturaleza de ésta. Acorde a esa autorización, y a la luz de las reglas 177 último inciso y 191 de la extinta ritualidad civil, y 167 inciso final y 180 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), este Estrado considera que los datos contenidos en esta resolución corresponden a indicadores oficiales de carácter nacional, histórica y conocida ampliamente por el conglomerado social, de forma que, por su entidad y tales mandatos legales, consiste en un hecho notorio que, por ende, está exento de prueba.

derroteros de la Ley 906 de 2004, el mecanismo sustitutivo bajo estudio a EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN. No así se concederá al señor JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ por las razones expuestas en precedencia, relacionadas con su renuencia a acatar los llamados de la justicia.

En esta medida, **se concederá únicamente a los procesados EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ, JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO, JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA, MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ, ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO, ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN, ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ, ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA, ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO, ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO, JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO, FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS, VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA, ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO, JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY, LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ, ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO, ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ, RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO, JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA, LUIS VALERIO SOLANO CASTRO y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN el mecanismo sustitutivo de prisión intramural por domiciliaria** que habrán de garantizar mediante la suscripción del **acta contentiva de las obligaciones** de que trata el **precepto 38 A actual de la Ley 599 de 2000**, y la prestación individual de **caución prendaria**, mediante título de depósito o póliza judicial, por valor igual a **tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes** a órdenes de este Estrado o del Juzgado Ejecutor de Penas al que corresponda vigilar esta condena.

De otro lado, teniendo en cuenta la advertida renuencia presentada por el señor MOSQUERA DOMÍNGUEZ de cara a las reiteradas convocatorias efectuadas a lo largo de la actuación con miras a garantizar las prerrogativas fundamentales que le asisten, **el Juzgado negará la prisión domiciliaria a JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**. No obstante, se advierte que el mismo podrá formular la petición respectiva ante el Juez de Ejecución de Penas competente cuando sea oportuno y satisfaga las exigencias legales pertinentes.

**RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

De acuerdo con la regla 21 del CPP, "*El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible*". Acerca de la perentoriedad de

esta obligación que vincula al funcionario judicial no existe la menor duda, así lo ha hecho saber el máximo órgano colombiano de justicia penal, por ejemplo, en sentencia de 11 de diciembre de 2003, emitida en el radicado 19775, con ponencia del H. M. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

En el asunto en concreto, observa el Juzgado que en el pliego de cargos de primer grado la Fiscalía instructora dispuso en el ordinal cuadragésimo de la parte resolutiva suspender los efectos jurídicos y económicos de algunas resoluciones administrativas a partir de las cuales se ordenaron los pagos reputados indebidos en favor de los aquí procesados, disposición que fue confirmada en segundo grado.

En esta medida se aprecia que dicha orden de suspensión que apareja carácter provisional cumplió su objeto, toda vez que acorde al canon 21 del CPP, era menester adoptar una determinación enderezada a evitar que la presunta lesión al ordenamiento jurídico nacional y al erario siguiera causando estragos, de forma que al llegar la actuación al estadio de sentencia se ha de emitir un decreto de carácter definitivo sobre el particular, debiéndose tener en cuenta aquellas decisiones que, dictadas en otras causas penales, por ejemplo, decretaron la revocatoria definitiva de los efectos jurídicos y económicos de algunos de los actos administrativos que fueron otrora suspendidos en esta causa, así como las actas de conciliación que motivaron parte de los pagos investigados en la presente investigación.

Aunado a los comentados acuerdos, sobre este mismo particular se tiene la existencia de los pronunciamientos judiciales que fundamentaron parte de las decisiones administrativas que dieron lugar a las ilícitas erogaciones juzgadas, de las que no se tiene certeza de su revocatoria en sede de consulta, actos que en procura de salvaguardar los recursos públicos serán objeto de extracción del orden de pagos, en caso de que hicieran parte de las decisiones o acuerdos conciliatorios que aún se hallaren pendientes por pago o con solicitud en curso en ese sentido, las cuales conjuntamente con las resoluciones que serán objeto de revocatoria definitiva se relacionarán en la siguiente tabla y se diferenciarán con sombreado.

**TABLA 18:**

| PROCESADO | DECISIONES JUDICIALES | ACTOS ADMINISTRATIVOS |
|---|---|---|
| **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO** | | Resolución 832 de 07 de mayo de 1996. Dra. **NIRA ESTHER FÁBREGAS MAZA**. |
| | Sentencia J8LC de 26 de mayo de 1996; Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de 22 de julio de 2015, dispone la revocatoria de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones **1015** de 07 de mayo, **1404**, **1519**, **1667** y **2070** de 08 de mayo y **369** de 06 de abril de 1998. | Resoluciones 2371 de 1996 y 1404 de 08 de mayo de 1998. ***Revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017, revoca resoluciones 1015 de 07 de mayo, 1404, 1519, 1667 y 2070 de 08 de mayo y 369 de 06 de abril de 1998***. |
| | | Acta de Conciliación falsa 2339 de 23 de diciembre de 1993. Pagada con resolución 243 de 19 de marzo de 1998. ***Efectos económicos revocados con resolución 1067 de 01 de agosto de 2008***. |

| | | |
|---|---|---|
| | Sentencia J4LC de 21 de diciembre de 1993. | Resolución 369 de 06 de abril de 1998. ***Revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017***. |
| | | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. ***Revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017***. |
| | Sentencia J8LC de 17 de julio de 1995. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. Resolución 1519 de 08 de mayo de 1998. ***Revocada con resolución RDP 003842 de 03 de febrero de 2017***. |
| | Sentencia J3LC de 07 de mayo de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 24 de abril de 1996. Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 19 de marzo de 2004. | Resoluciones 1015 de 07 de mayo de 1998 y 2686 de 10 de agosto de 1998. |
| **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS** | | Resolución 792 de 1994. |
| | | Resolución 1443 de 1996. |
| | Sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995. | Resoluciones 1283 de 25 de junio de 1996; ***revocada con resolución 0981 de 30 de agosto de 2011*** y 1058 de 07 de mayo de 1998; ***revocada con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016***. |
| | Sentencia J8LC de 26 de agosto de 1996. | Resoluciones 1020 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998. ***Revocadas con resolución RDP 045737 de 05 de diciembre de 2016***. |
| **ÁLVARO JESÚS BLANCO CASTRO** | Sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** | Sentencia J4LC de 22 de noviembre de 1995. | Resolución 413 de 06 de abril de 1998. *Acto administrativo* ***RDP 011101 adiado el 17 de marzo de 2017, revoca los efectos de esa resolución.*** |
| | Sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996. | Resolución 1405 de 1996. |
| | Sentencia J1LC de 13 de febrero de 1996. | Resolución 1194 de 29 de junio de 1997. *Resolución revocada mediante acto administrativo* ***1484 de 04 de noviembre de 2009.*** |
| | | Acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998, ***RDP 011101 del 17 de marzo de 2017, revoca los efectos de esa resolución.*** |
| | Sentencia J8LC de 02 de febrero de 1995. | Resolución 114 de 20 de febrero de 1998, *resolución* ***1484 de 04 de noviembre de 2009, dispone la revocatoria directa de la resolución.*** |
| | Sentencia J3LC de 26 de noviembre de 1996. | Resolución 276 de 20 de marzo de 1998, *resolución* ***1484 de 04 de noviembre de 2009, ordena la revocatoria parcial del acto administrativo.*** |
| | Sentencia J8LC de 25 de junio de 1996. | Resoluciones 1024 de 07 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998. *Revocatoria aplicada en virtud de la* ***resolución 1797 de 29 de agosto de 2003*** *(documento 96 HVP).* |
| **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ** | Sentencia del J8LC fechada el 03 de mayo de 1994. | Resolución 932 de 1994. Resolución 028 de 18 de enero de 1997. *Resolución* ***0151 de 22 de febrero de 2010, revoca parcialmente las mencionadas resoluciones.*** |
| | Sentencia del J8LC de 26 de septiembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; *resolución* ***0151 de 22 de febrero de 2010, revoca parcialmente la resolución.*** |
| **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO** | Mandamiento de pago del J4LC de 16 de marzo de 1998. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; *mediante resolución* ***RDP 00481 de 11 de enero de 2017, ordena la revocatoria.*** |
| | Sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996. | Resoluciones 1029 de 05 de mayo y 2070 de 20 de mayo de 1998; *mediante resolución* ***RDP 00481 de 11 de enero de 2017, ordena la revocatoria de las decisiones administrativas.*** |
| | Sentencia J2LC de 19 de marzo de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; *acto administrativo* ***RDP 013753*** |

| | | |
|---|---|---|
| **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**. | | ***de 31 de marzo de 2017, deja sin efectos la resolución.*** |
| | | Acta de conciliación falsa 1561 de 17 de diciembre de 1993, resolución 2226 de 12 de junio de 1998; *acto administrativo* ***RDP 013753 de 31 de marzo de 2017, revoca***. |
| | | Acta de conciliación falsa 1517 de 22 de diciembre de 1993, resolución 2502 de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 29 de octubre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; *acto administrativo* ***RDP 013753 de 31 de marzo de 2017, deja sin efectos la resolución.*** |
| **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ.** | Sentencia J5LC de 13 de mayo de 1993. | Resolución 242 de 15 de abril de 1994 y 1341 de 25 de junio de 1996. ***Estas resoluciones se revocan en virtud del acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011.*** |
| | Sentencia J8LC de 26 de noviembre de 1996, revocada mediante decisión de 07 de mayo de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. ***Revocada con acto administrativo 1512 de 15 de noviembre de 2011;*** y resolución 1033 de 07 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J4LC de 10 de enero de 1997. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, y resolución 1300 de 07 de mayo de 1998. |
| **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO.** | | Resoluciones 423 de 1996, ***revocada con resolución 480 de 31 de marzo de 2009,*** y acto administrativo 832 de 07 de mayo de 1996. |
| | Sentencia J2LC de 05 de diciembre de 1995. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *revocada con* ***RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016***. |
| | Sentencia J8LC de 16 de diciembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, ***revocada con RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016***. |
| | Sentencia J4LC de 05 de marzo de 1997. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, ***revocada con RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016***. |
| | Sentencia J4LC de 10 de enero de 1997. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *revocada con* ***RDP 046276 de 09 de diciembre de 2016***. |
| **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ.** | | Resolución 1262 de 20 de junio de 1996. |
| | Sentencia J6LC de 09 de agosto de 1996; Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 31 de agosto de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; resolución ***RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016***. |
| | Sentencia J8LC de 29 de enero de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; *resolución* ***RDP 046544 del 12 de diciembre de 2016, revoca parcialmente la primera mencionada.*** |
| **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO.** | Sentencia J3LC de 05 de julio de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, ***revocada mediante resolución RDP 011623 del 22 de marzo de 2017***. |
| | Sentencia J4LC de 10 de julio de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | | Acta de conciliación falsa 2105 de 15 de diciembre de 1993, resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 24 de enero de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO.** | Sentencia J4LC de 17 de julio de 1996. | Acta de conciliación 025 de 02 de junio de 1998; resolución 2226 de 12 de junio de 1998; ***acto administrativo RDP 011623 del 22 de marzo de 2017, revoca parcialmente.*** |
| | Sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993. | Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998, *acto administrativo* ***RDP 011623 del 22 de marzo de 2017, revoca parcialmente.*** |
| | Sentencia J8LC de 02 de diciembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996; Sentencia revocada por | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |

| | | |
|---|---|---|
| | el TS de Pamplona con decisión de 18 de mayo de 2004. | |
| **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO.** | Sentencia J1LC de 12 de febrero de 1996. | Resolución 238 de 05 de febrero de 1996. |
| | Sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994. | Resolución 330 de 19 de febrero de 1996 y 830 de 1997; *acto administrativo* ***1516 de 15 de noviembre de 2011, revoca parcialmente*****.** |
| | | Resolución 1909 de 1996. |
| | Sentencia J1LC de 11 de octubre de 1994. | Resolución 830 de 10 de junio de 1997; *acto administrativo* ***1516 de 15 de noviembre de 2011, revoca parcialmente*****.** |
| | Sentencia J6LC de 21 de diciembre de 1993. | Resolución 369 de 06 de abril de 1998. |
| | Mandamiento de pago J6LC de 29 de octubre de 1997. | Acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| | | Resolución 1689 de 11 de noviembre de 1997. |
| | Sentencia J8LC de 12 de febrero de 1996; Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 24 de octubre de 2003. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA.** | | Resolución 243 de 1994. |
| | | Resolución 2414 de 1995. |
| | Sentencia del J3LC de 13 de junio de 1995; Sentencia revocada por el TS de Santa Rosa de Viterbo con decisión de 29 de julio de 2003. | Resolución 330 de 19 de febrero de 1996. |
| | | Resolución 2399 de 1996. |
| | Sentencia J4LC de 26 de julio de 1995. | Resolución 2008 de 30 de septiembre de 1996. |
| | Mandamiento de pago J2LC de 12 de noviembre de 1997. | Acta de conciliación falsa 2409 de 29 de diciembre de 1993, Resolución 2226 de 08 de junio de 1998. |
| | Sentencia J4LC de 12 de junio de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN.** | Sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J4LC sin fecha de providencia con mandamiento de pago de 04 de diciembre de 1997. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 24 de abril de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** | | Resolución 296 de 01 de diciembre de 1993. |
| | | Resolución 2339 de 1996; acta de conciliación 050 de 21 de marzo de 1996. |
| | Sentencia J8LC de 26 de septiembre de 1994. | Resolución 848 de 10 de junio de 1997. |
| | Mandamiento de pago J8LC de 26 de septiembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998; acta de conciliación falsa 1526 de 16 de diciembre de 1993. |
| | Mandamiento de pago de 21 de octubre de 1996. | Acta de conciliación 020 de 06 de mayo de 1998, Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 15 de julio de 1996; Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 06 de febrero de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J4LC de 19 de marzo de 1997. | Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY.** | | Resolución 520 de 17 de abril de 1998, ***revocada de forma directa mediante resolución 1050 de 18 de agosto de 2010***. |
| | | Resolución 173 de 31 de enero de 1995. |
| | | Resolución 262 de 08 de febrero de 1996. |
| | | Resolución 2339 de 1996. |
| | Sentencia J1LC de 06 de enero de 1996. | Resolución 677 de 21 de mayo de 1997. |

| | | |
|---|---|---|
| | Sentencia J8LC de 29 de abril de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO.** | | Resolución 792 de 1994. |
| | | Resolución 255 de 1996 y resolución 1990 de 30 de septiembre de 1996. |
| | Mandamiento de pago J8LC de 29 de noviembre de 1996. | Acta de conciliación falsa 1630 de 30 de diciembre de 1993. |
| | Mandamiento de pago J6LC de 28 de noviembre de 1996. | Acta de conciliación falsa 1629 de 30 de diciembre de 1993, resolución 1092 de 29 de julio de 1997. |
| | Mandamiento de pago J2LC de 27 de noviembre de 1996. | Acta de conciliación 006 de 05 de junio de 1998 resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 09 de diciembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO.** | Sentencia del J8LC de 05 de julio de 1994. | Resolución 1136 de 23 de septiembre de 1994. |
| | | Resolución 352 de 1995. |
| | | Resolución 2133 de 09 de octubre y 2668 de 29 de diciembre de 1995. ***Actos administrativos dejados sin efectos con resolución 1039 del 30 de septiembre de 2007.*** |
| | | Resolución 2344 de 1996. |
| | Sentencia J5LC de 14 de julio de 1994 *(documento 22 HVP)*, mandamiento de pago J5LC de 17 de mayo de 1995; Sentencia revocada por el TS de Barranquilla con decisión de 18 de diciembre de 2002. | |
| | Sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA.** | Sentencia J8LC de 20 de agosto de 1996; Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 30 de abril de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA.** | Sentencia J8LC de 05 de diciembre de 1996; Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 23 de abril de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ.** | Sentencia J8LC de 17 de diciembre de 1993. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 27 de diciembre de 1993. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Sentencia J4LC de 15 de mayo de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| | Mandamiento de pago J4LC de 24 de febrero de 1998. | Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| | Sentencia J1LC de 27 de febrero de 1996. | |
| **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN.** | Sentencia J3LC de 23 de noviembre de 1993. | Resolución 629 de 25 de marzo de 1995 y 316 de 1996. |
| | Sentencia J4LC de 02 de febrero de 1996. | Resolución 2226 de 12 de junio de 1998. |
| | Sentencia J8LC de 25 de noviembre de 1996; Sentencia revocada por el TS de Armenia con decisión de 26 de marzo de 2004. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA.** | Sentencia J4LC de 07 de febrero de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ.** | Sentencia J8LC de 19 de diciembre de 1996. | Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. |
| **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO.** | | Acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998. Resolución 2070 de 20 de mayo de 1998. **Dejada sin efectos en virtud de la sentencia de 22 de julio de 2015, proferida por la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la causa 2014-00001 que se adelantara en contra del señor CASIO ALBERTO MORA GARCÍA por el delito de peculado por apropiación.** |

En virtud de lo anterior, el Despacho ordenará **levantar definitivamente la orden de suspensión de los efectos económicos y jurídicos decretada por el Despacho Tres de la Estructura de Apoyo para FONCOLPUERTOS de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica** en la resolución calificatoria del sumario 214 adiada el 11 de diciembre de 2012, mediante la cual profirió la acusación en contra de los procesados en esta causa, decisión que fue confirmada el 12 de marzo de 2015, por la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, máxime cuando esa medida ya cumplió su cometido.

Frente a las actas de conciliación igualmente identificadas en el cuadro que antecede, materializadoras de los reatos examinados respecto de cada uno de los procesados que se beneficiaron con su concreción y de las que se generaron las conocidas consecuencias jurídicas ilícitas, las cuales continúan surtiendo efectos jurídicos, máxime cuando se detalla que no se acredita que mediante decisión administrativa o de carácter judicial hubieren sido suspendidos sus efectos o se hayan revocado tales actuaciones, **el Despacho procederá a adoptar las medidas de que trata el canon 21 instrumental para que estos acuerdos junto con aquellos actos administrativos que dispusieron el pago de las sumas dinerarias ordenadas en virtud de los hechos juzgados y que aún no han sido objeto de revocatoria, cesen definitivamente los efectos jurídicos y económicos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se resarzan los perjuicios causados por la conducta punible**, de forma que cese la afectación reiterada al patrimonio estatal.

En consecuencia, **se dispondrá dejar definitivamente sin efectos jurídicos y económicos única y exclusivamente, en razón de los hechos aquí escrutados y por la concurrencia personal de los procesados de forma personal o por intermedio de sus representantes judiciales,** los actos indicados reconocidos en la relación que precede, por lo que **la UGPP se abstendrá de pagar** los valores que en razón de la suspensión arriba señalada y aquí levantada fueron dejados de cancelar a los beneficiarios de estas actuaciones, por cuanto al haber sido halladas ilícitas no pueden en manera alguna generar derechos, razón por la cual no procede la cancelación de los montos impagos hasta el momento.

**Esta determinación se hará efectiva una vez quede en firme este fallo.**

Se decretará **comunicar estas situaciones a dichas autoridades judiciales y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)** y al **Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (FOPEP)**, para que a partir de la firmeza de esta sentencia y de su correspondiente comunicación, procedan de conformidad, cesen los efectos creados por las conductas punibles y las cosas vuelvan al estado anterior, esto en cuanto que no hubieren sido objeto de pronunciamiento similar al presente o de invalidación por otra autoridad competente.

De otra parte, se debe indicar que las pretensiones encaminadas a la devolución de los montos a raíz de la referida decisión del ente acusador, como se dijo, es un asunto cuya resolución y examen corresponde a la UGPP, la cual deberá obrar conforme a sus funciones.

Con estas determinaciones el Despacho se pronuncia de fondo frente a algunas solicitudes elevadas por algunos de los sujetos procesales en lo atinente, por ejemplo, a la suspensión o revocatoria de la orden emanada de la Fiscalía orientada al restablecimiento del derecho, a las devoluciones o pagos de valores dinerarios y otros temas.

Finalmente, se ordena adicionar a las comunicaciones respectivas dirigidas a las referidas entidades copia de la presente decisión.

## DAÑOS Y PERJUICIOS

De acuerdo con las disposiciones 94, 95, 96 y 97 del CP, y 56 del CPP, la conducta punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales causados, los cuales deberán ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria. En el presente caso se advierte que los daños solicitados por la parte civil[156], UGPP, corresponden a los perjuicios materiales y morales, y en concreto al daño emergente[157] y lucro cesante, que de conformidad con el artículo 97 *ibídem* deberán probarse en el proceso.

En la de demanda de constitución de parte civil, dentro el aparte nombrado "ESTIMACION DE PERJUICIOS", ésta impetró: "*… por los hechos brevemente expuestos, obrando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DELA (sic) PROTECCIÓN SOCIAL – GRUPO INTERNO DE TRABAJO para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, dentro del proceso que se adelanta contra quienes resultaren vinculados posteriormente, y declarados responsables, por el o los punibles investigados, solicito se determinen de la siguiente forma (…) DAÑOS MATERIALES: siendo los provenientes del DAÑO EMERGENTE y EL LUCRO CESANTE, se solicita condenar a quienes resultaren vinculados y posteriormente condenados, al pago solidario en la suma que se establezca según lo que pueda resultar probado dentro del proceso y que desde ya los estimo provisionalmente en un valor superior a DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10.000), dado el monto de lo efectivamente pagado por el extremo demandante, además de todos los gastos y costos en que ha tenido que incurrir la Administración por los acontecimientos objeto de investigación (…) DAÑOS MORALES: se solicita sean estimados de acuerdo al criterio del señor Juez que haya de proferir el correspondiente fallo definitivo. Lo anterior, teniendo en cuenta en que (sic) casos pueden o no ser tasados, dada la calidad de las partes y conforme a los pronunciamientos jurisprudenciales que sobre la materia puedan existir (…)* ".

Se memora que la aludida disposición 56 ritual señala que en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes de los hechos investigados, el Juez procederá a liquidarlos de acuerdo con lo acreditado en la actuación, y en la sentencia condenará al responsable

---

[156] Folios 1 a 5 del c. o. de parte civil.

[157] El Código Civil en su artículo 1614 establece *"Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento".*

de los daños causados con la conducta punible, artículo que también habilita para pronunciarse sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar, las cuales, en el presente caso, atendiendo que el representante de la parte civil estimó de forma provisional en la demanda presentada en el trámite, que su aspiración se plantaba transitoriamente en 10.000 SMLMV, acogiéndose a lo que encontrara probado dentro del diligenciamiento, el Juzgado encuentra que la pretensión se compadece con lo que a lo largo de este examen se ha demostrado y la misma posición plasmada por esta bancada en el escrito demandatorio, luego accederá a esta solicitud resarcitoria.

Bajo esta premisa, dentro del expediente se halla probado que los procesados percibieron del erario a partir de su actuar delictual las cuantías identificadas en la tabla 16, correspondientes a los eventos que actualmente subsisten en observancia de la vigencia de la acción penal, que en manera alguna se compadecen con la totalidad de los hechos que en principio se congregaron en el pliego de cargos y que, de contera, no ascienden a las sumas dinerarias inicialmente relacionadas por la Fiscalía respecto de cada uno de los enjuiciados; luego serán estos totales los que de manera solidaria con el abogado COLLANTE PACHECO, en lo que atañe a los pagos efectuados con ocasión de la suscripción del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998, y con quienes estuviesen o resultaren condenados por los demás eventos materia de la presente causa, deberán pagar los enjuiciados por perjuicios causados con su desplegar delictivo las sumas que a continuación se relacionan:

**TABLA 19:**

| **PROCESADO** | **DAÑOS Y PERJUICIOS** |
|---|---|
| VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA | **296.33 SMLMV** |
| MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ | **309.11 SMLMV** |
| JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA | **319.88 SMLMV** |
| ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ | **377.28 SMLMV** |
| JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO | **378.75 SMLMV** |
| LUIS VALERIO SOLANO CASTRO | **385.16 SMLMV** |
| FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS | **400.34 SMLMV** |
| JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ | **475.89 SMLMV** |
| JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA | **483.74 SMLMV** |
| ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO | **484.23 SMLMV** |
| ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ | **574.50 SMLMV** |
| RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO | **957.17 SMLMV** |
| ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ | **986.12 SMLMV** |
| ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA | **1.228,14 SMLMV** |
| ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO | **1.249,99 SMLMV** |
| JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO | **1.348,19 SMLMV** |
| MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ | **1.472,98 SMLMV** |
| JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY | **1.544,38 SMLMV** |
| ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO | **1.842,24 SMLMV** |
| LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ | **2.196,42 SMLMV** |
| JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN | **2.842.54 SMLMV** |
| MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO | **3.375,20 SMLMV** |
| EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | **5.196,52 SMLMV** |
| ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO | **6.068.36 SMLMV** |

Los condenados deberán cumplir esta orden, en las condiciones ya indicadas, dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la firmeza de este fallo, a favor de la Nación por intermedio de la Parte Civil constituida en este trámite.

Se memora que tales valores deberán ser pagados respectivamente por los acriminados en la cifra nominal que corresponde a SMLMV del momento en que efectúen materialmente su cancelación, para preservar el derecho de la víctima a recibir el resarcimiento de perjuicios en valor actual que es representado por dicha unidad de medida, motivo por el cual no se estima viable ordenar la indexación de los valores nominales ni tampoco ordenar el pago de intereses, ya que de obrar en tal sentido y ordenar el pago en SMLMV del momento de la cancelación efectiva se conculcaría el principio *non bis in idem*, habida cuenta de que la decisión de que la obligación indemnizatoria se cumpla con SMLMV del momento del pago apareja la actualización de las cifras y la garantiza hasta el instante de su cancelación.

Se aprecia que en la presentación de los argumentos presentenciales el apoderado de la parte civil, reclamó, además de las sumas que por conceptos de daños y perjuicios se encontraren sustentadas, el pago del 6% por interés legal adicional acorde al precepto 1617 del Código Civil, que trata de la indemnización por mora en obligaciones dinerarias, así como remitir copias de la decisión que así lo declare a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo; ruegos en torno de los que el Juzgado considera, respecto del primero, que se trata de pretensión que no fue planteada dentro de la demanda que da inicio al trámite civil que se consume en paralelo al diligenciamiento penal, lo que hubiere ameritado introducir una adición a la demanda con el agotamiento publicitario propio del rito a fin de que la totalidad de las partes tuviesen la oportunidad de controvertir esta aspiración, pues acoger los anhelos formulados en sede de alegatos conclusivos desconocería baremos superiores de orden sustantivo y procedimental de impacto civil y haría recaer las decisiones en la incongruencia.

Los baremos fundantes del litigio deben propender por que la posición de las partes, dentro de la que se encuentran las razones de hecho y de derecho que cada una de ellas acoge como tesis, sea discutida al interior y a lo largo del procedimiento, y no en su momento final, con la participación de los interesados, de manera que no se vean sorprendidos con posterioridad con afirmaciones o pretensiones que no fueron plenamente conocidas y discutidas en el trámite, con lo que se coartaría el valor superior al debido proceso al sustraerse de la controversia aspectos directamente relacionados con el objeto de la decisión de fondo; razón por la cual el Juzgado no acogerá la solicitud del representante de la parte civil relacionada con la imposición de sanción del 6% respecto de las sumas apropiadas por los procesados, comoquiera que se trata de pretensión que no fue planteada en debida forma ni tampoco dentro de la oportunidad de Ley al interior del proceso.

Así, además de desconocer el principio de congruencia también conculcaría el de *non bis in idem*, como ya se dijo, si el Despacho accede a la petición tardía de la parte civil enderezada a la condena también en intereses.

En esta medida, ante esta orden resarcitoria, es menester instar a la UGPP o a la entidad que hace sus veces a fin de que respete las garantías fundamentales con miras a no violar el principio *non bis in ídem* de cara a la posibilidad de ejecutar la condena en perjuicios aquí decretada y/o ejercer los descuentos directos por nómina que eventualmente se adopten o hubieren sido dispuestos por esa entidad, de modo que no lleve a cabo un doble cobro o doble percepción del mismo monto.

En torno de la solicitud de tasación de daños morales, advierte este Estrado que en este caso no se probaron al menos sumariamente, como debe hacerse, las situaciones que harían viable la condena por daños morales objetivados cuando el Estado o una entidad jurídica es víctima de un delito[158].

En torno de la postulación del representante de la víctima dirigida a que en su momento se remita a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación la decisión que en perjuicios se adopte para lo de su competencia, el Despacho encuentra procedente acceder a la solicitud del togado, haciendo la claridad de que no es esa entidad la que ha de hacerla efectiva o promover su ejecución, sino que su obrar se enmarca legalmente dentro y para otros avatares oficiosos, motivo por el cual, una vez en firme esta providencia, se remitirá copia auténtica de la misma a la mencionada unidad para lo de su cargo.

Finalmente, frente a la posibilidad de que se condene en costas judiciales agencias en derecho, expensas y demás erogaciones al encausado, cabe recordar que el canon 56 litúrgico y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, son claros al establecer que tales conceptos deben ser acreditados dentro del proceso, en cuyo caso su liquidación se deberá hacer cuando se encuentre ejecutoriada la decisión donde se ordenaron, como lo sostuvo esa Alta Corporación en sentencia de 13 de abril de 2011, emitida dentro del 34145, con ponencia del H. M. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.

De cara a este tópico, el Despacho encuentra que la Nación se constituyó como parte civil en este caso por medio de la actividad desplegada por alguna de sus entidades, y efectuó las diligencias concernientes a la defensa y promoción de sus intereses y pretensiones, de forma que acorde a la normatividad legal sustantiva y adjetiva así como administrativa emanada mediante Acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es procedente condenar a los aquí acriminados de quienes se tiene acreditada su concurrencia personal y responsable en los ilícitos objeto de estudio, a pagar solidariamente a favor de la Nación por intermedio de la UGPP, o de la entidad que hiciere sus veces, las costas judiciales, agencias en derecho, expensas y demás erogaciones en que la parte ofendida hubiere incurrido para gestionar en este asunto sus derechos, esto en atención al artículo 392 numeral 8° del extinto Código de Procedimiento Civil, que disponía que "*solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación*", y las actuales previsiones de los cánones 361 a 365 del CGP, en especial la 365 numeral 8° ídem que reprodujo a su antecesora trascrita.

---

[158] Consultar acerca de este tema el fallo adoptado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de mayo de 2013, en el asunto 40160, con ponencia del H. M. Dr. Javier Zapata Ortiz.

En el presente asunto, se advierte que por no estar aún la presente decisión en firme, es inviable por el momento efectuar la consecuente liquidación, la cual se realizará en la oportunidad ya indicada.

**OTRAS DETERMINACIONES.**

Teniendo en cuenta que dentro de la actuación reposa el **ejemplar original del acta de conciliación 050 de 30 de abril de 1998**, recaudada en curso de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en la sede del Ministerio de la Protección Social, archivo de la Dirección Territorial del Trabajo, Regional Cundinamarca[159], objeto de la presente investigación, se dispone que una vez se encuentre en firme la presente decisión, se remita el anunciado documento junto a los anexos que la compongan a la comentada dependencia administrativa para que haga parte de sus archivos, dejándose reproducción en el correspondiente cuaderno con la constancia de su sustracción, habida consideración de que para entonces no será de necesario contar con el documento original del acuerdo. Orden que se extenderá respecto del el **ejemplar original del proceso adelantado por el señor ARMANDO RAFAEL OSPINO ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla**[160], el cual será remitido a esa oficina para que se proceda a su archivo.

**NOTIFICACIONES**

Dado el alto número de sujetos procesales, y que la mayoría de éstos residen en diferentes municipios del país, es necesario decretar, en garantía a los derechos de la defensa y debido proceso, que la notificación de la presente sentencia a quienes no tienen domicilio en esta ciudad o no pueden comparecer directamente al Despacho, se efectué mediante comisión acorde a la regla 84 de la Ley 600 de 2000, con miras a que el Juzgado Penal Municipal o del Circuito (o Mixto) competente de la respectiva municipalidad intente la notificación personal según el precepto 178 *idem,* especialmente observando el inciso 3° que reza "*La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga*", motivo por el cual se remitirá con el despacho comisorio correspondiente solamente una copia de este fallo en texto físico impreso y en archivo digital soportado en disco óptico.

Para dicho cometido se concede a los Juzgados Penales comisionados, los cuales precisará la secretaría en los Despacho respectivos, el término perentorio de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, y desde ahora se solicita que una vez cumplido lo anterior sea regresado el diligenciamiento atendido conforme a la Ley.

Es menester advertir a los Juzgados Penales comisionados que en razón de que la Ley 600 de 2000 en los artículos arriba indicados definió con toda claridad la reglamentación atinente a esta clase de notificación, no podrán

[159] Cuadernos de anexos de instrucción 2, 3 y 4.
[160] Cuaderno de anexos 14 de instrucción.

dilatar el trámite o exigir el acompañamiento de otras piezas procesales o mayor cantidad de copias de esta providencia, toda vez que en estos eventos el mandato 23 de dicha Ley no permite por lo expresado remitirse a otras codificaciones adjetivas.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO DIECISÉIS PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO**: **NEGAR** la declaratoria de prescripción deprecada por los abogados **HERNÁN SÁNCHEZ BUSTILLO**, **ORLANDO OSORIO OROZCO** y **EDGARDO JOSÉ HERNÁNDEZ MONTERO (q.d.e.p.)**, ante la advertida ausencia de argumentaciones en la solicitud.

**SEGUNDO: DECLARAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DECRETAR LA CONSECUENTE CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO ÚNICAMENTE** respecto de las conductas enlistadas en las **Tablas 3 y 4** de la presente providencia, atendiendo las apreciaciones efectuadas sobre el particular en el pasaje correspondiente, así como del hecho endilgado al señor **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ** al carecer de identificación de los conceptos reclamados y de la identidad de la autoridad judicial que declaró la procedencia de la condena en cuantía de $6´726.372,33, adoleciendo de datos que den cuenta de la fecha en que se dio su pago.

**TERCERO: ABSOLVER** al señor **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de la sindicación efectuada a título de **DETERMINADOR** de los eventos relacionados con la firma del acta de conciliación 073 de 10 de enero de 1997, por atipicidad de la conducta derivada de la ausencia de prueba respecto de la ilicitud.

**CUARTO: ABSOLVER** al ciudadano **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de la sindicación efectuada a título de **DETERMINADOR** de los hechos que rondaron la materialización del acta de conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, al emerger duda en torno de su responsabilidad.

**QUINTO: ABSOLVER** al ciudadano **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, de condiciones civiles y personales glosadas en el expediente, respecto del señalamiento criminal del que se le acusó a título de **DETERMINADOR** de los acontecimientos asociados con la celebración de la conciliación falsa 2105

de 15 de diciembre de 1993, al imperar la duda de cara a su responsabilidad.

**SEXTO: ABSOLVER** al ciudadano **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, de condiciones civiles y personales obrantes en el infoliado, respecto de la sindicación que a título de **DETERMINADOR** que se le enrostró por el hecho vinculado con la materialización de la conciliación falsa 2290 de 21 de diciembre de 1993, al imperar la duda de cara a su responsabilidad.

**SÉPTIMO: CONDENAR** al señor **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO TENTADO,** a la pena principal de **TREINTA Y SIETE (37) MESES DE PRISIÓN, E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**OCTAVO: CONDENAR** al ciudadano **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**, de condiciones civiles y personales obrantes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y TRES (73) MESES DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($60´400.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**NOVENO: CONDENAR** al ciudadano **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, de condiciones civiles y personales consignadas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **OCHENTA Y UN (81) MESES Y DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($165´559.423,28), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO: CONDENAR** al señor **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, de circunstancias civiles y personales conocidas en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y CUATRO (74) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($65´200.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR** al señor **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, de condiciones civiles y personales distinguidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y CUATRO (74) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($76´900.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR** al ciudadano **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, de condiciones civiles y personales obrantes en el infoliado, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y CUATRO (74) MESES Y**

**VEINTICINCO (25) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($77´200.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO TERCERO: CONDENAR** al señor **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, de condiciones civiles y personales consignadas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO,** a la pena principal de **SETENTA Y OCHO (78) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($54´741.725,92), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO CUARTO: CONDENAR** al ciudadano **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, de condiciones civiles y personales obrantes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y CINCO (75) MESES Y DIEZ (10) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($81´600.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO QUINTO: CONDENAR** a **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y CINCO (75) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A NOVENA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97´000.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO SEXTO: CONDENAR** al señor **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**, de condiciones civiles y personales yacentes en el infoliado, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO,** a la pena principal de **SETENTA Y SEIS (76) MESES DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($98´600.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO SÉPTIMO: CONDENAR** al ciudadano **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **SETENTA Y SIETE (77) MESES DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($98´700.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR** al ciudadano **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, de condiciones civiles y personales consignadas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **OCHENTA Y UN (81) MESES Y DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A**

**CIENTO DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($117´100.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**DÉCIMO NOVENO: CONDENAR** al señor **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO,** a la pena principal de **NOVENTA Y TRES (93) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($195´100.00,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO: CONDENAR** a **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, de condiciones civiles y personales obrantes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **OCHENTA Y DOS (82) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A DOSCIENTOS UN MILLONES DE PESOS ($201´000.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO PRIMERO: CONDENAR** al ciudadano **ARNALDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **NOVENTA Y UN (91) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($230´419.951,99), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO SEGUNDO: CONDENAR** al señor **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO**, de condiciones civiles y personales identificadas en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO,** a la pena principal de **NOVENTA Y CINCO (95) MESES Y ONCE (11) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($254´782.645,18), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO TERCERO: CONDENAR** al ciudadano **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **CIEN (100) MESES Y TRES (3) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($274´800.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO CUARTO: CONDENAR** al señor **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, de condiciones civiles y personales yacentes en la actuación, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **CIEN (100) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($300´236.135,34), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO QUINTO: CONDENAR** a **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, de condiciones civiles y personales obrantes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **OCHENTA Y OCHO (88) MESES DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($304´511.547,49), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO SEXTO: CONDENAR** al ciudadano **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, de condiciones civiles y conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **CIENTO UN (101) MESES Y DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($375´500.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONDENAR** al señor **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, de condiciones civiles y personales yacentes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **CIENTO CUATRO (104) MESES DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($434´113.140,82), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO OCTAVO: CONDENAR** al ciudadano **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**, de condiciones civiles y personales contenidas en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **NOVENTA Y CUATRO (94) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($579´332.153,27), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**VIGÉSIMO NOVENO: CONDENAR** a **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, EN CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO,** a la pena

principal de **CIENTO DIECISIETE (117) MESES Y CATORCE (14) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($626´891.587,86), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**TRIGÉSIMO: CONDENAR** a **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, de condiciones civiles y personales yacentes en el expediente, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO,** a la pena principal de **CIENTO VEINTIÚN (121) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A MIL TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.030´743.438,80), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL.**

**TRIGÉSIMO PRIMERO: CONDENAR** al señor **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a título de **DETERMINADOR** del **DELITO DE PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO EN CURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO CON PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO TENTADO,** a la pena principal de **CIENTO DOS (102) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA IGUAL A TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.057´400.000,00), E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL LAPSO DE LA SANCIÓN CORPORAL PRINCIPAL,** así como a la sanción accesoria de **INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA** durante el término de **NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DÍAS.**

**TRIGÉSIMO SEGUNDO: NO CONCEDER** la suspensión condicional de la ejecución de la pena a los procesados **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**, **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO**, **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**, **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, **ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**, **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**, **ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO**, **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN** y **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, y, en consecuencia, **EMITIR ORDEN DE CAPTURA** en su contra para el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad una vez en firme este fallo.

**TRIGÉSIMO TERCERO: CONCEDER** el sustituto de la **PRISIÓN DOMICILIARIA** a los condenados **EDGARDO JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**, **MARIO NICOLÁS ZÁRATE MUÑOZ**, **JORGE ENRIQUE RUA CARRILLO**, **JORGE ELIÉCER PÉREZ OJEDA**, **MIGUEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ**, **ÁLVARO ALBERTO RODADO CAICEDO**, **ARMANDO ENRIQUE MARIANO SANJUAN**, **ADALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ**, **ARNOLDO RAFAEL FANDIÑO GARCÍA**, **ALFONSO EMILIO COLLANTE PACHECO**, **ADALBERTO BERDUGO SARMIENTO**, **JULIO ALBERTO LLANOS SARMIENTO**, **FERNANDO MANJARRÉS GRANADOS**, **VÍCTOR MELITÓN CASTRO MIRANDA**,

**ARMANDO RAFAEL OSPINO HERNÁNDEZ**, **MIGUEL ANTONIO MUÑOZ CAICEDO**, **JOSÉ DOMICIANO GÓMEZ MONROY**, **LUIS GUILLERMO DE LAS SALAS FERNÁNDEZ**, **ADALBERTO SANTIAGO ARAUJO**, **ROBERTO MANUEL PALMERA HERNÁNDEZ**, **RAFAEL ÁNGEL CABARCAS ROMERO**, **JUAN DE DIOS GABRIEL RODRÍGUEZ RIVERA**, **LUIS VALERIO SOLANO CASTRO** y **JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDOOREN**, teniendo en cuenta las estimaciones efectuadas sobre el particular en apartes preliminares, la cual deberán garantizar acorde a las precisiones esbozadas en el acápite pertinente de la presente decisión, una vez cobre firmeza esta sentencia.

**TRIGÉSIMO CUARTO: NEGAR** el beneficio de la detención domiciliaria al señor **JOSÉ IGNACIO MOSQUERA DOMÍNGUEZ**, de condiciones civiles y personales conocidas en autos acorde a las reflexiones realizadas sobre el particular en el acápite correspondiente de este proveído, debiendo cumplir con la pena impuesta en el establecimiento de reclusión que la autoridad competente disponga para ello.

**TRIGÉSIMO QUINTO: ORDENAR** a los procesados pagar individualmente la pena principal de multa en los montos y términos indicados en la parte motiva.

**TRIGÉSIMO SEXTO: CONDENAR** a los enjuiciados a pagar a favor de la Nación y por medio de la entidad que la representa **los perjuicios ocasionados con los delitos por los cuales han sido aquí condenados**, según los montos relacionados en la **Tabla 19** de este proveído, así como en las condiciones y plazos indicados en precedencia.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO: LEVANTAR** definitivamente la orden de suspensión de los efectos económicos y jurídicos decretada en etapa sumarial por el Despacho Tres de la Estructura de Apoyo para FONCOLPUERTOS de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Publica, atendiendo las consideraciones realizadas sobre el particular en el aparte pertinente.

**TRIGÉSIMO OCTAVO: ADOPTAR** como medidas de **RESTABLECIMIENTO DE DERECHO** las determinaciones previstas en el acápite correspondiente, las cuales se hallan enlistadas e identificadas en la **Tabla 18**, acorde a las motivaciones, condiciones, claridades y límites allí expresados.

**TRIGÉSIMO NOVENO: CONDENAR** a los procesados a pagar solidariamente a favor de la parte civil las costas, expensas y agencias en derecho, una vez en firme esta decisión y la respectiva liquidación.

**CUADRAGÉSIMO: CUMPLIR** las disposiciones contenidas en el aparte de ***OTRAS DETERMINACIONES*** de cara a la devolución de los documentos originales aperados a lo largo de este diligenciamiento, una vez en firme esta providencia.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO: COMUNICAR** lo aquí resuelto, una vez en firme esta sentencia, a las autoridades previstas en la Ley, en especial a las señaladas en el canon 472 del CPP, y **ENVIAR** los cuadernos de copias del expediente al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (Reparto) competente, para lo de su cargo.

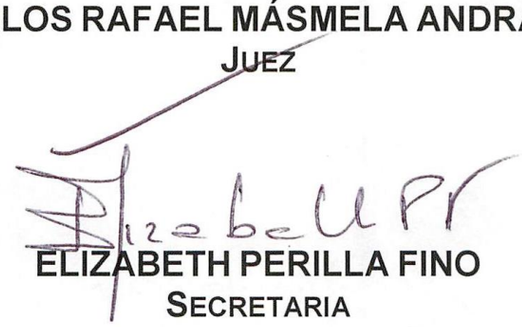
**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: INFORMAR** que contra este fallo procede únicamente el recurso de apelación ante la Sala de Decisión Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

**CUADRAGÉSIMO TERCERO: NOTIFICAR** esta sentencia acorde a lo señalado en el acápite pertinente y en la Ley.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**CARLOS RAFAEL MÁSMELA ANDRADE**
**JUEZ**



**ELIZABETH PERILLA FINO**
**SECRETARIA**